ONPE

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Garantía de un Proceso Claro



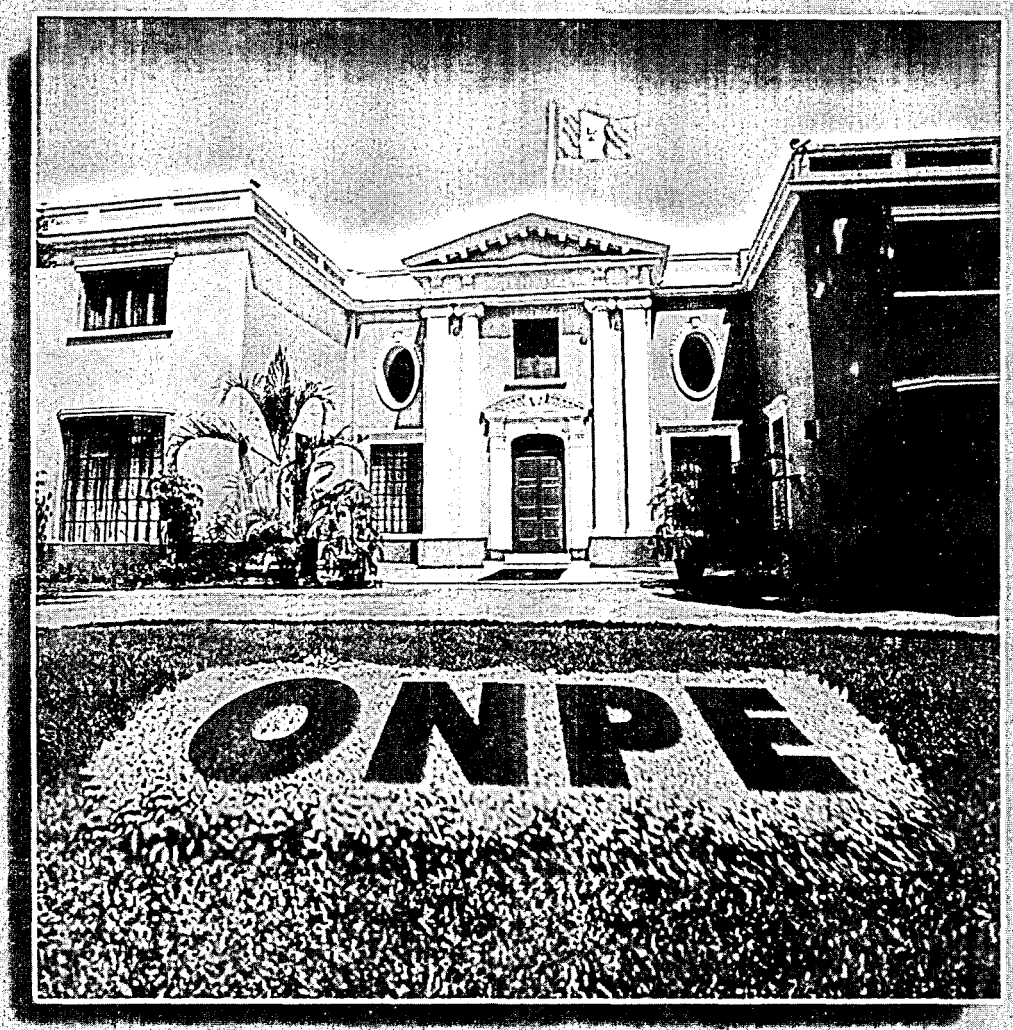
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y COMPENDIO DE NORMAS LEGALES ELECTORALES DEL PERÚ

ONPE - 1999

ONPE

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Garantía de un Proceso Claro



CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y COMPENDIO DE NORMAS LEGALES ELECTORALES DEL PERÚ

ONPE - 1999

PRESENTACION AL LIBRO " CONSTITUCIÓN POLITICA Y COMPENDIO DE LEYES ELECTORALES

El Perú a finales de este siglo, ha tenido que pasar por innumerables cambios que, dentro de la incesante carrera por la integración de las comunicaciones y la globalización de los procesos económicos y sociales, le encaminan a redefinir los conceptos de gobernalidad y desarrollo tecnológico.

En ello, el Estado Peruano a través del Sistema Electoral, ha concebido la necesaria modernización de los procesos electorales a través de la aplicación progresiva y constante de mejoras tecnológicas y con una permanente fiscalización en las diferentes etapas del proceso electoral.

La introducción de los conceptos cibernéticos, en la estructura política, ha reducido la variable de incertidumbre en los plazos de resultados arrojados post proceso electoral, y la aplicación de sistemas físicos de seguridad en el material, el proceso y el seguimiento del mismo ha generado un vuelco en la certidumbre sobre los resultados electorales.

En el aspecto inicial de todo proceso, la verificación inteligente de Lista de Adherentes permite niveles de seguridad insospechados frente al pasado. Hoy en día todos los procedimientos de esta verificación son de conocimiento público y se realizan con la presencia de los propios interesados.

A partir de ello, el proceso electoral cuenta con las garantías materiales sustentadas en adecuaciones tecnológicas en el material electoral y su logística. Ánforas translúcidas, papel de seguridad en las Actas con criptograma y código de barras para identificar al ciudadano, resultan en niveles de vulnerabilidad mínima. A ello hay que añadirle el gran reto que se ha trazado ONPE de impulsar la estandarización de los procesos electorales como de la administración pública a las normas de calidad ISO 9000, con el objetivo de mejorar permanentemente la calidad de los servicios de procesos electorales, incorporando los adelantos que ofrece la ciencia y la tecnología, a fin de garantizar la transparencia de todas sus actividades con el fin de satisfacer a un usuario cada vez más informado y con ello fortalecer su confianza en el Sistema Electoral.

La clasificación de los formatos nos permite tener elementos totalmente diferenciados y simples lo que permite fluidez al proceso y su claridad.

La utilización de equipos, infrecuentes en América Latina, para el proceso informático, nos ponen a la vanguardia del subcontinente por lo que debemos hacer el esfuerzo para mantenernos en esa posición y anotar la necesidad de ir hacia el voto automático ya introducido en Venezuela y Brasil, teniendo el Perú en ese sentido ventajas comparativas por la integración del proceso informático en sí.

Digitación, verificación, elementos de seguridad, y flujo del proceso son elementos constitutivos en esta nueva filosofía de los procesos electorales.

Mas debemos afirmar que todos estos elementos no estarían dentro de las aplicaciones formales y necesarias para la transparencia de los procesos sin una legislación adecuada a los tiempos. Legislación que, como dijera el maestro José León Barandiarán, no sólo debe ser clara sino aplicable y deberá contener los principios de igualdad y lucidez suficiente para hacer más simple y confiable todo proceso electoral.

Es necesario pues, fundamentar la necesaria claridad de los procesos electorales, no sólo a través del derecho comparado de índole ideológico preventivo, sino además se hace necesario un elemento de responsabilidad ciudadana y participación electoral en todos los actos del proceso y más aún en la conformación de las mesas de sufragio y la aplicación compartida de elementos tecnológicos avanzados, haciendo del proceso electoral no sólo un proceso mecánico y singular, sino que es impostergable el compromiso de todas las instancias nacionales para producir docencia en ejercicio ciudadano, en lo cual todos seamos partícipes, responsables y beneficiarios de las bondades del ejercicio de la libertad y la democracia.

Es necesario puntualizar que la democracia se legitima con el acatamiento de la voluntad política de la mayoría ciudadana expresada en las urnas, y como tal, nuestra responsabilidad es que esa expresión sea auténtica, libre y espontánea; y que los resultados sea reflejo exacto y oportuno de esa voluntad ciudadana.

JOSE PORTILLO CAMPBELL
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

DIRECTORIO DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES



DR. JOSE HUGO PORTILLO CAMPBELL
JEFE DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES



DR. LUIS SIABALA VALER
ASESOR PRINCIPAL



SR. JORGE RECAVARREN EGUREN
GERENTE DE INFORMACION Y EDUCACION ELECTORAL



SR. JOSE LUIS CAVASSA RONCALLA
GERENTE DE GESTION ELECTORAL



DR. GODOFREDO DAVILA ORIHUELA
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA



SRA. MARY LUZ GUTIERREZ ALARCON
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SR. RODOLFO VASQUEZ NEYRA
GERENTE DE INFORMATICA



CPC. CARLOS PALOMARES VILLANUEVA
GERENTE DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

TITULO I : DE LA PERSONA Y LA SOCIEDAD
(artículos 1° al 42°)

Capítulo I : Derechos Fundamentales de la Persona (art. 1° al 3°)
Capítulo II : De los Derechos Sociales y Económicos (art. 4° al 29°)
Capítulo III : De los Derechos Políticos y los Deberes (art. 30° al 38°)
Capítulo IV : De la Función Pública (art. 39° al 42°)

TITULO II : DEL ESTADO Y LA PERSONA
(artículos 43° al 57°)

Capítulo I : Del Estado y la Nación (art. 43° al 54°)
Capítulo II : De los Tratados (art. 55° al 57°)

TITULO III : DEL REGIMEN ECONOMICO
(artículos 58° al 89°)

Capítulo I : Principios Generales (art. 58° al 65°)
Capítulo II : Del Ambiente y los Recursos Humanos (art. 66 ° al 69°)
Capítulo III : De la Propiedad (art. 70° al 73°)
Capítulo IV : Del Régimen Tributario y Presupuestal (art. 74° al 82°)
Capítulo V : De la Moneda y la Banca (art. 83° al 87°)
Capítulo VI : Del Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas y Nativas (art. 88 °al 89°)

TITULO IV : DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
(artículos 90° al 199°)

Capítulo I : Poder Legislativo (art. 90° al 102°)
Capítulo II : De la Función Legislativa (art. 103° al 106°)
Capítulo III : De la Formación y Promulgación de Leyes (art.107° al 109°)
Capítulo IV : Poder Ejecutivo (art. 110° al 118°)
Capítulo V : Del Consejo de Ministros (art.119° al 129°)
Capítulo VI : De las Relaciones con el Poder Legislativo(art.130° al 136°)
Capítulo VII : Régimen de Excepción (art. 137°)
Capítulo VIII : Poder Judicial (art. 138° al 149°)
Capítulo IX : Del Consejo Nacional de la Magistratura (art. 150° al 157°)
Capítulo X : Del Ministerio Público (art. 158° al 160°)
Capítulo XI : De la Defensoría del Pueblo (art. 161° y 162°)
Capítulo XII : De la Seguridad y de la Defensa Nacional (art.163° al 175°)
Capítulo XIII : Del Sistema Electoral (art. 176° al 187°)
Capítulo XIV : De la Descentralización, las Regiones y las Municipalidades (art.188° al 199°)

TITULO V : **DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES**
(artículos 200° al 205°)

TITULO VI : **DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN**
(artículo 206°)

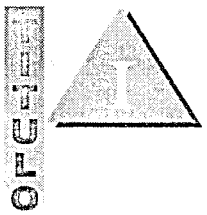
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS: De la Primera a la Decimosexta

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

PREAMBULO

El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra Patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución:

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU



DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

CAPITULO I DEL TITULO I

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Artículo 1º La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

Artículo 2º Toda persona tiene derecho:

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley
   Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.
   Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias.
   Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión

9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.
    Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus.instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del Juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.
    Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal.
    Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o sanidad públicas.

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.

14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.

15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.

16. A la propiedad y a la herencia.

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.

18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.
Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.

20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.

21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República.

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

23. A la legítima defensa.

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohibe.
b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.
c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.
d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como

infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.

e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.
El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.

g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida.

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.

Artículo 3º La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

CAPITULO II DEL TITULO I

DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONOMICOS

Artículo 4º La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.
La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley.

Artículo 5º La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.

Artículo 6º La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud.
Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos

tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.
Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad.

Artículo 7º Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa.
La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

Artículo 8º El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales.

Artículo 9º El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.

Artículo 10º El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.

Artículo 11º El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.

Artículo 12º Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.

Artículo 13º La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo.

Artículo 14º La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.
Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país.
La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias.
La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa.
Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.

Artículo 15º El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes.
El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico.
Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley.

Artículo 16º Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.
El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.
Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República.

Artículo 17º La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.
Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa.
El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera.
El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.

Artículo 18º La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.
Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento.
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.

Artículo 19º Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y

cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes.
Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley.
La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios.
Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta.

Artículo 20º Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria.

Artículo 21º Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.
La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio.
Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional.

Artículo 22º El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.

Artículo 23º El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.
El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.
Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.

Artículo 24º El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.
El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador.
Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.

Artículo 25º La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo.

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.

Artículo 26º En la relación laboral se respetan los siguientes principios:

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.
2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.
3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.

Artículo 27º La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.

Artículo 28º El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático:

1. Garantiza la libertad sindical.
2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.
3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones.

Artículo 29º El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación.

CAPITULO III DEL TITULO I

DE LOS DERECHOS POLITICOS Y DE LOS DEBERES

Artículo 30º Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral.

Artículo 31º Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil.
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad.
Es nulo y punible todo acto que prohiba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.

Artículo 32º Pueden ser sometidas a referéndum:

1. La reforma total o parcial de la Constitución;
2. La aprobación de normas con rango de ley;
3. Las ordenanzas municipales; y
4. Las materias relativas al proceso de descentralización.

No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.

Artículo 33º El ejercicio de la ciudadanía se suspende:

1. Por resolución judicial de interdicción.
2. Por sentencia con pena privativa de la libertad.
3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.

Artículo 34º Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad no pueden elegir ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse otras inhabilitaciones.

Artículo 35º Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.
La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado electoral general.

Artículo 36º El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue.

Artículo 37º La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad.
No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza.
Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio ni el terrorismo.

Artículo 38º Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.

CAPITULO IV DEL TITULO I

DE LA FUNCION PUBLICA

Artículo 39º Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.

Artículo 40º La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente.

No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta.

Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos.

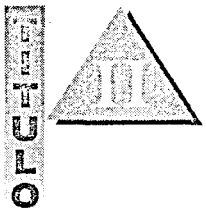
Artículo 41º Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.

El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.

Artículo 42º Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.



DEL ESTADO Y LA NACION

CAPITULO I DEL TITULO II

DEL ESTADO, LA NACION Y EL TERRITORIO

Artículo 43º La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.
El Estado es uno e indivisible.
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.

Artículo 44º Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general
que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.

Artículo 45º El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.
Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.

Artículo 46º Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.
La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional.
Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.

Artículo 47º La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.

Artículo 48º Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimará y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

Artículo 49º La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad del Cuzco.
Son símbolos de la Patria la Bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, y el Escudo y el Himno nacional establecidos por ley.

Artículo 50º Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.

El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.

Artículo 51º La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

Artículo 52º Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad.
Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que tengan residencia en el Perú.

Artículo 53º La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana.

Artículo 54º El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.
El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley.
En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.

CAPITULO II DEL TITULO II

DE LOS TRATADOS

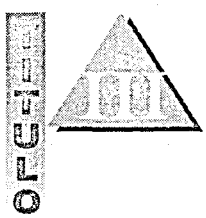
Artículo 55º Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.

Artículo 56º Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias:

1. Derechos Humanos.
2. Soberanía, dominio o integridad del Estado.
3. Defensa Nacional.
4. Obligaciones financieras del Estado.

También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución.

Artículo 57º El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar cuenta al Congreso.
Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República.
La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de éste.



DEL REGIMEN ECONOMICO

CAPITULO I DEL TITULO III

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 58º La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

Artículo 59º El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

Artículo 60º El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.

Artículo 61º El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopolicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.

La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.

Artículo 62º La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.
Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.

Artículo 63º La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas.
En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero.
El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley.

Artículo 64º El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera.

Artículo 65º El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

CAPITULO II DEL TITULO III

DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 66º Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

Artículo 67º El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

Artículo 68º El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

Artículo 69º El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.

CAPITULO III DEL TITULO III

DE LA PROPIEDAD

Artículo 70º El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.

Artículo 71º En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso al
guno, puedan invocar excepción ni protección diplomática. Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.

Artículo 72º La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes.

Artículo 73º Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.

CAPITULO IV DEL TITULO III

DEL REGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL

Artículo 74º Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.
Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.
Los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.
Las leyes de presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria.
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo.

Artículo 75º El Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y la ley.
Las operaciones de endeudamiento interno y externo del Estado se aprueban conforme a ley.
Los municipios pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y bienes propios, sin requerir autorización legal.

Artículo 76º Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes.
La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.

Artículo 77º La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: Gobierno Central e instancias descentralizadas.
El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada deltotal de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon. (*)

(*) Artículo modificado por la Ley Nº 26472, publicada el 13/06/95.

Artículo 78º El Presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año.
En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero.

El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado.
Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal.
No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente.
No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública.

Artículo 79º Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.
El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo.
En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país.

Artículo 80º El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso, el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector. El Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución.
Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el treinta de noviembre, entra en vigencia el Proyecto de éste, que es promulgado por decreto legislativo.
Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos del número legal de sus miembros.

Artículo 81º La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General, es remitida por el Presidente de la República al Congreso en un plazo que vence el quince de noviembre del año siguiente al de ejecución del presupuesto
La Cuenta General es examinada y dictaminada por una comisión revisora dentro de los noventa días siguientes a su presentación. El Congreso se pronuncia en un plazo de treinta días.
Si no hay pronunciamiento del Congreso en el plazo señalado, se eleva el dictamen de la Comisión Revisora al Poder Ejecutivo para que éste promulgue un decreto legislativo que contiene la Cuenta General.

Artículo 82º La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.
El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave.

CAPITULO V DEL TITULO III

DE LA MONEDA Y LA BANCA

Artículo 83º La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú.

Artículo 84º El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica.
La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, y las demás funciones que señala su ley orgánica.
El Banco informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas nacionales, bajo responsabilidad de su Directorio.
El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica.

Artículo 85º El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales.
Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones o convenios supera el límite señalado por el Presupuesto del Sector Público, con cargo de dar cuenta al Congreso.

Artículo 86º El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al Presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Congreso puede removerlos por falta grave. En caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente período constitucional.

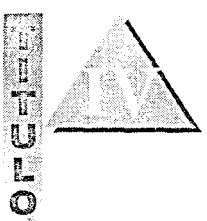
Artículo 87º El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.
La Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control de las empresas bancarias y de seguros, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.
La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca y Seguros.
El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca y Seguros por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

CAPITULO VI DEL TITULO III

DEL REGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

Artículo 88º El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.

Artículo 89º Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece.
La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.



DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

CAPITULO I TITULO IV

PODER LEGISLATIVO

Artículo 90º El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara única.
El número de congresistas es de ciento veinte. El Congreso se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley.
Los candidatos a la presidencia no pueden integrar las listas de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación a Congreso.
Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio.

Artículo 91º No pueden ser elegidos congresistas si no han dejado el cargo seis meses antes de la elección:

1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General, y las autoridades regio nales.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defen sor del Pueblo.
3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Segu-

ros, el Superintendente de Administración Tributaria, el Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de Administradoras de Fondos Privados de Pensiones ; y,

4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad.

Artículo 92º La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso.

El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional.

La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos. La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Artículo 93º Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.

No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.

Artículo 94º El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley; elige a sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones; establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios; gobierna su economía; sanciona su presupuesto; nombra y remueve a sus funcionarios y empleados, y les otorga los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley.

Artículo 95º El mandato legislativo es irrenunciable.

Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura.

Artículo 96º Cualquier representante a Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.

El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley.

Artículo 97 El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.
Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.

Artículo 98º El Presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del Congreso.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto del Congreso sino con autorización de su propio Presidente.

Artículo 99º Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema;
a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.

Artículo 100º Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.
El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.
En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.
La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.
Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso.

Artículo 101º Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por éste. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del veinticinco por ciento del número total de congresistas.
Son atribuciones de la Comisión Permanente:

1 Designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República.
2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca y Seguros.
3. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto, durante el receso parlamentario.

4. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados interna cionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.
5. Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el Reglamento del Congreso.

Artículo 102º Son atribuciones del Congreso:

1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes.
2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.
3. Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución.
4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.
5. Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución.
6. Ejercer el derecho de amnistía.
7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo.
8. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional.
9. Autorizar al Presidente de la República para salir del país.
10. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa.

CAPITULO II DEL TITULO IV

DE LA FUNCION LEGISLATIVA

Artículo 103º Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas.
Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo.
La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.
La Constitución no ampara el abuso del derecho.

Artículo 104º El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa.
No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente.
Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.
El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo.

Artículo 105º Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento

del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.

Artículo 106º Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución.
Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

CAPITULO III DEL TITULO IV

DE LA FORMACION Y PROMULGACION DE LAS LEYES

Artículo 107º El Presidente de la República y los congresistas tienen derecho de iniciativa en la formación de las leyes.
También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los municipios y los colegios profesionales.
Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.

Artículo 108º La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la Comisión Permanente, según corresponda.
Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días. Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

Artículo 109º La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

CAPITULO IV DEL TITULO IV

PODER EJECUTIVO

Artículo 110º El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación.
Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio.

Artículo 111º El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan.
Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas.
Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes.

Artículo 112º El mandato presidencial es de cinco años. El Presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.(*)
(*)El presente artículo será interpretado de conformidad a los alcances del artículo único de la Ley Nº 26657, publicada el 23.08.96

Artículo 113º La Presidencia de la República vaca por:

1. Muerte del Presidente de la República.
2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.
3. Aceptación de su renuncia por el Congreso.
4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y
5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución.

Artículo 114º El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por:

1. Incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso, o
2. Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117 de la Constitución.

Artículo 115º Por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones.
Cuando el Presidente de la República sale del territorio nacional, el Primer Vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el Segundo Vicepresidente.

Artículo 116º El Presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo, ante el Congreso, el 28 de julio del año en que se realiza la elección.

Artículo 117º El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artí-

culo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

Artículo 118º Corresponde al Presidente de la República:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.
2. Representar al Estado, dentro y fuera de la República.
3. Dirigir la política general del Gobierno.
4. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República.
5. Convocar a elecciones para Presidente de la República y para representantes a Con greso, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley.
6. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria.
7. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual.
   Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del Presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros.
8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones.
9. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
10. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones.
11. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados.
12. Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso.
13. Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros, y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones.
14. Presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
15. Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado.
16. Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso.
17. Administrar la hacienda pública.
18. Negociar los empréstitos.
19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia.
20. Regular las tarifas arancelarias.
21. Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.
22. Conferir condecoraciones en nombre de la Nación, con acuerdo del Consejo de Ministros.

23. Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. Y
24. Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan.

CAPITULO V DEL TITULO IV

DEL CONSEJO DE MINISTROS

Artículo 119º La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo.

Artículo 120º Son nulos los actos del Presidente de la República que carecen de refrendación ministerial.

Artículo 121º Los ministros, reunidos, forman el Consejo de Ministros. La ley determina su organización y funciones.
El Consejo de Ministros tiene su Presidente. Corresponde al Presidente de la República presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones.

Artículo 122º El Presidente de la República nombra y remueve al Presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del Presidente del Consejo.

Artículo 123º Al Presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, le corresponde:

1. Ser, después del Presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno.
2. Coordinar las funciones de los demás ministros.
3. Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los de más decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley.

Artículo 124º Para ser ministro de Estado, se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido veinticinco años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros.

Artículo 125º Son atribuciones del Consejo de Ministros:

1. Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso.
2. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley
3. Deliberar sobre asuntos de interés público. Y
4. Las demás que le otorgan la Constitución y la ley.

Artículo 126º Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, y consta en acta.
Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa.
Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.

Artículo 127º No hay ministros interinos. El Presidente de la República puede encomendar a un ministro que, con retención de su cartera, se encargue de otra por impedimento del que la sirve, sin que este encargo pueda prolongarse por más de treinta días ni trasmitirse a otros ministros.

Artículo 128º Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan.
Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente.

Artículo 129º El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas.
Concurren también cuando son invitados para informar.
El Presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas.

CAPITULO VI DEL TITULO IV

DE LAS RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO

Artículo 130º Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza.
Si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria.

Artículo 131º Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos.
La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del quince por ciento del número legal de congresistas. Para su admisión, se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles; la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión.
El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del décimo.

Artículo 132º El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo se plantea por iniciativa ministerial.
Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera de los ministros, debe ser presentada por no menos del veinticinco por ciento del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.
El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe renunciar.
El Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes.
La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación.

Artículo 133º El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.

Artículo 134º El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato.
Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta.
No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario.
Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.

Artículo 135º Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario.
En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale.

Artículo 136º Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de éste puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del período presidencial.

El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa el período constitucional del Congreso disuelto.

CAPITULO VII DEL TITULO IV

REGIMEN DE EXCEPCION

Artículo 137º El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:

1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2º y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.
   El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.

2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende.
   El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso.

CAPITULO VIII DEL TITULO IV

PODER JUDICIAL

Artículo 138º La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.

Artículo 139º Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.
   No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.
   No hay proceso judicial por comisión o delegación.
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
   Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar senten cias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
   Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.
   Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
6. La pluralidad de la instancia.
7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.
8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.
   En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.
9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.
10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.
11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.
12. El principio de no ser condenado en ausencia.
13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.
14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.

15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.
16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la de fensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala.
17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.
18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida.
19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.
20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.
21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.
22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

Artículo 140º La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de Traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.

Artículo 141º Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 173.

Artículo 142º No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces.

Artículo 143º El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración. Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica.

Artículo 144º El Presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial.

Artículo 145º El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso.

Artículo 146º La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo.

Los jueces sólo perciben las remuneraciones que les asigna el Presupuesto y las provenientes de la enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por la ley.
El Estado garantiza a los magistrados judiciales:

1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley.
2. La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento.
3. Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. Y
4. Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía.

Artículo 147º Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere:

1. Ser peruano de nacimiento;
2. Ser ciudadano en ejercicio;
3. Ser mayor de cuarenta y cinco años;
4. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años.

Artículo 148º Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.

Artículo 149º Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona.
La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

CAPITULO IX DEL TITULO IV

DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Artículo 150º El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular.
El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley Orgánica.

Artículo 151º La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su selección.
Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha Academia.

Artículo 152º Los Jueces de Paz provienen de elección popular.
Dicha elección, sus requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la duración

en sus cargos son normados por ley.
La ley puede establecer la elección de los jueces de primera instancia y determinar los mecanismos pertinentes.

Artículo 153º Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga.

Artículo 154º Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:

1. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros.

2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias.

3. Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable.

4. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita.

Artículo 155º Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:

1. Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena.
2. Uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos.
3. Uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en votación secreta.
4. Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, conforme a ley.
5. Uno elegido en votación secreta, por los rectores de las universidades nacionales.
6. Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades particulares

El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado por éste a nueve, con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y del empresarial.
Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos, conjuntamente con los suplentes, por un período de cinco años.

Artículo 156º Para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se requieren los mismos requisitos que para ser Vocal de la Corte Suprema, salvo lo previsto en el inciso 4 del artículo 147. El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura goza de los mismos beneficios y derechos y está sujeto a las mismas obligaciones e incompatibilidades.

Artículo 157º Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros.

CAPITULO X DEL TITULO IV

DEL MINISTERIO PUBLICO

Artículo 158º El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, y es prorrogable, por reelección, sólo por otros dos.
Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades.
Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros Poder Judicial en su respectiva categoría.

Artículo 159º Corresponde al Ministerio Público:

1 Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.
2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.
3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.
7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.

Artículo 160º El proyecto de presupuesto del Ministerio Público se aprueba por la Junta de Fiscales Supremos. Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y en el Congreso.

CAPITULO XI DEL TITULO IV

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Artículo 161º La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.
Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica.
El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios

de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas.
Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser abogado.
El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos.

Artículo 162º Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de las leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones.
El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado por su titular en esa instancia y en el Congreso.

CAPITULO XII DEL TITULO IV

DE LA SEGURIDAD Y DE LA DEFENSA NACIONAL

Artículo 163º El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional.
La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.

Artículo 164º La dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a través de un sistema cuya organización y cuyas funciones determina la ley. El Presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional.
La ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los efectos de la defensa nacional.

Artículo 165º Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137º de la Constitución.

Artículo 166º La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

Artículo 167º El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Artículo 168º Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las necesidades de la Defensa Nacional, de acuerdo a ley.

Artículo 169º Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional.

Artículo 170º La ley asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tales fondos deben ser dedicados exclusivamente a fines institucionales, bajo el control de la autoridad señalada por la ley.

Artículo 171º Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley.

Artículo 172º
El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se fija anualmente por el Poder Ejecutivo. Los recursos correspondientes son aprobados en la Ley de Presupuesto. Los ascensos se confieren de conformidad con la ley. El Presidente de la República otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional, según propuesta del instituto correspondiente.

Artículo 173º En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar.
Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141 sólo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte.
Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar.

Artículo 174º Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. La ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que no tiene grado o jerarquía de oficial.
En ambos casos, los derechos indicados sólo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial.

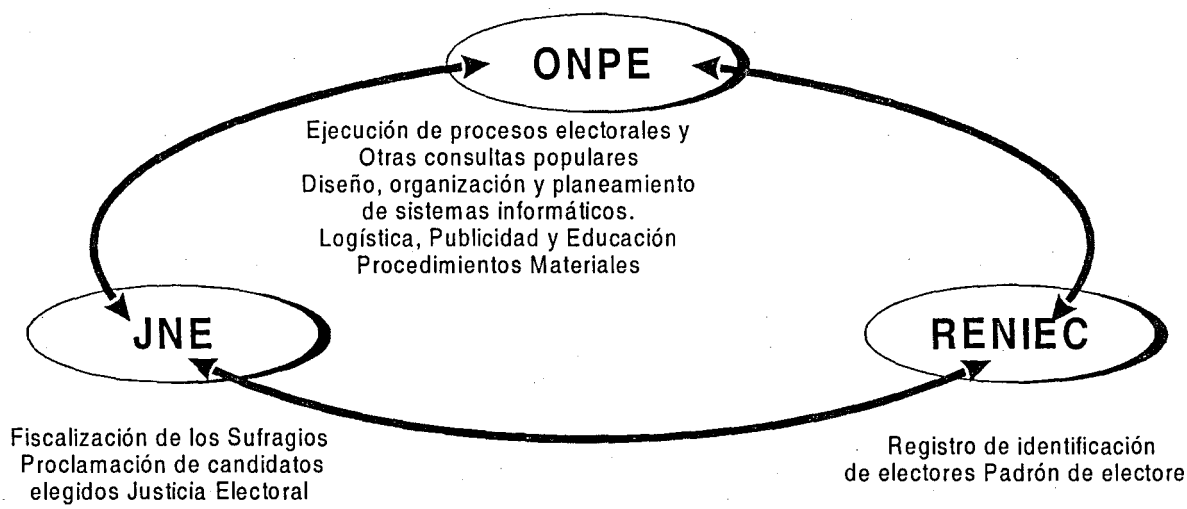
Artículo 175º Sólo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra. Todas las que existen, así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país pasan a ser propiedad del Estado sin proceso ni indemnización.
Se exceptúa la fabricación de armas de guerra por la industria privada en los casos que la ley señale.
La ley reglamenta la fabricación, el comercio, la posesión y el uso, por los particulares, de armas distintas de las de guerra.

CAPITULO XIII DEL TITULO IV

DEL SISTEMA ELECTORAL

Artículo 176º El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa.
Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas; y el registro de los actos que modifican el estado civil.

SISTEMA ELECTORAL PERUANO



Artículo 177º El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones; la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones.

Artículo 178º Compete al Jurado Nacional de Elecciones:

1. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales.
2. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas.
3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral.
4. Administrar justicia en materia electoral.
5. Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes.
6. Las demás que la ley señala.

En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la formación de las leyes.
Presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral que incluye por separado las partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo sustenta en esa instancia y ante el Congreso.

Artículo 179º La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto por cinco miembros:

1. Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. El representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones.
2. Uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, entre los Fiscales Supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido.
3. Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus miembros.
4. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades públicas, entre sus ex decanos.
5. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades privadas, entre sus ex decanos.

Artículo 180º Los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser menores de cuarenta y cinco años ni mayores de setenta. Son elegidos por un período de cuatro años. Pueden ser reelegidos. La ley establece la forma de renovación alternada cada dos años.

El cargo es remunerado y de tiempo completo. Es incompatible con cualquiera otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial.
No pueden ser miembros del Pleno del Jurado los candidatos a cargos de elección popular, ni los ciudadanos que desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas, o que los han desempeñado en los cuatro años anteriores a su postulación.

Artículo 181º El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.

Artículo 182º El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por el propio Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros tipos de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la cédula de sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de sus resultados. Brinda información permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio en las mesas de sufragio. Ejerce las demás funciones que la ley le señala.

Artículo 183º El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por dicho Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibili- dades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que modifican el estado civil. Emite las constancias correspondientes. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emite los documentos que acreditan su identidad.
Ejerce las demás funciones que la ley señala.

Artículo 184º El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos.
La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales.

Artículo 185º El escrutinio de los votos en toda clase de elecciones, de referéndum o de otro tipo de consulta popular se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. Sólo es revisable en los casos de error material o de impugnación, los cuales se resuelven conforme a ley.

Artículo 186º La Oficina Nacional de Procesos Electorales dicta las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios. Estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Artículo 187º En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional, conforme al sistema que establece la ley.
La ley contiene disposiciones especiales para facilitar el voto de los peruanos residentes en el extranjero.

CAPITULO XIV DEL TITULO IV

DE LA DESCENTRALIZACION, LAS REGIONES Y LAS MUNICIPALIDADES

Artículo 188º La descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del país.

Artículo 189º El territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y desconcentrada.

Artículo 190º Las Regiones se constituyen por iniciativa y mandato de las poblaciones pertenecientes a uno o más departamentos colindantes. Las provincias y los distritos contiguos pueden asimismo integrarse o cambiar de circunscripción.
En ambos casos procede el referéndum, conforme a ley.

Artículo 191º Las municipalidades provinciales y distritales, y las delegadas conforme a ley, son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la alcaldía, las funciones ejecutivas.

Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cinco años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable pero irrenunciable. Gozan de las prerrogativas que señala la ley.

Artículo 192º Las municipalidades tienen competencia para:

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
2. Administrar sus bienes y rentas.
3. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales.
4. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.
5. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes y programas correspondientes.
6. Participar en la gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a ley. Y
7. Lo demás que determine la Ley.

Artículo 193º Son bienes y rentas de las municipalidades:

1. Los bienes e ingresos propios.
2. Los impuestos creados por ley a su favor.
3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos de su competencia, creados por su Concejo.
4. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal que se crea por ley según los tributos municipales.
5. Las transferencias presupuestales del Gobierno Central.
6. Los recursos que les correspondan por concepto de canon.
7. Los demás recursos que determine la ley.

Artículo 194º Las municipalidades pueden asociarse o concertar entre ellas convenios cooperativos para la ejecución de obras y la prestación de servicios comunes.

Artículo 195º La ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades en materia de seguridad ciudadana.

Artículo 196º La capital de la República, las capitales de provincias con rango metropolitano y las capitales de departamento de ubicación fronteriza tienen régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades.
El mismo tratamiento rige para la Provincia Constitucional del Callao y las provincias de frontera.

Artículo 197º Las Regiones tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Les corresponden, dentro de su jurisdicción, la coordinación y ejecución de los planes y

programas socioeconómicos regionales, así como la gestión de actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a ley.
Sus bienes y rentas propias se establecen en la ley. Las Regiones apoyan a los gobiernos locales. No los sustituyen ni duplican su acción ni su competencia.

Artículo 198º La estructura organizada de las Regiones y sus funciones específicas se establecen por ley orgánica.
Son las máximas autoridades de la Región el Presidente y el Consejo de Coordinación Regional.
El Presidente de la Región es elegido por sufragio directo por un período de cinco años. Puede ser reelegido. Su mandato es revocable, pero irrenunciable. Goza de las prerrogativas que le señala la ley.
El Consejo de Coordinación Regional está integrado por el número de miembros que señala la ley. Los alcaldes provinciales o sus representantes son, de pleno derecho, miembros de dicho Consejo.

Artículo 199º Las Regiones y las municipalidades rinden cuenta de la ejecución de su presupuesto a la Contraloría General de la República. Son fiscalizadas de acuerdo a Ley.

DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Artículo 200º Son garantías constitucionales:

1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.
2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente.
   (Modificado por la Ley No. 26470, publicada en «El Peruano» el 12/06/1995. *)
   No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.
3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2º, incisos 5, 6 y 7 de la Constitución. (*)
   (*) Inciso modificado por la Ley Nº 26470, publicada el 12/06/95
4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contraven-

gan la Constitución en la forma o en el fondo.

5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.
6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas.
El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución.
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio

Artículo 201º El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años.
Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata.
Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación.

Artículo 202º Corresponde al Tribunal Constitucional:

1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.
2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas cor pus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.
3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.

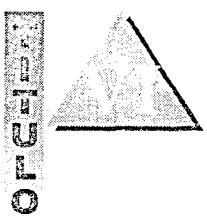
Artículo 203º Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:

1. El Presidente de la República;
2. El Fiscal de la Nación;
3. El Defensor del Pueblo;
4. El veinticinco por ciento del número legal de congresistas;

5. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado;
6. Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia.
7. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad.

Artículo 204º La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal.

Artículo 205º Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.



DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION

Artículo 206º Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República.

La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Primera. Los nuevos regímenes sociales obligatorios, que sobre materia de pensiones de los trabajadores públicos, se establezcan, no afectan los derechos legalmente obtenidos, en particular el correspondiente a los regímenes de los decretos leyes 19990 y 20530 y sus modificatorias.

Segunda. El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste destine para tales efectos, y a las posibilidades de la economía nacional.

Tercera. En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes. Es nulo todo acto o resolución en contrario.

Cuarta . Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

Quinta . Las elecciones municipales se alternan con las generales de modo que aquéllas se realizan a mitad del período presidencial, conforme a ley. Para el efecto, el mandato de los alcaldes y regidores que sean elegidos en las dos próximas elecciones municipales durará tres y cuatro años respectivamente.

Sexta. Los alcaldes y regidores elegidos en el proceso electoral de 1993 y sus elecciones complementarias concluyen su mandato el 31 de diciembre de 1995.

Sétima. El primer proceso de elecciones generales que se realice a partir de la vigencia de la presente Constitución, en tanto se desarrolla el proceso de descentralización, se efectúa por distrito único.

Octava. Las disposiciones de la Constitución que lo requieran son materia de leyes de desarrollo constitucional.

Tienen prioridad :

1. Las normas de descentralización y, entre ellas, las que permitan tener nuevas autoridades elegidas a más tardar en 1995. Y
2. Las relativas a los mecanismos y al proceso para eliminar progresivamente los monopolios legales otorgados en las concesiones y licencias de servicios públicos.

Novena. La renovación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, instalado conforme a esta Constitución, se inicia con los elegidos por el Colegio de Abogados de Lima y por las Facultades de Derecho de las universidades públicas.

Décima. La ley establece el modo como las oficinas, los funcionarios y servidores del Registro Civil de los gobiernos locales y los del Registro Electoral se integran al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Undécima. Las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos públicos se aplican progresivamente.

Duodécima. La organización política departamental de la República comprende los departamentos siguientes: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali; y la Provincia Constitucional del Callao.

Decimotercera. Mientras no se constituyan las Regiones y hasta que se elija a sus presidentes de acuerdo con esta Constitución, el Poder Ejecutivo determina la jurisdicción de los Consejos Transitorios de Administración Regional actualmente en funciones, según el área de cada uno de los departamentos establecidos en el país.

Decimocuarta. La presente Constitución, una vez aprobada por el Congreso Constituyente Democrático, entra en vigencia, conforme al resultado del referéndum regulado mediante ley constitucional.

Decimoquinta. Las disposiciones contenidas en la presente Constitución, referidas a número de congresistas, duración del mandato legislativo, y Comisión Permanente, no se aplican para el Congreso Constituyente Democrático.

Decimosexta. Promulgada la presente Constitución, sustituye a la del año 1979.

DECLARACION

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO

DECLARA que el Perú, país del hemisferio austral, vinculado a la Antártida por costas que se proyectan hacia ella, así como por factores ecológicos y antecedentes históricos, y conforme con los derechos y obligaciones que tiene como parte consultiva del Tratado Antártico, propicia la conservación de la Antártida como una Zona de Paz dedicada a la investigación científica, y la vigencia de un régimen internacional que, sin desmedro de los derechos que corresponden a la Nación, promueva en beneficio de toda la humanidad la racional y equitativa explotación de los recursos de la Antártida, y asegure la protección y conservación del ecosistema de dicho Continente.

RELACION DE CONGRESISTAS CONSTITUYENTES QUE PARTICIPARON, EN LA REDACCIÓN DE LA CONSTITUCION POLITICA VIGENTE

1.- Amuruz Gallegos, Róger
2.- Barba Caballero , José
3.- Barreto Estrada, Gamaliel
4.- Barrón Cebreros, Xavier
5.- Bedoya de Vivanco, Luis Guillermo
6.- Blanco Oropeza, Carlos
7.- Cáceres Velázquez, Pedro
8.- Cáceres Velázquez, Róger
9.- Carpio Muñoz, Juan Guillermo
10.- Carrión Ruíz, Juan
11.- Castro Gómez, Julio
12.- Chávez Cossio, Martha
13.- Chávez Romero, Tito
14.- Chirinos Soto, Enrique
15.- Chu Meriz, Julio
16.- Colchado Aréllano, Genaro
17.- Cruz Arrunátegui, Héctor Pablo
18.- Cruzado Mantilla, Juan
19.- Cuaresma Sánchez, Carlos
20.- Diaz Palacios, Julio
21.- Donayre Lozano, Jorge
22.- Fernández Arce, Cesar
23.- Ferrero Costa, Carlos
24.- Figueroa Vizcarra, Jorge
25.- Flores Nano, Lourdes
26.- Flores-Aráoz Esparza, Antero
27.- Freundt-Thurne Oyangúren, Jaime
28.- Gamarra Olivares, Ernesto
29.- Gamonal Cruz, José
30.- García Mundaca, Gustavo
31.- García Zaavedra, Pedro
32.- Guerra Ayala, Rómulo
33.- Helfer Palacios, Gloria
34.- Hermoza Ríos, Juan Bosco
35.- Huamachuco Romero, Juan
36.- Joy Way Rojas, Víctor

37.- Kouri Bumachar, Alexander Martín
38.- La Torre Bardales, Manuel
39.- Larrabure Gálvez, César
40.- León Trelles, Carlos
41.- Lozada de Gamboa, María del Carmen
42.- Marcenaro Frers, Ricardo
43.- Matsuda Nishimura, Samuel
44.- Meléndez Campos, Víctor
45.- Moreyra Loredo, Manuel
46.- Nakamura Hinostroza, Jorge
47.- Ocharán Zegarra, Mario
48.- Olivera Vega, Fernando
49.- Ortíz de Zevallos Roedel, Gonzalo
50.- Pajares Ruiz, Miguel
51.- Paredes Cueva, Mario
52.- Patsías Mella, Demetrio
53.- Pease García, Henry
54.- Reátegui Trigoso, Carlos
55.- Reggiardo Sayán, Andrés
56.- Rey Rey, Rafael
57.- Roberts Billing, Reynaldo
58.- Salgado Rubianes de Paredes, Luz
59.- Sambucetti Pedraglio, Humberto
60.- Sandoval Aguirre, Oswaldo
61.- Serrato Puse, Willy
62.- Siura Céspedes, Guillermo
63.- Sotomarino Chávez, Celso Américo
64.- Tello Tello, Pablo Ernesto
65.- Tord Romero, Luis Enrique
66.- Torres Vallejo, Jorge
67.- Torres y Torres Lara, Carlos
68.- Tudela Van Breugel-Douglas, Francisco
69.- Vega Ascencio, Anastacio
70.- Velázquez Gonzales, Jorge
71.- Velázquez Ureta, Jorge Alfonso
72.- Velit Núñez, Miguel
73.- Vicuña Vásquez, Eusebio
74.- Vílchez Malpíca, Pedro
75.- Villar Martínez, Nicolasa

76.- Victor Alfaro, María Teresa
77.- Yoshiyama Tanaka, Jaime
78.- Ysisola Farfán, Guillermo
79.- Zamata Aguirre, Juan Hugo
80.- Zevallos Ríos, Daniel

LEY ORGANICA DE ELECCIONES

LEY Nº 26859

TITULO I : DISPOSICIONES GENERALES.
(art. 1° al 4°)

CAPITULO 1 : Generalidades.

TITULO II : DEL SISTEMA ELECTORAL.
(art. 5° al 32 °)

CAPITULO 1 : Generalidades.
CAPITULO 2 : De las Elecciones Generales.
CAPITULO 3 : De las Elecciones en el Poder Judicial.
CAPITULO 4 : De las Consultas Populares.
CAPITULO 5 : De la Cifra Repartidora.

TITULO III : DE LOS ORGANOS ELECTORALES.
(art. 33° al 78°)

CAPITULO 1 : Del Jurado Nacional de Elecciones.
CAPITULO 2 : De la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
CAPITULO 3 : Del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
CAPITULO 4 : De los Jurados Electorales Especiales.
CAPITULO 5 : De las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.
CAPITULO 6 : De las Mesas de Sufragio.
CAPITULO 7 : De las Mesas de Transeúntes.
CAPITULO 8 : De las Coordinaciones entre los Organos del Sistema Electoral durante los Procesos Electorales.

TITULO IV : DE LA CONVOCATORIA.
(art. 79° al 85°)

CAPITULO 1 : Generalidades.
CAPITULO 2 : De la Convocatoria.
CAPITULO 3 : De la Convocatoria Extraordinaria.

TITULO V : DE LAS INSCRIPCIONES Y CANDIDATOS.
(art. 86° al 126°)

CAPITULO 1 : Del Responsable.
CAPITULO 2 : De las Inscripciones en el Registro de Organizaciones Políticas.
CAPITULO 3 : De los Candidatos a Presidente.
CAPITULO 4 : De los Candidatos a Congresistas.
CAPITULO 5 : De las Consultas Populares.

TITULO VI : DE LOS PERSONEROS ANTE EL SISTEMA ELECTORAL.
(art. 127° al 158°)

CAPITULO 1 : Generalidades.
CAPITULO 2 : De los Personeros ante el Jurado Nacional de Elecciones.
CAPITULO 3 : De los Personeros ante el Jurado Electoral Especial.
CAPITULO 4 : De los Personeros ante las Mesas de Sufragio.
CAPITULO 5 : De los Personeros en los Centros de Votación.

TITULO VII : DEL MATERIAL ELECTORAL.
(art. 159° al 180°)

CAPITULO 1 : Generalidades.
CAPITULO 2 : De las Cédulas de Sufragio.
CAPITULO 3 : De las Actas de Votación.
CAPITULO 4 : De la Distribución del Material Electoral.

TITULO VIII : DE LA PROPAGANDA ELECTORAL.
(art. 181° al 195°)

CAPITULO 1 : Generalidades.

TITULO IX : DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES AL SUFRAGIO.
(art. 196° al 223°)

CAPITULO 1 : Del Padrón Electoral.
CAPITULO 2 : De la Difusión del Proceso.
CAPITULO 3 : De los Locales de Votación.
CAPITULO 4 : Del Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.

TITULO X : DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
(art. 224° al 248°)

CAPITULO 1 : Generalidades.
CAPITULO 2 : Del Padrón de Electores Residentes en el Extranjero.
CAPITULO 3 : Del Personal de las Mesas de Sufragio.
CAPITULO 4 : De la Votación.
CAPITULO 5 : Del Escrutinio.
CAPITULO 6 : Del Cómputo Electoral.
CAPITULO 7 : De la Nulidad de los Sufragios emitidos en el Extranjero.

TITULO XI : DEL SUFRAGIO.
(art. 249° al 303°)

CAPITULO 1 : De la Instalación de las mesas de sufragio.
CAPITULO 2 : De la Votación.
CAPITULO 3 : Del Escrutinio en mesa.

CAPITULO 4 : Del Acopio de Actas de Votación y Anforas.

TITULO XII : DEL COMPUTO Y PROCLAMACION.
(art. 304° al 335°)

CAPITULO 1 : Del Procedimiento General de Cómputo Descentralizado.
CAPITULO 2 : De la Proclamación de Presidente, Vicepresidente y Congresistas.
CAPITULO 3 : De la Proclamación de Resultados de Referéndum o consultas populares.
CAPITULO 4 : Del cierre de la Elección.

TITULO XIII : DE LAS GARANTIAS DEL PROCESO ELECTORAL.
(art. 336° al 362°)

CAPITULO 1 : De los Observadores Electorales de las Organizaciones No Gubernamentales.

CAPITULO 2 : De las Garantías.

TITULO XIV : DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES.
(art. 363° al 368°)

CAPITULO 1 : De la Nulidad Parcial.
CAPITULO 2 : De la Nulidad Total.

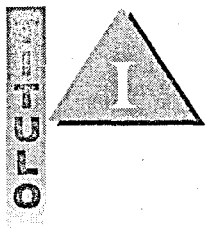
TITULO XV : DEL PRESUPUESTO ELECTORAL.
(art. 369 al 381°)

CAPITULO 1 : De la Elaboración del Presupuesto Electoral.
CAPITULO 2 : De la Ejecución del Presupuesto Electoral.
CAPITULO 3 : De los Recursos Propios.

TITULO XVI : DE LOS DELITOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.
(art. 382° al 393°)

CAPITULO 1 : Contra el derecho de sufragio.

TITULO XVII : DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES.



LEY Nº 26859

LEY ORGANICA DE ELECCIONES

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO 1

Generalidades

Artículo 1º.- El Sistema Electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los que actúan con autonomía y mantienen entre sí relación de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones.

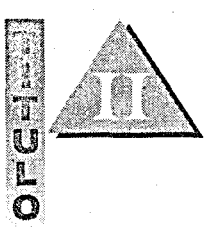
Concordancia : Art. 177° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; art. 3° de la LEY N° 26486, art. 3° de la LEY N° 26487 y art. 3° de la LEY N° 26497.

Artículo 2º.- El Sistema Electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y sean el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa y secreta.

Concordancia : Art. 176° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

Artículo 3º.- El término elecciones a que se refiere la presente Ley y las demás vinculadas al sistema electoral comprende, en lo aplicable, los procesos de referéndum y otros tipos de consulta popular.

Artículo 4º.- La interpretación de la presente Ley, en lo pertinente, se realizará bajo la presunción de la validez del voto.



DEL SISTEMA ELECTORAL

CAPITULO 1

Generalidades

Artículo 5º.- Los Procesos Electorales se rigen por las normas contenidas en la presente Ley y por sus respectivas normas de convocatoria de acuerdo con el Título IV de esta Ley.

Tipos de Elecciones

Artículo 6º.- La presente Ley comprende los siguientes Procesos Electorales:

a) Elecciones Presidenciales.

Incluye los procesos para elegir al Presidente y Vicepresidentes de la República.

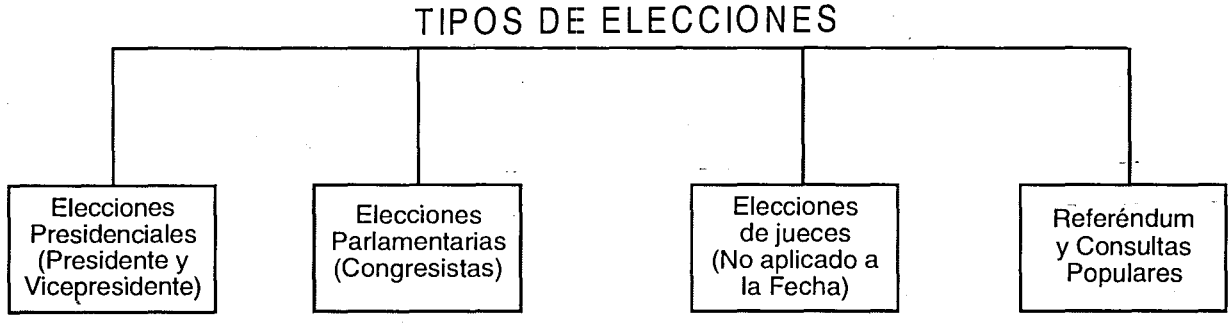
b) Elecciones Parlamentarias.
Comprende la elección de los Congresistas de la República.

c) Elecciones de Jueces según la Constitución.
Comprende la elección de los Jueces de conformidad con la Constitución.

d) Referéndum y Revocatoria de Autoridades.
Para convalidar o rechazar determinados actos de gobierno a través del proceso de consulta popular.

Tienen carácter mandatorio. Pueden ser requeridos por el Estado o por iniciativa popular, de acuerdo con las normas y los principios de Participación Ciudadana.

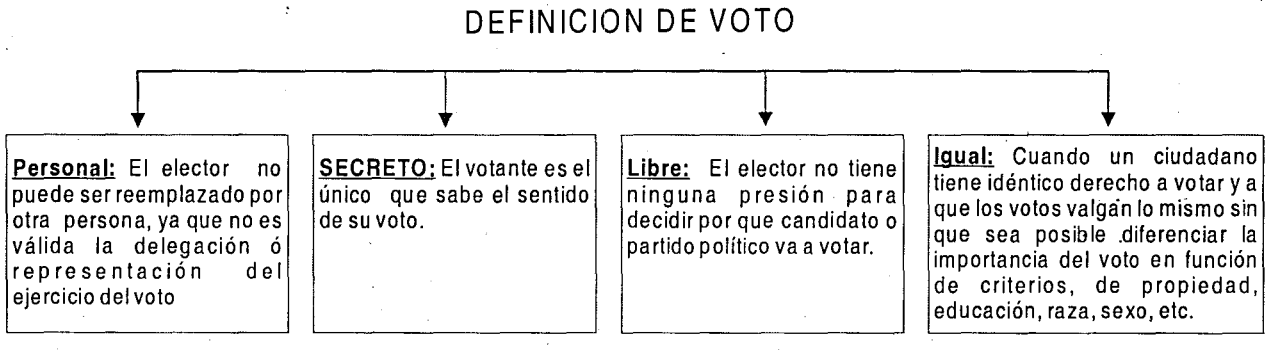
Concordancias: Arts. 118° inc.5, 178° inc.1 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; arts. 21° y 44° de la LEY N° 26300; art. 5° inc. a) LEY 26487



Ejercicio del derecho al voto

Artículo 7º.- El voto es personal, libre, igual y secreto. El derecho al voto se ejerce sólo con el Documento Nacional de Identidad, otorgado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Concordancias: Arts. 30°, 31°y 183° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; arts. 7° inc. g), 26° y 31° LEY N° 26497



Artículo 8º.- Todos los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos en la ley.

Concordancia: Art. 31° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; art. 42° del CODIGO CIVIL.

Artículo 9º.- Los ciudadanos peruanos con derechos civiles vigentes, están obligados a votar. Para los mayores de setenta (70) años el voto es facultativo.
Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años.

Concordancias: Arts. 30° y 31° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; art. 42° del CODIGO CIVIL.

Suspensión del ejercicio de la ciudadanía

Artículo 10º.- El ejercicio de la ciudadanía y por ende el derecho a elegir y ser elegido se suspenden en los casos siguientes:

a) Por resolución judicial de interdicción;
b) Por sentencia con pena privativa de la libertad;
c) Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.

Concordancia: Art. 33° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 11º.- Los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no pueden elegir ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse, respecto de ellos, otras inhabilitaciones.

Concordancia: Art. 34° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Ejercicio de derechos

Artículo 12º.- Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas tales como partidos, movimientos o alianzas, conforme a la legislación sobre la materia.

Concordancia: Art. 35° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Circunscripciones territoriales y sedes

Artículo 13º.- Las elecciones se efectúan sobre la base de las circunscripciones territoriales de acuerdo a ley. Con este fin, el Jurado Nacional de Elecciones constituye los Jurados Electorales Especiales, y determina la competencia y la sede de los mismos.

Concordancia: Art. 32° de la LEY 26486.

Modificación de las circunscripciones

Artículo 14º.- Sólo los cambios en la demarcación política producidos antes de los tres meses previos a la convocatoria de cualquier proceso electoral rigen para dicho proceso electoral.

Contiendas de competencia

Artículo 15º.- Los conflictos de competencia y atribuciones entre los organismos que integran el Sistema Electoral se resuelven con arreglo al inciso 3) del Artículo 202º de la Constitución Política.
Las contiendas en materia electoral, que surjan durante el desarrollo de un proceso electoral, serán resueltas en un plazo no mayor de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de

recepción del correspondiente recurso. La Resolución del Tribunal no tiene efectos retroactivos y, en ningún caso, afectará el normal desarrollo de dicho proceso.

Concordancia: Art. 4° LEY 26533 y art. 46° LEY N° 26435. Asimismo ver en los anexos del presente libro, el texto completo del fallo del tribunal constitucional en la contienda RENIEC-ONPE

CAPITULO 2 DEL TITULO II

De las Elecciones Generales

Presidencia y Vicepresidencias

Artículo 16º.- Las Elecciones Generales se realizan cada cinco años, el segundo domingo del mes de abril, salvo lo dispuesto en los Artículos 84º y 85º de esta Ley.

Concordancia: Art. 112°de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 17º.- El Presidente y Vicepresidentes de la República son elegidos por sufragio directo para un período de cinco años. Para ser elegidos se requiere haber obtenido más de la mitad de los votos válidos, sin computar los votos nulos y en blanco.

Concordancia: Art. 111° y 112° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Segunda vuelta

Artículo 18º.- Si no se hubiese alcanzado la votación prevista en el artículo anterior, se procede a efectuar una segunda elección dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los dos candidatos que obtuvieron la votación más alta.

Concordancia: Art. 111° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 19º.- El Presidente y Vicepresidentes electos asumen sus cargos el 28 de julio del año en que se efectúe la elección, previo juramento de ley.

Concordancia: Art. 116° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Congreso de la República

Artículo 20º.- Las Elecciones para Congresistas se realizan conjuntamente con las elecciones para Presidente y Vicepresidentes de la República.

Artículo 21º.- El número de congresistas es de ciento veinte. Para su elección se aplica el método de la Cifra Repartidora, con doble voto preferencial opcional.
Para elecciones de Presidente, Vicepresidentes y Congresistas, el territorio de la República constituye Distrito Electoral Unico; son elegidos mediante voto directo, secreto y obligatorio.

Concordancia: Art. 90° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 22º.- Los Congresistas electos juramentan y asumen sus cargos, a más tardar el 27 de julio del año en que se efectúa la elección. Salvo los elegidos en las elecciones previstas en el Artículo 134º de la Constitución, quienes asumirán su cargo, después de haber sido proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones.

CAPITULO 3 DEL TITULO II

De las Elecciones en el Poder Judicial

Artículo 23º.- Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la elección y en la revocatoria de magistrados, conforme a la ley de la materia.

Concordancia: Art.152° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; art. 20, inc. c), de la LEY N° 26300

Artículo 24º.- Los Jueces de Paz son elegidos mediante elección popular. Los requisitos para ello, la convocatoria, el procedimiento de la elección, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la duración de sus cargos, son regulados por ley especial.
La ley especial puede establecer la elección de los jueces de primera instancia y determinar los mecanismos pertinentes.

Concordancia: Art. 152° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 25º.- El ejercicio del derecho de la revocación del cargo de magistrados, sólo procede en aquellos casos en que éste provenga de elección popular y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

Concordancia: Art. 20° de la LEY N° 26300.

CAPITULO 4 DEL TITULO II

De las Consultas Populares

Artículo 26º.- Cada referéndum y cada revocatoria se realiza mediante voto directo, secreto y obligatorio, en los términos señalados in fine en el segundo párrafo del Artículo 22º de la presente Ley.

Artículo 27º.- Cada referéndum y cada revocatoria pueden ser de cobertura nacional o limitados a determinadas circunscripciones electorales. Cada una de éstas constituye un Distrito Electoral.

Artículo 28º.- El elector vota marcando «APRUEBO» o «SI», cuando está a favor de la propuesta hecha o «DESAPRUEBO» o «NO» si está en contra.

CAPITULO 5 DEL TITULO II

DE LA CIFRA REPARTIDORA

Representación de las minorías

Artículo 29º.- El Método de la Cifra Repartidora tiene por objeto propiciar la representación de las minorías.

Cifra repartidora en Elecciones de representantes al Congreso de la República

Artículo 30º.- Para Elecciones de Representantes al Congreso de la República, la Cifra Repartidora se establece bajo las normas siguientes:

a) Se determina el número de votos válidos obtenidos por cada lista de candidatos;
b) El total de votos válidos obtenidos por cada lista se divide, sucesivamente, entre 1, entre 2, entre 3, etc. según sea el número total de Congresistas que corresponda elegir;
c) Los cuocientes parciales obtenidos son colocados en orden sucesivo de mayor a menor, hasta tener un número de cuocientes igual al número de los Congresistas por elegir; el cuociente que ocupe el último lugar constituye la Cifra Repartidora;
d) El total de votos válidos de cada lista se divide entre la Cifra Repartidora, para establecer el número de Congresistas que corresponda a cada una de ellas;
e) El número de Congresistas de cada lista está definido por la parte entera del cuociente obtenido a que se refiere el inciso anterior. En caso de no alcanzarse el número total de Congresistas previstos, se adiciona la unidad a quien tenga mayor parte decimal; y,
f) En caso de empate se decide por sorteo entre los que hubieran obtenido igual votación.

Artículo 31º.- El nuevo orden de los resultados se determina por el número de votos válidos obtenido por cada candidato dentro de su lista. Se colocan en forma sucesiva de mayor a menor en cada una de las listas. De esta manera se obtiene el orden definitivo de colocación de cada candidato en su lista.
Siguiendo el nuevo orden, son elegidos Congresistas en número igual al obtenido según lo descrito en el artículo anterior.
Los casos de empate entre los integrantes de una lista se resuelven por sorteo.

Artículo 32º.- La cantidad de votos que cada candidato haya alcanzado sólo se toma en cuenta para establecer su nuevo orden de colocación dentro de su lista, sin que ninguno pueda invocar derechos preferenciales frente a candidatos de otras listas a las que corresponde la representación, aunque individualmente éstos hubiesen obtenido votación inferior a la de aquél.

DE LOS ORGANOS ELECTORALES

CAPITULO 1

DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Artículo 33º.- El Jurado Nacional de Elecciones tiene a su cargo la fiscalización de la legalidad del proceso electoral. Ejerce sus atribuciones con sujeción a su Ley Orgánica y a la presente Ley.

Concordancias: Art. 178°inc. 1) de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; arts. 5° inc. c), de la LEY N° 26486; art. 3° de la LEY N° 26533.

Recursos de Impugnación

Artículo 34º.- El Jurado Nacional de Elecciones resuelve, en instancia definitiva, los recursos que se interpongan contra las resoluciones expedidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en cuanto tales se refieran a asuntos electorales, de referéndum u otro tipo de consultas populares.

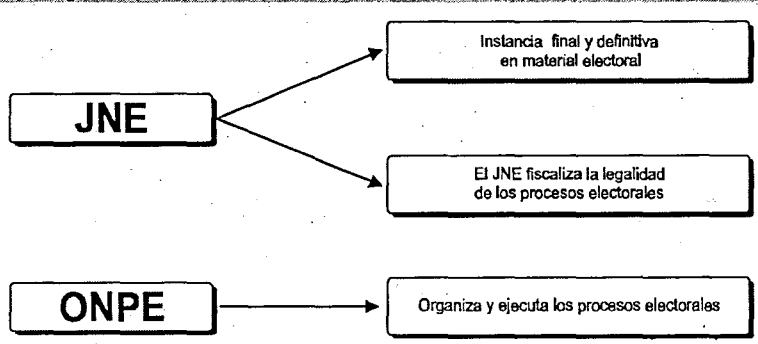
Concordancia: Art. 178°, inciso 4), de la CONSTITUCION POLÍTICA; art. 1° de la LEY N° 26533.

Artículo 35º.- Los recursos a que se refiere el artículo anterior se interponen dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a la publicación de la resolución impugnada. Ellos son resueltos, previa citación a audiencia, en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la fecha de su recepción por el Jurado Nacional de Elecciones.

Concordancia: Art. 2° de la LEY N° 26533.

Artículo 36º.- Contra las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, en materia electoral, no procede recurso alguno ni acción de garantía ni acción ante el Tribunal Constitucional. Contra las resoluciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en materia electoral, no procede recurso alguno ni acción de garantía. Sólo procede recurso ante el Jurado Nacional de Elecciones, el cual resuelve en instancia final y de acuerdo con el procedimiento estipulado en la presente Ley.

Concordancias: Art. 181° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; art. 23° de la LEY N° 26486; arts. 1° y 4° de la LEY N° 26533.

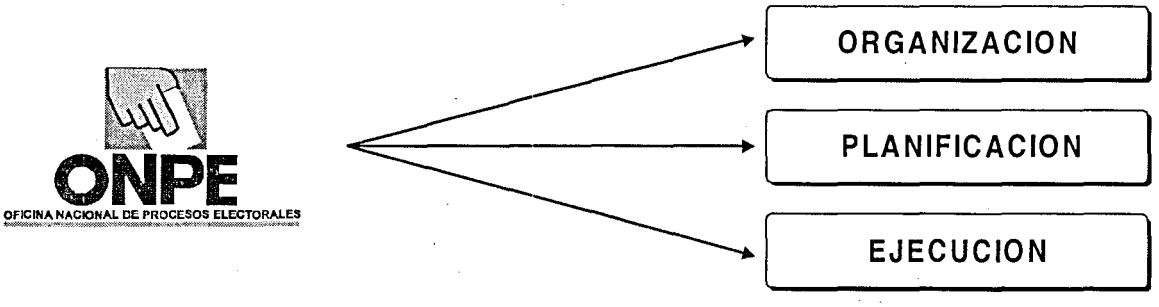


CAPITULO 2 DEL TITULO III

DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Artículo 37º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene a su cargo la organización y la ejecución de los Procesos Electorales y consultas populares. Ejerce sus atribuciones y funciones con sujeción a la Constitución, la presente Ley y su Ley Orgánica.

Concordancias: Arts. 177º y 182º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; arts.1º, y 5º de la LEY N° 26487.



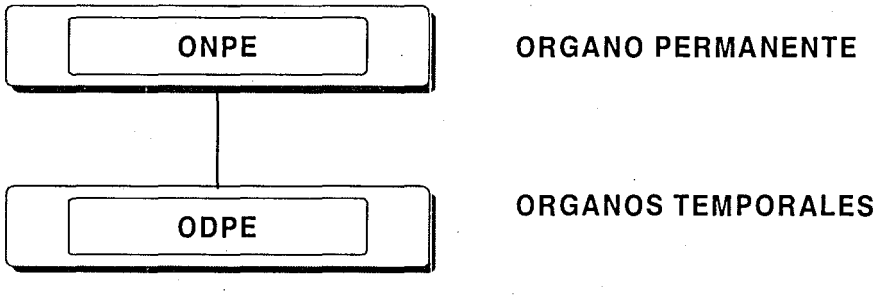
GARANTIA - EFICIENCIA - TRANSPARENCIA

Artículo 38º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales puede delegar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, previa coordinación, y mediante resolución de ambas partes, funciones de tipo logístico o de administración de locales.

Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales

Artículo 39º.- El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales establece el número, la ubicación y la organización de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, de acuerdo con las circunscripciones electorales que determina la ley.
Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y los Jurados Electorales Especiales están ubicados en un mismo local, el cual administran conjuntamente.

Concordancia: Art. 24° de la LEY N° 26487



Orden Público y Libertad Personal

Artículo 40º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales dicta las instrucciones y disposiciones necesarias para asegurar el mantenimiento del orden público y la libertad personal durante los comicios, las cuales son obligatorias y de estricto cumplimiento para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Concordancias: Art. 186º de la CONSTITUCION POLITICA; art. 5º inc. f) de la LEY Nº 26487

Artículo 41º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales garantiza, a los personeros técnicos acreditados ante cada Jurado, el acceso a la información documental de las actas, la información digitada o capturada por otro medio y los informes de consolidación. El incumplimiento de esta disposición por parte de dichas Oficinas es materia de sanción.

CAPITULO 3 DEL TITULO III

DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

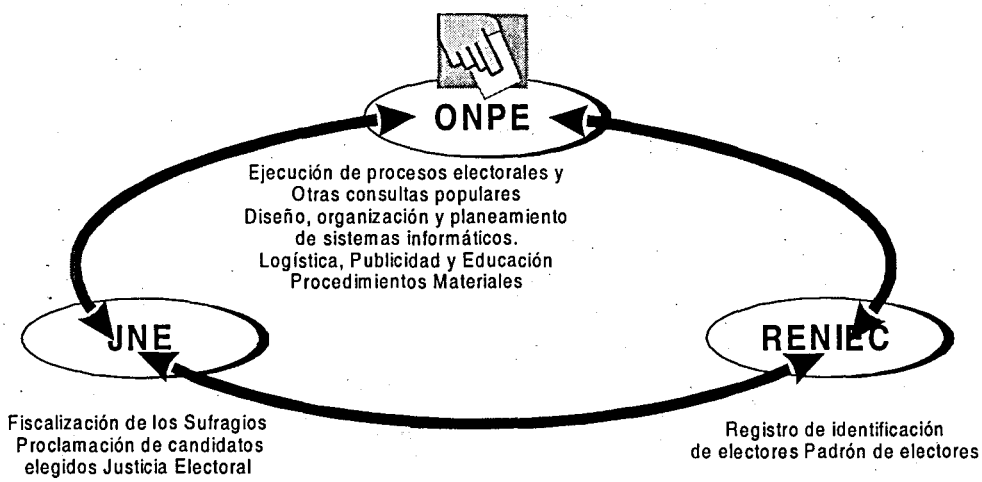
Artículo 42º.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ejerce sus atribuciones y funciones con sujeción a la Constitución Política, la presente Ley y su Ley Orgánica.

Concordancias: Arts. 177º y 183º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; arts. 1º, 2º y 6º de la LEY Nº 26497.

Artículo 43º.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil debe proporcionar, obligatoriamente, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la información requerida por ésta para la actualización permanente de su base de datos necesaria para la planificación de los procesos electorales y para el cumplimiento de sus funciones, y al Jurado Nacional de Elecciones la información requerida por éste para ejecutar sus funciones de fiscalización.

Concordancias: Art. 7º incs. e) y m) de la LEY Nº 26497

SISTEMA ELECTORAL PERUANO



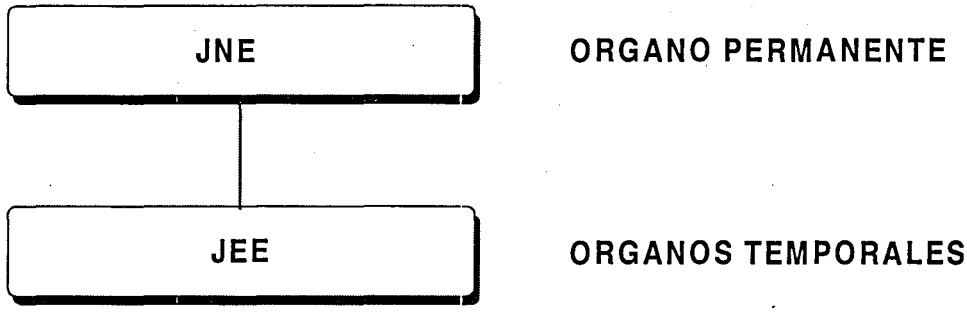
CAPITULO 4 DEL TITULO III

DE LOS JURADOS ELECTORALES ESPECIALES

Artículo 44º.- Los Jurados Electorales Especiales son órganos de carácter temporal creados para cada proceso electoral o consulta popular.

Las funciones y atribuciones de los Jurados Electorales Especiales son las establecidas en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y la presente Ley.

Concordancia: Art. 31º de la LEY Nº 26486



Conformación de los Jurados Electorales Especiales

Artículo 45º.- Los Jurados Electorales Especiales están constituidos por tres (3) miembros:

a. Un (1) miembro nombrado por la Corte Superior bajo cuya circunscripción se encuentra la sede del Jurado Electoral Especial, elegido entre sus magistrados jubilados y en actividad. El magistrado nombrado preside el Jurado Electoral Especial. La Corte Superior debe, en el mismo acto de nombramiento, designar a un miembro suplente.

b. Dos (2) miembros designados por el Jurado Nacional de Elecciones mediante sorteo en acto público de una lista de veinticinco (25) ciudadanos que residan en la sede del Jurado Electoral Especial y que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Dicha lista es elaborada por una comisión integrada por tres miembros del Ministerio Público elegidos de acuerdo con las normas electorales correspondientes. En el mismo acto se designan por sorteo, igualmente, dos (2) miembros suplentes.

   En los casos en que no existan tres Fiscales, la Comisión estará integrada de la siguiente manera:

1. En los casos en que existan sólo dos Fiscales, la Comisión estará integrada por dichos Magistrados.
2. En las provincias donde exista un solo Fiscal, la Comisión estará integrada por dicho Magistrado y el Registrador.
3. En las provincias donde no existan Fiscales, la Comisión estará integrada por un Juez Especializado o el Juez de paz Letrado y el Registrador.
4. En las provincias donde sólo exista un Juez, la Comisión estará formada por dicho Magistrado y el Registrador.

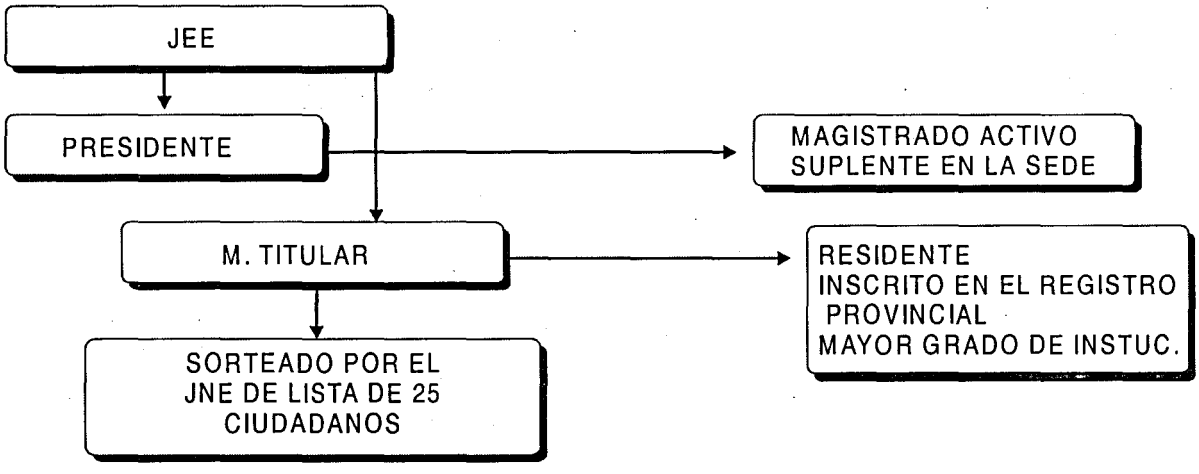
En las provincias donde no existan Jueces o Fiscales, la lista será elaborada por el Registrador.

Los ciudadanos propuestos deberán reunir los siguientes requisitos: Residir en la capital de la provincia, estar inscritos en el Registro Provincial y ser escogidos entre los ciudadanos de mayor grado de instrucción.

Las Listas de los ciudadanos propuestos serán publicadas, una sola vez, en el Diario Oficial "El Peruano" para la provincia de Lima, en el diario de los Avisos Judiciales para las demás provincias, y a falta de éste mediante carteles que se colocarán en los municipios y lugares públicos de la localidad.
Las tachas se formularán en el plazo de tres días contados a partir de la publicación de las listas y serán resueltas por la Comisión, o el Registrador en su caso, en el término de tres días. Sólo se admitirán tachas sustentadas con prueba documental.
El sorteo determina la designación de dos (2) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes.

Concordancia: Este texto reemplaza al art. 33° de la LEY Nº 26846, modificado por LEY N° 26514.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONFORMAR UN JURADO ELECTORAL ESPECIAL



Artículo 46º.- El cargo de miembro del Jurado Electoral Especial es remunerado e irrenunciable, salvo impedimento debidamente fundamentado. Su remuneración equivale a la de un Vocal de la Corte Superior de la circunscripción. En caso de muerte o impedimento del Presidente del Jurado Electoral Especial, asume el cargo el miembro suplente designado por la Corte Superior. En caso de muerte o impedimento de los miembros titulares, asume el cargo el primer miembro suplente; y así sucesivamente.

Concordancia: Art. 12 y 34º de la LEY Nº 26486.

Normatividad que rige a los Jurados Electorales Especiales

Artículo 47º.- Los Jurados Electorales Especiales, se rigen en lo aplicable, por las normas del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en lo concerniente a obligaciones, impedimentos, quórum, sesiones, acuerdos, fallos, deliberaciones, nulidades y votaciones, sin considerar la edad como impedimento. En caso de no contar con suficientes magistrados jubilados o en actividad, se nombra excepcionalmente al Fiscal más antiguo de la provincia o, en su defecto, a un abogado que reúna los requisitos para ser Vocal Superior.

Concordancias: Art. 12°, 16°, 24°, 25° y 35º de la LEY Nº 26486.

Vigencia del Jurado Electoral Especial

Artículo 48º.- Los cargos de los miembros de los Jurados Electorales Especiales se mantienen vigentes hasta la proclamación de los candidatos y la entrega de las respectivas credenciales.
El cargo de Presidente del Jurado Electoral Especial mantiene vigencia hasta la rendición de cuentas de los fondos asignados, plazo que no puede ser mayor de diez (10) días, bajo responsabilidad, contados desde la proclamación de los candidatos y la entrega de las respectivas credenciales.

Concordancia: Art. 37º de la LEY Nº 26486.

CAPITULO 5 DEL TITULO III

DE LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS DE PROCESOS ELECTORALES

Funciones de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales

Artículo 49º.- Las funciones y atribuciones de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales son las establecidas en su Ley Orgánica y la presente Ley.

Concordancias: Arts. 24º y 27º de la LEY Nº 26487.

Artículo 50º.- Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales informan a la Jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales o a quien ésta designe; ejecutan las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales, consultas populares y cómputo de votos en su circunscripción y administran los centros de cómputo que para dicho efecto se instalen, de acuerdo con las directivas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la normatividad electoral vigente.

Concordancias: Arts. 27º incs. a) y b), de la LEY Nº 26487.

CAPITULO 6 DEL TITULO III

DE LAS MESAS DE SUFRAGIO

Finalidad de las mesas de sufragio

Artículo 51º.- Las mesas de sufragio tienen por finalidad recibir los votos que emitan los electores en los procesos electorales de referéndum y otras consultas populares; así como el escrutinio, el cómputo y la elaboración de las actas electorales.

Conformación de las mesas de sufragio

Artículo 52º.- En cada distrito político de la República se conforman tantas mesas de sufragio como grupos de 200 (doscientos) ciudadanos hábiles para votar como mínimo y 300 (trescientos) como máximo existan.

El número de ciudadanos por mesa de sufragio es determinado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 53º.- Las mesas tienen un número que las identifica y las listas de electores por mesa se hacen sobre la base de los ciudadanos registrados en la circunscripción, en orden numérico.

Artículo 54º.- Si los ciudadanos inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil pertenecientes a un distrito fueran menos de doscientos (200), se instala dé todos modos una Mesa de Sufragio.

Designación de los miembros de mesa de sufragio

Artículo 55º.- Cada Mesa de Sufragio está compuesta por tres (3) miembros titulares. Desempeña el cargo de Presidente el que haya sido designado primer titular y el de Secretario el segundo titular.
La designación se realiza por sorteo entre una lista de veinticinco ciudadanos seleccionados entre los electores de la Mesa de Sufragio. El proceso de selección y sorteo está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En este mismo acto son sorteados otros tres miembros, que tienen calidad de suplentes.
En la selección de la lista de ciudadanos a que se refiere el párrafo precedente y en sorteo de miembros de Mesas de Sufragio, se pueden utilizar sistemas informáticos.
Para la selección se prefiere a los ciudadanos con mayor grado de instrucción de la Mesa correspondiente o a los que aún no hayan realizado dicha labor.

Concordancia: Art. 18° de la LEY Nº 26487

Artículo 56º.- El sorteo puede ser fiscalizado por los personeros de los Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas, debidamente acreditados ante el Jurado Electoral Especial o ante el Jurado Nacional de Elecciones, según corresponda.
Del sorteo para cada Mesa de Sufragio se levanta un Acta por duplicado. De inmediato se remite un ejemplar al Jurado Electoral Especial y otro al Jurado Nacional de Elecciones.

Impedimentos para ser miembro de las mesas de sufragio

Artículo 57º.- No pueden ser miembros de las Mesas de Sufragio:

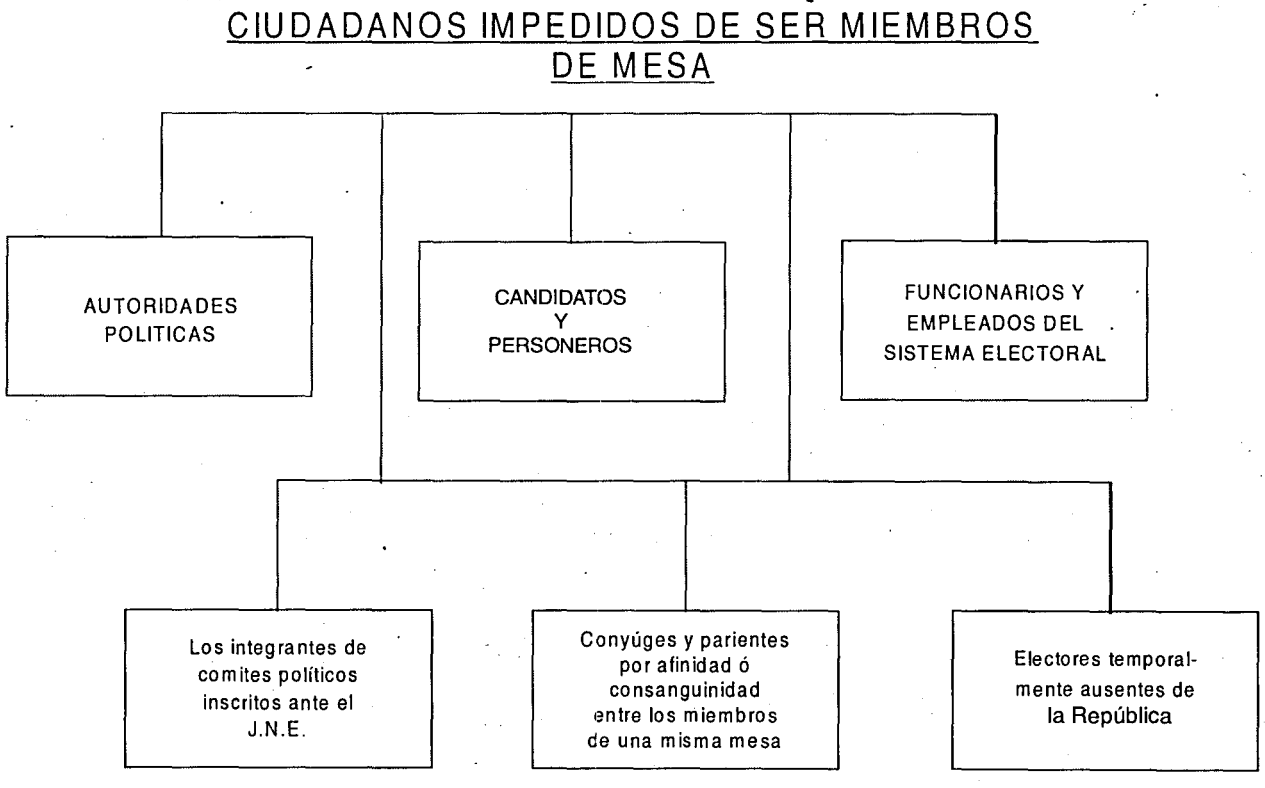
a. Los Candidatos y Personeros de los Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas;
b. Los funcionarios y empleados de los organismos que conforman el Sistema Electoral peruano;
c. Las autoridades políticas y los miembros de los Concejos Municipales;
d. Los ciudadanos que integren los Comités Directivos de los Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones;
e. Los cónyuges y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad entre los miembros de una misma Mesa; y,

f. Los electores temporalmente ausentes de la República, de acuerdo con las relaciones correspondientes que remita el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Los Organismos del Estado que tienen competencia sobre los ciudadanos mencionados en los incisos a), b), c), d) y f), quedan obligados a entregar la relación de aquéllos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para no ser considerados en el sorteo de Miembros de Mesa.

Cargo de Miembro de Mesa es irrenunciable

Artículo 58º.- El cargo de miembro de Mesa de Sufragio es irrenunciable, salvo los casos de notorio o grave impedimento físico o mental, necesidad de ausentarse del territorio de la República, estar incurso en alguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo anterior o ser mayor de setenta (70) años.
La excusa sólo puede formularse por escrito, sustentada con prueba instrumental, hasta cinco (5) días después de efectuada la publicación a que se refiere el Artículo 61º.



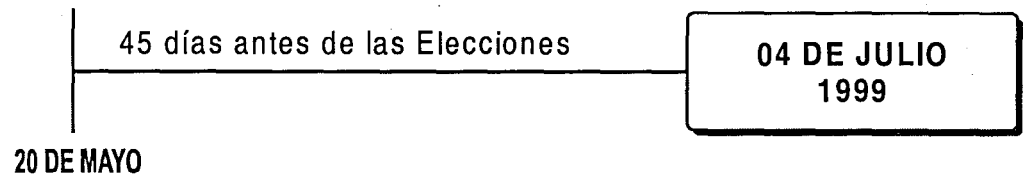
Plazo para el sorteo de los miembros, numeración y conformación de las mesas de sufragio

Artículo 59º.- La numeración de las Mesas de Sufragio y el sorteo de sus miembros se efectúan por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales correspondientes, por lo menos cuarenta y cinco (45) días naturales antes de la fecha señalada para las elecciones. Su conformación se da a conocer de inmediato a través de los medios de comunicación y por carteles que se fijan en los edificios públicos y en los lugares más frecuentados de la localidad.

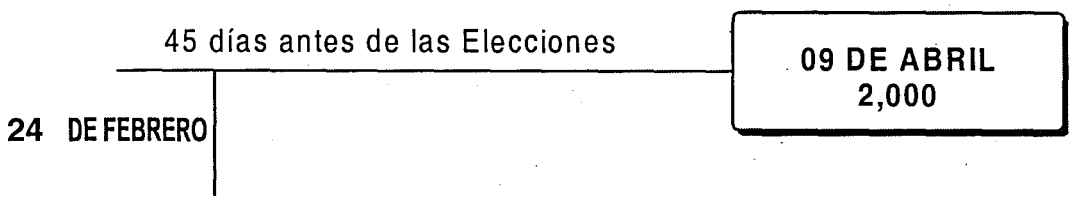
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil proporcionará obligatoriamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la dirección de los ciudadanos sorteados como miembros de mesa, dentro de los cinco días posteriores al sorteo.

Concordancias: Arts. 18° y 27° inc. l) de la LEY N° 26487

FECHA MAXIMA PARA SORTEO DE MIEMBROS DE MESA PARA EL PROCESO ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 1999



FECHA MAXIMA PARA SORTEO DE MIEMBROS DE MESA PARA EL PROCESO ELECCIONES GENERALES DEL 2,000



Impugnación contra la conformación o contra los miembros de las mesas de sufragio

Artículo 60º.- Publicada la información a que se refiere el Artículo 61º, cualquier ciudadano inscrito y con sus derechos vigentes ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil o cualquier personero puede formular las tachas que estime pertinentes, dentro de los tres (3) días contados a partir de la publicación.

La tacha que no esté sustentada simultáneamente con prueba instrumental no es admitida a trámite por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales. Las tachas sustentadas son remitidas el mismo día de recepción a los Jurados Electorales Especiales, los cuales las resuelven dentro del siguiente día de haber sido formuladas. La resolución que se emita sobre la impugnación interpuesta es inapelable.

Concordancia: Art. 36º inc. k) de la LEY Nº 26486

Entrega de credenciales a miembros de mesa.

Artículo 61º.- Resueltas las tachas o vencido el plazo sin que ellas se hubieran formulado, el Jurado Electoral Especial comunica el resultado a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, la cual publica el nombre de los miembros titulares y suplentes de las Mesas de Sufragio y cita a los que residen en la capital de la provincia para que, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la publicación, se presenten a recibir la respectiva credencial en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.

Si fuesen declaradas fundadas las tachas contra los tres titulares y uno o más suplentes, se procede a nuevo sorteo en un plazo máximo de 3 (tres) días.

Caso excepcional

Artículo 62º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales, en casos excepcionales, puede establecer que las Mesas de Sufragio estén conformadas por los mismos miembros que las integraron en el último proceso electoral.

Publicación de la nómina de miembros de mesa

Artículo 63º.- La publicación de la nómina de los miembros designados para integrar las Mesas de Sufragio, con indicación de sus nombres, número de documento de identidad y local de votación, se hace por una sola vez en el Diario Oficial El Peruano o en el diario de mayor circulación, en separatas especiales proporcionadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, lo que no excluye la entrega de estas nóminas a las dependencias públicas para que coadyuven a su difusión.
En las capitales donde no se editen diarios, la publicación se hace por carteles que se fijan en los edificios públicos, y en los lugares más frecuentados.

Elecciones en segunda vuelta

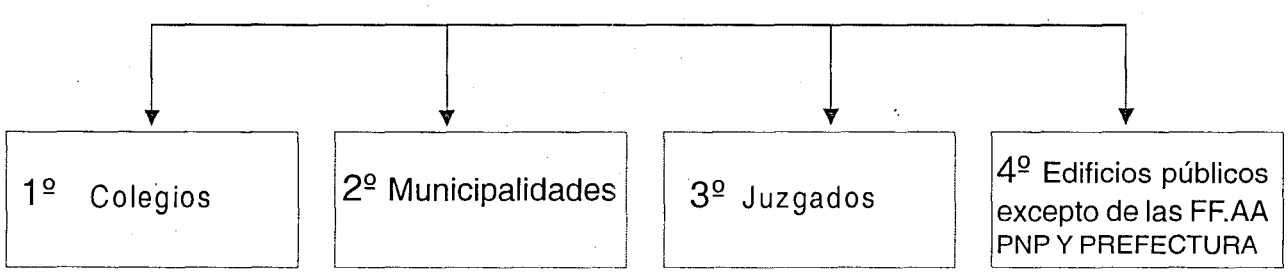
Artículo 64º.- En caso de haber Elecciones en Segunda Vuelta, los miembros de mesa son los mismos que las conformaron en la primera vuelta, sin necesidad de nuevo sorteo.

Locales donde funcionan las mesas de sufragio

Artículo 65º.- Los locales en que deban funcionar las Mesas de Sufragio son designados por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales en el orden siguiente: Escuelas, Municipalidades, Juzgados y edificios públicos no destinados al servicio de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional o de las autoridades políticas.
Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales disponen, en cuanto sea posible, que en un mismo local funcione el mayor número de Mesas de Sufragio, siempre que las cámaras secretas reúnan las condiciones que determina la ley y se mantenga absoluta independencia entre ellas.

Concordancia : Art. 27, inc. n) de la LEY N° 26487.

ORDEN EN EL CUAL DEBEN SER DESIGNADOS LOS LOCALES DE VOTACION

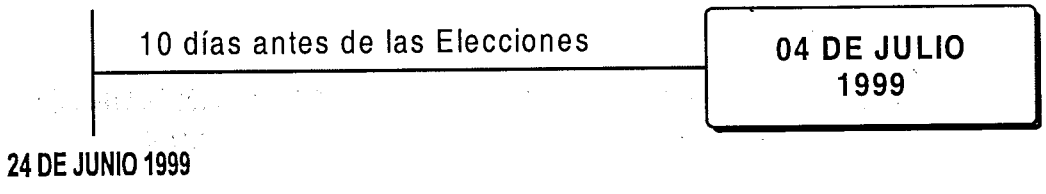


Divulgacion de los locales de votacion

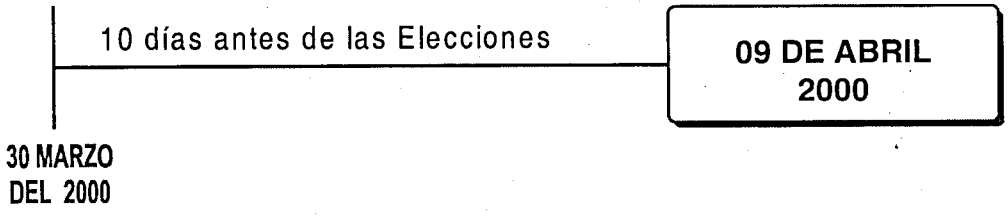
Artículo 66º.- Designados los locales en que deban funcionar las Mesas de Sufragio, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales hacen conocer su ubicación, con una anticipación no menor de diez (10) días naturales respecto de la fecha de las elecciones, en el Diario Oficial El Peruano o, en su caso, en un diario de la capital de provincia.
En las capitales donde no se editen diarios, la publicación se hace por carteles que se fijan en los edificios públicos, los lugares más frecuentados y mediante avisos judiciales. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales puede disponer la publicación en otro diario de la misma localidad.
En las publicaciones por diarios o por carteles se indican, con exactitud y precisión, la ubicación del local donde funciona cada Mesa de Sufragio y el nombre de sus miembros titulares y suplentes.

Concordancia : Art. 27, inc. o) de la LEY N° 26487.

ODPE HACE CONOCER UBICACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO POR LO MENOS 10 DIAS ANTES DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS



ODPE HACE CONOCER UBICACIÓN DE LAS MESAS DE SUFRAGIO POR LO MENOS 10 DIAS ANTES DE LAS ELECCIONES GENERALES PRESIDENCIALES Y DE CONGRESISTAS



Artículo 67º.- Una vez publicada, no puede alterarse la ubicación de las Mesas de Sufragio, salvo causa de fuerza mayor, calificada por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales y de acuerdo con el Jurado Electoral Especial.

CAPITULO 7 DEL TITULO III

DE LA MESA DE TRANSEUNTES

Instalación de mesas de transeúntes

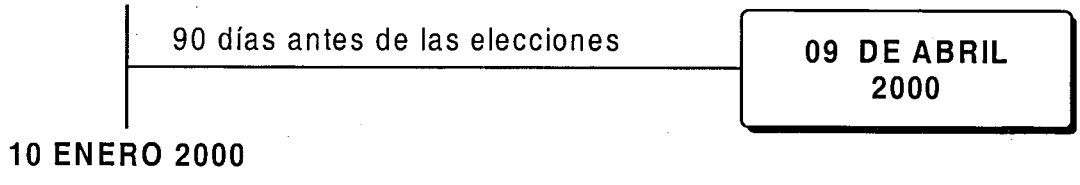
Artículo 68º.- Corresponde al Jurado Nacional de Elecciones disponer la instalación de Mesas de Transeúntes para cualquier elección de carácter nacional.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales garantiza la instalación de las mesas de transeúntes

Artículo 69º.- Las Mesas de Transeúntes se establecen solo para los casos de elecciones con distrito electoral único.

Inscripción en Mesa de Transeúntes

Artículo 70º.- El ciudadano que fuera a hacer uso de una mesa de transeúntes, deberá apersonarse a las Oficinas del Registro Distrital de Identificación y Estado Civil del lugar donde pretende votar para cumplir los requisitos respectivos. El trámite deberá realizarse con una anticipación no menor de noventa (90) días respecto de la elección.

PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN UNA MESA DE TRANSEUNTES EN LAS ELECCIONES GENERALES DEL AÑO 2000



Artículo 71º.- La Oficina del Registro Distrital de Identificación y Estado Civil envía al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, por el medio de comunicación más rápido disponible, la relación de los ciudadanos que se inscribieron para votación en Mesas de Transeúntes con copia a la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Ubicación de mesas de transeúntes

Artículo 72º.- Con la relación indicada en el artículo anterior, se procede a realizar la emisión de las Listas de Electores correspondientes.
Todo ciudadano que se haya inscrito, en Mesa de Transeúntes, vota en la Mesa que le sea designada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La inscripción en Mesas de Transeúntes es válida exclusivamente para la elección en curso.

Artículo 73º.- Las Mesas de Transeúntes de un distrito se ubican, de preferencia en un solo local.

CAPITULO 8 DEL TITULO III

DE LAS COORDINACIONES ENTRE LOS ORGANOS DEL SISTEMA ELECTORAL DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES

Artículo 74º.- El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil deben mantener una relación de coordinación y colaboración entre ellos con el propósito de asegurar que los Procesos Electorales se efectúen dé acuerdo con las disposiciones y los plazos previstos.

Concordancias: Art. 177° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; art. 3º de la LEY N° 26487.

Sesiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones

Artículo 75º.- Los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil pueden ser invitados a las sesiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Concordancias: Art. 25° de la LEY N° 26486.

Comité de Coordinación Electoral

Artículo 76º.- El Comité de Coordinación Electoral es designado inmediatamente después de la convocatoria de cada elección, y está conformado por personal técnico altamente calificado, designado por el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Función del Comité de Coordinación Electoral

Artículo 77º.- El Comité de Coordinación Electoral no reemplaza a instancia operativa alguna del Sistema Electoral. Su función es de coordinación y asesoría.

Artículo 78º.- El Comité de Coordinación Electoral tiene las funciones principales siguientes:

a. Coordinación de las actividades operativas definidas en el Plan de Organización Electoral.

b. Coordinación de los requerimientos de los Organismos que conforman el Sistema Electoral.

c. Coordinación para la instalación de los locales donde operan en conjunto los Jurados Electorales Especiales y las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.

TITULO IV

DE LA CONVOCATORIA

CAPITULO 1

Generalidades

Artículo 79º.- El proceso electoral se inicia con la convocatoria a Elecciones por el Presidente de la República y termina 15 (quince) días después de la promulgación de los resultados.

Concordancia: DECRETO SUPREMO N° 004-99-PCM, Convoca Elecciones Municipales Complementarias 1999.

CAPITULO 2 DEL TITULO IV

De la Convocatoria

Decreto de Convocatoria

Artículo 80º.- Corresponde al Presidente de la República iniciar el proceso electoral convocando a Elecciones, mediante Decreto Supremo, a excepción de lo dispuesto en la Ley de Participación y Control Ciudadanos.

Concordancias: Art. 118°, inc. 5) de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; art. 21º de la LEY N° 26300.

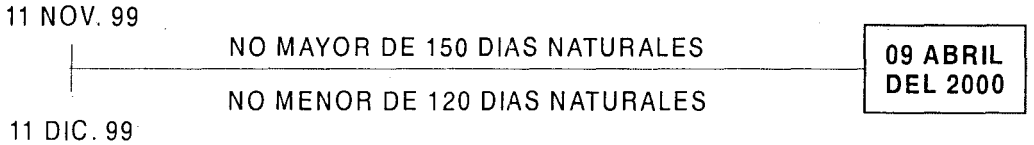
Artículo 81º.- El Decreto establece el objetivo, la fecha de las elecciones y el tipo de elección o consulta popular.

Plazos para Convocatoria a Elecciones

Artículo 82º.- La convocatoria a Elecciones Generales se hace con anticipación no menor de 120 (ciento veinte) días naturales y no mayor de 150 (ciento cincuenta).
La convocatoria a Referéndum o Consultas Populares se hace con una anticipación no mayor de 90 (noventa) días naturales ni menor de 60 (sesenta).

Concordancias: Art. 118° inc. 5), de la CONSTITUCION POLITICA; Art. 21° de la LEY N° 26300.

PLAZO EN QUE DEBE CONVOCARSE A ELECCIONES GENERALES EL 2000 PARA ELEGIR PRESIDENTE Y CONGRESISTAS



Decreto que rige un Proceso Electoral, Referéndum o Consulta Popular.

Artículo 83º.- Todo Decreto de Convocatoria a Elecciones debe espe- cificar:

a) Objeto de las Elecciones.
b) Fecha de las Elecciones y, de requerirse, fecha de la segunda elección o de las elecciones complementarias.
c) Cargos por cubrir o temas por consultar.
d) Circunscripciones electorales en que se realizan.
e) Autorización del Presupuesto.

CAPITULO 3 DEL TITULO IV

De la Convocatoria Extraordinaria

Disolución del Congreso

Artículo 84º.- El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso de la República si éste ha censurado (2) dos Consejos de Ministros o les ha negado la confianza. El decreto de disolución contiene la convocatoria extraordinaria a elecciones para nuevo Congreso.

Concordancias: Art. 134° de la CONSTITUCION POLÍTICA.

Artículo 85º.- Las Elecciones se efectúan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda modificarse el Sistema Electoral preexistente.

Concordancias: Art. 134° de la CONSTITUCION POLÍTICA.

TITULO V

DE LAS INSCRIPCIONES Y CANDIDATOS

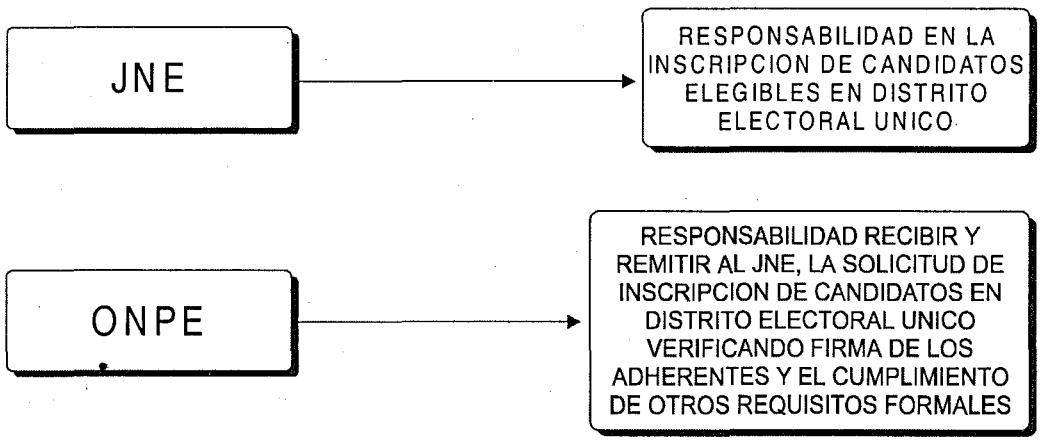
CAPITULO 1

Del Responsable

Artículo 86º.- El Jurado Nacional de Elecciones tiene la responsabilidad de la inscripción de candidatos elegibles en Distrito Electoral Nacional.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene la responsabilidad de recibir y remitir al Jurado Nacional de Elecciones la solicitud de inscripción de candidatos u opciones en procesos de ámbito nacional, informando respecto del cumplimiento de los requisitos formales exigidos que incluye la verificación de las respectivas firmas de los ciudadanos adherentes.

Concordancias: Art. 5° inc. m) de la LEY N° 26487

RESPONSABILIDADES DEL JNE Y ONPE RESPECTO A INSCRIPCION DE CANDIDATOS EN DISTRITO ELECTORAL UNICO



CAPITULO 2 DEL TITULO V

De las Inscripciones en el Registro de Organizaciones Políticas

Artículo 87º.- Los Partidos Políticos, las Agrupaciones Independientes y las Alianzas que para el efecto se constituyan pueden presentar fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes,listas de candidatos a Congresistas en el caso de Elecciones Generales, siempre que estén inscritos o tengan inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones.

Se considera vigente la inscripción de los Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas, siempre que hayan obtenido un porcentaje de votación no menor del cinco por ciento (5%) a nivel nacional en el último proceso de Elecciones Generales.

Concordancias: Art. 5° inc. e) de la LEY N° 26486.

Requisitos para la inscripción de agrupaciones políticas

Artículo 88º.- El Jurado Nacional de Elecciones procede a inscribir a las agrupaciones políticas a que se refiere el artículo anterior, siempre que éstas reúnan los siguientes requisitos:

a) Solicitud con la denominación del Partido o Agrupación Independiente, su domicilio y el nombre del respectivo personero ante el Jurado Nacional de Elecciones;
b) Relación de adherentes no menor del 4% de los ciudadanos hábiles para votar a nivel nacional, según el número de electores inscritos en el Padrón empleado en las últimas elecciones de carácter nacional, con la firma y el número del Documento Nacional de Identificación de cada uno de éstos;
c) Inscripción realizada hasta noventa (90) días naturales antes del día de las elecciones; y,
d) Presentación por duplicado de disquetes con la relación de adherentes y de sus respectivos números de Documento Nacional de Identificación de acuerdo con los requerimientos del Jurado Nacional de Elecciones.

Artículo 89º.- El Partido Político, la Agrupación Independiente o la Alianza que solicite su inscripción, no puede adoptar denominación igual a la de otro Partido, Agrupación Independiente o Alianza ya inscrito, ni el nombre de una persona natural o jurídica, ni uno que sea lesivo o alusivo a nombres de instituciones o personas, o atenté contra la moral y las buenas costumbres.

Control de Adherentes

Artículo 90º.- Los electores que figuren en la relación de adherentes para la inscripción de un Partido Político, Agrupación Independiente o Alianza, no pueden adherirse en el mismo período electoral a otro Partido Político, Agrupación Independiente o Alianza.
La prioridad corresponde a quienes hayan solicitado su inscripción en primer término siempre que sea válida la firma presentada.

Artículo 91º.- El Jurado Nacional de Elecciones solicita a la Oficina Nacional de Procesos Electorales que compruebe la autenticidad de las firmas y la numeración de los Documentos Nacionales de Identificación correspondientes a los adherentes a que se hace referencia en el inciso b) del Artículo 88°.

Proceso de listas de firmas

Artículo 92º.- Los lotes de listas de firmas de adherentes deben procesarse en el orden de recepción y de acuerdo con el número que se les asignen. Se incluyen listas adicionales, de así requerirse. La primera entrega tiene que ser igual o mayor que el número mínimo requerido de adherentes.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales puede suspender la verificación, en caso de que se alcance el mínimo requerido.
El plazo para la comprobación de la autenticidad de las firmas de los adherentes es de diez días.

Artículo 93º.- Si, como consecuencia de la comprobación a la que hace referencia el artículo anterior, el número de las firmas válidas resulta inferior al número exigido, el Jurado Nacional de Elecciones pone tal deficiencia en conocimiento del Partido, Agrupación Independiente o Alianza que solicitó la inscripción, para la correspondiente subsanación.
Dicha subsanación no excede de la fecha de cierre de inscripción de Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes o Alianzas. De no efectuarse la subsanación, se considera retirada la solicitud de inscripción.

Artículo 94º.- Se procesa el 100% de listas de adherentes, de acuerdo al número requerido de éstos, de manera gratuita. Luego de ello, el proceso de las demás se cobra de acuerdo con la tasa que fija el Jurado Nacional de Elecciones.

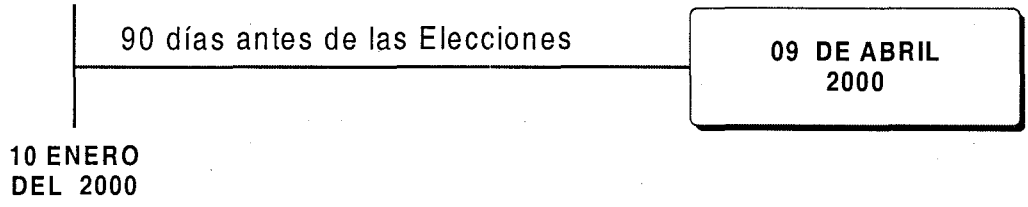
Artículo 95º.- Cualquier deficiencia en la solicitud de inscripción puede ser subsanada por disposición del Jurado Nacional de Elecciones.
Si no se cumple con la subsanación, se considera retirada la solicitud de la inscripción.

Artículo 96º.- Cumplidas las exigencias, el Jurado Nacional de Elecciones procede inmediatamente a efectuar la inscripción provisional, la que se convierte en definitiva después de resueltas las tachas que pudieran formularse.

Alianzas de Partidos

Artículo 97º.- Los Partidos Políticos y Agrupaciones Independientes pueden formar Alianzas. Deben solicitar la inscripción de éstas al Jurado Nacional de Elecciones, dentro del término establecido en el inciso c) del Artículo 88°.

PLAZO LÍMITE PARA QUE PARTIDOS Y AGRUPACIONES INDEPENDIENTES PUEDAN FORMAR ALIANZAS ANTE EL JNE



Artículo 98º.- La solicitud con el acuerdo de Alianza, en cada caso, es suscrita por los Presidentes o Secretarios Generales y los representantes de los órganos directivos de cada uno de los Partidos y Agrupaciones Independientes, en el caso de constitución de Alianza entre éstos.
En la solicitud de inscripción se incluye una copia certificada notarialmente del acuerdo adoptado. Asimismo, se indican la denominación de la Alianza, su domicilio y el nombre de sus personeros legales ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Artículo 99º.- El Partido o Agrupación Independiente que integre una Alianza no puede presentar, en un Proceso Electoral, una lista de candidatos distinta de la patrocinada por ésta en la misma jurisdicción.

Publicación de síntesis del Asiento de Inscripción

Artículo 100º.- El Jurado Nacional de Elecciones publica, en el Diario Oficial El Peruano, por una sola vez, una síntesis del asiento de inscripción del Partido Político, Agrupación Independiente o Alianza.
La publicación del asiento de inscripción debe efectuarse dentro de los dos (2) días naturales después de la inscripción.

Impugnación a la inscripción de un Partido, Agrupación Independiente o Alianza

Artículo 101º.- Dentro de los tres (3) días naturales siguientes a la publicación, cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil puede presentar tachas a la inscripción de un Partido, Agrupación Independiente o Alianza.

Artículo 102º.- La tacha debe presentarse ante el Jurado Nacional de Elecciones, fundarse en la infracción de lo dispuesto en este Título y estar acompañada de la prueba instrumental pertinente, así como de un comprobante de empoce en el Banco de la Nación, a la orden del Jurado Nacional de Elecciones, de una cantidad equivalente a cinco Unidades Impositivas Tributarias la cual se devuelve a quien haya formulado la tacha, en caso de que ésta fuese declarada fundada.

Concordancia : D.S. N° 123-98-EF (fija UIT en S/. 2,800.00)

Artículo 103º.- El Jurado Nacional de Elecciones, en sesión pública, substancia la tacha dentro de los tres (3) días naturales después de formulada, con citación del ciudadano que la promovió y del personero del Partido, Agrupación Independiente o Alianza cuya inscripción hubiera sido objeto de tacha.

Concordancias: Art. 2° de la LEY N° 26954

CAPITULO 3 DEL TITULO V

De los Candidatos a Presidente

Fórmula de candidatos

Artículo 104º.- Los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, sean de un Partido, Agrupación Independiente o Alianza, solicitan su inscripción en una sola y misma fórmula.

La denegatoria de inscripción del candidato a la Presidencia implica la de los candidatos a las Vicepresidencias de la misma lista. Si la denegatoria es sólo de uno de los dos candidatos a la Vicepresidencia, se inscribe al candidato a la Presidencia y al otro candidato a la Vicepresidencia. El candidato a la Vicepresidencia cuya candidatura fue denegada, podrá ser reemplazado hasta el tercer día después de comunicada la denegatoria.

Concordancias: Art. 2° de la LEY N° 26954

Artículo 105º.- El Presidente de la República es elegido por un período de cinco años. El Presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.

Concordancia : Art. 112° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; LEY ° 26657

Ley N° 26657- Interpreta artículo 112° de la Constitución referido a la reelección presidencial. Fecha: 23.08.96

"Artículo Unico- interpretese de modo auténtico, que la reelección a que se refiere el artículo 112° de la Constitución Política está referida y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación de referido texto constitucional, en consecuenciua, interprétase auténticamente que en el computo no se tienen en cuenta retroactivamente los períodos presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución.

La presente norma se ampara en el artículo 102° y en la octava disposición final y transitoria de la Constitución."

Requisitos para ser elegido Presidente

Artículo 106º.- Para ser elegido Presidente de la República se requiere:

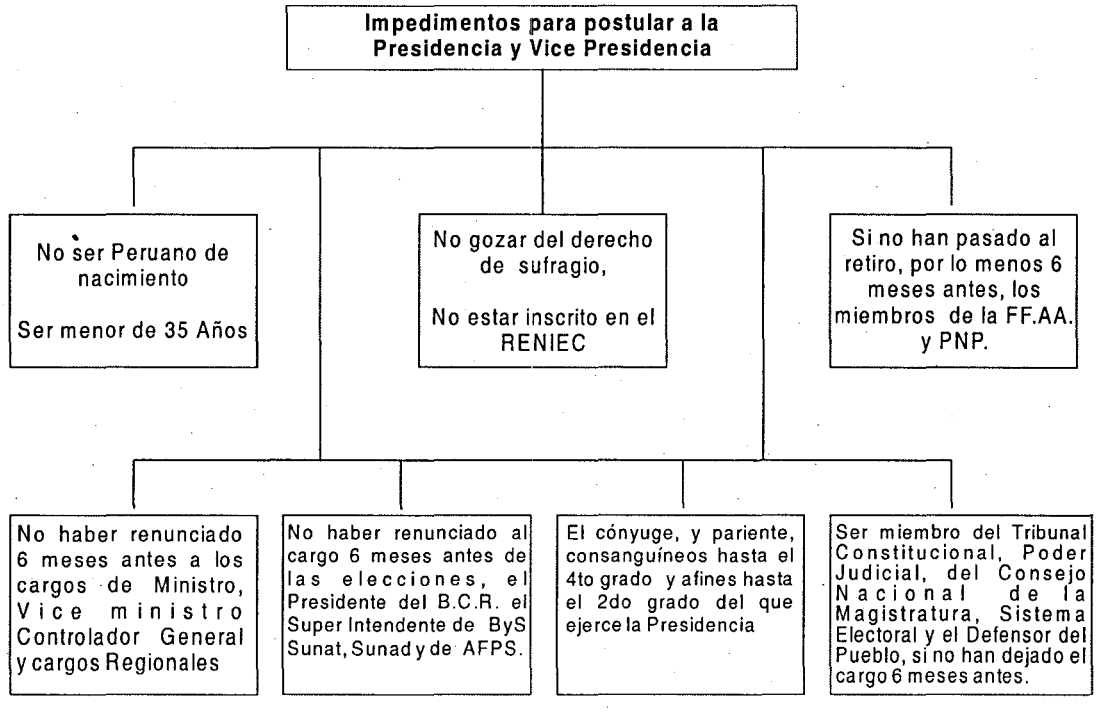
a. Ser peruano de nacimiento;
b. Ser mayor de 35 (treinta y cinco) años;
c. Gozar del derecho de sufragio; y,
d. Estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Concordancia : Art. 110° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

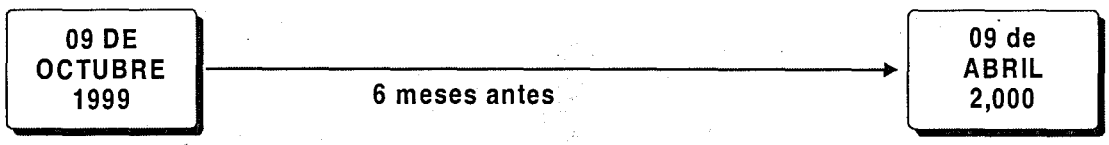
Impedimentos para postular

Artículo 107º.- No pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República:

a. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General de la República y las autoridades regionales, si no han renunciado por lo menos seis meses antes de la elección;
b. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los organismos integrantes del Sistema Electoral y el Defensor del Pueblo, si no han dejado el cargo 6 (seis) meses antes de la elección;
c. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Seguros, el Superintendente de Administración Tributaria, el Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de Administradoras de Fondos Privados de Pensiones, si no han renunciado por lo menos seis meses antes de la elección;
d. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que no han pasado a la situación de retiro por lo menos seis meses antes de la elección;
e. El cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año precedente a la elección.



PLAZO MAXIMO PARA QUE ALTOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PRESENTEN RENUNCIA AL CARGO, SI VAN A POSTULAR EN LAS ELECCIONES GENERALES DEL AÑO 2000

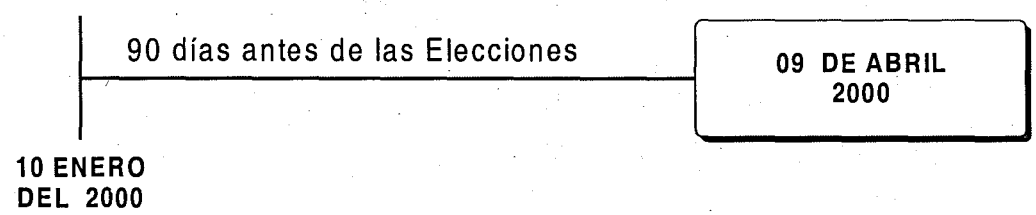


Artículo 108º.- Los candidatos a la Presidencia no pueden integrar la lista de candidatos al Congreso de la República.
Los candidatos a las Vicepresidencias pueden, simultáneamente, integrar la lista de candidatos al Congreso de la República.

Plazo de Inscripción de Fórmulas de Candidatos

Artículo 109º.- Cada Partido Político, Agrupación Independiente o Alianza, registrado en el Jurado Nacional de Elecciones, sólo puede inscribir una fórmula de candidatos a la Presidencia o Vicepresidencias de la República, hasta noventa (90) días naturales antes de la fecha de las elecciones. El candidato que integre una fórmula ya inscrita no puede figurar en otra.
El Jurado Nacional de Elecciones publica en el Diario Oficial El Peruano la inscripción de cada fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, al día siguiente de efectuarse la misma.

PLAZO LÍMITE PARA INSCRIPCION DE CANDIDATOS A PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA



Impugnación contra los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias

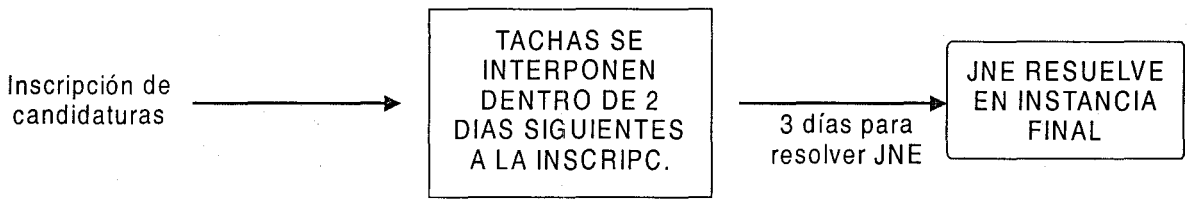
Artículo 110º.- Dentro de los dos (2) días naturales siguientes a la publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier ciudadano inscrito, y con sus derechos vigentes ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, puede formular tacha contra cualquiera de los candidatos, fundada sólo en la infracción de los Artículos 106º, 107º y 108º de la presente Ley.

La tacha es resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones dentro del término de tres (3) días naturales. La tacha se acompaña con un comprobante de empoce en el Banco de la Nación, a la orden del Jurado Nacional de Elecciones, por la suma equivalente a un (1) UIT por candidato, cantidad que se devuelve a quien haya formulado la tacha, en caso que ésta se declare fundada.

De declararse fundada una tacha, las Organizaciones Políticas podrán reemplazar al candidato tachado, siempre que dicho reemplazo no exceda del plazo establecido en el artículo anterior.

Concordancia: Art. 2° de la LEY N° 26954

PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR TACHAS CONTRA CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA Y VICE PRESIDENCIA



Artículo 111º.- Aceptada la inscripción de las fórmulas de candidatos o ejecutoriadas las resoluciones recaídas en las tachas que se hubiesen formulado, el Jurado Nacional de Elecciones efectúa la inscripción definitiva de las Fórmulas de Candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias y dispone su publicación.

CAPITULO 4 DEL TITULO V

De los Candidatos a Congresistas

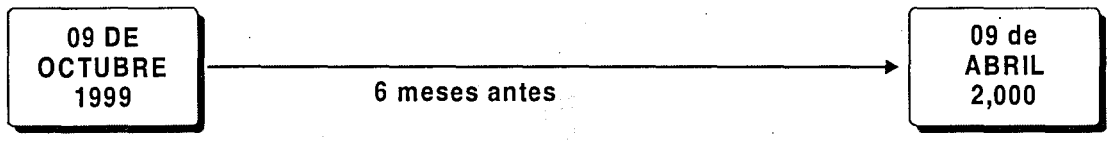
Requisito para ser elegido Congresista

Artículo 112º.- Para ser elegido representante al Congreso de la República y representante ante el Parlamento Andino se requiere:

a) Ser peruano de nacimiento;
b) Ser mayor de veinticinco (25) años;
c) Gozar del derecho de sufragio; y,
d) Estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Concordancia: Art. 90° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

PLAZO MAXIMO PARA QUE ALTOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PRESENTEN RENUNCIA AL CARGO, SI VAN A POSTULAR EN LAS ELECCIONES GENERALES DEL AÑO 2000

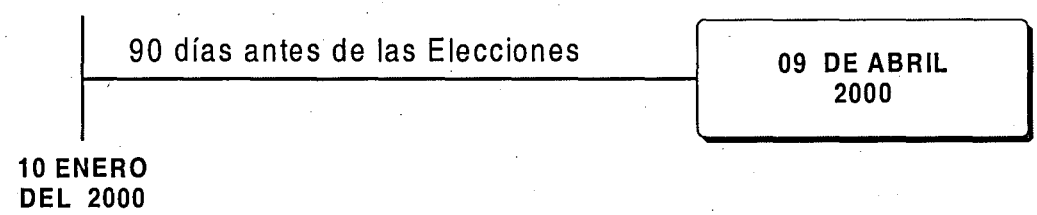


Artículo 108º.- Los candidatos a la Presidencia no pueden integrar la lista de candidatos al Congreso de la República.
Los candidatos a las Vicepresidencias pueden, simultáneamente, integrar la lista de candidatos al Congreso de la República.

Plazo de Inscripción de Fórmulas de Candidatos

Artículo 109º.- Cada Partido Político, Agrupación Independiente o Alianza, registrado en el Jurado Nacional de Elecciones, sólo puede inscribir una fórmula de candidatos a la Presidencia o Vicepresidencias de la República, hasta noventa (90) días naturales antes de la fecha de las elecciones. El candidato que integre una fórmula ya inscrita no puede figurar en otra.
El Jurado Nacional de Elecciones publica en el Diario Oficial El Peruano la inscripción de cada fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, al día siguiente de efectuarse la misma.

PLAZO LÍMITE PARA INSCRIPCION DE CANDIDATOS A PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA



Impugnación contra los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias

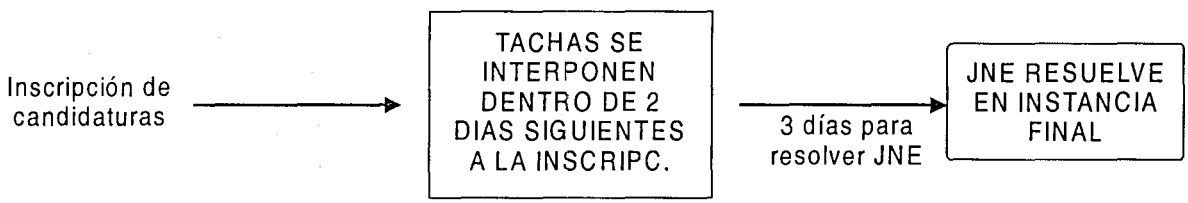
Artículo 110º.- Dentro de los dos (2) días naturales siguientes a la publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier ciudadano inscrito, y con sus derechos vigentes ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, puede formular tacha contra cualquiera de los candidatos, fundada sólo en la infracción de los Artículos 106º, 107º y 108º de la presente Ley.

La tacha es resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones dentro del término de tres (3) días naturales. La tacha se acompaña con un comprobante de empoce en el Banco de la Nación, a la orden del Jurado Nacional de Elecciones, por la suma equivalente a un (1) UIT por candidato, cantidad que se devuelve a quien haya formulado la tacha, en caso que ésta se declare fundada.

De declararse fundada una tacha, las Organizaciones Políticas podrán reemplazar al candidato tachado, siempre que dicho reemplazo no exceda del plazo establecido en el artículo anterior.

Concordancia: Art. 2° de la LEY N° 26954

PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR TACHAS CONTRA CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA Y VICE PRESIDENCIA



Artículo 111º.- Aceptada la inscripción de las fórmulas de candidatos o ejecutoriadas las resoluciones recaídas en las tachas que se hubiesen formulado, el Jurado Nacional de Elecciones efectúa la inscripción definitiva de las Fórmulas de Candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias y dispone su publicación.

CAPITULO 4 DEL TITULO V

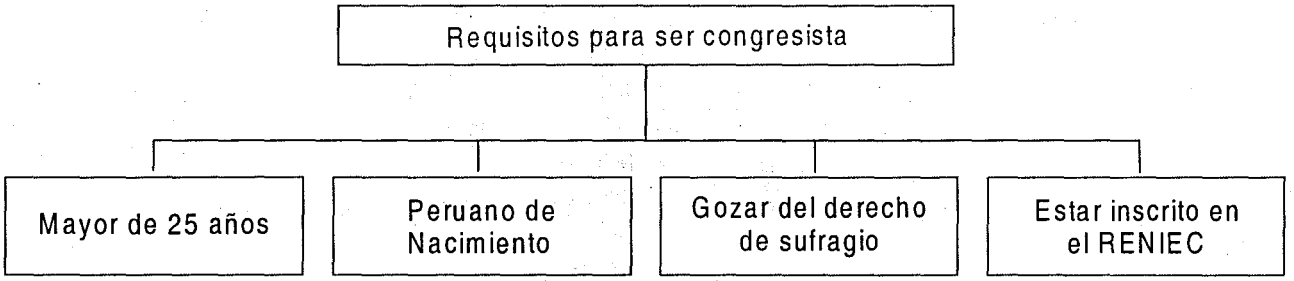
De los Candidatos a Congresistas

Requisito para ser elegido Congresista

Artículo 112º.- Para ser elegido representante al Congreso de la República y representante ante el Parlamento Andino se requiere:

a) Ser peruano de nacimiento;
b) Ser mayor de veinticinco (25) años;
c) Gozar del derecho de sufragio; y,
d) Estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Concordancia: Art. 90° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA



Impedimentos para ser candidatos

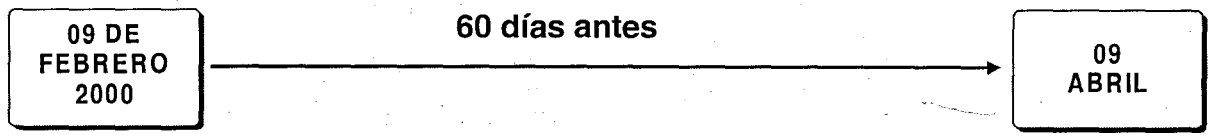
Artículo 113º.- No pueden ser candidatos a representantes al Congreso de la República y representantes ante el Parlamento Andino, salvo que renuncien seis (6) meses antes de la fecha de las elecciones:

a) Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General y las autoridades regionales;
b) Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los organismos integrantes del Sistema Electoral y el Defensor del Pueblo;
c) El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Seguros, el Superintendente de Administración Tributaria, el Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de Administradoras de Fondos Privados de Pensiones;
d) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad;

Tampoco pueden ser elegidos congresistas quienes no se encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo 114º.- Están impedidos de ser candidatos los trabajadores y funcionarios de los Poderes Público, así como de los organismos y empresas del Estado, si no solicitan licencia sin goce de haber, la cual debe serle concedida sesenta (60) días antes de la fecha de las elecciones.
Igualmente, están impedidos de ser candidatos los servidores y funcionarios públicos que hayan sido cesados y destituidos como consecuencia de inhabilitación dispuesta por sentencia penal.

PLAZO MAXIMO EN EL CUAL LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEBEN GOZAR DE LICENCIA SIN GOCE DE HABER, SI VAN A POSTULAR A CONGRESISITAS

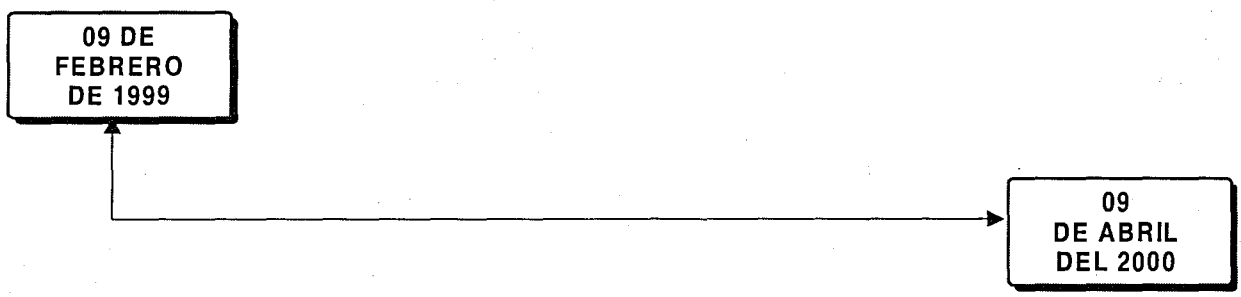


Plazo de Inscripción

Artículo 115º.- Cada Partido Político, Agrupación Independiente o Alianza, registrados en el Jurado Nacional de Elecciones, sólo puede inscribir una lista completa de candidatos al Congreso de la República. El plazo para la inscripción de la lista será de hasta 60 (sesenta) días naturales antes de la fecha de las elecciones. El candidato que integre una lista inscrita no podrá figurar en otra.
Corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales el diseño, impresión y expedición de los formatos para reunir las firmar de adherentes de los ciudadanos de las Listas Independientes; así como su verificación.

Concordancia: Art. 5° inc. m) de la LEY N° 26487; art. 2° de la LEY N° 26591

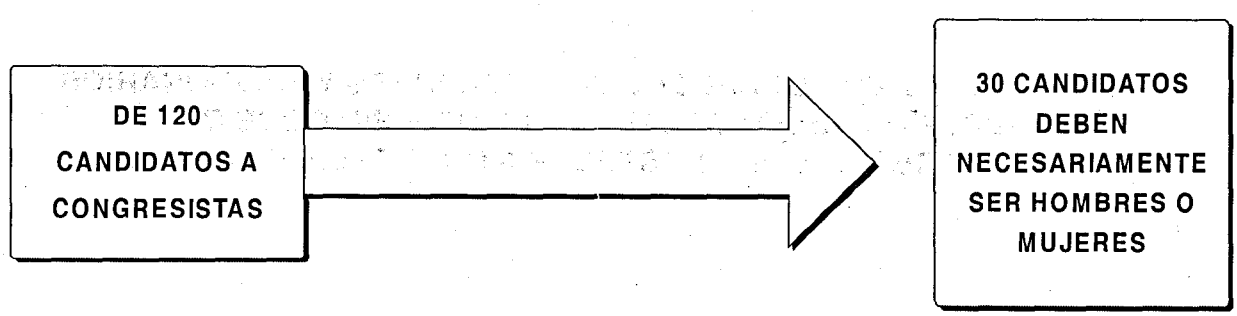
PLAZO MAXIMO PARA LA INSCRIPCION DE CANDIDATO A CONGRESISTA



Listas de Candidatos

Artículo 116º.- Las Listas de candidatos al Congreso deben incluir un número no menor del 25% de mujeres o de varones.

APLICACIÓN DEL 25% DE VARONES O MUJERES EN LAS LISTAS DE CANDIDATOS A CONGRESISTAS



Artículo 117º.- La solicitud de inscripción de una lista debe indicar el orden de ubicación de los candidatos. Dicha solicitud lleva la firma de todos los candidatos y la del personero del Partido, Agrupación Independiente o Alianza, inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones.

Artículo 118º.- Ningún ciudadano, sin su consentimiento, puede ser incluido en una lista de candidatos al Congreso dè la República y al Parlamento Andino.
En el caso en que un candidato figure en dos (2) o más listas y no solicite al Jurado Nacional de Elecciones que se le considere sólo en la lista que señale expresamente, hasta dos (2) días naturales después de efectuada la publicación a que se refiere el Artículo 119º, queda excluido de todas las listas en que figure su nombre.
Aquella lista que tenga a un candidato en más de un lugar es invalidada, salvo que dicho error sea subsanado en el plazo que fija la presente Ley. En caso de exceder el plazo de inscripción, dicha lista queda eliminada del proceso.

CASOS DE INVALIDACION DE CANDIDATURAS INDIVIDUALES Y DE LISTAS AL CONGRESO

Si un candidato figura en dos o mas listas y no solicita al JNE, expresamente y dentro de los dos días de publicada las listas, que se le considere en una sola, será excluido de todas las listas

Se invalida una lista, si un candidato figura en mas de un lugar de su lista y no lo subsana en el plazo de Ley.

Publicación de Listas de Candidatos

Artículo 119º.- Las listas de candidatos que cumplan con los requerimientos indicados son publicadas en el Diario Oficial El Peruano por una sola vez.

Tacha contra los candidatos a representantes al Congreso de la República

Artículo 120º.- Dentro de los tres (3) días naturales siguientes a la publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil puede formular tacha contra cualquiera de los candidatos, fundada sólo en la infracción de los Artículos 113º, 114º y 115º, de la presente Ley, la que es resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones dentro del término de tres (3) días naturales.
La tacha es acompañada de un comprobante de empoce en el Banco de la Nación, a la orden del Jurado Nacional de Elecciones, por suma equivalente a una (1) UIT por candidato, que es devuelta a quien haya formulado la tacha, en caso de que ésta se declare fundada.
De declararse fundada una tacha, las Organizaciones Políticas podrán reemplazar al candidato tachado, siempre que dicho reemplazo no exceda del plazo establecido en el Artículo 115º.

Concordancia: Art. 5°inc. t), de la LEY N° 26486

Artículo 121º.- Consentida la inscripción de listas de candidatos al Congreso de la República o ejecutoriadas las resoluciones recaídas en las tachas que se hubiesen formulado, el Jurado Nacional de Elecciones efectúa la inscripción definitiva de las listas de candidatos y dispone su publicación, siempre que dicha listas respeten los porcentajes a que se refiere el Artículo 116º de la Ley.

Símbolo que identifica a cada Partido Político

Artículo 122º.- Para la identificación de una lista de candidatos al Congreso de la República, se asigna a cada lista inscrita un símbolo a propuesta del respectivo Partido Político, Agrupación Independiente o Alianza.

Efectos de las tachas

Artículo 123º.- Mientras no esté ejecutoriada la resolución sobre la tacha, la inscripción del candidato surte plenos efectos.
Todas las tachas contra los candidatos deben quedar resueltas antes de la fecha de las elecciones.
La tacha declarada fundada respecto de uno o más candidatos de una lista no invalida la inscripción de los demás candidatos de ella, quienes participan en la elección como si integrasen una lista completa. Tampoco resulta invalidada la inscripción de la lista si fallecieran o renunciaran uno o más de sus miembros integrantes o no alcanzara el porcentaje a que se refiere el Artículo 116º de la Ley por efecto de la tacha.
Después de las elecciones, sólo puede tacharse a un candidato si se descubriese y se probara, documentadamente, que no tiene la nacionalidad peruana.

Concordancia: Art. 2° de la LEY N° 26954

Elección especial de representantes al Congreso de la República

Artículo 124º.- La inscripción de candidatos a Congresistas, en el caso previsto por el Artículo 120º de la Constitución, se realiza conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.

Concordancia: Art. 134° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

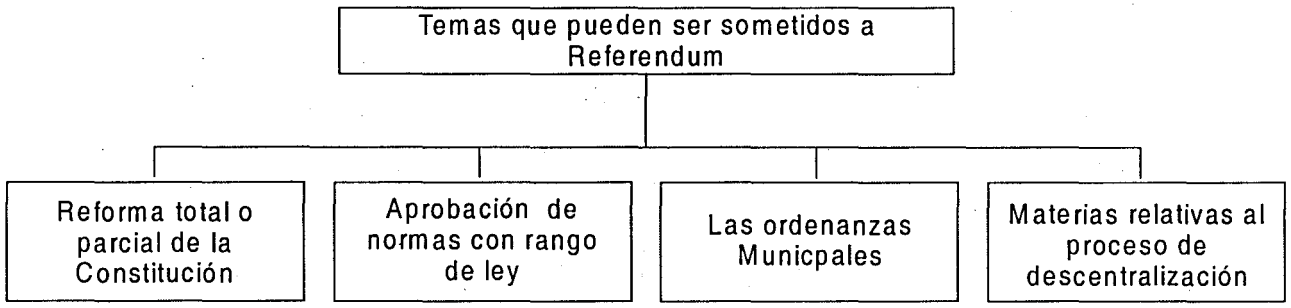
CAPITULO 5 DEL TITULO V

De las Consultas Populares

Artículo 125º.- Pueden ser sometidos a referéndum:

a) La reforma total o parcial de la Constitución;
b) La aprobación de normas con rango de ley;
c) Las ordenanzas municipales; y,
d) Las materias relativas al proceso de descentralización.

Concordancia: Art. 32° inc. 1), 2), 3), 4), de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

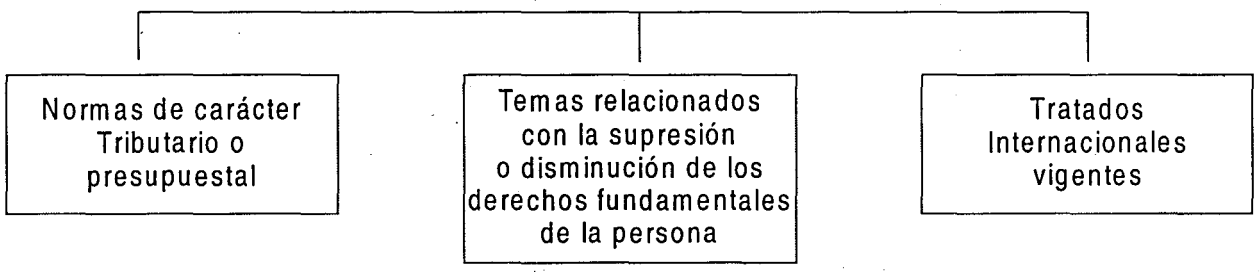


Artículo 126º.- No pueden ser sujeto de consulta popular:

a) Los temas relacionados con la supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona.
b) Normas de carácter tributario o presupuestal.
c) Tratados internacionales en vigor.

Concordancia: Art. 32° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

TEMAS QUE NO PUEDEN SER SUJETO DE CONSULTA POPULAR



TÍTULO VI

DE LOS PERSONEROS ANTE EL SISTEMA ELECTORAL

CAPITULO 1

GENERALIDADES

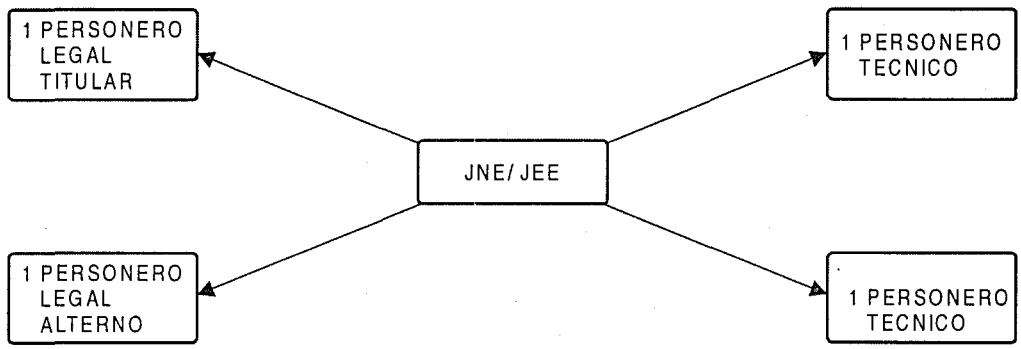
Artículo 127º.- Los Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas inscritos pueden designar hasta cuatro (4) personeros ante el Jurado Nacional de Elecciones, como sigue: un Personero Legal Titular, un Personero Legal Alterno y dos (2) Personeros Técnicos, a más de igual número de suplentes.

Igualmente los Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas inscritos pueden designar hasta cuatro (4) personeros ante cada Jurado Electoral Especial, como sigue: un Personero Legal Titular, un Personero Legal Alterno y dos (2) Personeros Técnicos, a más de igual número de suplentes.

En cada Mesa de Sufragio se acredita a un (1) solo personero por cada agrupación política. Los personeros pueden presenciar y fiscalizar todos los actos del proceso electoral. No hay personeros de candidatos a título individual.

Concordancias: art. 5º inc. n) de la LEY Nº 26486; art. 5º inc. q) de la LEY Nº 26487

PERSONEROS ANTE JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Y EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL



Además cada agrupación podrá designar 4 personeros suplentes

Artículo 128º.- Para ser personero se requiere tener expedito el derecho de sufragio, lo que se acredita con el Documento Nacional de Identificación. En el ejercicio de sus funciones, el personero debe exhibir su credencial cuando le sea solicitada.

Artículo 129º.- La calidad de personero se acredita con la credencial que es otorgada como sigue:

a. Personero ante el Jurado Nacional de Elecciones, acreditado por el órgano directivo del Partido, Agrupación Independiente o Alianza, inscritos;
b. Personero ante el Jurado Electoral Especial, acreditado por el personero ya inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones; y,
c. Personero ante las Mesas de Sufragio, acreditado por el personero ya inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones o ante el Jurado Electoral Especial.

Artículo 130º.- Las credenciales son extendidas por duplicado, por los personeros de las listas participantes, en el papel que ellos proporcionen; una credencial se entrega al órgano electoral correspondiente y la otra queda en poder del titular.

Artículo 131º.- Los personeros designados por una Alianza excluyen a los que hubiese designado cualquier Partido Político o Agrupación Independiente, integrante de la misma.

Concordancia: Art. 133° de la LEY N° 26859

Artículo 132º.- Todo recurso presentado ante un Jurado Electoral Especial por un Partido Político, Agrupación Independiente o Alianza, inscritos, sólo es interpuesto por el personero

legal o alterno ante dicho Jurado o por el personero legal ante el Jurado Nacional de Elecciones.

CAPITULO 2 DEL TITULO VI

DE LOS PERSONEROS ANTE EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Personero legal

Artículo 133º.- El personero legal de cada partido ante el Jurado Nacional de Elecciones ejerce su representación plena. Los personeros de las Alianzas ejercen su representación hasta la conclusión del proceso electoral respectivo.
Los personeros de las listas de candidatos patrocinadas por partidos o alianzas representan a la lista respectiva y excluyen a otros.

Concordancia: Art. 5º inc. n) de la LEY Nº 26486; art. 131° de la LEY N° 26859

Artículo 134º.- El personero legal ante el Jurado Nacional de Elecciones está facultado para presentar cualquier recurso o impugnación al Jurado Nacional de Elecciones, o a cualquiera de los Jurados Electorales Especiales, en relación a algún acto que ponga en duda la transparencia electoral. Dicha impugnación debe estar debidamente sustentada.

Artículo 135º.- El personero legal ante el Jurado Nacional de Elecciones presenta cualquier recurso de naturaleza legal o técnica.

Concordancia: Art. 140° y 150° de la LEY N° 26859

Personero alterno

Artículo 136º.- El personero alterno está facultado para realizar toda acción que compete al personero legal en ausencia de éste.

Personero técnico

Artículo 137º.- Los Partidos, Agrupaciones Independientes y Alianzas pueden nombrar hasta dos personeros técnicos ante el Jurado Nacional de Elecciones, los cuales deben acreditar un mínimo de cinco (5) años de experiencia en informática.

Concordancia: Art. 127° de la LEY N° 26859

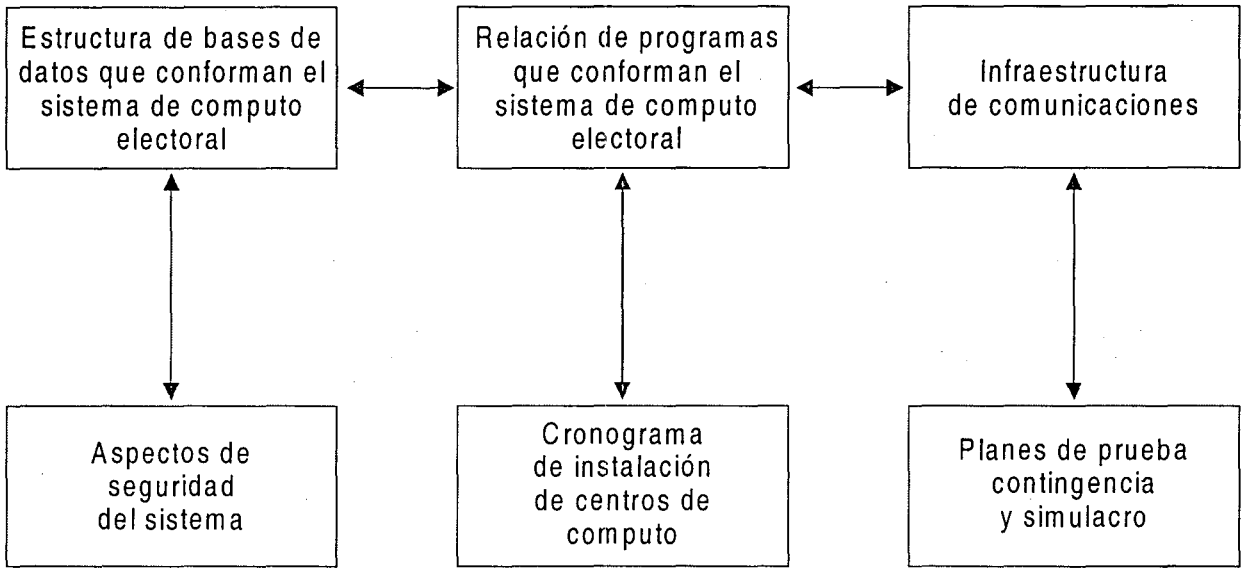
Artículo 138º.- A fin de lograr las coordinaciones y planificar las actividades de los personeros ante los Jurados Electorales Especiales, los personeros técnicos acreditados ante el Jurado Nacional de Elecciones pueden solicitar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la siguiente información documental, previa al proceso electoral:

a) Estructura de las bases de datos que conforman el Sistema de Cómputo Electoral.
b) Relación de programas que conforman el Sistema de Cómputo Electoral.
c) Infraestructura de comunicaciones.

d) Aspectos de Seguridad del Sistema.
e) Cronograma de Instalación de Centros de Cómputo. Y,
f) Planes de Pruebas, Contingencia y Simulacro.

Concordancia: Art. 5° inc. p), de la LEY N° 26487

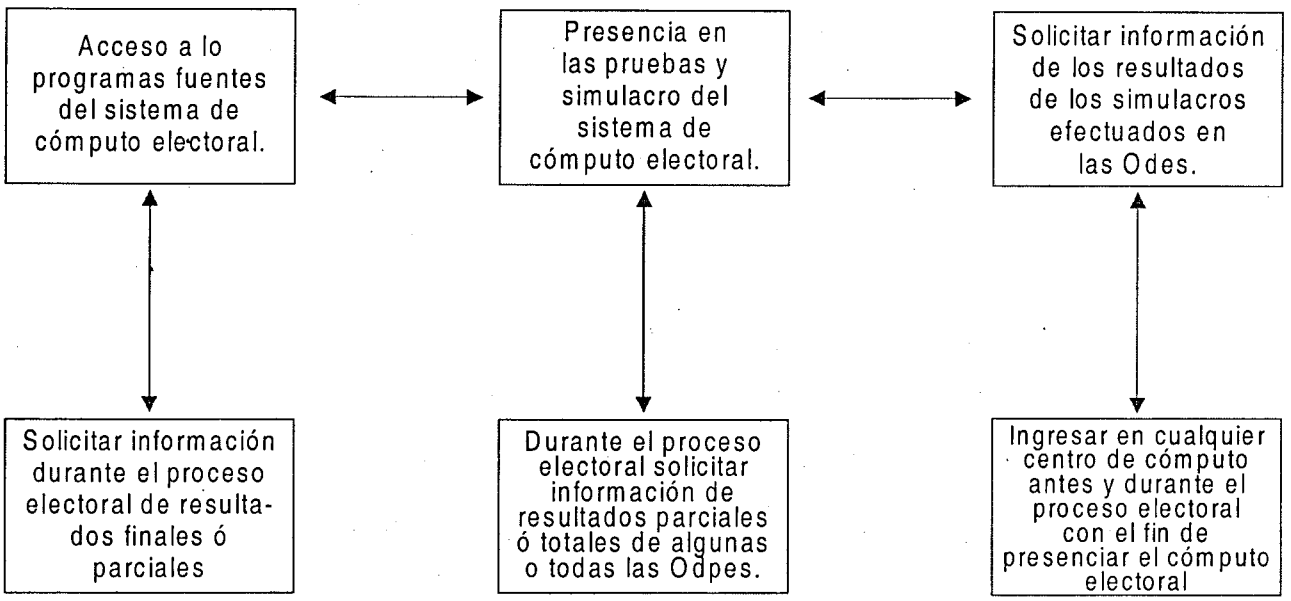
INFORMACION QUE PUEDEN SOLICITAR A LA ONPE LOS PERSONEROS TECNICOS ACREDITADOS ANTE EL JNE.



Artículo 139º.- Los Personeros Técnicos ante el Jurado Nacional de Elecciones tienen, sin ser éstas limitativas, las siguientes atribuciones:

a. Tener acceso a los programas fuentes del Sistema de Cómputo Electoral.
b. Estar presentes en las pruebas y el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral en una sala que para tal fin se les asigne, la cual debe tener las facilidades que les permitan la observación correspondiente.
c. Solicitar información de los resultados de los dos simulacros de todos o de algunas Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, según éstas lo crean conveniente.
d. Solicitar información, durante el proceso electoral, de resultados parciales o finales de todas o de algunas Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, según éstas lo crean conveniente.
   Tal información está en disquetes. El Personero Técnico ante el Jurado Nacional de Elecciones puede solicitar esta información directamente en cualquiera de las Oficinas Descentralizadas o en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. No debe entregarse más de un ejemplar por agrupación, partido o alianza.
e. Ingresar en cualquier centro de cómputo antes del proceso electoral y durante éste a fin de poder presenciar directamente el proceso de cómputo electoral. Los personeros están presentes durante todo el tiempo en que funcione el Centro de Cómputo. Están prohibidos de interferir, en cualquier modo, con el proceso de cómputo. En caso de hacerlo, pueden ser desalojados del recinto.

ATRIBUCIONES DE LOS PERSONEROS TECNICOS ACREDITOS ANTE EL J.N.E.



Artículo 140º.- Cualquier recurso que un personero técnico quiera presentar se realiza en conjunto con su personero legal o alterno.

Concordancia: Art. 135 y 150° de la LEY N° 26859

Artículo 141º.- Los candidatos no podrán ser personeros en el proceso electoral en que postulen.

CAPITULO 3 DEL TITULO VI

DE LOS PERSONEROS ANTE EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL

Personero legal

Artículo 142º.- El personero legal ante un Jurado Electoral Especial está facultado para presentar cualquier recurso o impugnación al Jurado correspondiente, en relación con algún acto que ponga en duda la transparencia electoral. Dicha impugnación debe estar debidamente sustentada.

Personero alterno

Artículo 143º.- El personero alterno está facultado para realizar toda acción que compete al personero legal en ausencia de éste.

Personero técnico

Artículo 144º.- Los partidos, agrupaciones independientes y alianzas pueden nombrar hasta dos personeros técnicos por el Jurado Electoral Especial, un titular y un suplente, con el propósito de observar los procesos de cómputo relacionados con su circunscripción.

Concordancia: Art. 127° de la LEY N° 26859

Artículo 145º.- Los personeros pueden estar presentes en las pruebas y en el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral dentro de su circunscripción.

Solicitud de información

Artículo 146º.- Los personeros pueden solicitar información sobre los resultados de los dos simulacros en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales que corresponda.

Artículo 147º.- Los personeros pueden solicitar información previa al proceso electoral en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales que corresponda, para verificar que los archivos se encuentren iniciados y actualizados (informes de votos en cero, de datos sobre candidatos, de mesas de la jurisdicción).

Artículo 148º.- Los personeros pueden solicitar información, durante el proceso electoral, sobre resultados parciales o finales en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales que corresponda, según lo crean conveniente. Esta información puede estar en reporte o disquetes.

Ingreso a centros de cómputo

Artículo 149º.- Los Personeros pueden ingresar, individualmente, durante las horas de funcionamiento del centro de cómputo de una circunscripción, ante el cual están inscritos, antes de y durante el proceso electoral, para poder presenciar directamente el proceso de cómputo electoral. Con este fin se deben realizar coordinaciones con las autoridades respectivas para asignar un responsable y fijar las horas de ingreso. Los personeros no deben interferir, en modo alguno, con el proceso de cómputo. En caso de hacerlo pueden ser desalojados del recinto.

Tampoco están autorizados a hablar ni intercambiar ningún tipo de comunicación con el personal del Centro de Cómputo, excepto con la persona designada como responsable de su ingreso.

Presentación de recurso

Artículo 150º.- Cualquier recurso que los personeros quieran presentar se realiza a través de su personero legal o alterno.

CAPITULO 4 DEL TITULO VI

DE LOS PERSONEROS ANTE LAS MESAS DE SUFRAGIO

Artículo 151º.- Los partidos, agrupaciones independientes y alianzas pueden nombrar a un personero ante cada Mesa de Sufragio, hasta siete (7) días antes de las elecciones, sólo en las circunscripciones donde presenten candidatos. Dicho nombramiento se realiza ante el Jurado Electoral Especial respectivo. También puede efectuarse la acreditación de personeros, uno por cada mesa electoral, ante las propias mesas electorales el mismo día de las elecciones y con tal que se haya instalado la correspondiente mesa electoral.

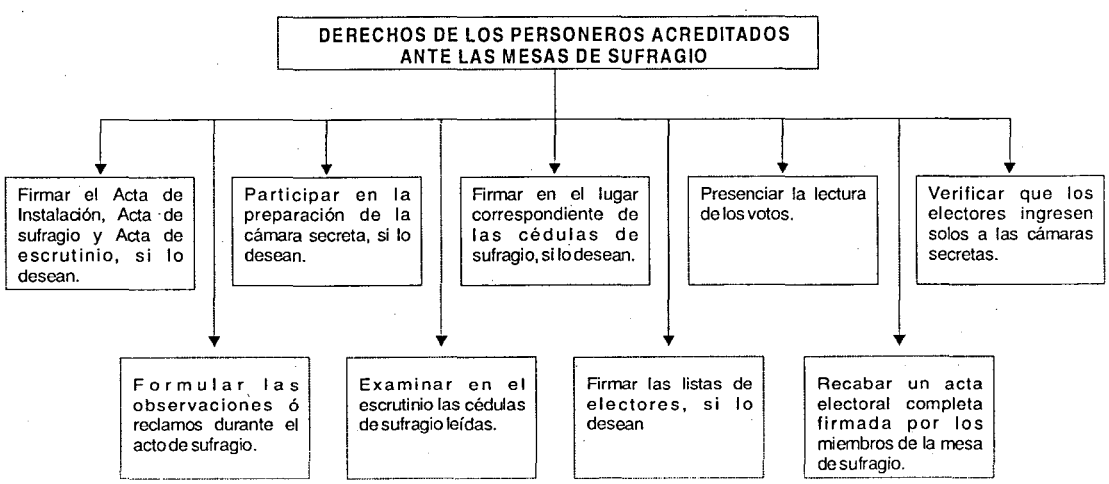
Texto según Ley N° 26947 de 08.05.98.

Artículo 152º.- Los personeros de mesa pueden estar presentes desde el acto de instalación hasta el cómputo en mesa. Pueden denunciar cualquier acto que atente contra la transparencia y la legalidad del proceso electoral.

Artículo 153º.- Los personeros acreditados ante la Mesa de Sufragio pueden ejercer, entre otros, los siguientes derechos:

a) Suscribir el acta de instalación, si así lo desean.
b) Concurrir a la preparación y acondicionamiento de la cámara secreta, si así lo desean.
c) Suscribir la cara de todas las cédulas de sufragio, si así lo desean.
d) Verificar que los electores ingresen solos a las cámaras secretas, excepto en los casos en que la ley permita lo contrario.
e) Presenciar la lectura de los votos.
f) Examinar el contenido de las cédulas de sufragio leídas.
g) Formular observaciones o reclamos durante el acto de sufragio.
h) Suscribir el acta de sufragio, si así lo desean.
i) Suscribir la lista de electores, si así lo desean.
j) Es derecho principal del personero ante la Mesa de Sufragio, obtener un Acta completa suscrita por los Miembros de la Mesa.

Los miembros de la Mesa de Sufragio tienen la obligación de permitir el ejercicio de tales derechos, bajo responsabilidad.



Artículo 154º.- Los personeros acreditados ante la Mesa de Sufragio están prohibidos de:

a) Interrogar a los electores sobre su preferencia electoral.
b) Mantener conversación o discutir entre ellos, con los electores o con los miembros de mesa, durante la votación.

PPROHIBICIONES A LOS PERSONEROS ACREDITADOS ANTE LA MESA DE SUFRAGIO.



Artículo 155º.- Los miembros de la Mesa de Sufragio, por decisión unánime, hacen retirar a los personeros que no cumplan con lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 156º.- Los personeros que por cualquier motivo tuvieran que ausentarse de la mesa de sufragio o fueran excluidos, pueden ser reemplazados por otro personero de la misma organización política, previa coordinación con el personero del Centro de Votación y presentación de sus credenciales.

CAPITULO 5 DEL TITULO VI

DE LOS PERSONEROS EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN

Artículo 157º.- Los partidos, agrupaciones independientes y alianzas pueden nombrar un personero por cada Centro de Votación, hasta siete (7) días antes de la Elección, sólo en las localidades donde presenten candidatos. Dicho nombramiento se realiza ante el Jurado Electoral Especial respectivo.

Artículo 158º.- Los personeros ante cada Centro de Votación deben estar presentes desde el inicio de la jornada de sufragio en dicho Centro de Votación. Son los responsables de coordinar y dirigir las actividades de sus personeros.



DEL MATERIAL ELECTORAL

CAPITULO 1

GENERALIDADES

Artículo 159º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales determina las características de las cédulas de sufragio. Corresponde también a la Oficina Nacional de Procesos Electorales disponer lo relacionado con la impresión y distribución de las cédulas de sufragio, en la forma que considere más conveniente, de acuerdo con los plazos y distancias, así como decidir acerca de las indicaciones ilustrativas que debe llevar la cédula para facilitar el voto del elector.

Concordancia: Art. 5° inc. b) de la LEY N° 26487; art. 2° de la LEY N° 26591

Artículo 160º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales implementa mecanismos de seguridad eficientes, que garanticen la confiabilidad e intangibilidad de los documentos electorales y, en especial, de las Actas Electorales.

Artículo 161º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales establece los mecanismos para garantizar la disponibilidad de material de reserva, en caso en que fuera necesario.

Artículo 162º.- El material electoral es de propiedad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y de uso exclusivo para el proceso electoral. Salvo los casos señalados en la presente ley, su comercialización y su uso quedan totalmente prohibidos, excepto lo previsto en el siguiente artículo.

Artículo 163º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales debe reutilizar el material sobrante de procesos anteriores, en la medida en que resulte más económico y su naturaleza lo permita. En caso contrario, está facultada para poner a la venta el sobrante. Los fondos que por dicho concepto se obtengan son ingresos propios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

CAPITULO 2 DEL TITULO VII

DE LAS CÉDULAS DE SUFRAGIO

Artículo 164º.- Los partidos, agrupaciones independientes o alianzas, al momento de su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, proporcionan el símbolo o figura con el que se identifican durante el proceso electoral, el cual es materia de aprobación por dicho organismo.

No pueden utilizarse los símbolos de la Patria, ni tampoco imágenes, figuras o efigies que correspondan a personas naturales o jurídicas, o símbolos o figuras reñidas con la moral o las

buenas costumbres. Tampoco se pueden proponer símbolos o figuras iguales o muy semejantes que induzcan a confusión con los presentados anteriormente por otras listas.

Concordancia: Arts. 10º y 13º de la LEY Nº 26864

Artículo 165º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene a su cargo el diseño de la cédula de sufragio correspondiente al proceso electoral en curso.
El diseño y el procedimiento de ubicación de las candidaturas o símbolos debe publicarse y presentarse ante los personeros de partidos políticos, organizaciones políticas, agrupaciones independientes y candidatos dentro de los dos (2) días naturales después del cierre de la inscripción de candidaturas. La ubicación de las candidaturas o símbolos se efectúa mediante sorteo público, en presencia de los personeros y de notario público.

Concordancia: Art. 5º inc. b) de la LEY N° 26487 ver modelo de cédula en el anexo

Artículo 166º.- La cédula de votación tiene las siguientes características en su diseño y contenido:

a. No es menor que las dimensiones del formato A5.
b. Los espacios se distribuyen homogéneamente entre los partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas participantes, de acuerdo con las denominaciones y símbolos que los identifiquen; y, en el caso de listas independientes, con el número o letra que les corresponda. Dentro de cada grupo de símbolos o letras el espacio de cada uno debe ser el mismo.
c. Las letras que se impriman para identificar a los partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas participantes en el proceso guardan características similares en cuanto a su tamaño y forma.
d. Es impresa en idioma español y en forma legible.
e. El nombre y el símbolo de los partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas participantes son exactamente iguales a los presentados por sus representantes y se consignan de acuerdo con el orden establecido en los respectivos sorteos.
f. Incluye, en su caso, la fotografía de los candidatos a la presidencia de la República, del candidato que ocupa el primer lugar en las listas de candidatos al Congreso y de los candidatos a presidente de Región.
g. Otras que con la antelación del caso apruebe la Oficina Nacional de Procesos Electorales relacionadas con el color, peso y la calidad del papel.

Impugnaciones respecto al diseño de la cédula

Artículo 167º.- Los personeros acreditados pueden presentar impugnaciones respecto al diseño de la cédula descrito en el artículo anterior, ante el Jurado Nacional de Elecciones. Dichas impugnaciones o reclamaciones deben estar debidamente sustentadas y ser presentadas por escrito dentro de los tres (3) días después de efectuada la publicación a que se refiere el Artículo 165º.
El Jurado Nacional de Elecciones resuelve, en instancia inapelable, las impugnaciones o reclamaciones dentro de los tres (3) días naturales siguientes a su formulación. El Jurado Nacional de Elecciones debe comunicar inmediatamente el hecho a la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 168º.- Resueltas las impugnaciones o reclamaciones que se hayan formulado, o vencido el término sin que se hubiese interpuesto ninguna, la Oficina Nacional de Procesos Electorales publica y divulga el modelo definitivo y el procedimiento que debe seguirse. Por ningún motivo, puede efectuarse cambio alguno en lo establecido precedentemente.

Impresión de carteles

Artículo 169º.- Al mismo tiempo que la impresión de la cédula de sufragio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dispone la impresión de carteles que contengan las relaciones de todas las fórmulas y listas de candidatos, opciones de referéndum y motivos del proceso electoral.
Cada fórmula, lista u opciones lleva, en forma visible, la figura, el símbolo y los colores que les hayan sido asignados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales o las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales correspondientes, según el tipo de elección.
Estos carteles son distribuidos en todos los distritos, y se fijan en las oficinas y lugares públicos, desde quince días antes de la fecha de las elecciones.

Carteles son fijados obligatoriamente en las cámaras secretas

Artículo 170º.- Los mismos carteles son fijados obligatoriamente, bajo responsabilidad de los miembros de las Mesas de Sufragio, en los locales donde éstas funcionen y, especialmente, dentro de las Cámaras Secretas.

CAPITULO 3 DEL TITULO VII

DE LAS ACTAS DE VOTACIÓN

Confección de actas electorales

Artículo 171º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales dispone la confección de los formularios de las Actas Electorales, los cuales son remitidos a las respectivas Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, conjuntamente con las ánforas, las cédulas de sufragio y demás documentos y materiales electorales que garanticen el funcionamiento de las Mesas de Sufragio.

Concordancias: Art. 5º incs. b) y d), art. 27º inc. c) de la LEY N° 26487

Artículo 172º.- El Acta Electoral es el documento donde se registran los hechos y actos que se producen en cada Mesa de Sufragio, desde el momento de su instalación hasta su cierre.
Consta de tres (3) partes o secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de escrutinio.
Debe ser impresa teniendo en cuenta medidas de seguridad que dificulten o impidan su falsificación.

Ver modelo de acta electoral en el anexo del presente libro

Acta de instalación

Artículo 173º.- El Acta de Instalación es la sección del Acta Electoral donde se anotan los hechos durante la instalación de la Mesa de Sufragio.

Artículo 174º.- En el Acta de Instalación debe registrarse la siguiente información:

a. El número de mesa y nombre de la provincia y el distrito a los que pertenece la mesa de sufragio
b. Nombre y número del Documento Nacional de Identificación de cada uno de los miembros de la Mesa de Sufragio.
c. Nombre y número del Documento Nacional de Identificación de cada uno de los personeros presentes, con la denominación de la agrupación política a que pertenecen.
d. La fecha y la hora de instalación de la Mesa de Sufragio.
e. El estado del material electoral que asegure la inviolabilidad de los paquetes recibidos.
f. La cantidad de las Cédulas de Sufragio.
g. Los incidentes u observaciones que pudieran presentarse.
h. La firma de los Miembros de Mesa y de los Personeros que lo deseen.

Acta de sufragio

Artículo 175º.- El Acta de Sufragio es la sección del Acta Electoral donde se anotan los hechos inmediatamente después de concluida la votación.

Artículo 176º.- En el Acta de Sufragio debe registrarse la siguiente información:

a) El número de sufragantes (en cifras y en letras).
b) El número de cédulas no utilizadas (en cifras y en letras).
c) Los hechos ocurridos durante la votación.
d) Las observaciones formuladas por Miembros de la Mesa y por Personeros.
e) Nombres, números de Documento Nacional de Identificación y firmas de los Miembros de Mesa y de los Personeros que así lo deseen.

Acta de escrutinio

Artículo 177º.- El Acta de Escrutinio es la sección del Acta Electoral donde se registran los resultados de la votación de la Mesa de Sufragio. Se anotan también los incidentes u observaciones registrados durante el procedimiento de escrutinio.

Artículo 178º.- En el Acta de Escrutinio debe registrarse la siguiente información:

a) Número de votos obtenidos por cada lista de candidatos u opción según sea el caso.
b) Número de votos nulos.
c) Número de votos en blanco.
d) Horas en que empezó y concluyó el escrutinio.

e) Reclamaciones u observaciones formuladas por los Personeros, así como las resoluciones de la Mesa, y,
f) Nombres, números de Documento Nacional de Identificación y firmas de los Miembros de la Mesa y Personeros que deseen suscribirla.

CAPITULO 4 DEL TITULO VII

DE LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL

Artículo 179º.- Dentro de los treinta (30) días naturales anteriores a la fecha de las elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales envía, a cada una de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, las ánforas, las Actas Electorales, la Lista de Electores de cada Mesa de Sufragio, y una relación de Electores hábiles de ella, las cédulas de sufragio y los formularios, carteles y útiles, para que oportunamente sean distribuidos, en cantidad suficiente para atender la votación de todos los ciudadanos.

Concordancia: Art. 5º inc. d) de la LEY N° 26487

Artículo 180º.- Dentro del plazo fijado en el artículo anterior y de acuerdo con las distancias y los medios de comunicación entre la capital de la provincia y las capitales de los distritos, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales envían, a cada uno de los Registradores Distritales y Coordinadores Electorales de su respectiva jurisdicción, el material electoral remitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales al cual hace referencia el artículo anterior, para que oportunamente sean entregados a los Presidentes de las respectivas Mesas de Sufragio.



DE LA PROPAGANDA ELECTORAL

CAPITULO 1

GENERALIDADES

Artículo 181º.- La propaganda electoral debe hacerse dentro de los límites que señalan las leyes. Se aplica a los contraventores, en su caso, el Artículo 390º del Título XVI de los delitos, sanciones y procedimientos judiciales, de la presente Ley.

Concordancia: Art. 2° inc. 4) de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 182º.- Para los efectos de la propaganda electoral cada Partido o Agrupación Independiente puede usar su propio nombre debajo del correspondiente al de la Alianza que conforma.

Artículo 183º.- Dentro de los sesenta (60) días anteriores a las elecciones, las Organizaciones Políticas, Listas Independientes y Alianzas, presentan al Jurado Nacional de Elecciones la proyección de los fondos que serán invertidos durante el proceso electoral correspondiente,

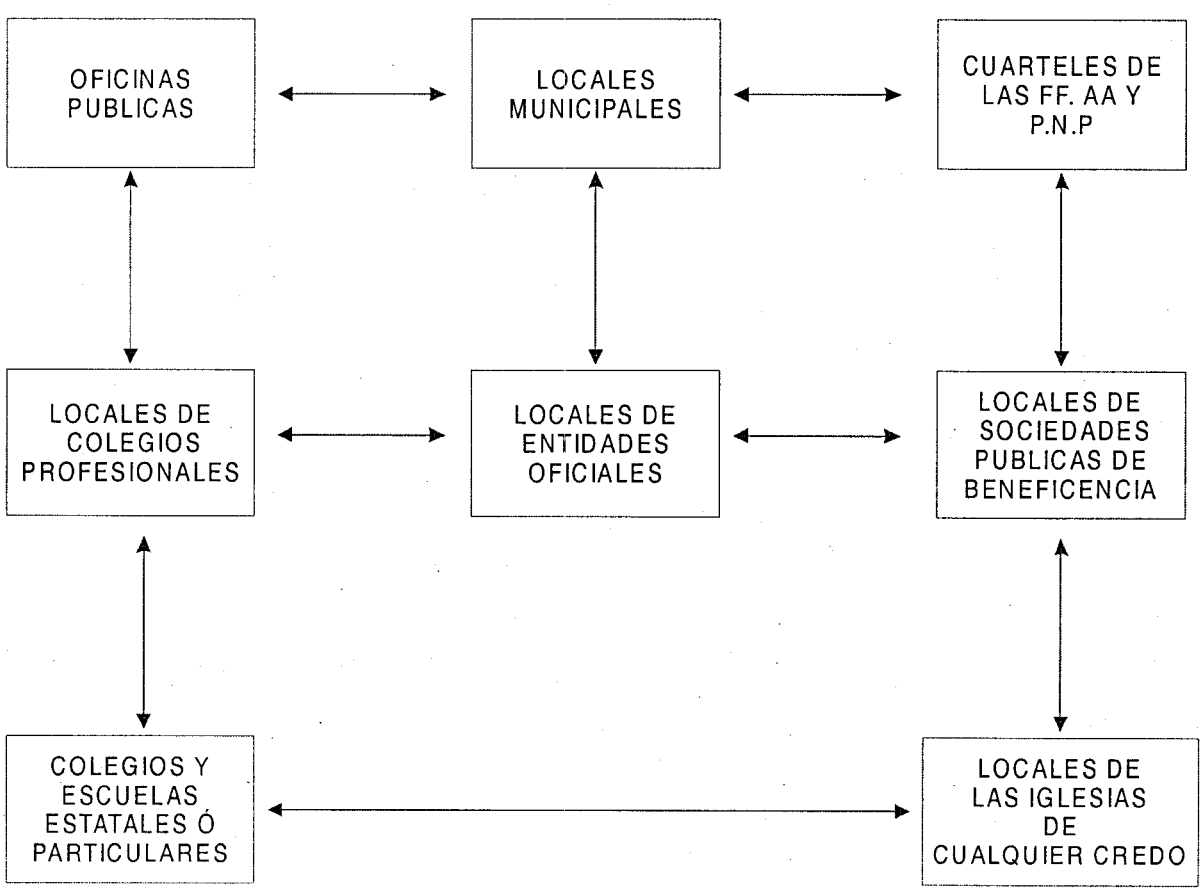
así como su fuente de financiamiento.
Dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la proclamación oficial electoral, los partidos, agrupaciones independientes, alianzas y listas independientes presentan al Jurado Nacional de Elecciones, con carácter de declaración jurada, la relación de gastos destinados a la campaña electoral correspondiente, quedando el Jurado Nacional de Elecciones facultado para efectuar las indagaciones necesarias para establecer la exactitud del movimiento económico correspondiente a dicha campaña.

Concordancia: Art. 35° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; art. 3° de la LEY N° 26430

Artículo 184°.- Las Oficinas Públicas, los cuarteles de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, los locales de las Municipalidades, los locales de los Colegios de Profesionales, Sociedades Públicas de Beneficencia, entidades oficiales, colegios y escuelas estatales o particulares y los locales de las iglesias de cualquier credo, no pueden ser utilizados para la realización de conferencias, asambleas, reuniones o actos políticos de propaganda electoral de ninguna especie en favor o en contra de cualquier partido, candidato o tema por consultar, o para la instalación de juntas directivas o el funcionamiento de cualquier comité de tendencia política.

Concordancia: Art. 388° de la LEY N° 26859 y Sexta Disposición Final de la LEY N° 26430

LOCALES QUE NO PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE REUNIONES O ACTOS POLITICOS REFERIDOS A PROPAGANDA ELECTORAL



Artículo 185º.- Los municipios provinciales o distritales apoyan el mejor desarrollo de la propaganda electoral facilitando la disposición de paneles, convenientemente ubicados, con iguales espacios para todas las opciones participantes.

Concordancia: Art. 65° inc. 18) de la LEY N° 23853

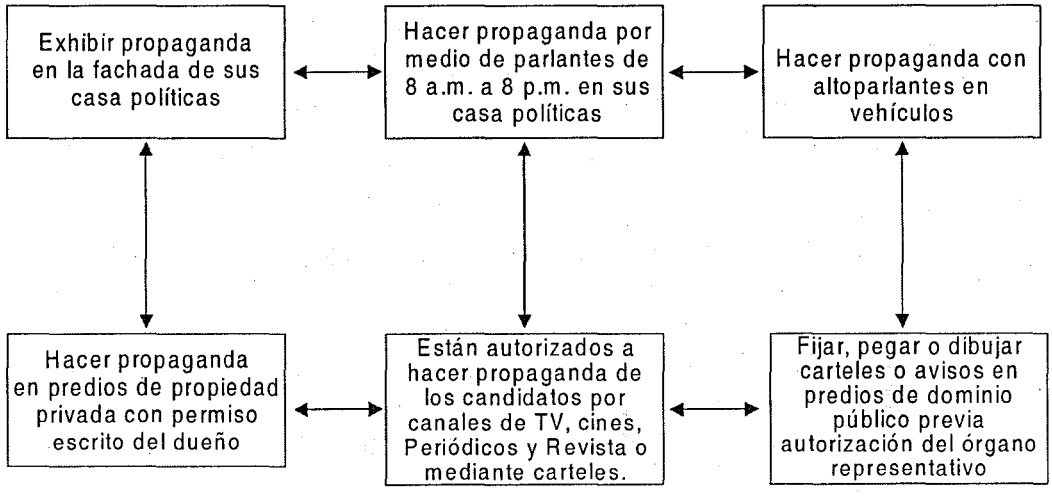
Artículo 186º.- Los partidos, agrupaciones independientes y alianzas, sin necesidad de permiso de autoridad política o municipal y sin pago de arbitrio alguno, pueden:

a. Exhibir letreros, carteles o anuncios luminosos, en las fachadas de las casas políticas, en la forma que estimen conveniente.
b. Instalar, en dichas casas políticas, altoparlantes, que pueden funcionar entre las ocho de la mañana y las ocho de la noche. A la autoridad respectiva corresponde regular la máxima intensidad con que pueden funcionar dichos altoparlantes.
c. Instalar altoparlantes en vehículos especiales, que gozan de libre tránsito en todo el territorio nacional, dentro de la misma regulación establecida en el inciso anterior.
d. Efectuar la propaganda del partido o de los candidatos, por estaciones radiodifusoras, canales de televisión, cinemas, periódicos y revistas o mediante carteles ubicados en los sitios que para tal efecto determinen las autoridades municipales. Deben regir iguales condiciones para todos los partidos y candidatos.
e. Fijar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios de dominio privado, siempre que el propietario conceda permiso escrito, el cual es registrado ante la autoridad policial correspondiente.
f. Fijar, pegar o dibujar tales carteles o avisos en predios de dominio público, previa autorización del órgano representativo de la entidad propietaria de dicho predio.

En el caso contemplado en el inciso f), la autorización concedida a un partido o candidato se entiende como concedida automáticamente a los demás.

Concordancia: Art. 66° inc. 10) de la LEY N° 23853

AUTORIZACIONES QUE TIENEN LOS PARTIDOS O AGRUPACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO A PROPAGANDA ELECTORAL



Artículo 187º.- Quedan prohibidos, como forma de propaganda política, el empleo de pintura en las calzadas y muros de predios públicos y privados, la propaganda sonora difundida desde el espacio aéreo, y la propaganda por altoparlantes que no estén ajustados a lo dispuesto en el artículo anterior.
La propaganda política a que se refiere el párrafo anterior es permitida en los predios privados siempre y cuando se cuente con autorización escrita del propietario.

Artículo 188º.- Está prohibido el uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo, en la propaganda política.
Sé prohibe a los electores hacer uso de banderas, divisas u otros distintivos desde el día anterior al de la elección hasta un día después de ésta.

Concordancia: Art. 2° inc. 3), de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 189º.- Está prohibida la destrucción, anulación, interferencias, deformación o alteración de la propaganda política cuando ésta se realice conforme a la presente Ley.

Artículo 190º.- Desde dos días antes del día señalado para las elecciones no pueden efectuarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político.
Desde veinticuatro horas antes, se suspende toda clase de propaganda política.

Concordancia: Art. 2° inc. 12° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 191º.- La publicación o difusión de encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza, sobre los resultados de las elecciones, a través de los medios de comunicación, sólo puede efectuarse hasta 15 (quince) días antes del día de la elección. En caso de incumplimiento se sancionará al infractor con una multa que fijará el Jurado Nacional de Elecciones tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT); lo recaudado constituirá recursos propios de dicho órgano electoral.

Concordancia: Art. 389° de la LEY 26859 y art. 22° de la LEY N° 23903

Artículo 192º.- El Estado está prohibido, a través de publicaciones oficiales o estaciones de televisión o imprenta, cuando sean de su propiedad, de efectuar propaganda política en favor o difusión de información en contra de cualquier partido, agrupación independiente o alianza, excepto en el caso de referéndum.

Concordancia: Art. 2° inc. 2 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 193º.- Concluidos los comicios electorales, todos los partidos políticos, listas independientes y alianzas en un lapso de 60 (sesenta) días proceden a retirar o borrar su propaganda electoral. En el caso contrario, se hacen acreedores a la multa que establezcan las autoridades correspondientes.

Artículo 194º.- En las elecciones presidenciales y parlamentarias, la Oficina Nacional de Procesos Electorales adquiere espacios en los medios de comunicación del Estado, los mismos que se ponen a disposición de los partidos políticos inscritos o de las alianzas de partidos o de las listas independientes, sin costo alguno, por un espacio diario de treinta (30) minutos en sus programas, desde un mes antes hasta el día y la hora señalados en el Artículo 190º.
Los espacios de dichos programas estarán comprendidos entre las dieciséis (16:00) y veinti-

trés (23:00) horas. Las fechas y horas son asignadas a los partidos, alianzas y listas independientes, por sorteo, el cual se efectúa en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en presencia de los personeros y bajo fe notarial.

Concordancia: Art. 35° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; art. 3° inc. e), numeral 1 de la LEY N° 26533

Artículo 195º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales, en los casos de elecciones para Presidente y Vicepresidentes de la República, garantiza a los candidatos que lo soliciten la publicación de los planes de gobierno en el diario oficial.

INFORMACION A CONSIDERAR EN RELACION AL PROCESO ELECTORAL DEL 2000

SABADO 25 MARZO	Fecha máxima para publicar encuestas
JUEVES 06 ABRIL	Fecha máxima hasta la cual se puedan realizar mítines o manifestaciones políticas
VIERNES 07 ABRIL	- Fecha máxima hasta la cual se pueden realizar todo tipo de propaganda en Periódicos, Radios, TV. etc. - Prohibición de expendio y consumo de licor y cierre de locales destinado a dicho expendio - No pueden efectuarse Mítines o manifestaciones políticas
SABADO 08 ABRIL	- Se prohíbe portar armas - Se prohíbe realizar todo tipo de propaganda política y la realización de Mítines o manifestaciones políticas - Prohibición de expendio y consumo de licor y cierre de locales destinados a dicho expendio - Miembros de mesa y electores, no pueden ser detenidos salvo fragante delito.
DOMINGO 09 ABRIL	**DE 08 a.m. a 04 p.m. se prohíbe:** - La detención de miembros de mesa y electores salvo fragante delito - Espectáculos públicos al aire libre - Funciones teatrales y cinematográficos - Todo tipo de reuniones públicas - Oficios religiosos - Reuniones de electores dentro del radio de 100 mts. de una mesa de sufragio - Propaganda electoral de cualquier tipo Además, durante todo el día, se prohíbe: El expendio y consumo de licor El portar armas
LUNES 10 ABRIL	**Se prohíbe todo el día:** - Portar armas **Se prohíbe hasta las 12 del día** - El expendio y consumo de licor

DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES AL SUFRAGIO

TÍTULO

CAPITULO 1

DEL PADRÓN ELECTORAL

Artículo 196º.- El Padrón Electoral es la relación de los ciudadanos hábiles para votar; se elabora sobre la base del registro único de identificación de las personas; se mantiene y actualiza por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil según los cronogramas y coordinaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Concordancia: Art. 178º inc 1), art. 183° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; art. 1°, 5 inc. d), de la LEY N° 26486; art. 5° inc. j) y K), de la LEY N° 26487; art. 7° inc. d) de la LEY 26497.

Artículo 197º.- El Padrón Electoral es público. Los partidos, agrupaciones independientes y alianzas pueden solicitar, en la forma que establezca el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, una copia del mismo.

Artículo 198º.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil publica listas del padrón inicial que se colocan en sus Oficinas Distritales en lugar visible, después del cierre de inscripciones.

Artículo 199º.- Los electores inscritos que, por cualquier motivo, no figuren en estas listas o estén registrados con error, tienen derecho a reclamar ante la Oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de su circunscripción, durante el plazo de cinco días contados desde la fecha de publicación.

Artículo 200º.- Cualquier elector u Organización Política reconocido, o que hubiese solicitado su reconocimiento, tiene derecho a pedir que se eliminen o tachen los nombres de los ciudadanos fallecidos, de los inscritos más de una vez y los que se encuentran comprendidos en las inhabilitaciones establecidas en la legislación electoral. Debe presentar las pruebas pertinentes.

Artículo 201º.- El Padrón Electoral actualizado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que se utilizará en el proceso electoral convocado, será remitido al Jurado Nacional de Elecciones con noventa (90) días de anticipación a la fecha de las elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones aprueba su uso dentro de los diez (10) días siguientes; de no hacerlo, al vencerse este plazo, el Padrón Electoral queda automática y definitivamente aprobado.

Concordancia: Art. 178° inc. 1°, art. 183 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; art. 5° inc. v), de la LEY Nº 26486; art. 7° inc. d), de la LEY N°26497

Artículo 202º.- El Padrón Electoral ya aprobado se remite a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil brinda a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para la designación de los miembros de las Mesas de Sufragio.

Concordancia: Art. 5° inc. k) de la LEY N° 26487; art. 7° incs. e) y m) de la LEY N° 26497

Artículo 203º.- En el Padrón se consignan los nombres y apellidos y el código único de identificación de los inscritos, la fotografía y firma digitalizada de cada uno, los nombres del distrito, la provincia y el departamento y el número de Mesa de Sufragio.

Concordancia: Art. 31°y 32° de la LEY N° 26497 Ver modelo de padrón en el anexo del presente libro.

Artículo 204º.- Se agregan al Padrón Electoral las inscripciones conforme se vayan efectuando. Se observa rigurosamente el ordenamiento por distritos, provincias y departamentos. Asimismo, se eliminan, en forma permanente, las inscripciones que sean canceladas o las excluidas temporalmente.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil remitirá trimestralmente, al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la relación de inscripciones agregadas o eliminadas del Padrón Electoral a nivel nacional, relación que deberá contener los mismos datos e imágenes que se consignan en el Padrón Electoral conforme al Artículo 210º de la presente Ley.

Concordancia: Art. 177° Y 183° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; art. 57° de la LEY N° 26497; y art. 4° de la LEY N° 26430

Artículo 205º.- Cada vez que se convoque a elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil entregará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Padrón electoral actualizado de las mesas de sufragio, en medios magnéticos.

Asimismo la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la base del Padrón Electoral recibido, procederá a imprimir un ejemplar de las Listas de Electores de las Mesas de Sufragio, indicando el distrito, provincia y departamento correspondiente, el número de orden de cada elector, el nombre y apellido del mismo, el código único de identificación y el número de mesa de sufragio; habrá una columna con secciones que permita recibir la firma del elector y otra para la impresión digital del sufragante, que podrá incluir la fotografía del elector. Se imprime además un ejemplar de las Listas de electores que contengan los mismos datos menos las columnas para la firma del elector y para la impresión de la huella digital, el cual sirve para que los electores identifiquen la mesa en que les corresponde sufragar.

Todas las páginas de las listas de electores de las mesas de sufragio, llevan la indicación del año en que se realizan las elecciones, con especificación del motivo y tipo.

Concordancia: Art. 5° inc. b) de la LEY N° 26487

CAPITULO 2 DEL TITULO IX

DE LA DIFUSIÓN DEL PROCESO

Artículo 206º.- Desde el inicio del Cómputo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales pone a disposición de los Personeros Legales y Técnicos la información documental y la información, en las computadoras, de las Actas de Votación.

Concordancias: Art. 5° inc. e) y 27° inc. d) de la LEY N° 26487

Artículo 207º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales manda imprimir cartillas que contengan las disposiciones de esta Ley concordada con la legislación electoral vigente, en la forma que considere adecuada para uso de los Jurados Electorales Especiales, de los miembros de las Mesas de Sufragio y de los candidatos o sus personeros.

Concordancia: Art. 5° inc. b) y h), de la LEY N° 26487

Artículo 208º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales confecciona cartillas ilustrativas y gráficas con ejemplos prácticos relativos a la aplicación de la presente Ley y las remite a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales junto con los demás elementos electorales.

Concordancia: Art. 5° inc. d) de la LEY N° 26487

Artículo 209º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales manda imprimir carteles que contengan la relación de candidatos.
Los carteles son colocados en los edificios públicos y lugares más frecuentados dentro de cada circunscripción, desde quince (15) días naturales anteriores a la fecha señalada para el proceso electoral.

Artículo 210º.- Asimismo, obligatoriamente y bajo responsabilidad de los Coordinadores Electorales de cada local de votación, descrito en el siguiente capítulo, y de los miembros de las Mesas de Sufragio, se fijan carteles en los locales donde éstas funcionen y, especialmente, dentro de las cámaras secretas.
Cualquier elector puede reclamar al presidente de la Mesa de Sufragio por la omisión de la colocación de dichos carteles.

CAPITULO 3 DEL TITULO IX

DE LOS LOCALES DE VOTACIÓN

Reunión de miembros de mesa

Artículo 211º.- Dentro de los diez (10) días naturales anteriores a la fecha de la elección, cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales convocará a los miembros titulares y suplentes de las Mesas de Sufragio de su jurisdicción, con el objeto de recibir obligatoriamente, de parte del coordinador electoral, una capacitación electoral para el desempeño de sus obligaciones.

CAPACITACION ELECTORAL A LOS MIEMBROS DE MESA ANTE PROCESO ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEM.

Dentro de los 10 días antes de las Elecciones

04 JULIO

24 DE JUNIO

Cordinador electoral

Artículo 212º.- En cada local de votación, hay un Coordinador Electoral designado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales; el cual, de preferencia, debe ser un registrador de las Oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Concordancia: Art. 25° de la LEY N° 26487

Artículo 213º.- El Coordinador Electoral se instala dos días antes de las Elecciones y tiene como principales funciones:

a. Orientar a los electores sobre la ubicación de su mesa y el procedimiento de sufragio.
b. Velar por el acondicionamiento y la instalación oportuna de dichas mesas; y designar a los reemplazantes en caso de que no se hubieran presentado los miembros titulares, con el auxilio de las Fuerzas Armadas.
c. Supervisar la entrega del material electoral y las ánforas a sus respectivas mesas.
d. Orientar a los invidentes en el uso de su cédula especial para votación, de contar con ésta.
e. Coordinar el procedimiento de recojo del material electoral, con el personal designado para este fin, por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Se debe tomar especial cuidado en la recuperación de los sellos o etiquetas holográficas no utilizadas, frascos de tinta indeleble y tampones.
f. Coordinar la recopilación de actas de acuerdo con los procedimientos que, para este efecto, determina la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
g. Requerir el apoyo de las Fuerzas Armadas en los casos en que sea necesario.

Concordancia: Art. 186° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 214º.- Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales garantizan la presencia de los Coordinadores Electorales en cada local de votación.

CAPITULO 4 DEL TITULO IX

DEL SIMULACRO DEL SISTEMA DE CÓMPUTO ELECTORAL

Artículo 215º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales está encargada de desarrollar y ejecutar un plan de simulacros previos al proceso electoral.

Participantes en el simulacro

Artículo 216º.- En el simulacro intervienen las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y los presidentes de los Jurados Electorales Especiales. Se realizan hasta dos simulacros y se llevan a cabo, a más tardar, en uno o dos domingos anteriores a la fecha del proceso electoral.

Concordancias: Arts. 145° y 146° de la LEY N° 26859

Artículo 217º.- Los simulacros se desarrollan en las siguientes etapas:

a) Preparación de datos de prueba.
b) Ejecución del simulacro.
c) Evaluación de resultados.

Preparación de datos de prueba

Artículo 218º.- Se utilizan datos de prueba basados en:

a. Actas llenadas manualmente por el personal de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.
b. Actas llenadas manualmente por los personeros técnicos de los Partidos Políticos, Alianzas de Partidos o Agrupaciones. Independientes, sí lo desean. Se deben coordinar el volumen de datos y los formatos respectivos.
c. Datos generados directamente en la computadora por el personal de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Y,
d. Datos generados en disquetes o medios magnéticos por los personeros técnicos, si lo desearan. Se deben coordinar el volumen de datos y la estructura de los archivos respectivos.

Los datos de prueba son elaborados o generados considerando principalmente aquellos casos en que con relativa frecuencia se acusaron dificultades o problemas en procesos anteriores.

Artículo 219º.- Antes de cada simulacro, se debe realizar un cómputo manual de los datos de pruebas que sirva de comparación con el resultado del cómputo automatizado.

Ejecución del simulacro

Artículo 220º.- En la realización del simulacro se efectúan las siguientes actividades generales:

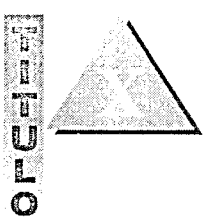
a) Ingreso de la información desde las actas de pruebas.
b) Consolidación y procesamiento de la información.
c) Emisión de todos los informes que conforman el Sistema de Cómputo Electoral.
d) Control y evaluación de procedimientos.
e) Evaluación de contingencias.
f) Informes de resultado final. Y,
g) Elaboración de informes de resultados.

Evaluación de resultados

Artículo 221º.- Los resultados del Sistema de Cómputo Electoral, se deben comparar con los obtenidos manualmente.

Artículo 222º.- Los informes de los resultados están a disposición de los personeros ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Artículo 223º.- En el segundo simulacro, se corrigen y realizan los ajustes correspondientes de todos aquellos descuadres e incongruencias que se hubieren presentado en el primer simulacro.



DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

CAPITULO 1

Generalidades

Artículo 224º.- Para el caso de Elecciones Generales y consultas populares tienen derecho a votación los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Concordancia: Art. 30° y 31° de la LEY N° 26497; art. 2°, 26°, 31° y 40° Resolución N° 199-94-JNE Reglamento para la elección de voto de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero; y art. 42° del CODIGO CIVIL.
Art. 42° del CODIGO CIVIL.- tienen plena capacidad del ejercicio de sus derechos civiles las personas que hayan cumplido 18 años de edad salvo los artículos 43° (personas absolutamente incapaces) y 44° (personas relativamente incapaces) del Código Civil.

Artículo 225º.- El voto de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero se emite en la misma fecha señalada para las elecciones en el territorio de la República.

Artículo 226º.- La votación se efectúa en el local de la Oficina Consular del Perú en el correspondiente país o donde señale el funcionario consular en caso de insuficiencia del local.

Concordancia: RESOLUCIÓN 199-94-JNE Reglamento para la emisión de voto de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero.

Artículo 227º.- En los países donde exista gran número de ciudadanos peruanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores realiza gestiones oficiales para obtener la autorización que permita el ejercicio del sufragio en los locales mencionados en el artículo anterior.

CAPITULO 2 DEL TITULO X

Del Padrón de Electores Residentes en el Extranjero

Artículo 228º.- El Padrón de electores peruanos residentes en el extranjero es elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Sobre la base del Padrón recibido y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales procede conforme al Artículo 202º de la presente Ley Orgánica de Elecciones y, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, es responsable de remitir las Listas de Electores a las Oficinas Consulares.

Concordancia: Art. 5° inc.j) de la LEY N° 26487; art. 7° inc. d) de la LEY 26497.

Artículo 229º.- Cada lista de electores debe incluir, además de los datos sobre ellos, el nombre del país y la localidad donde residan dichos electores.

Artículo 230º.- Cada Oficina Consular puede establecer fusiones de mesas en su respectivo local de votación.

CAPITULO 3 DEL TITULO X

Del Personal de las Mesas de Sufragio

Artículo 231º.- En los países donde existan menos de doscientos (200) ciudadanos peruanos inscritos, el funcionario consular, asistido por un Secretario o Auxiliar, si fuera necesario, recibe el voto de los electores, entre los cuales designa a dos (2), con los que constituye el personal de la Mesa de Sufragio para los efectos de los actos de instalación de ésta, del sufragio y del escrutinio.

Artículo 232º.- Si el funcionario consular no es de nacionalidad peruana, designa tres (3) ciudadanos de los integrantes de la lista de electores, los que constituyen el personal de la Mesa, bajo la presidencia del que tenga mayor grado de instrucción y, en caso de igualdad, del de mayor edad, según decisión que corresponde al funcionario consular.

Artículo 233º.- Para los países donde exista más de una Mesa de Sufragio, el sorteo de los miembros titulares y suplentes se realiza en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, entre los electores con mayor grado de instrucción que contenga la lista correspondiente a la Mesa.

Concordancia: Art. 27° inc. i) de la LEY N° 26487

Artículo 234º.- En los casos en que la Oficina Nacional de Procesos Electorales no puede conformar las Mesas de Sufragio, el funcionario consular designa al personal de la Mesa entre los electores con mayor grado de instrucción que contenga la lista correspondiente a cada Mesa de Sufragio.

Artículo 235º.- Los impedimentos, los plazos y demás consideraciones son los descritos en los Artículos 57º, 58º, 59º, 60º y 61º de la presente Ley.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene la responsabilidad de hacer llegar a los diferentes Consulados la relación de los ciudadanos titulares y suplentes que fueron seleccionados en el sorteo de miembros de mesas.
La publicación de esta relación se debe realizar tanto en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, como en los diferentes Consulados.

Tacha de los miembros de las Mesas de Sufragio

Artículo 236º.- Publicada la lista a que se refiere el artículo anterior, cualquier ciudadano inscrito y con sus derechos vigentes ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil o los personeros pueden formular las tachas que estimen pertinentes, dentro de los tres (3) días naturales contados a partir de la publicación.
La tacha que no es sustentada con prueba instrumental, se rechaza de plano por la oficina consular correspondiente. Las tachas sustentadas son resueltas por dicha autoridad dentro del siguiente día de recibidas, con copia para el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La resolución es inapelable.
Si las tachas formuladas contra los tres (3) titulares o uno o más suplentes se declaran fundadas, se procede a nuevo sorteo.

Artículo 237º.- Inmediatamente después de la resolución de las tachas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales envía las Credenciales a los correspondientes Consulados, los cuales citan a los ciudadanos seleccionados dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la recepción de las Credenciales respectivas.

Remisión de materiales electorales

Artículo 238º.- Junto con las listas de electores y del personal de las Mesas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales remite los formularios para los actos de la instalación de la Mesa, del Sufragio y del Escrutinio, las cédulas de votación, los carteles con las listas de candidatos inscritos y los demás materiales electorales y, en general, todos los documentos, elementos y útiles no susceptibles de adquirirse en el extranjero.

Concordancia: Art. 27° inc. c) de la LEY N° 26487

CAPITULO 4 DEL TITULO X

De la Votación

Duración de la votación

Artículo 239º.- Todos los actos referentes a la instalación de la Mesa, votación y escrutinio se realizan el mismo día. Debe instalarse la Mesa antes de las ocho (08:00) de la mañana y efectuarse la votación hasta las dieciséis (16:00) horas.
Alternativamente, en el caso de ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, se establece el Voto Postal o Voto por Correspondencia, que consiste en la emisión del voto por el ciudadano en una cédula que previamente solicita y luego de ejercido su derecho devuelve por la vía postal o de correos al Consulado en que se encuentra inscrito, dentro de los términos establecidos en el Reglamento correspondiente. El voto postal sólo es aplicable en Referendos o Elecciones de carácter general.

Omisos al sufragio

Artículo 240º.- Los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero que no emitan su voto son considerados como omisos al sufragio y deben abonar la multa de Ley.

Concordancia: RESOLUCIÓN N° 064-98-JNE Publicado el 13.02.98

Artículo 241º.- Los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero que, por razones de salud o causa de fuerza mayor, no pueden justificadamente emitir su voto, deben solicitar al Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Oficina Consular, una dispensa de sufragio.

Concordancia: Art. 29° de la LEY N° 26497

CAPITULO 5 DEL TITULO X

Del Escrutinio

Artículo 242º.- El escrutinio de los votos emitidos se efectúa sobre la misma Mesa de Sufragio en que se realizó la votación.

Artículo 243º.- Se consideran todos los actos de escrutinio contemplados en la presente Ley.

Artículo 244º.- Terminada la votación se procede al cómputo de cada mes. Al final se obtienen cuatro ejemplares del acta de votación (Consulado, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Jurado Nacional de Elecciones, Fuerzas Armadas). El funcionario consular remite, a la brevedad posible, los ejemplares respectivos al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual a su vez hace llegar los respectivos ejemplares a la sede central del Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 245º.- Un cartel o listado con los resultados del escrutinio efectuado en cada Mesa se coloca, en lugar visible, en la Oficina Consular correspondiente.

Concordancia: Art. 290° de la LEY N° 26859

CAPITULO 6 DEL TITULO X

Del Cómputo Electoral

Artículo 246º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales está encargada de registrar y consolidar, en el Sistema Informático, las actas de votación de los diferentes Consulados. Las actas impugnadas se resuelven por el Jurado Nacional de Elecciones antes de pasar al proceso de cómputo.

CAPITULO 7 DEL TITULO X

De la Nulidad de los Sufragios emitidos en el Extranjero

Artículo 247º.- Cualquier Organización Política o Lista Independiente inscrita puede interponer recurso de nulidad de las elecciones realizadas en una o más de las Oficinas Consulares fundándose en las causales consideradas en el Título XIV de la Nulidad de las Elecciones, en la presente Ley y una vez efectuado el empoce correspondiente.

Artículo 248º.- El recurso de nulidad sobre el proceso electoral realizado en una Oficina Consular no puede comprender el proceso electoral realizado en otra Oficina Consular. Por cada Oficina se requiere un recurso diferente.

OFICINA XI

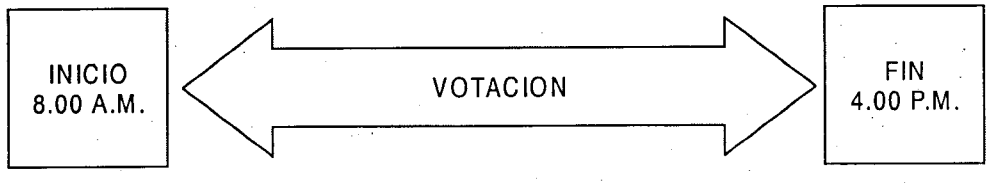
DEL SUFRAGIO

CAPITULO 1

DE LA INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE SUFRAGIO

Artículo 249º.- Los miembros de las Mesas de Sufragio se reúnen en el local señalado para su funcionamiento a las siete y treinta (07.30) horas del día de las elecciones, a fin de que aquéllas sean instaladas a las ocho (08.00) horas, a más tardar.
La instalación de la mesa de sufragio se hace constar en el Acta Electoral.

INICIO Y FIN DE LA VOTACION



Caso en que titulares o suplentes no concurran

Artículo 250º.- Si a las ocho y treinta (08:30) horas la Mesa de Sufragio no hubiese sido instalada por inasistencia de uno de los miembros titulares, se instala con los dos (2) titulares que estuviesen presentes y con un suplente. El secretario asume la presidencia si el que falta fuese el Presidente. Desempeña la secretaría el otro titular.
Si fuesen dos (2) los titulares inasistentes, son reemplazados por dos (2) suplentes. Asume la presidencia el titular presente.
Si con los miembros asistentes, titulares o suplentes, no se alcanza a conformar el personal de la Mesa de Sufragio, quien asuma la presidencia lo completa con cualquiera de los electores presentes.
Si no hubiesen concurrido ni los titulares ni los suplentes, el Presidente de la mesa que antecede o, a falta de éste, el Presidente de la Mesa que le sigue en numeración, designa al personal que debe constituir la mesa. Se selecciona a tres (3) electores de la mesa respectiva que se encuentren presentes, de manera que la Mesa comience a funcionar, a las ocho y cuarenta y cinco (08:45) horas. El Presidente puede ser auxiliado por la fuerza pública si fuera necesario.
Las personas seleccionadas no pueden negarse al desempeño de esos cargos. La negación es sancionada con multa equivalente al 5% de la UIT; la que se hace constar en el Acta Electoral y se cobra coactivamente por el Jurado Nacional de Elecciones.

Concordancia: Art. 14° inc. b), 15° de la LEY N° 26533; art. 5° inc. z) de la LEY N° 26486; arts. 307° y 308° de la LEY N° 26859.

Negación a integrar la mesa

Artículo 251º.- Los Titulares y Suplentes que no asistan o se nieguen a integrar la Mesa de Sufragio, son multados con la suma equivalente al 5% de la UIT, la que igualmente es cobrada coactivamente por el Jurado Nacional de Elecciones.

Concordancia: RESOLUCIÓN N° 164-98-JNE

FIJAN CUANTIA DE MULTAS POR OMISION A VOTACION, INCONCURRENCIA A INSTALACION DE MESA DE SUFRAGIO O NEGATIVA A SU CONFORMACION

RESOLUCION N° 038-99-JNE

Lima, 12 de enero de 1999

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2° de la Ley Nº 26344, autoriza al Jurado Nacional de Elecciones a modificar la escala de multas que establecen las leyes electorales en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT);

Que, por Resolución Nº 064-98-JNE, este Supremo Tribunal Electoral, fijó los montos

por concepto de multa por omisión a la votación y por inconcurrencia a la instalación de la mesa de sufragio, en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) establecida por Decreto Supremo Nº 177-98-EF de fecha 29 de diciembre de 1998;

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 63º de la Ley Nº 14207, modificado por Ley Nº 16152, el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra facultado para imponer una multa a aquellas personas que sean omisas a la votación;

Que, de conformidad con lo establecido por los Arts. 250° y 251º de la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859, los Miembros Titulares y Suplentes que no asistan o se nieguen a integrar la Mesa de Sufragio, así como las personas seleccionadas que se nieguen a integrar la referida Mesa por inasistencia de los Miembros antes citados, son multados con la suma equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), la que es cobrada coactivamente por el Jurado Nacional de Elecciones;

Que, el Decreto Supremo Nº 123-98-EF publicado en el diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 1998 fija el monto de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a partir del 1º de enero de 1999 en S/. 2,800.00 Nuevos Soles; por lo que, es necesario señalar con precisión la cuantía de las multas por los referidos conceptos;

Que, la contravención injustificada al deber de sufragar y participar en los comicios es sancionada legalmente, atendiendo a que el elector no puede eximirse de su obligación ciudadana;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Fijar la cuantía de las multas por omisión a la votación, por inconcurrencia a la instalación de la mesa de sufragio o negativa a su conformación en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para el ejercicio gravable de 1999, en:

Electores omisos a la votación
a) Por omisión a la votación 4.00% de la UIT S/. 112.00

Miembros Titulares y Suplentes que no asistan o se nieguen a integrar la Mesa de Sufragio

b) Por no asistir o negarse a integrar la mesa de sufragio 5.00% de la UIT S/. 140.00

Electores que no siendo Miembros Titulares o Suplentes, y que al ser seleccionados se negasen al desempeño del cargo de Miembro de Mesa.

c) Por negarse al desempeño del cargo de Miembro de Mesa 5.00% de la UIT S/ .140.00

Artículo Segundo.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SERPA SEGURA; MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO; DE VALDIVIA CANO
Secretario General, TRUJILLANO

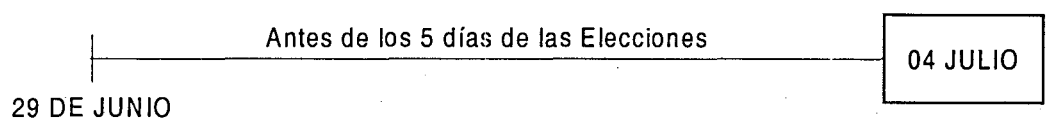
Instalación

Artículo 252º.- Si por causas no previstas en el Artículo 250º la Mesa de Sufragio no hubiera podido instalarse en la forma y la hora establecidas, el Presidente de la Mesa cuida de que aquella comience a funcionar inmediatamente después de constituido su personal, siempre que la instalación no se haga después de las doce (12:00) horas.

Justificación de inasistencia a instalacion de mesa de sufragio

Artículo 253º.- Sólo en caso de enfermedad, debidamente acreditada con el certificado expedido por el área de salud, y a falta de ésta por el médico de la localidad, puede el miembro de la Mesa de Sufragio, justificar su inasistencia ante la respectiva Oficina Descentralizada de Procesos Electorales; para este efecto, debe presentar el certificado antes de los cinco (5) días naturales previos a la fecha de la elección y excepcionalmente, al día siguiente ante el Jurado Electoral Especial.

PLAZO PARA JUSTIFICACION DE INASISTENCIA MIEMBROS DE MESA PROCESO ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEM.



Artículo 254º.- Los Presidentes de los Jurados Electorales Especiales remiten al Jurado Nacional de Elecciones la relación de ciudadanos que no se presentaron para instalar las Mesas de Sufragio el día de las elecciones o no acataron la designación que de ellos hizo el Presidente de la Mesa de Sufragio inmediata anterior o, a falta de ésta, el de la que le sigue en numeración.
Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales hace lo propio, y remiten a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la relación de ciudadanos que no se presentaron a recabar su credencial o se negaron a recibirla, la que, a su vez, se envía al Jurado Nacional de Elecciones para los fines consiguientes.

Concordancias: Art. 27º inc. i) de la LEY Nº 26487; art. 36º inc. m) de la LEY Nº 26486

Instalación

Artículo 255º.- Instalada la Mesa de Sufragio, el Presidente procede a colocar, en lugar visible y de fácil acceso, los carteles y un ejemplar de la lista de electores de la Mesa.

A continuación, abre el ánfora y extrae los paquetes que contengan los documentos, útiles y demás elementos electorales y sienta el Acta de Instalación en la sección correspondiente del Acta Electoral. Deja constancia de los nombres de los otros miembros de la Mesa de Sufragio, de los personeros que concurren, del estado de los sellos que aseguran la inviolabilidad de los paquetes recibidos, así como de la cantidad de las cédulas de sufragio y, en general, de todos los datos requeridos con las indicaciones impresas en los formularios. La sección correspondiente al Acta de Instalación es firmada por los miembros de la Mesa de Sufragio y los personeros que deseen hacerlo.

Concordancias: Art. 36º inc. c) de la LEY Nº 26486.

Artículo 256º.- Firmada el Acta de Instalación, los miembros de la Mesa de Sufragio proceden a revisar la cámara secreta previamente instalada, dentro de la que se fijan los carteles correspondientes.
En la revisión de la cámara secreta, los miembros de la Mesa de Sufragio pueden ser acompañados por los personeros que lo deseen.

Cámara secreta

Artículo 257º.- La cámara secreta es un recinto cerrado, sin otra comunicación al exterior que la que permita la entrada y salida al lugar donde funciona la Mesa de Sufragio. Si el recinto tiene, además, otras comunicaciones con el exterior, el Presidente las hace clausurar, para asegurar su completo aislamiento. En el caso en que el local sea inadecuado para el acondicionamiento de la cámara secreta, se coloca, en un extremo de la habitación en que funciona la Mesa de Sufragio, una cortina o tabique que aísle completamente al elector mientras prepara y emite su voto, con espacio suficiente para actuar con libertad.
No se permite dentro de la cámara secreta efecto alguno de propaganda electoral o política.

Concordancias: Art. 27º inc. ñ) de la LEY Nº 26487

CAPITULO 2 DEL TITULO XI

DE LA VOTACIÓN

Votación de los miembros de mesa

Artículo 258º.- Una vez revisada y acondicionada la cámara secreta, el Presidente de la Mesa, en presencia de los otros miembros de ella y de los personeros, procede a doblar las cédulas de sufragio, de acuerdo con sus pliegues, y a extenderlas antes de ser entregadas a los electores. A continuación, el Presidente de la Mesa presentan su Documento Nacional de Identificación y recibe su cédula de sufragio del secretario, y se dirige a la cámara secreta para preparar y emitir su voto.
Después de votar, el Presidente firma en el ejemplar de la Lista de Electores que se encuentra

en la Mesa, al lado del número que le corresponde, y estampa su huella digital en la sección correspondiente de la misma lista. Introduce el dedo mayor de la mano derecha o, en su defecto, el de la izquierda en el depósito especial de tinta indeleble que debe hallarse en todas las Mesas de Sufragio. El Secretario deja constancia del voto emitido en la lista de electores de la mesa, de acuerdo con las disposiciones que al respecto dicte la Oficina Nacional de Procesos Electorales. A continuación, el Presidente de la Mesa de Sufragio recibe, en la misma forma, el voto de los demás miembros de ésta, y sella y firma en adelante las cédulas, dejando las constancias respectivas.

Artículo 259º.- Después que han votado todos los miembros de la Mesa, se recibe el voto de los electores en orden de llegada. El votante da su nombre y presenta su Documento Nacional de Identificación para comprobar que le corresponde votar en dicha Mesa.

Artículo 260º.- Presentado el Documento Nacional de Identificación, el Presidente de la Mesa de Sufragio comprueba la identidad del elector y le entrega una cédula para que emita su voto.

Artículo 261º.- El voto sólo puede ser emitido por el mismo elector. Los Miembros de la Mesa de Sufragio y los personeros cuidan de que los electores lleguen a la Mesa sin que nadie los acompañe, que ingresen solos a la cámara secreta y que no permanezcan en ella más de un (1) minuto.

Artículo 262º.- El elector, en la cámara secreta y con el bolígrafo que se le proporciona, marca en la cédula un aspa o una cruz dentro de los cuadros impresos en ella, según corresponda. El aspa o la cruz pueden sobrepasar el respectivo cuadrado, sin que ello invalide el voto, siempre que el punto de intersección de las líneas esté dentro del cuadrado. Seguidamente, deposita su cédula en el ánfora, firma la Lista de Electores e imprime su huella digital para el debido control del número de votantes y de cédulas contenidas en el ánfora.

Votación de invidentes

Artículo 263º.- Los invidentes son acompañados a la cámara secreta por una persona de su confianza y, de ser posible, se le proporciona una cédula especial que le permita emitir su voto.

Control del número de votantes

Artículo 264º.- El Presidente cuida de que el elector, una vez que haya depositada su cédula en el ánfora, firme la lista de la mesa para el debido control del número de votantes y del número de cédulas contenidas en el ánfora.

Artículo 265º.- Antes de retirarse, el elector introducirá el dedo mayor en el frasco de tinta indeleble. La Oficina Nacional de Procesos Electorales puede exonerar de esta obligación a los votantes de las zonas de emergencia o cuando, por razones de seguridad personal, ello sea aconsejable.

Artículo 266º.- Si por error de impresión o de copia de la lista de electores, el nombre del

elector no corresponde exactamente al que figura en su Documento Nacional de Identificación, la mesa admite el voto del elector, siempre que los otros datos del Documento (número de inscripción, número del libro de inscripción, grado de instrucción) coincidan con los de la lista de electores.

Si quien se presenta a votar no es la misma persona que figura en la Lista de Electores, el Presidente de la Mesa de Sufragio lo comunica a la autoridad encargada de la custodia del local, para que proceda a su inmediata detención. Da cuenta de este hecho al Ministerio Público para que formule la denuncia correspondiente.

Concordancia: Art. 438º del CODIGO PENAL cuyo texto es el siguiente: "El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los capítulos precedentes comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido, o viceversa será, reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años"

Artículo 267º.- Si se presenta un elector con un Documento Nacional de Identificación con el mismo número y nombre de otro que ya ha votado, o con el mismo número aunque con distinto nombre, se procede a comprobar la identidad del elector y, establecida ésta, se le recibe el voto.
Se le hace firmar al final de la Lista de Electores y se sienta constancia del caso al dorso de la misma Lista. El Documento Nacional de Identificación es retenido por el Presidente de la Mesa de Sufragio, quien lo envía al Fiscal Provincial de turno para que formule la denuncia correspondiente.

Impugnación de la identidad

Artículo 268º.- Si la identidad de un elector es impugnada por algún personero, los miembros de la Mesa de Sufragio resuelven de inmediato la impugnación.
De la resolución de la Mesa de Sufragio procede apelación ante el Jurado Electoral de la circunscripción.

Concordancia: Art. 36º inc. n) de la LEY Nº 26486.

Artículo 269º.- Interpuesta la apelación, se admite que el elector vote y el Presidente de la Mesa de Sufragio guarda la cédula junto con el Documento Nacional de Identificación que aquél hubiera presentado, en sobre especial en el que se toma la impresión digital y se indica el nombre del elector impugnado.
Cerrado el sobre especial, el Presidente de la Mesa de Sufragio hace en éste, de su puño y letra, la siguiente anotación: «Impugnado por ...», seguido del nombre del personero impugnante e invita a éste a firmar. Acto seguido, coloca el sobre especial en otro junto con la resolución de la Mesa de Sufragio, para remitirlo al Jurado Electoral Especial respectivo.
En el dorso de la página correspondiente de la Lista de Electores, se deja constancia de la impugnación.
La negativa del personero o de los personeros impugnantes a firmar el sobre, se considera como desistimiento de la impugnación, pero basta que firme uno para que subsista esta última.

Artículo 270º.- Si la impugnación es declarada infundada, la Mesa de Sufragio impone a quien la formuló una multa que es anotada en el Acta de Sufragio, para su ulterior cobranza por el Jurado Nacional de Elecciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar.

Concordancia: Art. 14º de la LEY Nº 26533.

Artículo 271º.- La votación no puede interrumpirse, salvo por causa derivada de actos del hombre o de hechos de la naturaleza, de lo que se deja constancia en el Acta Electoral. En este caso se clausura el sufragio, salvo que sea posible que la votación se reanude sin influir en el resultado de la elección.

Artículo 272º.- En caso de indisposición súbita del Presidente o de cualquier otro miembro de la Mesa de Sufragio durante el acto de la votación o del escrutinio, quien asuma la Presidencia dispone que el personal de la Mesa se complete con uno de los suplentes o, en su ausencia de ellos, con cualquiera de los electores de la Lista correspondiente que se encuentre presente.
En ningún momento la Mesa de Sufragio debe funcionar sin la totalidad de sus miembros, bajo responsabilidad de éstos.

Artículo 273º.- Si se clausura la votación, el responsable de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales correspondiente deja constancia del hecho que impidió votar. Esta constancia produce los mismos efectos que la votación para el ejercicio de los actos civiles en que la ley exige la presentación del Documento Nacional de Identificación.

Concordancia: Art. 27º inc. p) de la LEY Nº 26487.

Fin de la votación

Artículo 274º.- La votación termina a las dieciséis (16.00) horas del mismo día. Se procede a cerrar el ingreso a los locales de votación. Los presidentes de mesa sólo reciben el voto de todos los electores que hayan ingresado al local antes de la hora de cierre, bajo responsabilidad.
Sólo en el caso en que hubieran votado todos los electores que figuran en la Lista de Electores de la Mesa de Sufragio, puede el Presidente declarar terminada la votación antes de dicha hora. Se deja constancia expresa de ello en el Acta de Sufragio.

Acta de sufragio

Artículo 275º.- Terminada la votación, el Presidente de la Mesa de Sufragio anota, en la Lista de Electores, al lado de los nombres de los que no hubiesen concurrido a votar, la frase «No votó». Después de firmar al pie de la última página de la Lista de Electores, invita a los personeros a que firmen, si lo desean.
A continuación, se sienta el Acta de Sufragio en la que se hace constar por escrito, y en letras, el número de sufragantes, el número de cédulas que no se utilizaron, los hechos ocurridos durante la votación y las observaciones formuladas por los miembros de la Mesa de Sufragio o los personeros.

Artículo 276º.- Sobre los hechos y circunstancias de la votación que no consten en el Acta de Sufragio, no puede insistirse después al sentarse el Acta de Escrutinio.

Artículo 277º.- El Acta de Sufragio se asienta en la sección correspondiente del Acta Electoral, y se firma por el Presidente y Miembros de la Mesa de Sufragio y por los personeros que lo deseen.

CAPITULO 3 DEL TITULO XI

DEL ESCRUTINIO EN MESA

Artículo 278º.- Firmada el Acta de Sufragio, la Mesa de Sufragio procede a realizar el escrutinio en el mismo local en que se efectuó la votación y en un solo acto público ininterrumpido.

Artículo 279º.- Abierta el ánfora, el Presidente de la Mesa de Sufragio constata que cada cédula esté correctamente visada con su firma y que el número de cédulas depositadas en ella coincida con el número de votantes que aparece en el Acta de Sufragio.
Si el número de cédulas fuera mayor que el de votantes indicado en el Acta de Sufragio, el Presidente separa, al azar, un número de cédulas igual al de las excedentes, las que son inmediatamente destruidas, sin admitir reclamación alguna.
Si el número de cédulas encontradas en el ánfora fuera menor que el de votantes indicado en el Acta de Sufragio, se procede al escrutinio sin que se anule la votación, previas las operaciones a que se refieren los artículos siguientes, si fuera el caso.

Artículo 280º.- Establecida la conformidad de las cédulas, y antes de abrirlas, se separan los sobres que contengan la anotación de «Impugnada por ...» para remitirlos, sin escrutar las cédulas que contienen, al Jurado Electoral correspondiente, junto con un ejemplar del Acta Electoral.

Concordancia: Art. 36º inc. n) de la LEY Nº 26486.

Artículo 281º.- El Presidente de la Mesa de Sufragio abre las cédulas una por una y lee en voz alta su contenido. En seguida, pasa la cédula a los otros dos (2) miembros de Mesa quienes, a su vez y uno por uno, leen también en voz alta su contenido y hacen las anotaciones pertinentes en los formularios que para tal efecto hay en cada Mesa.
Los personeros acreditados ante la Mesa de Sufragio tienen el derecho de examinar el contenido de la cédula leída y los miembros de la Mesa de Sufragio tienen la obligación de permitir el ejercicio de tal derecho, bajo responsabilidad.
Los miembros de la Mesa de Sufragio que no diesen cumplimiento a este artículo son denunciados ante el Fiscal Provincial de Turno. Los personeros que, abusando del derecho que les confiere este artículo, traten de obstaculizar o frustrar el acto de escrutinio o que durante el examen de las cédulas les hagan anotaciones, las marquen en cualquier forma o las destruyan total o parcialmente, son denunciados ante el Fiscal Provincial de Turno.

Impugnación de cédulas de votación

Artículo 282º.- Si alguno de los miembros de la Mesa de Sufragio o algún personero impugna una o varias cédulas, la Mesa de Sufragio resuelve inmediatamente la impugnación.
Si ésta es declarada infundada, se procede a escrutar la cédula. De haber apelación verbal, ésta consta en forma expresa en el Acta, bajo responsabilidad. En este caso la cédula no es escrutada y se coloca en sobre especial que se envía al Jurado Electoral Especial. Si la impugnación es declarada fundada, la cédula no es escrutada y se procede en igual forma que en el caso anterior.

Concordancia: Art. 36º inc. n) de la LEY Nº 26486.

Artículo 283º.- Todas las situaciones que se susciten durante el escrutinio son resueltas por los miembros de la Mesa de Sufragio, por mayoría de votos.

Escrutinio en mesa, irrevisable

Artículo 284º.- El escrutinio realizado en las Mesas de Sufragio es irrevisable.
Los Jurados Electorales Especiales se pronunciarán sólo sobre las apelaciones que se hubiesen interpuesto contra las resoluciones de la Mesa respecto de las impugnaciones a que se refieren los Artículo 268º y 282º de la presente Ley y sobre los errores materiales en que se pudiese haber incurrido en las operaciones aritméticas del escrutinio.

Concordancia: Art. 185º de la CONSTITUCION POLÍTICA

Observaciones o reclamos durante el escrutinio

Artículo 285º.- Los personeros pueden formular observaciones o reclamos durante el escrutinio, los que son resueltos de inmediato por la Mesa de Sufragio, dejando constancia de ellas en un formulario especial que se firma por el Presidente de la Mesa de Sufragio y el personero que formuló la observación o reclamo.
El formulario se extiende por cuadriplicado:

a. Un ejemplar se remite al Jurado Nacional de Elecciones junto con el Acta Electoral correspondiente.
b. Otro al Jurado Electoral Especial junto con el Acta Electoral.
c. Otro es entregado al miembro de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional presente en el acto de la votación, sin perjuicio de que se deje constancia de la observación o reclamo en el Acta de Escrutinio.
d. El cuarto va a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, junto con el Acta Electoral correspondiente, dentro del ánfora.

Concordancia: Art. 36º inc. N) de la LEY Nº 26486.

Artículo 286º.- Son votos nulos:

a. Aquéllos en los que el elector ha marcado más de un símbolo.
b. Los que llevan escrito el nombre, la firma o el número del Documento Nacional de Identificación del elector.

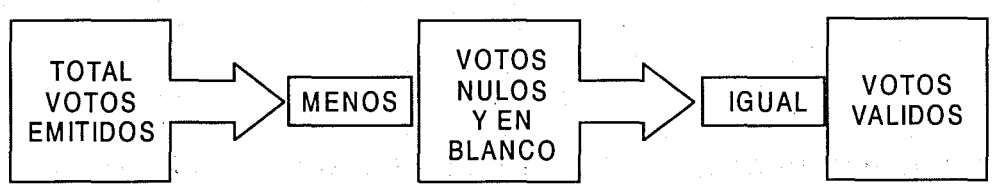
c. Los emitidos en cédulas no entregadas por la Mesa de Sufragio y los que no llevan la firma del Presidente en la cara externa de la cédula.
d. Aquéllos emitidos en cédulas de las que se hubiese roto alguna de sus partes.
e. Aquéllos en que el elector ha anotado una cruz o un aspa cuya intersección de líneas está fuera del recuadro que contiene el símbolo o número que aparece al lado del nom bre de cada lista.
f. Aquéllos emitidos a favor de listas que no pertenecen al distrito electoral donde se efectúa la votación.
g. Aquéllos en que el elector ha agregado nombres de organizaciones políticas, listas independientes o nombres de candidatos a los que están impresos; o cuando repitan los mismos nombres impresos.
h. Aquéllos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al procesos electoral.

El uso correcto del voto preferencial para optar por uno o dos candidatos determina la validez del voto, aun cuando el elector omita marcar el símbolo con una cruz o con un aspa.

Votos válidos

Artículo 287º.- El número de votos válidos se obtiene luego de deducir, del total de votos emitidos, los votos en blanco y nulos.

Concordancia: Art. 111° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA



Acta de escrutinio

Artículo 288º.- Concluido el escrutinio, se asienta el Acta de éste en la sección correspondiente del Acta Electoral, la que se hace en cinco ejemplares para los fines a que se refiere el Artículo 291º.

Artículo 289º.- El Acta de Escrutinio contiene:

a. El número de votos obtenidos por cada lista de candidatos u opción en consulta, de acuerdo al tipo de elección;
b. El número de votos declarados nulos y el de votos en blanco;
c. La constancia de las horas en que comenzó y terminó el escrutinio;
d. El nombre de los personeros presentes en el acto del escrutinio;
e. La relación de las observaciones y reclamaciones formuladas por los personeros du rante el escrutinio y las resoluciones recaídas en ellas; y,
f. La firma de los miembros de la Mesa de Sufragio, así como la de los personeros que deseen suscribirla.

Cartel con el resultado de la elección

Artículo 290º.- Terminado el escrutinio, se fija un cartel con el resultado de la elección en la respectiva Mesa de Sufragio, en un lugar visible del Local donde ha funcionado ésta. Su Presidente comunica dicho resultado al Jurado Electoral Especial, utilizando el medio más rápido, en coordinación con el personal de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.

Concordancia: Art. 27º inc. h) de la LEY Nº 26487.

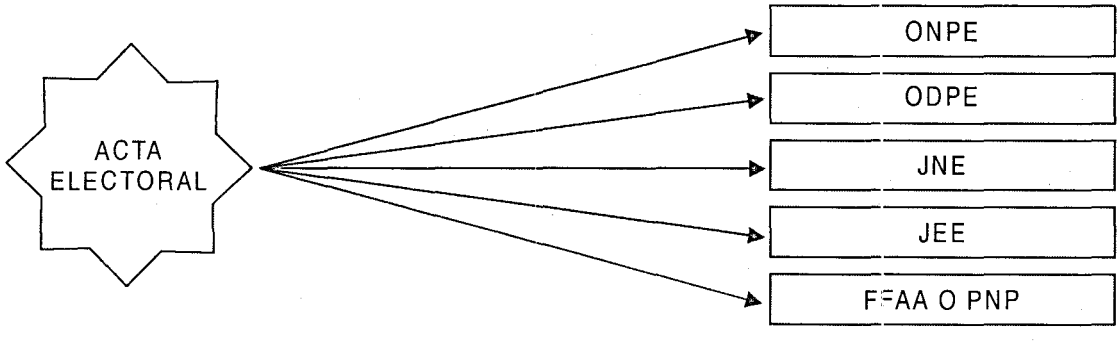
Distribución del acta electoral

Artículo 291º.- De los cinco ejemplares del Acta Electoral se envían:

a. Uno al Jurado Nacional de Elecciones;
b. Otro, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales;
c. Otro, al Jurado Electoral Especial de la respectiva circunscripción electoral;
d. Otro, a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de la circunscripción electoral; y,
e. Otro, es entregado al miembro de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional encargado de supervigilar el orden.

El Presidente de la Mesa de Sufragio está obligado a entregar a los personeros que lo soliciten, copias certificadas del Acta Electoral.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales proporciona información a la ciudadanía acerca de los resultados parciales acumulados, vía INTERNET.

CANTIDAD DE ACTAS ELECTORALES DE ACUERDO A LEY Y DESTINO DE LAS MISMAS



Acta Electoral del Jurado Nacional de Elecciones

Artículo 292º.- El ejemplar del Acta Electoral destinado al Jurado Nacional de Elecciones se introduce en un sobre específicamente destinado para ese fin; y se remite al Jurado Nacional de Elecciones por el medio más rápido. En este mismo sobre se anota el número de mesa; y se indica si dicha acta está impugnada o no.

Artículo 293º.- Los responsables del envío inmediato de este ejemplar del Acta Electoral son los Coordinadores Electorales asignados en cada local.

Acta Electoral de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales

Artículo 294º.- El ejemplar del Acta Electoral destinado a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, siempre que no se hubiese planteado la nulidad de la elección realizada en la mesa, se utiliza para realizar el cómputo del proceso electoral. Debe, este órgano electoral, proceder con la mayor celeridad, bajo responsabilidad, y seguir el procedimiento que para tal fin diseña la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
En caso de que el Acta Electoral presente algún recurso de nulidad, planteado en la Mesa de Sufragio, ésta será previamente separada y entregada al Jurado Electoral Especial para la resolución correspondiente.

Artículo 295º.- Las cédulas no utilizadas, los útiles, tampones, sellos o etiquetas holográficas no utilizados, los formularios no usados, y el listado de electores de la respectiva mesa, se depositan dentro del ánfora empleada y son remitidos a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de acuerdo a lo estipulado dentro del procedimiento general de acopio que es definido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 296º.- El ejemplar del Acta Electoral destinado a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales debe permanecer en la circunscripción hasta la proclamación de resultados respectiva.
Es enviado ulteriormente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales con el resto del material electoral.

Acta Electoral del Jurado Electoral Especial

Artículo 297º.- El ejemplar del Acta Electoral dirigido al Jurado Electoral Especial se utiliza para resolver las impugnaciones, cuando el Acta de la Oficina Nacional de Procesos Electorales esté ilegible o cuando el Jurado Electoral Especial lo estime conveniente por reclamos de los personeros.
El ejemplar del Acta Electoral destinado al Jurado Electoral Especial se introduce en un sobre específicamente destinado para ese fin. En este mismo sobre se anota el número de Mesa y se indica si dicha acta contiene alguna impugnación. En el interior de este sobre se insertan también los sobres con los votos impugnados a que se refieren los Artículos 268º y 282º de la presente Ley. Debe necesariamente constar lo que la Mesa resolvió.

Artículo 298º.- El ejemplar del Acta Electoral destinado al Jurado Electoral Especial de la circunscripción electoral es remitido al Presidente de éste por el Presidente de la Mesa de Sufragio, con el apoyo de la Fuerza Armada y en coordinación con el coordinador electoral del local respectivo.
Se recaba recibo por duplicado, en el que consta la hora de recepción. El Acta va dentro de un sobre destinado para este fin en el cual se anota claramente el número de Mesa, indicando si está impugnada o no.

Acta Electoral de la Fuerza Armada o Policía Nacional

Artículo 299º.- El ejemplar del Acta Electoral destinado a la Fuerza Armada o Policía Nacional se introduce en un sobre específicamente destinado para ese fin. En este mismo sobre se anota el número de mesa y se indica si dicha acta está impugnada o no.
El Jurado Electoral Especial puede solicitar este último ejemplar, en caso de no recibir ninguno de los ejemplares que le corresponden.

Fin del escrutinio

Artículo 300º.- Las cédulas escrutadas y no impugnadas son destruidas por el Presidente de la Mesa de Sufragio, después de concluido el escrutinio, bajo responsabilidad.

CAPITULO 4 DEL TITULO XI

DEL ACOPIO DE ACTAS DE VOTACIÓN Y ANFORAS

Artículo 301º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales está encargada de planificar y ejecutar el procedimiento de acopio de actas de votación y ánforas, que contemple las coordinaciones y controles necesarios con el fin de acelerar el cómputo en el Proceso Electoral.
Concordancia: Art. 2º de la LEY Nº 26487

Artículo 302º.- El procedimiento de acopio de las ánforas y material electoral se realiza de acuerdo con las instrucciones que imparta la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Concordancia: Art. 5 inc. a) de la LEY Nº 26487

Artículo 303º.- A partir del día de las elecciones la Oficina Nacional de Procesos Electorales contrata u organiza un servicio especial y expreso, con las seguridades convenientes, para el transporte de los sobres y de las ánforas destinadas a los Jurados Electorales Especiales y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales. Solicita con este fin el apoyo de la Fuerza Armada para resguardar y facilitar dicho transporte.
Concordancias: Art. 356º de ésta LEY; art. 5º inc. d) de la LEY Nº 26487

OLETTA

DEL COMPUTO Y PROCLAMACION
CAPITULO 1

DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE CÓMPUTO DESCENTRALIZADO

Artículo 304º.- Los Jurados Electorales Especiales, inmediatamente después de concluida la votación, se reúnen diariamente en sesión pública, para resolver las impugnaciones ante las Mesas de Sufragio. Se convoca a este acto a los personeros ante dicho Jurado. Su asistencia es facultativa.

Concordancia: Arts. 31° y 36° inc. n) de la LEY Nº 26486

Artículo 305º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales puede hacer uso de la tecnología disponible e instalar equipos de cómputo en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales que estime convenientes a fin de acelerar y optimizar el proceso de cómputo electoral.

Concordancia: Art. 5º inc. d) de la LEY Nº 26487

Artículo 306º.- Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales se reúnen diariamente, desde el momento de concluir la elección, en acto público al que deben ser citados los personeros, para iniciar el cómputo de los sufragios emitidos en su circunscripción electoral sobre la base de las Actas que no contengan nulidad. La asistencia de los personeros a estos actos es facultativa.

Concordancias: Art. 27º inc. h) de la LEY Nº 26487

Actos Previos al Cómputo Descentralizado de Actas Electorales

Artículo 307º.- Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, para efecto del cómputo deben, previamente, realizar los siguientes actos:

a) Comprobar que las ánforas y sobres que acaban de recepcionar corresponden a Mesas de Sufragio que han funcionado en su circunscripción electoral;
b) Examinar el estado de las ánforas y sobres que les han sido remitidos, y comprobar si han sido violados; y,
c) Separar las Actas Electorales de las Mesas en que se hubiese planteado la nulidad de la elección realizada en la Mesa; y entregarlas a los Jurados Electorales.

Los Jurados Electorales Especiales denuncian por el medio más rápido, ante los respectivos juzgados, los hechos delictivos cometidos por los miembros de la Mesa, tales como no haber remitido las ánforas y los documentos electorales o no haber concurrido a desempeñar sus funciones.

Concordancias: Art. 27º inc. b) de la LEY Nº 26487

Artículo 308º.- Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales comienzan el cómputo de las actas electorales de las Mesas de acuerdo al orden de recepción. Los resultados parciales y finales obtenidos son entregados inmediatamente al Jurado Electoral Especial para su revisión y autorización respectiva.

Concordancias: Art. 27º inc. h) de la LEY Nº 26487

Artículo 309º.- Al finalizar cada sesión se asienta y firma el reporte del cómputo parcial verificado, con especificación de los votos obtenidos por cada lista de candidatos u opción consultada.

Artículo 310º.- En el caso de que las Actas de una mesa no hayan sido recibidas, el cómputo se realiza con el ejemplar que se entregó al Jurado Electoral Especial y ante la falta de éste con el que se entregó a los miembros de las Fuerzas Armadas y que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales debe solicitar y, en defecto de aquél, con las copias que presenten los personero.

Concordancia: Art. 291º de esta LEY

Apelaciones interpuestas contra las resoluciones de las mesas de sufragio

Artículo 311º.- El Jurado Electoral Especial resuelve las apelaciones interpuestas contras las resoluciones de las Mesas de Sufragio sobre las impugnaciones que se hubieran formulado. La resolución debe ser motivada y es inapelable.
Si la resolución del Jurado Electoral Especial declara válido un voto, se agrega éste al acta respectiva de escrutinio. Esta resolución se remite inmediatamente a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, para el procesamiento respectivo.

Concordancia: Art. 36° inc. n) de la LEY Nº 26486

Artículo 312º.- El Jurado Electoral Especial se pronuncia también sobre los votos contenidos en los sobres que tengan la anotación de «Impugnado por ...» depositados en el ánfora, de conformidad con el Artículo 268º de esta Ley. Para tal efecto, la hoja ad hoc con la impresión digital del impugnado y su Documento Nacional de Identificación se entregan a los peritos en dactiloscopía, para que informen sobre la identidad del infractor.
Si la impugnación, es declarada fundada, el voto no se toma en cuenta y la cédula de impugnación y el Documento Nacional de Identificación, con el dictamen pericial, son remitidos al Juez en lo Penal correspondiente para los efectos legales del caso.

Concordancia: Art. 36° incs. m) y n) de la LEY Nº 26486

Artículo 313º.- Resueltas las impugnaciones presentadas durante la votación y el escrutinio, y las nulidades planteadas respecto de determinados actos de la elección en la Mesa o contra toda la elección realizada en ella, el Presidente del Jurado Electoral Especial devuelve a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de su Jurisdicción las actas electorales de las mesas de sufragio respectivas, la cual procederá a su cómputo, según lo resuelto por el Jurado Electoral Especial.

Concordancias: Art. 27º inc. h) de la LEY Nº 26487

Cómputo del sufragio

Artículo 314º.- Para el cómputo del sufragio no se toman en cuenta los votos nulos ni los votos en blanco.

Anulación de actas electorales

Artículo 315º.- Para el cómputo de votos de las Actas Electorales, se tiene en cuenta lo siguiente:

a) Si el Acta Electoral consigna el número de votantes pero el total de los votos incluidos los votos en blanco, nulos y no escrutados es mayor que dicho número, se considera válida la votación si dicho total de votos es menor que o igual al total de electores hábiles inscritos en la mesa. En caso contrario, se anula la parte pertinente del Acta.

b) Si el Acta no consigna el número de votantes se considera como dicho número la suma de los votos. En caso de considerar dos tipos de elecciones, si hay diferencia entre las sumas respectivas, se toma el número mayor. Si este número es mayor que el número de electores hábiles inscritos, se anula la parte pertinente del Acta.

Concordancia: Art. 176° y 178° de la presente LEY

Proclamación de Resultados Descentralizados

Artículo 316º.- Asignadas las votaciones correspondientes a las listas, candidatos u opciones, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales comunica el resultado al Jurado Electoral Especial, cuyo Presidente pregunta si hay alguna observación. Si no se ha formulado ninguna, o han sido resueltas las formuladas por el voto de la mayoría de los miembros de los Jurados Electorales Especiales, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales proclama los resultados finales de la circunscripción.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales envía a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, inmediatamente y por el medio de comunicación más rápido disponible, el resultado del cómputo.

Concordancias: Art. 178° inc. 5) de la CONSTITUCION POLITICA; art. 5° ins. i), g), y h), de la LEY N° 26486; art. 27° inc. h) de la LEY N° 26487

Artículo 317º.- El Jurado Electoral Especial, al día siguiente de la proclamación, levanta por triplicado Acta del cómputo de los sufragios emitidos en el Distrito Electoral, la que se firma por todos o por la mayoría de sus miembros y por los candidatos y personeros que lo deseen. Un ejemplar del acta es remitido de inmediato al Jurado Nacional de Elecciones, otro a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el tercer ejemplar es archivado por el Jurado Electoral Especial.

Se expide copia certificada del Acta a los candidatos o personeros que la soliciten.

El resultado del cómputo de cada circunscripción se publica al día siguiente de efectuado éste, en el diario de mayor circulación de la respectiva capital de la circunscripción correspondiente y, donde no lo haya, por carteles.

Concordancia: Art. 36° inc. o), de la LEY N° 26486

Artículo 318º.- El Acta de Cómputo de cada circunscripción debe contener:

a) El número de Mesas de Sufragio que han funcionado en la circunscripción, con indicación de ella;
b) La relación detallada de cada una de las Actas Electorales remitidas por las Mesas de Sufragio;
c) Las resoluciones emitidas sobre las impugnaciones planteadas en cada Mesa durante la votación y el escrutinio, que fueron materia de apelación ante el Jurado Electoral Especial;
d) El número de votos que en cada Mesa se hayan declarado nulos, y el número de votos en blanco encontrados en ella;
e) El nombre de los candidatos u opciones que intervinieron en la elección constituyendo, en su caso, una lista o fórmula completa, y el número de votos obtenidos por cada fórmula;
f) La determinación de la «cifra repartidora», con arreglo a la presente Ley, para las listas de candidatos;
g) La constancia de las observaciones formuladas y las resoluciones emitidas con relación al cómputo efectuado por el propio Jurado Electoral Especial y la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales;
h) La relación de los representantes políticos o personeros que hayan asistido a las sesiones.

Artículo 319º.- Las credenciales de los candidatos electos son firmadas por todos o la mayoría de los miembros del Jurado Electoral Especial.

Concordancia: Art. 178° inc. 5° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; ART. 5° inc. J) de la LEY N ° 26486

CAPITULO 2 DEL TITULO XII

DE LA PROCLAMACIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y CONGRESISTAS

Cómputo Nacional

Artículo 320º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales procede a:

1. Verificar la autenticidad de los documentos electorales y de las Actas de Cómputo que haya recibido de los Jurados Electorales Especiales;
2. Realizar el cómputo nacional de los votos para Presidente, Vicepresidentes de la República, Congresistas u opciones, basándose en las Actas Generales de Cómputo remitidas por los Jurados Electorales Especiales y las Actas de Sufragio de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y teniendo a la vista, si fuese necesario, las Actas Electorales enviadas por las mesas de sufragio;

3. Iniciar el cómputo inmediatamente después de haber empezado a recibir las Actas de Cómputo de los Jurados Electorales Especiales; si no las recibe hasta el quinto día posterior a la fecha de las elecciones, empezar dicho cómputo con las comunicaciones de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales o, en defecto de éstas, con las copias certificadas de las Actas de Cómputo que presenten los personeros de los candidatos u organizaciones políticas;

4. Determinar, de acuerdo con el cómputo que haya efectuado, los votos obtenidos en total por cada una de las fórmulas de candidatos a la Presidencia, Vicepresidencias de la República, Congresistas u opciones;

5. Efectuar el cómputo nacional y establecer el número de votos alcanzados separadamente por cada lista de candidatos a Congresista y proceder a determinar la «cifra repartidora» para asignar a cada lista el número de congresistas que le corresponda; y,

6. Comunicar al Jurado Nacional de Elecciones los nombres de los candidatos que hayan resultado elegidos Congresistas, a efectos de su proclamación.

Concordancia: Art. 178° inc. 5) de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 321º.- En forma inmediata y en un período no mayor de tres días desde el momento de su recepción, el Jurado Nacional de Elecciones procede, en sesiones públicas, a resolver los recursos de nulidad o apelaciones interpuestos ante los Jurados Electorales Especiales o ante el propio Jurado Nacional de Elecciones.

Concordancia: Art. 5° inc. o), de la LEY N° 26486

Artículo 322º.- Efectuada la calificación de todas las actas generales de cómputo de los Jurados Electorales Especiales y de las Actas de Sufragio de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, realizado el cómputo nacional de sufragio a que se refiere el Artículo 320º, y habiéndose pronunciado el Jurado Nacional de Elecciones sobre las observaciones formuladas por sus miembros, por los candidatos o por sus personeros, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones proclama como fórmula u opción ganadora la que haya obtenido la votación más alta, siempre que ésta no sea inferior a la tercera parte del total de los votos emitidos y, en su caso, como Presidente y Vicepresidentes de la República a los ciudadanos integrantes de dicha fórmula.

Concordancia: Art. 5° inc. i) de la LEY N° 26486

Artículo 323º.- De todo el proceso a que se refiere el artículo anterior, se levanta por duplicado un Acta General que firman los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y los candidatos o sus personeros si lo solicitan. Dicha acta debe contener:

1. Relación detallada de la calificación de cada una de las Actas de Cómputo remitidas por los Jurados Electorales Especiales;

2. Indicación de la forma en que fue resuelto cada uno de los recursos de nulidad o apelación interpuesto ante los Jurados Electorales Especiales o ante el propio Jurado Nacional de Elecciones;

3. Nombres de los candidatos a la Presidencia y a las Vicepresidencias de la República que han intervenido en la elección constituyendo fórmulas completas o denominación de las opciones, con expresión del número de votos emitidos en favor de cada una de dichas fórmulas u opciones;

4. Nombres de los candidatos de las listas de Congresistas que hayan intervenido y la asignación de representaciones que les correspondan en aplicación de la cifra repartidora con arreglo a la presente Ley;

5. Indicación de los personeros y candidatos que hayan asistido a las sesiones;

6. Constancia de las observaciones formuladas y de las resoluciones recaídas en ellas;

7. Proclamación de las opciones o de los ciudadanos que hayan resultado elegidos Presidente y Vicepresidentes de la República o declaración de no haber obtenido ninguno de ellos la mayoría requerida con la constancia de haber cumplido con comunicarlo al Congreso; y,

8. Proclamación de los ciudadanos que hayan sido elegidos Congresistas.

Artículo 324º.- Un ejemplar del Acta Electoral a que se refiere el artículo anterior es archivado en el Jurado Nacional de Elecciones y el otro es remitido al Presidente del Congreso de la República.

Artículo 325º.- El Jurado Nacional de Elecciones otorga las correspondientes credenciales a los ciudadanos proclamados Presidente, Vicepresidentes de la República y Congresistas.

Concordancias: Art. 178° inc. 5) de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA y art. 5° inc. j), de la LEY 26486

Artículo 326º.- Todos los documentos que sirvan para la verificación de los cómputos se conservan hasta que haya concluido el proceso electoral con la proclamación del ciudadano elegido Presidente de la República. Se procede luego a destruir los documentos, excepto los que deban ser remitidos al Poder Judicial por causa de la apertura de cualquier proceso.

Artículo 327º.- Quince días antes de la instalación del Congreso, los Congresistas que hayan sido declarados expeditos para incorporarse se constituyen, cualquiera que sea su número, en una Junta Preparatoria, bajo la presidencia del Congresista que ocupa el primer lugar de la lista que haya obtenido el mayor número de sufragios.

CAPITULO 3 DEL TITULO XII

DE LA PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS DE REFERÉNDUM O CONSULTAS POPULARES

Artículo 328º.- Efectuado totalmente el cómputo descentralizado y establecido el número de votos aprobatorios y desaprobatorios obtenidos por cada opción, el Presidente del Jurado

Especial de Elecciones procede a levantar, por duplicado, el Acta Electoral del cómputo de sufragios, la que es firmada por todos o por la mayoría de los miembros del Jurado así como por los personeros que lo deseen.
Un ejemplar del Acta es remitido de inmediato al Jurado Nacional de Elecciones y el otro es archivado por el Jurado Especial de Elecciones.

Artículo 329º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales procede al cómputo nacional, ejecutando las siguientes acciones:

a) Verifica la autenticidad de los documentos electorales y de las Actas de Cómputo que haya recibido de los Jurados Electorales Especiales.
b) Realiza el cómputo nacional de los votos obtenidos por las opciones o materias sometidas a consulta, basándose en las Actas Generales de Cómputo remitidas por los Jurados Electorales Especiales y las Actas Electorales de las Mesas de Sufragio de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, recepcionadas por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y teniendo a la vista, si fuese necesario, las Actas Electorales remitidas por las Mesas de Sufragio.
c) Inicia el cómputo inmediatamente después de haber empezado a recibir las Actas de Cómputo de los Jurados Electorales Especiales y, si no las recibiera hasta el quinto día posterior a la fecha de las elecciones, empieza dicho cómputo con las comunicaciones recibidas de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y, en defecto de estas, con las copias certificadas de las Actas de Cómputo que presenten los personeros de las Organizaciones Políticas o de los promotores de las iniciativas.
d) Efectúa el Cómputo Nacional y establece el número de votos alcanzados separadamente por cada opción o materia sometida a consulta.
e) Comunica al Jurado Nacional de Elecciones los resultados del cómputo nacional efectuado.

Concordancia: Art. 5° inc. e) de la LEY N° 26487

Proclamación

Artículo 330º.- Resueltos los recursos de nulidad o apelación, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley; efectuada la calificación de todas las Actas de Cómputo emitidas por los Jurados Electorales Especiales y de las Actas de las Mesas de Sufragio de los ciudadanos peruanos residentes en el exterior; realizado el cómputo nacional sobre el referéndum o materias sometidas a consulta, y luego de haberse pronunciado el Jurado Nacional de Elecciones sobre las observaciones hechas por sus miembros y por los personeros, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones proclama los resultados del referéndum o consulta popular.

Concordancias: Art. 178° inc. 5) de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA y art. 5° inc. h) de la LEY N° 26486

Artículo 331º.- Del procedimiento a que se refieren los dos artículos anteriores, se sienta Acta por duplicado, que firmarán los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y los personeros que deseen hacerlo.

El Acta debe contener:

1. Relación detallada de la calificación de cada una de las Actas de los cómputos remitidas por los Jurados Electorales Especiales;
2. Indicación de la forma en que fue resuelto cada uno de los recursos de nulidad o apelación, interpuestos ante los Jurados Electorales Especiales o ante el propio Jurado Nacional de Elecciones;
3. Nombre o denominación de las opciones, con expresión del número de votos emitidos en favor de cada una de dichas opciones;
4. Constancia de las observaciones formuladas y de las resoluciones recaídas en ellas; y,
5. Proclamación de la opción que hubiese obtenido la mayoría.

CAPITULO 4 DEL TITULO XII

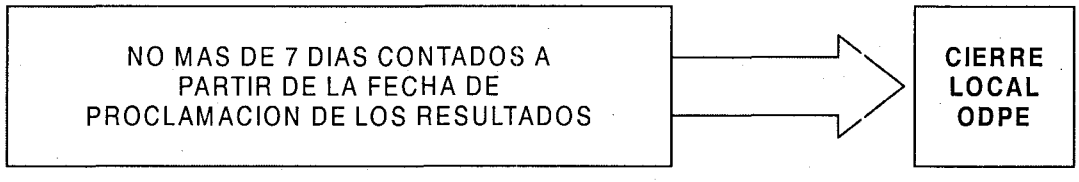
DEL CIERRE DE LA ELECCIÓN

CIERRE DE LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS DE PROCESOS ELECTORALES

Artículo 332º.- Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales dejan de funcionar luego de la Proclamación de Resultados y después de haber entregado el informe final y la rendición de gastos correspondientes ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Además son responsables de enviar las ánforas y todo el material electoral recabado dentro de su circunscripción a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La duración de estas actividades no debe ser mayor de siete (7) días contados a partir de la proclamación.

Concordancia: Art. 24° de la LEY N° 26487

CIERRE DE OFICINAS ODPE



Artículo 333º.- El Informe final de cada Oficina de Procesos Electorales debe cubrir los siguientes puntos:

a) Hechos relacionados con el aspecto técnico de procesamiento de datos que se suscitaron durante el proceso electoral, haciendo resaltar aquellos que retrasaron el normal funcionamiento del procesamiento de datos.
b) Relación de Equipos de Cómputo utilizados.
c) Relación de Equipos de Cómputo Alquilados.

d) Relación de Equipos de Cómputo Comprados.
e) Relación de Equipos que son propiedad de la Oficina Nacional de Procesos Electora les.
f) Situación de los Equipos: en mal estado, en buen estado, en mantenimiento, etc.
g) Relación del software y manuales que se deben entregar a la Oficina Nacional de Pro cesos Electorales.
h) Presupuesto y ejecución del mismo.
i) Documentos sustentatorios del presupuesto.

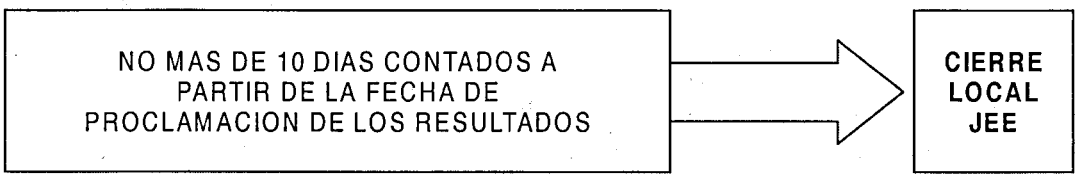
Concordancia: Art. 27° ins. j) y k) de la LEY N° 26487

Cierre de los Jurados Electorales Especiales

Artículo 334º.- Los Jurados Electorales Especiales dejan de funcionar luego de la Proclamación de Resultados y después de haber entregado el informe final y rendición de gastos al Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo al Artículo 48º de la presente Ley. Este lapso no debe ser mayor de diez (10) días, contados a partir de la proclamación.

Concordancias: Arts. 36° incs. p) y r), 37° de la LEY N° 26486

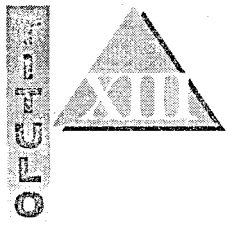
CIERRE DE OFICINAS JURADO ELECTORAL ESPECIAL



Artículo 335º.- El Informe final de cada Jurado Electoral Especial cubre los siguientes puntos:

a. Hechos relacionados con el aspecto legal que se suscitaron durante el proceso electoral haciendo resaltar aquéllos que retrasaron el normal funcionamiento del cómputo de votos.
b. Relación de impugnaciones y sus respectivas resoluciones.
c. Presupuesto y ejecución del mismo.
d. Documentos sustentatorios del presupuesto.

Concordancia: Art. 36° inc. p) y r) de la LEY N° 26486



DE LAS GARANTIAS DEL PROCESO ELECTORAL

CAPITULO 1

DE LOS OBSERVADORES ELECTORALES DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Ciudadanos que pueden ser observadores

Artículo 336º.- Los ciudadanos aptos para participar en elecciones y consultas populares, siempre que no sean candidatos, militantes o personeros de agrupaciones políticas o miembros de órganos electorales, pueden ser acreditados como observadores electorales en una o más mesas de sufragio dentro del territorio nacional por las organizaciones que se constituyen de acuerdo a las normas respectivas.

Derechos de los observadores

Artículo 337º.- Los observadores electorales tienen derecho a presenciar los siguientes actos:

a. Instalación de la mesa de sufragio.
b. Acondicionamiento de la cámara secreta.
c. Verificación de la conformidad de las cédulas de votación, las actas, las ánforas, los sellos de seguridad y cualquier otro material electoral.
d. Desarrollo de la votación.
e. Escrutinio y cómputo de la votación.
f. Colocación de los resultados en lugares accesibles al público.
g. Traslado de las actas por el personal correspondiente.

Artículo 338º.- Los observadores pueden tomar notas y registrar en sus formularios las actividades antes enumeradas, sin alterar el desarrollo de dichos actos ni intervenir en ellos directa o indirectamente.

Prohibiciones

Artículo 339º.- Los observadores electorales no pueden:

a. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones, ni realizar actos que directa o indirectamente constituyan interferencia en el desarrollo del proceso electoral.
b. Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor o en contra de agrupación política o candidato alguno.
c. Ofender, difamar o calumniar a las instituciones, autoridades electorales, agrupaciones políticas o candidatos.

d. Declarar el triunfo de agrupación política o candidato alguno.
e. Dirigirse a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones solicitando informaciones o entrega de documentos oficiales.

Requisitos que deben cumplir las organizaciones no gubernamentales

Artículo 340º.- Cada organización no gubernamental que realice observación electoral solicita al Jurado Nacional de Elecciones su acreditación como institución facultada a presentar observadores en las Mesas de Sufragio, Jurados Especiales y Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones puede denegar el pedido mediante Resolución fundamentada del pleno. La solicitud debe estar acompañada de:

a) Escritura pública de inscripción en los registros públicos, donde figure como uno de sus principales fines la observación electoral.
b) Plan de la observación electoral, debidamente fundamentado y detallado y,
c) Plan de financiamiento de la observación electoral.

Concordancia: Art. 35° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

CAPITULO 2 DEL TITULO XIII

DE LAS GARANTÍAS

GARANTÍA DE INDEPENDENCIA EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE JURADOS Y PERSONEROS

Artículo 341º.- Los miembros de los Jurados Electorales Especiales y los de las Mesas de Sufragio, así como los personeros de los partidos, agrupaciones independientes y alianzas, actúan con entera independencia de toda autoridad y no están obligados a obedecer orden alguna que les impida el ejercicio de sus funciones.

Impedimento de detenciones

Artículo 342º.- Los miembros titulares y suplentes de las mesas de sufragio, así como los personeros de los partidos, agrupaciones independientes y alianzas, no pueden ser apresados por ninguna autoridad desde 24 (veinticuatro) horas antes y 24 (veinticuatro) horas después de las elecciones, salvo caso de flagrante delito.

Procedimiento en caso de detención de ciudadanos

Artículo 343º.- Ninguna autoridad puede detener o reducir a prisión el día de las elecciones, ni veinticuatro horas antes, a los ciudadanos capacitados para votar, salvo caso de flagrante delito.

Concordancia: Art. 2° inc. 24, literal f) de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 344º.- Las autoridades que tengan a su cargo establecimientos de detención dan las facilidades del caso para que las autoridades electorales puedan comprobar la detención ilegal de algún ciudadano con derecho de votar.
Las autoridades electorales actúan en el caso contemplado en el párrafo anterior, por denuncia de los personeros, o de las personas indicadas en el Artículo 54º del Código de Procedimientos Penales y, comprobada la detención, pueden interponer la acción de Hábeas Corpus ante el Juez en lo penal.

Concordancia: Art. 54° del CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
"ART. 54° Constitución de Parte Civil.-
El agraviado, sus ascendientes o descendientes, sus parientes colaterales y afines dentro del segundo grado, sus padres o hijos adoptivos o su tutor o curador pueden constituirse en parte civil. La persona que no ejerza por sí sus derechos, será representada por sus personeros legales"

Prohibición de impedir el sufragio

Artículo 345º.- Ninguna persona puede impedir, coactar o perturbar el ejercicio personal del sufragio. Toda persona capacitada para ejercer el sufragio que se encuentra bajo dependencia de otra debe ser amparada en su libre derecho de votar. Las autoridades y los particulares que tengan bajo su dependencia a personas capacitadas para votar, deben permitirles el libre y personal ejercicio del sufragio.

Concordancia: Art. 31° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Prohibiciones a Autoridades

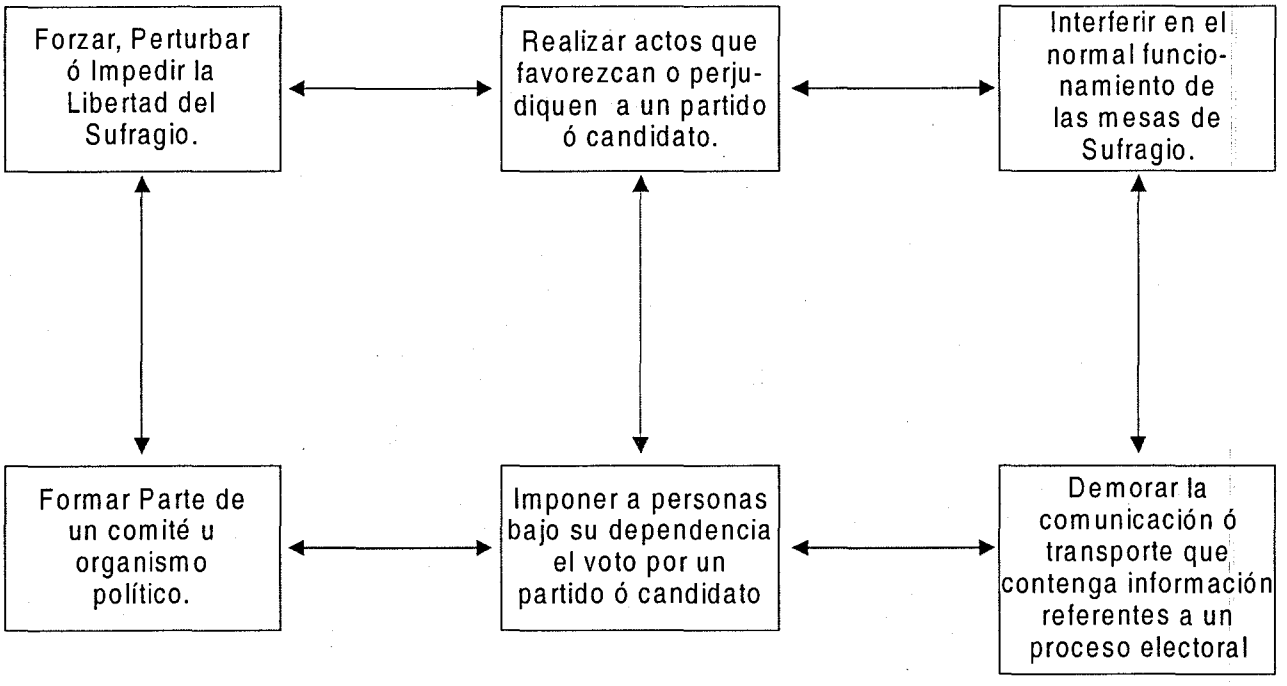
Artículo 346º.- Está prohibido a toda autoridad política o pública:

a) Intervenir en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar la libertad del sufragio, utilizando la influencia de su cargo o de los medios de que estén provistas sus reparticiones.
b) Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido o candidato.
c) Interferir, bajo pretexto alguno, el normal funcionamiento de las Mesas de Sufragio.
d) Imponer a personas que tengan bajo su dependencia la afiliación a determinados partidos políticos o el voto por cierto candidato, o hacer valer la influencia de sus cargos para coactar la libertad del sufragio.
e) Formar parte de algún Comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de ninguna agrupación política o candidato.
f) Demorar los servicios de Correos o de mensajeros que transporten o transmitan elementos o comunicaciones oficiales referentes al proceso electoral.

Los Jurados Electorales correspondientes formulan las respectivas denuncias ante el Ministerio Público.

Concordancia: Art. 36° inc. m), de la LEY N° 26486

PROHIBICIONES A AUTORIDADES POLITICAS O PUBLICAS, DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES



Prohibiciones a aquéllos que tengan personas bajo su dependencia

Artículo 347º.- Está prohibido a los funcionarios y empleados públicos, de Concejos Provinciales y Distritales, Beneficencias y Empresas Públicas, a los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional en servicio activo, a los del clero regular y secular de cualquier credo o creencia, y a todos los que, en alguna forma, tengan a otras personas bajo su dependencia:

a) Imponer que dichas personas se afilien a determinados partidos políticos.
b) Imponer que voten por cierto candidato.
c) Hacer valer la influencia de sus cargos para coactar la libertad del sufragio.
d) Hacer propaganda a favor o campaña en contra de ninguna agrupación política o candidato.

Artículo 348º.- El Comando de la Fuerza Armada pone a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales los efectivos necesarios para asegurar el libre ejercicio del derecho de sufragio, la protección de los funcionarios electorales durante el cumplimiento de sus deberes y la custodia del material, documentos y demás elementos destinados a la realización del acto electoral. Para este efecto el Comando ejerce las siguientes atribuciones:

a) Prestar el auxilio correspondiente que garantice el normal funcionamiento de las Mesas de Sufragio.
b) Mantener el libre tránsito de los electores desde el día anterior al de la elección y duran te las horas de sufragio e impedir que haya coacción, cohecho, soborno u otra acción que tienda a coactar la libertad del elector.
c) Facilitar el ingreso de los personeros a los locales en que funcionen las Mesas de Sufragio.

d) Custodiar los locales donde funcionen los órganos electorales y las oficinas de Correos.
e) Hacer cumplir las disposiciones que adopten la Oficina Nacional de Procesos Electorales para dicho efecto.

Para la ejecución de lo dispuesto en este artículo, los miembros de la Fuerza Armada reciben las órdenes e instrucciones pertinentes de sus superiores. Las atribuciones y facultades concedidas por este artículo a la Fuerza Armada están sujetas, en todo caso, a las disposiciones e instrucciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 349º.- Durante las horas en que se realizan las elecciones, no pueden efectuarse espectáculos populares al aire libre ni en recintos cerrados, ni funciones teatrales o cinematográficas ni reuniones públicas de ninguna clase.

Artículo 350º.- Los oficios religiosos en los templos son regulados por las autoridades eclesiásticas competentes, a fin de que ellos no se realicen durante las horas de las elecciones.

Artículo 351º.- Desde cuarenta y ocho horas antes de las 00 horas del día de la votación, hasta las 12.00 horas del día siguiente a las elecciones, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos dedicados a dicho expendio.

Artículo 352º.- Se prohibe a los electores portar armas desde el día anterior al de la elección y hasta un día después de ésta.

Artículo 353º.- Está prohibido a los miembros de la Fuerza Armada en situación de disponibilidad o de retiro participar, vistiendo uniforme, en manifestaciones o en otros actos de carácter político.

Artículo 354º.- Los miembros del Clero regular y secular, de cualquier credo o creencia, no pueden participar, vistiendo sotana o hábito clerical o religioso en los actos a que se refiere el párrafo anterior. Se comprende en esta prohibición a los miembros de cualquier credo religioso.

Artículo 355º.- Ninguna persona puede detener o demorar, por medio alguno, los servicios de Correos, o de mensajeros que transporten o transmitan elementos o comunicaciones oficiales referentes al proceso electoral.

Concordancia: Art. 346° inc. f), de la presente LEY

Artículo 356º.- A partir del día de las elecciones la Oficina Nacional de Procesos Electorales contrata u organiza un servicio especial y expreso, con las seguridades convenientes, para el transporte de los sobres y de las ánforas destinados a los Jurados Electorales Especiales. Solicita con este fin el apoyo de la Fuerza Armada para resguardar y facilitar dicho transporte.

Concordancia: Art. 303° de la presente LEY

Reuniones

Artículo 357º.- Dentro del radio de cien metros de una mesa de sufragios se prohibe al propietario, inquilino u ocupante de una casa permitir en ella reuniones de electores durante las horas de la elección. En el caso de que terceros se introdujeran a viva fuerza en dicha casa, debe el propietario, inquilino u ocupante, dar aviso inmediato a los miembros de la respectiva Fuerzas Armada.

Concordancia: Art. 2° inc. 12) de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 358º.- El derecho de reunión se ejercita de manera pacífica y sin armas conforme a las siguientes normas:

a. En locales cerrados, sin aviso alguno a la autoridad.
b. En lugares de uso público, mediante aviso dado por escrito con cuarenta y ocho horas de anticipación a la autoridad política respectiva, indicando el lugar, el recorrido, la hora y el objeto de la reunión o del desfile, en su caso, para el mantenimiento de las garantías inherentes al orden público.

Las reuniones en lugares de uso público no pueden realizarse frente a cuarteles o acantonamiento de fuerzas militares o de policía ni frente a locales de agrupaciones políticas distintas de los manifestantes.

Concordancia: Art. 2° INC. 12) de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; art. 190° de la presente Ley.

Manifestación en lugares públicos

Artículo 359º- Está prohibido realizar, simultáneamente, más de una manifestación en lugares públicos de una misma ciudad, salvo que se realicen en sectores separados por más de un kilómetro de distancia. La decisión corresponde a la autoridad política respectiva, la que establece la preferencia de acuerdo con el orden en que se hayan recibido los avisos.

Artículo 360º.- En defensa del derecho de reunión contemplado en los artículos anteriores, es procedente la acción de Hábeas Corpus, la cual se resuelve dentro de las veinticuatro horas después de presentado el recurso, bajo responsabilidad.

Concordancia: Art. 12° de la LEY N° 23506

Texto Ley N° 23506. Ley de Hábeas Corpus y Amparo- Art. 12°.-"Se vulnera o amenaza la libertad individual y en consecuencia procede la acción de Hábeas Corpus, enunciativamente, en los siguientes casos:

1) **Guardar reserva sobre sus convicciones políticas, religiosas, filosóficas, o de cualquier otra índole.**
2) **De la libertad de conciencia y de creencia .**
3) **El de no ser violentado para obtener declaraciones.**
4) **El de no ser obligado a prestar juramento, ni compelido a declarar o reconocer su culpabilidad en causa penal contra si mismo, ni contra su conyuge, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.**

5) El de no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia firme.
6) El de no ser expatriado ni separado del lugar de su residencia, si no por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.
7) El de no ser secuestrado.
8) El del extranjero a quien se ha concedido asilo político de no ser expulsado al pais cuyo Gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado.
9) El de los nacionales o de los extranjeros residentes, de ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de extranjería o de Sanidad.
10) El de no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez, o por las autoridades policiales en el caso de flagrante delito, o el de no ser puesto el detenido, dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo al acápite "g" del inciso 20 del artículo 2° de la Constitución asi como de las excepciones que, en el se consignan.
11) El de no ser detenido por deuda, salvo los casos de obligaciones alimentarias.
12) El de no ser privado, del pasaporte, dentro o fuera de la República.
13) El de no ser incomunicado, sino en el caso indispensable para el esclarecimiento de un delíto y en la forma y por el tiempo previstos por la ley, de acuerdo con el acápite "i" del inciso 20 ° del artículo 2° de la Constitiución.
14) El de ser asistido por un abogado defensor de su elección, desde que es citado o detenido por la autoridad.
15) El de hacer retirar las guardias puestas a un domicilio o suspender el seguimiento judicial cuando ello atente contra la libertad individual.
16) El de la excarcelación, en el caso de un detenido o procesado que haya sido amnistiado, indultado, sobreseido, absuelto o declarada prescrita la acción penal o la ejecución de la pena.
17) El de que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o detención de las personas, a que se refiere el artículo 183° de la Constitución.

Artículo 361.- A partir de los 90 (noventa) días anteriores al acto del sufragio, el ciudadano que ejerce la Presidencia de la República y que en virtud del artículo 112° de la Constitución, postula a la reelección, queda impedido de:

a) Hacer proselitismo político, en la inauguración e inspección de obras públicas.
b) Repartir a personas o entidades privadas bienes adquiridos con dineros del Estado o como producto de donaciones de terceros al gobierno de la república
c) Referirse directa o indirectamente a los demás candidatos o movimientos políticos, en sus disertaciones, discursos o presentaciones públicas

Solo puede hacer proselitismo político cuando no realice actos de gobierno, ni utilice medios de propiedad pública. En tales casos procede de la siguiente manera:

a) Cuando utilice bienes o servicios de propiedad del estado abona todos los gastos inherentes al desplazamiento y alojamiento propio y el de sus acompañantes, dando cuenta documentada al Jurado Nacional de Elecciones; y ,
b) En el caso de repartir bienes a personas o entidades privadas, esos bienes deberán ser adquiridos con recursos propios del candidato o donados a éste en su condición de candidato o a la agrupación política que apoya su candidatura.

Las limitaciones que esta Ley establece para el candidato presidente comprenden a todos los funcionarios públicos que postulen a cargo de elección o reelección popular, en cuanto les sean aplicables. Exceptuandose lo establecido en el inciso c) de la primera parte del presente artículo.

Artículo 362°.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones queda facultado para sancionar la infracción de la norma contenida en el artículo anterior, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a) Al primer incumplimiento, y a solicitud de cualquier personero acreditado ante el Jurado Nacional de Elecciones, envía una comunicación escrita y privada al partido, agrupación independiente, alianza o lista independiente, especificando las características de la infracción, las circunstancias y el día en que se cometió;

b) En el supuesto de persistir la infracción, y siempre a pedido de un personero acreditado ante el Jurado Nacional de Elecciones, éste sancionará al partido, agrupación independiente, alianza o lista independiente infractor con una amonestación pública y una multa, según la gravedad de la infracción, no menor de treinta ni mayor de cien unidades impositivas tributarias.

Para la procedencia de las sanciones previstas en la presente Ley, se requiere la presentación de medio de prueba que acredite en forma fehaciente e indubitable las infracciones.

DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES

CAPITULO 1

DE LA NULIDAD PARCIAL

Nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio

Artículo 363º.- Los Jurados Electorales Especiales pueden declarar la nulidad de la votación realizada en las Mesas de Sufragio, en los siguientes casos:

a) Cuando la Mesa de Sufragio se haya instalado en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes de las establecidas por esta Ley, o después de las doce (12.00)

horas, siempre que tales hechos hayan carecido de justificación o impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio;

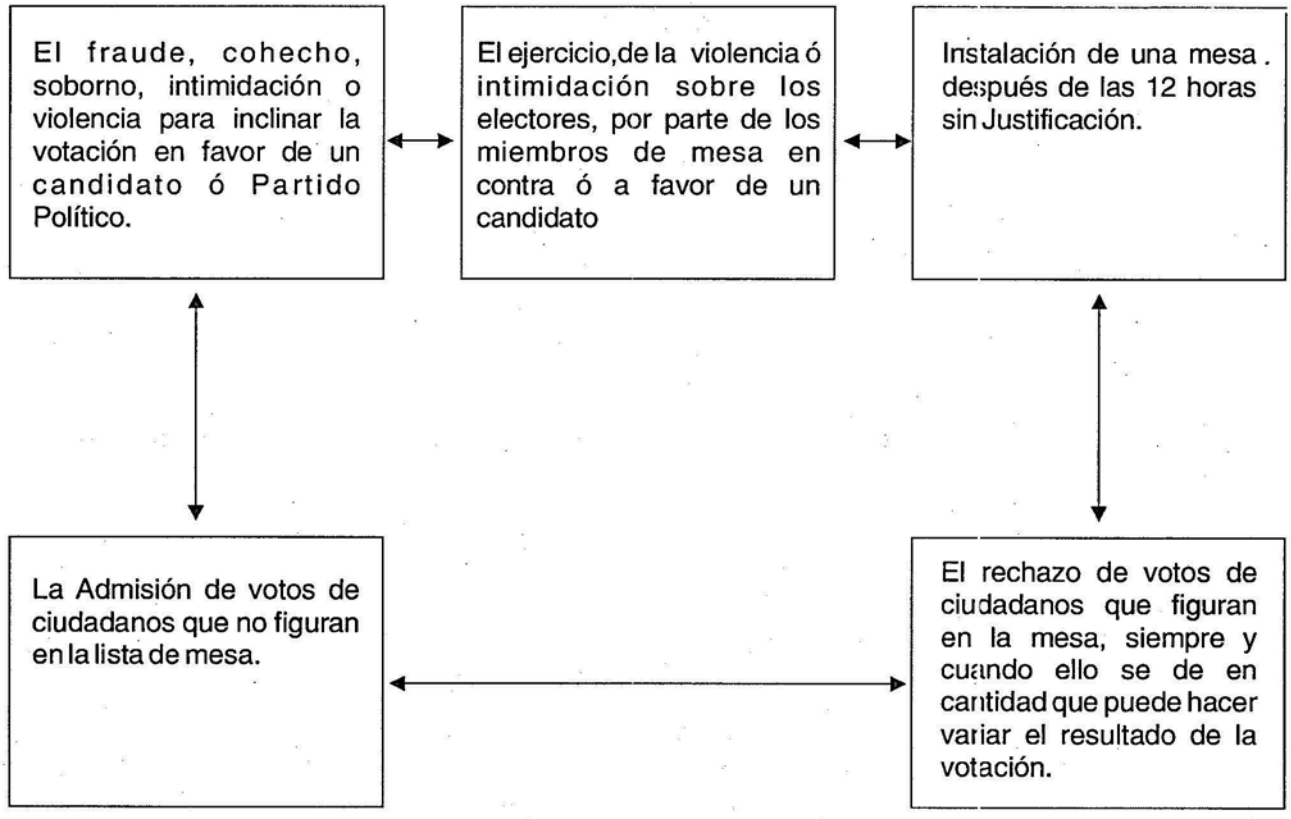
b) Cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato;

c) Cuando los miembros de la Mesa de Sufragio hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores, con el objeto indicado en el inciso anterior; y,

d) Cuando se compruebe que la Mesa de Sufragio admitió votos de ciudadanos que no figuraban en la lista de la Mesa o rechazó votos de ciudadanos que figuraban en ella en número suficiente para hacer variar el resultado de la elección.

Concordancias: Art. 36° inc. j) de la LEY N° 26486; y el artículo 153° inc. g), de la presente Ley.

CAUSAS DE NULIDAD POR EL CUAL EL JEE PUEDE DECLARAR LA NULIDAD DE VOTACION EN UNA MESA



Nulidad de las elecciones realizadas en Jurados Electorales Especiales

Artículo 364º.- El Jurado Nacional de Elecciones puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en cualquier distrito o en toda una provincia cuando los votos nulo o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos tercios del número de votos válidos.

Concordancia: Art. 5° inc. k) de la LEY N° 26486.

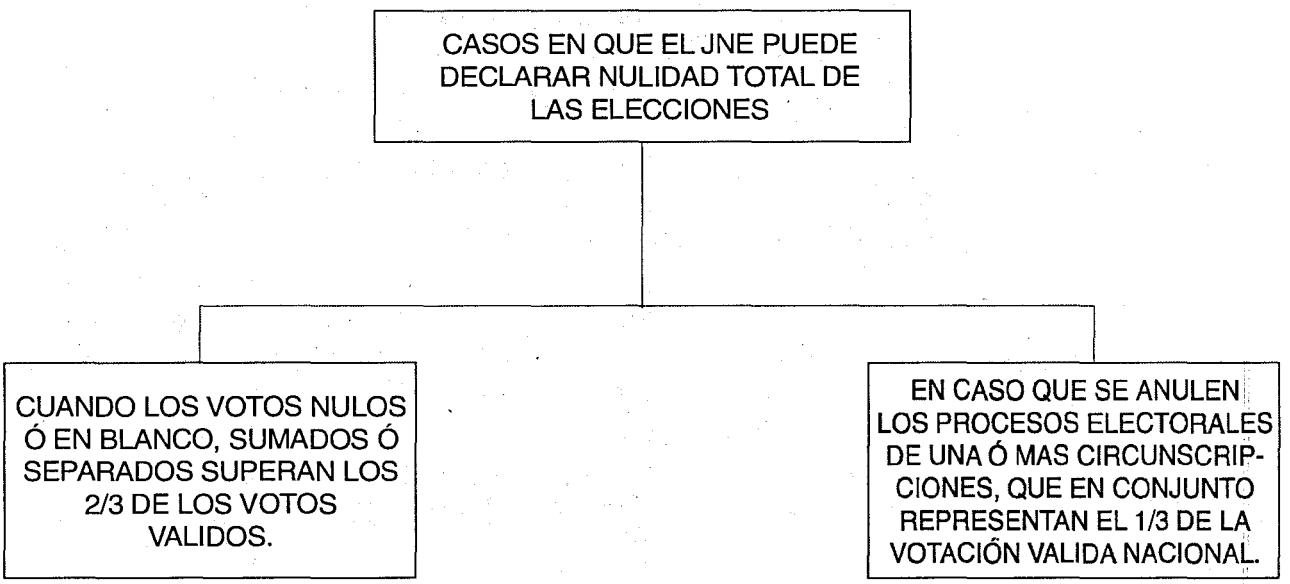
CAPITULO 2 DEL TITULO XIV

DE LA NULIDAD TOTAL

Artículo 365º.- El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad total de las elecciones en los siguientes casos:

1. Cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos ter cios del número de votos válidos;
2. Si se anulan los procesos electorales de una o más circunscripciones que en conjunto representen el tercio de la votación nacional válida

Concordancia: Art. 184° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

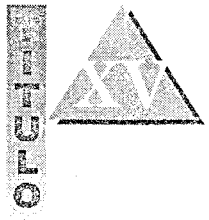


Artículo 366º.- La resolución de nulidad es dada a conocer de inmediato al Poder Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Recursos de nulidad

Artículo 367º.- Los recursos de nulidad sólo pueden ser interpuestos por los personeros legales de los partidos, alianzas de partidos, agrupaciones o listas independientes y se presentan al Jurado Nacional de Elecciones en el plazo de tres días, contados desde el día siguiente al de la proclamación de los resultados o de la publicación de la resolución que origine el recurso.

Artículo 368º.- En caso de anulación total, las nuevas elecciones se efectúan en un plazo no mayor de 90 (noventa) días.



DEL PRESUPUESTO ELECTORAL

CAPITULO 1

DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ELECTORAL

Estructura del Presupuesto del Sistema Electoral

Artículo 369º.- El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones ejerce la titularidad del pliego de este Organo Electoral; el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ejerce la titularidad del pliego de esta Oficina; la titularidad del pliego del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es ejercida por su Jefe.

Concordancias: Art. 33° de la LEY N° 26487; art. 11° de la LEY N° 26497.

Presentación del proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral

Artículo 370º.- El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del Sistema Electoral que incluye por separado las partidas de los pliegos presupuestales de cada Organo Electoral. Lo sustenta ante esa instancia y ante el Congreso, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 80º y 178º de la Constitución Política del Perú. A dicho acto también asisten, en forma obligatoria, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil con el propósito de absolver cualquier consulta en temas de su competencia.

Concordancias: Arts. 80° y 178° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; art. 40° de la LEY N° 26486.

Artículo 371º.- El presupuesto ordinario de cada Organo Electoral es presentado al Poder Ejecutivo como un programa separado dentro del pliego correspondiente a cada uno de dichos Organos.

El presupuesto de cada Organo Electoral debe contemplar la ejecución de todos los procesos electorales con calendario fijo, según la Constitución del Perú. En los presupuestos, cada proceso electoral debe estar claramente diferenciado.

Concordancias: Art. 39° de la LEY N° 26486; arts. 29° y 30° de la LEY N° 26487; y art. 25° de la LEY N° 26497.

CAPITULO 2 DEL TITULO XV

DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ELECTORAL

Artículo 372º.- Corresponde al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, únicamente, efectuar las coordinaciones necesarias para una presentación oportuna del Proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral diferenciando cada pliego que lo conforma. Corresponde a cada titular de pliego del Sistema Electoral la responsabilidad en su ejecución de acuerdo a ley.

Plazo para presentación de presupuestos

Artículo 373º.- Convocado un proceso electoral no previsto en el calendario fijo, los demás organismos del Sistema Electoral coordinan con el Jurado Nacional de Elecciones la presentación de los presupuestos requeridos. El Jurado Nacional de Elecciones debe presentarlo ante el Poder Ejecutivo dentro del plazo de siete (7) días naturales contados a partir de la convocatoria.

Concordancias: Art. 41 de la LEY N° 26486; art. 10° de la LEY N° 26533.

Artículo 374º.- Para la ejecución de las adquisiciones se pueden firmar convenios adecuados de supervisión de las adquisiciones o de ejecución de las obras y de los servicios.

Artículo 375º.- Los egresos, debidamente clasificados por partidas presupuestales, son publicados dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de las elecciones.

Obligación de efectuar auditoría financiera

Artículo 376º.- En un plazo no mayor de tres meses después del día de las elecciones, se efectúa una auditoría financiera de la ejecución del presupuesto electoral a través de una firma de auditoría debidamente registrada. Se envían copias de los informes a la Contraloría y al Ministerio de Economía y Finanzas; también a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República.

Concordancia: Art. 12° de la LEY N° 26533.

Artículo 377º.- Una vez concluido el proceso electoral, los recursos remanentes del presupuesto de cada organismo del Sistema Electoral se devuelven al Tesoro Público, bajo responsabilidad de la máxima autoridad de cada uno de ellos.

Concordancias: Art. 42° de la LEY N° 26486; art. 13° de la LEY N° 26533; art. 32° de la LEY N° 26487.

CAPITULO 3 DEL TITULO V

De los Recursos Propios

Artículo 378º.- Constituyen recursos propios del Jurado Nacional de Elecciones:

a) Las tasas correspondientes a los recursos de impugnación interpuestos ante este organismo electoral;
b) El 50% de las multas impuestas a los ciudadanos por no concurrir injustificadamente a ejercer su función de Miembro de Mesa para el que se les ha designado o por negarse a integrarla;
c) El 15% de lo recaudado por concepto de multas aplicadas a los ciudadanos omisos al acto de sufragio;
d) El 50% de lo recaudado por verificación de listas de adherentes, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 94º de esta Ley; y,
e) El 5% de todo lo recaudado por los conceptos a que se refiere el inciso a) del Artículo 380º de la presente Ley.

Concordancias: Art. 38° de la LEY N° 26486; art. 14° inc. a), b), y c), de la LEY N° 26533.

Artículo 379º.- Constituyen recursos propios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales:

a) El 45% de lo recaudado por concepto de las multas aplicadas a los ciudadanos omisos al acto de sufragio.
b) El 50% de las multas impuestas a los ciudadanos por no concurrir injustificadamente a ejercer su función de Miembro de Mesa para el que se les ha designado o por negarse a integrarla.
c) El 50% de lo recaudado por verificación de listas de adherentes, conforme al proce dimiento establecido en el Artículo 94º de esta Ley.
d) El 5% de lo recaudado por todo concepto, de los actos registrales, señalados en el inciso a) del artículo siguiente.
e) Los ingresos por servicios a terceros en aspectos electorales.
f) Otros que genere en el ámbito de su competencia.

Concordancias: Art. 28° inc. c), de la LEY N° 26487; art. 15° incs. a), b), y c), de la LEY N° 26533.

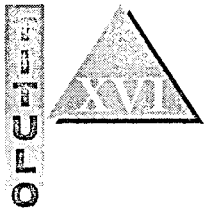
Artículo 380º.- Constituyen recursos propios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil:

a) El 90% de los derechos, tasas y multas correspondientes a los actos registrales ma teria de su competencia.

b) El 40% de lo recaudado por concepto de las multas aplicadas a los ciudadanos omi sos al acto de sufragio.

Concordancias: Art. 24° inc. a) de la LEY N° 26497; art. 16° incs. a), y b), de la LEY N° 26533.

Artículo 381º.- Las autoridades electorales no pueden dejar de cobrar ni condonar tipo alguno de multa, bajo responsabilidad, excepto por mandato de la Ley.



DE LOS DELITOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

CAPITULO 1

CONTRA EL DERECHO DE SUFRAGIO

Pena no menor de un mes, ni mayor de un año

Artículo 382º.- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un mes ni mayor de un año:

a) Los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en situación de disponibilidad o retiro que, vistiendo uniforme, participen en manifestaciones u otros actos de carácter político; asimismo, los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional que hagan ejercicio del sufragio.
b) Aquél que trate de conocer el voto de un elector o de obligarlo a votar por determinado candidato u obstruya el desarrollo de los actos electorales, o provoque desórdenes durante éstos.
c) Aquél que porte armas de cualquier clase durante la realización de los actos electorales oficiales, aunque tenga licencia, sin perjuicio del decomiso del arma y de la cancelación de la licencia.

Pena no menor de 06 meses. ni mayor de 03 años

Artículo 383º.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años:

a) Aquél que integra un Jurado Electoral estando impedido de hacerlo, o suplanta a quien le corresponde integrarlo, o utiliza su nombre para efectuar despachos o comunicaciones.
b) Aquél que instiga a otro a suplantar a un miembro de un Jurado Electoral, o lo obliga a ello mediante violencia o soborno.
c) El miembro de una Mesa de Sufragio que recibe el voto de persona no incluida en la lista de electores de la mesa o rechaza sin justa causa el voto de un elector incluido en dicha lista.
d) Los empleados de Correos y en general toda persona que detenga o demore por cualquier medio, los servicios de correos, telégrafos o mensajeros que transporten o conduzcan ánforas, elementos o comunicaciones oficiales referentes a un proceso electoral.
e. Toda persona que viole los sellos, precintos, envolturas o cerraduras de las ánforas

utilizadas para el acto electoral, o quien viole las comunicaciones oficiales expedidas por los órganos del Sistema Electoral o la que, suplantando a estos, remita comunicaciones, o sustituya votos que hayan sido impugnados. Si el culpable es funcionario o empleado público, además de la pena indicada sufrirá pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 36º del Código Penal.

Concordancias: Artículo 45° de la presente Ley; Art. 36° del CODIGO PENAL.

Texto del artículo 36° del Codigo Penal .- La inhabilitación producirá según disponga la sentencia:

1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.
2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público;
3. Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia;
4. Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia;
5. Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela.
6. Suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego
7. Suspención o cancelación de la autorización para conducir cualquier tipo de vehículo; o
8. Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que hubiese servido el agente para cometer el delito.

Pena no menor de un año. ni mayor de 03 años

Artículo 384º.- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de tres años:

a) Los Presidentes de las Mesas de Sufragio que no cumplan con remitir las ánforas o las Actas electorales. Además sufren pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, conforme a los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 36º del Código Penal. Las mismas penas sufren los participantes en el antes indicado delito.

b) Aquél que mediante violencia o amenaza interrumpe o intenta interrumpir el acto electoral. Si el culpable forma parte integrante de un grupo, la pena es no menor de dos años ni mayor de cinco.

c) Aquél que injustificadamente despoja a una persona de su Documento Nacional de Identificación o lo retiene con el propósito de impedir que el elector concurra a votar. Si el que delinque es funcionario, empleado público o miembro de las Fuerzas Armadas, la pena es de prisión no menor de un año ni mayor de cuatro, con pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, conforme a los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 36º del Código Penal.

d) Aquél que impida o perturbe una reunión en recinto privado o la que se realice en lugar de uso público, convocada con fines electorales es conforme al Artículo 354º del Código Penal.
Si el culpable fuese funcionario o empleado público, además de la pena indicada sufre pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 36º del Código Penal.

Pena no menor de 02 años, ni mayor de 06 años y pena no mayor de 30 dìas de multa

Artículo 385º.- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de seis y pena no mayor de treinta días de multa, así como con pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), y 4) del Artículo 36º del Código Penal:

a) Las autoridades políticas, militares, policiales, municipales y los funcionarios o empleados públicos que, abusando de sus cargos, obliguen a un elector a firmar una lista de adherentes a un partido político o para la presentación de una candidatura, o en favor o en contra de determinado partido, lista o candidato, o los que realicen algún acto que favorezca o perjudique a determinado partido o candidato.

b) Las personas aludidas en el inciso a) de este artículo que, respecto a sus subalternos o particulares, les impongan descuentos o multas u ordenen cambios de colocación o traslados de dichos subalternos o particulares dependientes, con el objeto de favorecer o perjudicar los resultados en favor o en contra de un determinado candidato.

Concordancia: Art. 36° inc. 1), 2), 3), y 4) del CODIGO PENAL.

Pena no menor de 06 meses, ni mayor de 02 años

Artículo 386º.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años aquél que vota con Documento Nacional de Identificación ajeno o sin tener derecho de sufragio.

Concordancia: Art. 266° de la presente Ley.

Pena no menor de 02 años, ni mayor de 05 años

Artículo 387º.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años, ni mayor de cinco aquél que impida, por cualquier medio, que un ciudadano pueda ser designado para integrar un Jurado Electoral Especial.

Pena no menor de 03 meses, ni mayor de 02 años, o Pena no menor de un año, ni mayor de tres años, mas pena accesoria de inhabilitacion por igual tiempo

Artículo 388º.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres meses ni mayor de dos años aquél que instala o hace funcionar Secretarías o locales políticos u oficinas de propaganda, o que organiza o permite reuniones o manifestaciones políticas dentro de zonas prohibidas o en los plazos en que dicha actividad esté suspendida conforme a esta Ley.

Si el culpable es una autoridad política, la pena es no menor de un año ni mayor de tres, además de la pena accesoria de inhabilitación, por igual tiempo del de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 36º del Código Penal.

Pena no menor de 02 años

Artículo 389º.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años aquél que haga propaganda electoral, cualquiera que sea el medio empleado, en las horas en que está suspendida; o aquél que atenta contra la ley, las buenas costumbres, o agravia en su honor a un candidato o a un partido.

Pena no mayor de seis meses y multa no menor del 10% del IMV, mas pena accesoria de inhabilitacion.
OBLIGATORIEDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE EXIGIR CONSTANCIA DE SUFRAGIO

Artículo 390º.- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no mayor de seis meses y pena de multa no menor del diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa más pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo que el de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 36º del Código Penal:

a) Aquellos que hagan funcionar establecimientos destinados exclusivamente a expendio de bebidas alcohólicas, o quienes organizan espectáculos o reuniones prohibidos durante los períodos señalados en el Artículo 190º de la presente Ley.

b) Aquel que destruya, en todo o en parte, impida u obstaculice la propaganda electoral de un candidato o partido; además sufre pena de multa, por el importe del diez por ciento del ingreso diario del condenado, multiplicado por treinta días de multa, de conformidad con los Artículos 41º al 44º del Código Penal.

Las mismas penas se imponen a los instigadores.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 635 DEL CODIGO PENAL

ART. 41º: La pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero, fijada en días-multa.
El importe del dìa-multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza.

ART. 42º : La pena de multa se extenderá de un mínimo de diez dìas-multa a un máximo de trescientos sesenticinco dìas-multa, salvo disposición distinta de la ley.

ART. 43º : El importe del día-multa no podrá ser menor del veinticinco por ciento ni mayor del cincuenta por ciento del ingreso diario del condenado cuando viva exclusivamente de su trabajo.

ART. 44º: La multa deberá ser pagada dentro de los diez días de pronunciada la sentencia. A pedido del condenado y de acuerdo a las circunstancias, el Juez podrá permitir que el pago se efectúe en cuotas mensuales.
El cobro de la multa se podrá efectuar mediante el descuento de la remuneración del condenado cuando se aplica aisladamente o cuando se aplica acumulativamente con pena limitativa de derechos o fuere concedida la suspensión condicional de la pena, conforme a los límites previstos en el Art. 42º.
El descuento no debe incidir sobre los recursos indispensables para el sustento del condenado y su familia.

c) Los registradores públicos, notarios, escribanos, empleados públicos y demás personas que no exijan la presentación del Documento Nacional de Identificación con la constancia de sufragio en las últimas elecciones, o la dispensa de no haber votado otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, a fin de identificar a quienes intentan realizar actos que requieran tal presentación sin hacerla.

Multa no menor al 25% del IMV, con una duracion de 60 dias-multa, mas pena accesoria de inhabilitacion por el tiempo de la pena principal

Artículo 391º.- Sufre la pena de multa cuyo importe no es menor del veinticinco por ciento del ingreso mínimo vital, con una duración de sesenta días, multa de conformidad con los Artículos 41º al 44º del Código Penal, y la pena accesoria de inhabilitación, prevista en los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 36º del Código Penal por el tiempo de la pena principal, el ciudadano que injustificadamente se abstenga de integrar un Jurado Electoral.

Multa no menor al 50% del IMV con duracion de 15 dias

Artículo 392º.- Sufre pena de multa cuyo importe no es menor del cincuenta por ciento del ingreso mínimo vital, con una duración de quince días, de conformidad con los Artículos 41ºal 44º del Código Penal, el ciudadano que habiendo salido sorteado para integrar una mesa de sufragio no concurra a su instalación.

Artículo 393º.- Los artículos anteriores de este Título rigen, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículo 354º al 360º del Código Penal.

CODIGO PENAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 635 CODIGO PENAL
TITULO XVII

DELITOS CONTRA LA VOLUNTAD POPULAR CAPITULO UNICO
DELITOS CONTRA EL DERECHO DE SUFRAGIO

Artículo 354°.- El que, con violencia o amenaza, perturba o impide que se desarrolle un proceso electoral general, parlamentario, regional o local, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años.

Artículo 355°.- El que, mediante violencia o amenaza, impide a un elector ejercer su derecho de sufragio o le obliga a hacerlo en un sentido determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Artículo 356°.-El que, mediante dádivas, ventajas o; promesas trata de inducir a un elector no votar o a votar en un sentido determinando, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Artículo 357°.- El que, suplanta a otro votante o vota mas de una vez en la misma elección o sufraga sin tener derecho, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Artículo 358°.- El elector que, da a publicidad el sentido de su voto en el acto electoral, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año o con prestación de servicio comunitario de veinte a treinta jornadas.

Artículo 359°.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral, realiza cualquiera de las acciones siguientes:

1. Inserta o hace insertar o suprime o hace suprimir, indebidamente, nombres en la formación de un registro electoral.
2. Falsifica o destruye de cualquier modo en todo o en parte un registro electoral, libretas electorales o actas de escrutinio u oculta, retiene o hace desaparecer los documentos mencionados, de manera que el hecho pueda dificultar la elección o falsear su resultado.
3. Sustrae, destruye o sustituye ánforas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio.
4. Sustrae, destruye o sustituye cédulas de sufragio que fueron depositadas por los electores.
5. Altera, de cualquier manera, el resultado de una elección o torna imposible la realización del escrutinio.
6. Recibe, siendo miembro de una mesa de sufragio, el voto de un ciudadano no incluido en la lista de electores de esa mesa o rechaza injustificadamente

el voto de un elector incluido en dicha lista.

7. Despoja a un ciudadano, indebidamente, de su libreta electoral o la retiene con el propósito de impedirle que sufrague.

Artículo 360º.- El funcionario o servidor público o miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que incurra en uno de los delitos previstos en este Título sufrirá, además, inhabilitación de uno a tres años conforme al artículo 36º, incisos 1 y 2.



DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera Disposición Transitoria

Mientras no se implemente el Número Unico de Identificación y el Documento Nacional de Identidad, en cada distrito político de la República hay tantas Mesas de Sufragio como Libros de Inscripción Electoral les corresponda. Debe tener cada Mesa la misma numeración del Libro de Inscripción respectivo.

Segunda Disposición Transitoria

El Jurado Nacional de Elecciones expide las Normas Reglamentarias que requiera el trámite de los recursos indicados en los Artículos 34º y 35º de la presente ley.

Primera Disposición Final

Deróganse o déjanse en suspenso, según sea el caso, las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la presente Ley.

Segunda Disposición Final

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es un registro de carácter público.

Tercera Disposición Final

La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Comuníquese al Señor Presidente de la República para su promulgación

En Lima, a los veintinueve días del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete.

CARLOS TORRES Y TORRES LARA, Presidente del Congreso de la República.
EDITH MELLADO CESPEDES, Primera Vicepresidenta del Congreso de la República.

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA,.

POR TANTO:

No habiendo sido promulgado oportunamente por el señor Presidente de la República, en observancia de lo dispuesto por el Artículo 108º de la Constitución Política del Perú, mandó se comunique a la Presidencia del Consejo de Ministros para su publicación y cumplimiento.

En Lima, a los veinticinco días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y siete.

CARLOS TORRES Y TORRES LARA Presidente del Congreso de la República. EDITH MELLADO CESPEDES Primera Presidenta del Congreso de la República.

Lima, 29 de setiembre de 1997

Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
ALBERTO PANDOLFI ARBULU Presidente del Consejo de Ministros.

LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES

LEY Nº 26864

TITULO I : DISPOSICIONES GENERALES
(arts. 1° y 2°)

TITULO II : DE LA CONVOCATORIA
(arts. 3°, 4° y 5°)

TITULO III : DE LAS INSCRIPCIONES Y CANDIDATOS
(arts. 6° al 22°)

TITULO IV: DEL COMPUTO Y PROCLAMACION
(arts. 23° al 36°)

DISPOSICIONES ESPECIALES
(art 37)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
(1ra , 2da, 3ra y 4ta)

LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES

LEY Nº 26864

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La presente Ley norma la organización y ejecución de las elecciones municipales, en concordancia con la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Elecciones.
En las elecciones municipales se eligen Alcaldes y Regidores de los Concejos Municipales Provinciales y Distritales en toda la República, con la excepción de los Distritos Capitales de Provincia (Distritos de Cercado).
Las elecciones municipales se realizan cada cinco años.

Concordancias: Arts. 2° Inc. 17), 31°, 34°, 35°, 49°, 191°, 196° y Duodécima Disposición Final y Transitoria de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; arts. 1º y 2º de la LEY Nº 26859.

Distrito Electoral

Artículo 2º.- Para la elección de los Concejos Municipales Provinciales cada provincia constituye un distrito electoral.
Para la elección de los Concejos Municipales Distritales cada distrito constituye un distrito electoral.

Concordancias: Quinta Disposición Final y Transitoria de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA; arts. 13º y 14º de la LEY Nº 26859.

TITULO II

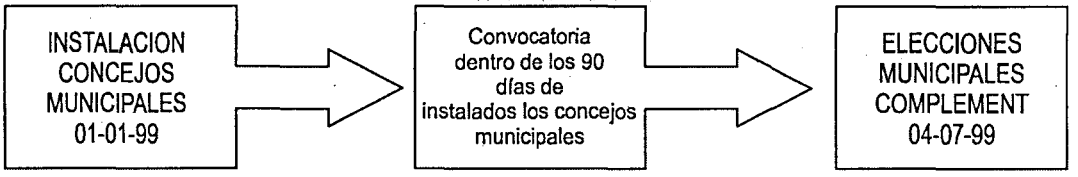
DE LA CONVOCATORIA

Artículo 3º.- El Presidente de la República convoca a elecciones municipales, obligatoriamente, con una anticipación de 150 días naturales a la fecha de las elecciones, las que se llevan a cabo el segundo domingo del mes de octubre del año en que finaliza el mandato legal de las autoridades municipales.

Elecciones Municipales Complementarias

Artículo 4º.- La convocatoria a Elecciones Municipales Complementarias se efectúa dentro de los noventa (90) días naturales siguientes a la instalación de los Concejos Municipales y se realizan el primer domingo del mes de julio del año en que se inicia el mandato legal de las autoridades municipales.

PLAZO PARA CONVOCATORIA A ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 1999



Artículo 5º.- Si el Presidente de la República no convocara a Elecciones Municipales o a Elecciones Municipales Complementarias dentro de los plazos establecidos en la presente ley, la convocatoria es efectuada por el Presidente del Congreso de la República dentro de los quince (15) días naturales siguientes al vencimiento del dichos plazos. Mientras se realiza la segunda vuelta electoral o las elecciones complementarias, continúan en sus cargos los alcaldes y regidores en funciones.

Concordancia: Art. 5° Reglamento del Congreso publicado el 26.06.95.

TITULO III

DE LAS INSCRIPCIONES Y CANDIDATOS

Artículo 6º.- Para ser elegido Alcalde o Regidor se requiere:

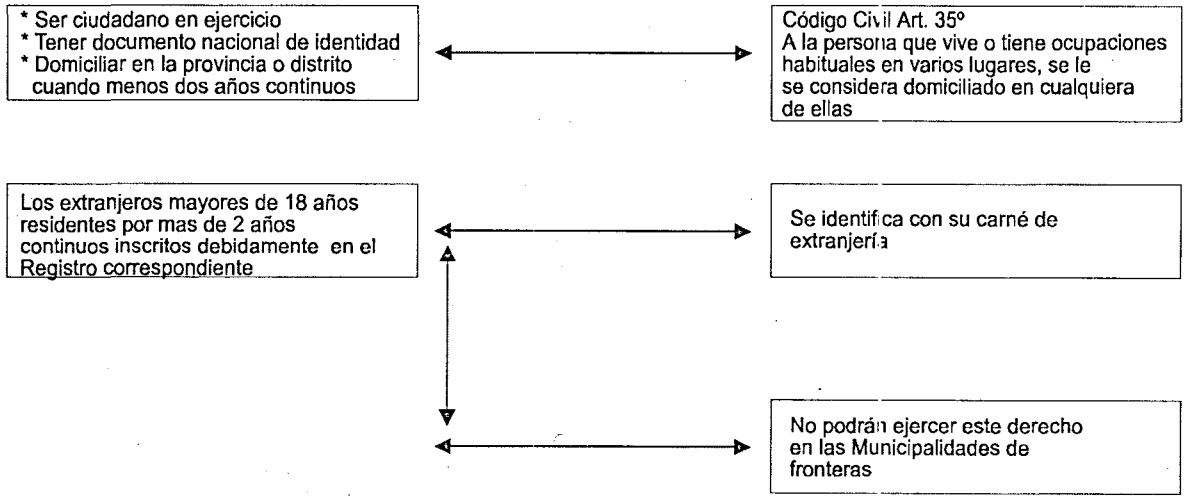
1.- Ser ciudadano en ejercicio y tener Documento Nacional de Identidad.
2.- Domiciliar en la provincia o el distrito donde se postule, cuando menos dos años continuos. En caso de domicilio múltiple rigen las disposiciones del Artículo 35º del Código Civil.

Concordancias: Arts. 1º ,2º incs. 2), 17),18) y 24) apartado a) 30º y 31º de la CONSTITUCION POLITICA; art. 35º y 42º del CODIGO CIVIL; arts. 26º, 27º, 29º y 31 de la LEY Nº 26497; arts. 7º, 8º y 9º de la LEY Nº 26859

Artículo 7º.- Los extranjeros mayores de 18 años, residentes por más de dos años continuos previos a la elección, están facultados para elegir y ser elegidos, excepto en las municipalidades de frontera, siempre y cuando estén debidamente inscritos en el registro correspondiente. Para ejercer este derecho, el extranjero se identifica con su respectivo carné de extranjeria.

Concordancia: Resolución Nº 328-98-JNE - Aprueban el reglamento de inscripción de extranjeros residentes en el Perú para elegir o postular a elecciones Municipales

DIAGRAMAS DE REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION



No pueden ser candidatos

Artículo 8º.- No pueden ser candidatos en las elecciones municipales, salvo que renuncien sesenta (60) días antes de la fecha de las elecciones:

1.- Los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, los Prefectos, Subprefectos, Gobernadores y Tenientes Gobernadores.

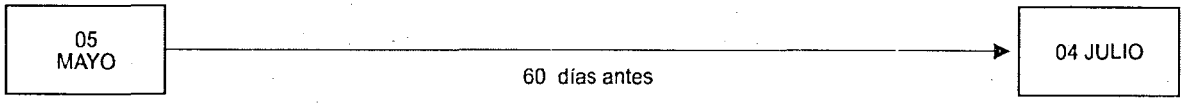
2.- Los Miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura y de los organismos integrantes del Sistema Electoral.

3.- Los Presidentes de los Consejos Transitorios de Administración Regional.

4.- Los Jefes de los Organismos Públicos Descentralizados y los Directo res de las empresas del Estado.

Concordancias: Art . 126° (2do Párrafo) de la CONSTITUCION POLITICA; art. 23º incisos 2), 3) y 4) de la LEY Nº 23853

PLAZO MAXIMO PARA QUE ALTOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PRESENTEN RENUNCIA AL CARGO, SI POSTULAN EN ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 1999

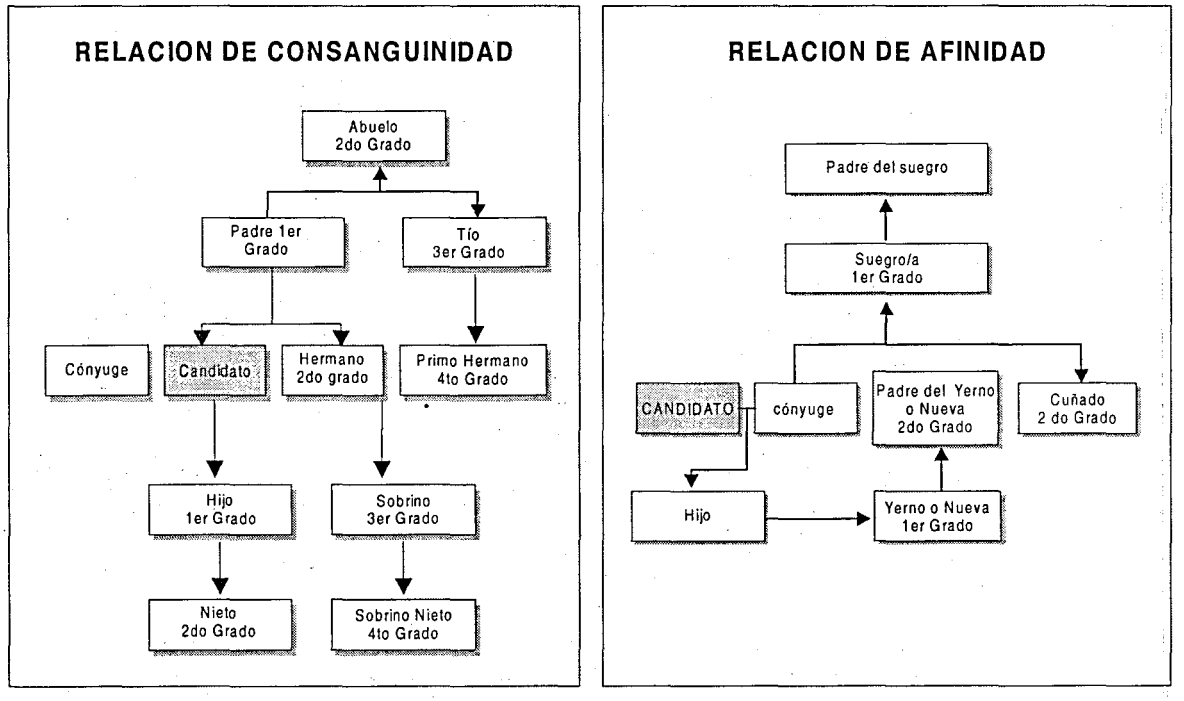


Impedimentos para ser candidatos

Artículo 9º.- Están impedidos de ser candidatos en elecciones municipales:

1.- Los Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en actividad.

2.- El cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo con el candidato que postula a la Alcaldía o a Regidor, cuando postulen en la misma lista.



3.- Los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, así como de los organismos y empresas del Estado y de las Municipalidades, si no solicitan licencia sin goce de haber, la misma que debe serles concedida treinta (30) días naturales antes de la fecha de las elecciones.

Concordancias: Arts. 39° y 40º (2do Párrafo) de la CONSTITUCION POLITICA

DECLARAN QUE ALCALDES Y REGIDORES EN EJERCICIO NO ESTAN OBLIGADOS A RENUNCIAR PARA POSTULAR COMO CANDIDATOS EN ELECCIONES MUNICIPALES

RESOLUCIÓN N° 274-98-JNE

Lima 11 de junio de 1998

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3) del Artículo 9º de la Ley de Elecciones Municipales Nº 26864, están impedidos de ser candidatos en elecciones municipales, entre otros, los trabajadores y funcionarios de las Municipalidades si no solicitan licencia sin goce de haber, la misma que debe serles concedida treinta (30) días naturales antes de la fecha de las elecciones;

Que, los alcaldes y regidores están considerados como funcionarios públicos, según lo dispuesto por el Artículo 25º de la Ley Nº 23853, "Ley Orgánica de Municipalidades", concordante con el Artículo 39º de la Constitución Política del Perú;

Que, la función pública del alcalde o del regidor tiene una naturaleza diferente a la de los funcionarios o empleados de carrera, por cuanto ostentan el cargo en función a un mandato conferido por elección, de conformidad con el Artículo 191º de la Constitución Política del Perú.

Que, los actuales alcaldes y regidores han sido elegidos para el período 1996-1998, por tanto, no están obligados a renunciar para volver a postular, pudiendo ser reelegidos de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 191º de la mencionada Carta Magna y el Artículo 25º de la Ley 23853;

Que, por esa naturaleza singular de la función pública de los alcaldes y regidores se estima no es del caso, de otro lado, requerírseles obtener licencia, sin goce de haber, para postular a la reelección, pues ello representaría entrabar esa facultad, a más atentar al normal funcionamiento de los municipios.

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones;

RESUELVE POR MAYORIA:

Artículo Unico.- Declarar que los alcaldes y regidores en actual ejercicio no están obligados a renunciar a sus cargos ediles ni a solicitar licencia, para postular como candidatos en las Elecciones Municipales del 11 de octubre próximo.

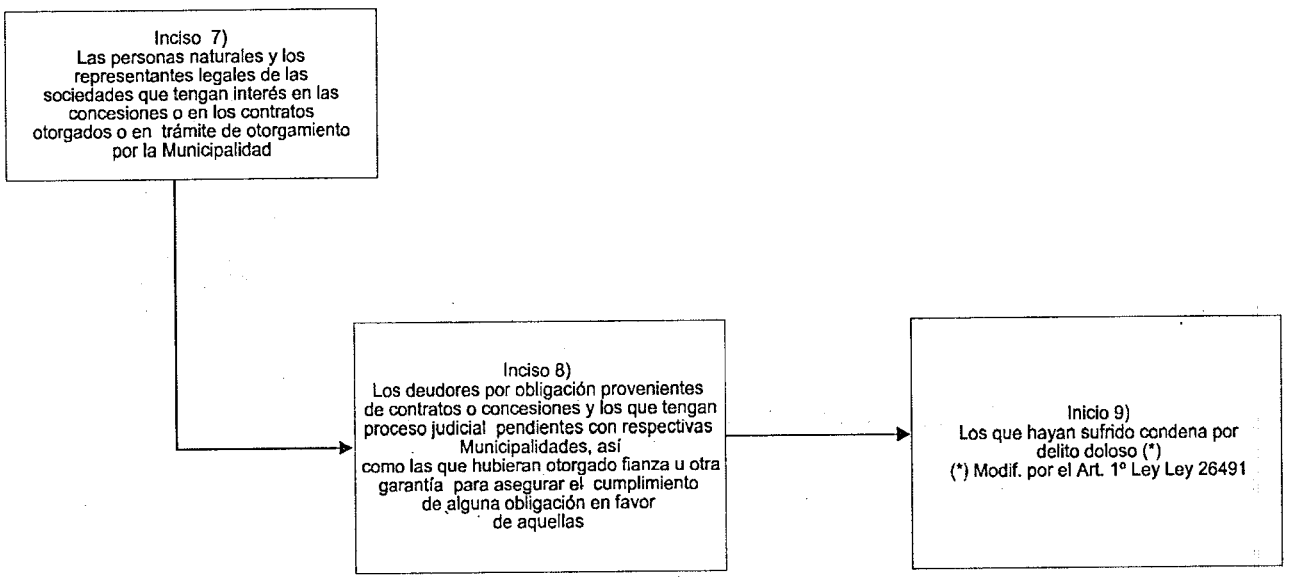
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. CHOCANO MARINA, MUÑOZ ARCE; DE VALDIVIA CANO;

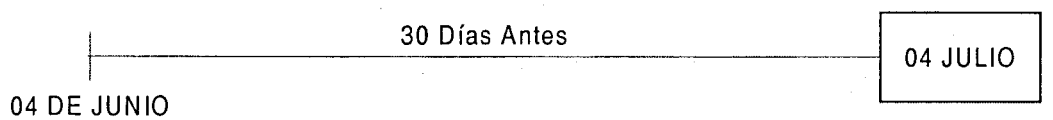
4.- Los ciudadanos a los que se refieren los incisos 7) 8) y 9) del Artículo 23º de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Concordancias: Art. 1º de la LEY Nº 26491

Ley Orgánica de Municipalidades Art. 23º Incisos 7, 8 y 9 No pueden desempeñar cargos de Alcalde y Regidores



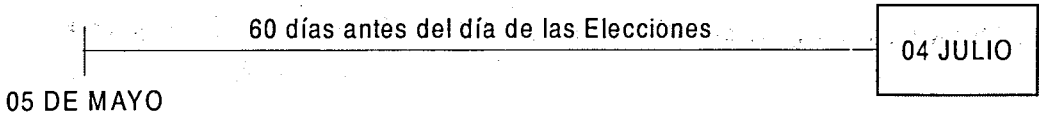
SOLICITUDES DE LICENCIAS DEBEN SER CONCEDIDAS 30 DIAS ANTES DE LA FECHA DE LAS ELECCIONES



Requisitos para la inscripcion de candidatos

Artículo 10º.- El plazo para presentar la solicitud de inscripción de la Lista de Candidatos a Alcalde y Regidores que pertenezcan a un Partido Político, Alianza de Partidos o Lista Inde pendiente, vence sesenta (60) días naturales antes de la fecha de las elecciones.

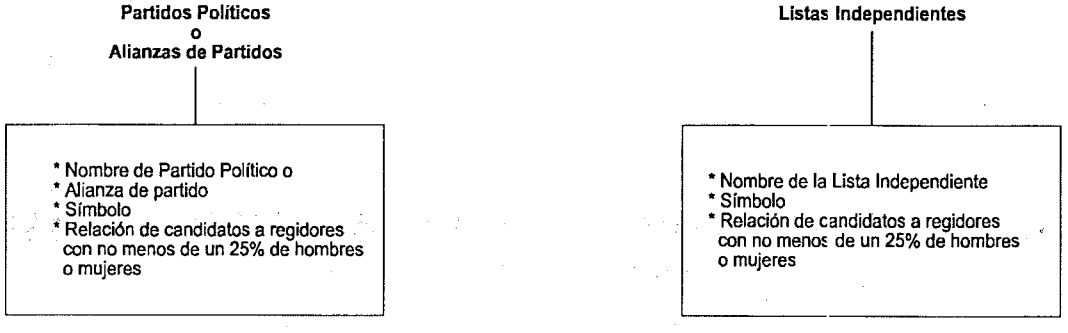
PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS A ALCALDES Y REGIDORES



Los candidatos deben presentar su solicitud de inscripción ante la respectiva Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, adjuntando un documento que contenga el nombre del Partido Político, Alianza de Partidos o Lista Independiente, su símbolo y la relación completa de todos los candidatos. La referida Oficina, luego de verificado el cumplimiento de los requisitos formales, remitirá la solicitud al Jurado Electoral correspondiente, para su inscripción.

Concordancias: Arts. 12º, 117º y 166º de la LEY Nº 26859; RESOLUCIÓN Nº 280 - 98-JNE; arts. 5º Inciso m), 27º Inc. i) de la LEY Nº 26487; art. 2º de la ley Nº 26591;

CONTENIDO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION



La Lista de Candidatos se presenta en un solo documento y debe contener:

1.- Los apellidos, nombres y firmas de los candidatos, tal como figuran en su Documento Nacional de Identidad, así como el número del mismo y sus respectivos domicilios reales.

2.- El número correlativo que indique la posición de los candidatos a Regidores en la lista, que debe estar conformada por no menos de un 25% de hombres o mujeres.

Porcentaje de adherentes exigidos

Artículo 11º.- Las candidaturas que no sean patrocinadas por un partido político debidamente inscrito deben presentar, para su inscripción, en forma individual, una relación de adherentes que no sea menor al 2.5% del total de electores hábiles de la circunscripción provincial o distrital donde postulen, según corresponda. Deben efectuar la presentación de las listas de adherentes, según lo dispuesto en el artículo precedente, en los lugares donde existan las facilidades respectivas y según lo disponga la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Concordancia: RESOLUCIÓN N° 149-98-JNE; arts. 87° y 88° de la LEY N° 26859; y la RESOLUCION N° 066-98-JNE.

DISPOSICION RELATIVA A LA INSCRIPCION DE CANDIDATOS A ALCALDES Y REGIDORES DISTRITALES PATROCINADOS POR LISTAS INDEPENDIENTES QUE HALLAN SIDO DECLARADAS APTAS PARA UNA CANDIDATURA PROVINCIAL

RESOLUCION N° 149-98-JNE

Lima, 21 de abril de 1998

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente dictar disposiciones relativas a la inscripción de candidatos a alcaldes y regidores provinciales y distritales patrocinados por listas independientes, con motivo del proceso municipal a realizarse el 11 de octubre próximo;

Que, para la inscripción de una lista de candidatos a alcalde y regidores de un concejo provincial, se debe acompañar a la solicitud de inscripción el 2.5% de firmas de adherentes del total de electores hábiles de toda la provincia, la cual incluye no solo al electorado del Cercado de la capital de provincia sino también al de los distritos que la conforman;

Que, en consecuencia, a la lista independiente que postule candidatos a un concejo provincial y cuya inscripción haya sido declarada apta y que desee postular, al mismo tiempo, candidatos por uno o más concejos distritales de la misma circunscripción provincial, no debe exigírsele nuevamente, en cada caso, la presentación de adherentes para listas distritales que señala el Artículo 11º de la Ley de Elecciones Municipales N° 26864;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones;

RESUELVE:

Articulo Unico.- Autorizar a los patrocinadores de las listas independientes que hayan solicitado la inscripción de candidatos a alcalde y regidores para concejo provincial cumpliendo con todos los requisitos de ley y cuya inscripción haya sido admitida y declarada apta para participar en el proceso de elecciones municipales a realizarse el 11 de octubre de 1998, la presentación de candidatos a alcalde y regidores para uno o más concejos distritales comprendidos dentro de la misma circunscripción provincial, sin necesidad de acompañar nuevas firmas de adherentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. CHOCANO MARINA; CATACORA GONZALES; MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO, DE VALDIVIA CANO; Secretario General, TRUJILLANO

Artículo 12º.- La solicitud de inscripción debe ser suscrita por el Personero del Partido Político o de la Alianza de Partidos acreditados ante el Jurado Electoral Especial respectivo. La solicitud de inscripción de Listas Independientes debe ser suscrita por todos los candidatos y por el personero que acrediten.

Concordancias: Arts. 127° y 129° Inc. b), de la LEY N° 26859.

Denominacion y Símbolos

Artículo 13°.- La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales no admitirá solicitudes de inscripción cuya denominación o símbolo sea igual o muy semejante a los de Partidos Políticos, Alianzas de Partidos o Listas Independientes ya inscritas. Tampoco admitirá como denominaciones o símbolos las marcas comerciales o industriales y las que resulten lesivas o alusivas a nombres de instituciones o personas, o que atenten contra la moral y las buenas costumbres.

Concordancias: Arts. 89° y 164° de la LEY N° 26859.

Afiliados a partidos políticos no pueden integrar las listas independientes

Artículo 14º.- No podrán inscribirse como candidatos en Listas Independientes los afiliados a Partidos Políticos o Alianzas de Partidos inscritos, a menos que cuenten con autorización expresa de la agrupación política a la que pertenecen, la cual debe adjuntarse con la solicitud de inscripción, y que éstos no presenten candidatos en la respectiva circunscripción.
No se podrá postular por más de una lista de candidatos.

Concordancias: Arts. 90° y 118° de la LEY N° 26859.

Publicacion de listas

Artículo 15º.- Cerrada la inscripción de candidatos, los Jurados Electorales Especiales mandan publicar, por medio de avisos o carteles, las listas de candidatos inscritos en la capital de la provincia y en la del distrito correspondiente, a través de las Oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Copias de todas las listas son remitidas a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y al Jurado Nacional de Elecciones.

Concordancias: Arts. 36° inc. a) de la LEY N° 26486; Art. 10° de la LEY 26864.

Tachas

Artículo 16º.- Dentro de los tres (3) días naturales siguientes a la publicación referida en el articulo precedente, cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil puede formular tacha contra cualquier candidato fundada sólo en la infracción de lo dispuesto en la presente ley.
La solicitud de tacha será acompañada de un comprobante de empoce en el Banco de la Nación, a la orden del Jurado Nacional de Elecciones, por el equivalente a 0.25 de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada candidato tachado. Si la tacha es declarada fundada el dinero se devuelve al solicitante.

Concordancias: Art. 14° inc. a) de la LEY 26533; art. 120° de la LEY N° 26859; arts. 6°, 7°, 8°, y 9° de la LEY N° 26864.

DETERMINAN VALOR DE LA U.I.T. PARA 1999

DECRETO SUPREMO N° 123-98-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la Norma XV del Título Preliminar del Código Tributario, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un valor de referencia que puede ser utilizado en las demás normas tributarias, entre otros;

Que asimismo, dispone que el valor de la UIT será determinado mediante Decreto Supremo, considerando los supuestos macroeconómicos;

Al amparo de lo dispuesto en la Norma XV del Titulo Preliminar del Código Tributario;

DECRETA:

Artículo 1°.- A partir del 1 de enero de 1999, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias, es de Dos Mil Ochocientos Nuevos Soles (S/.2, 800).

Artículo 2°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

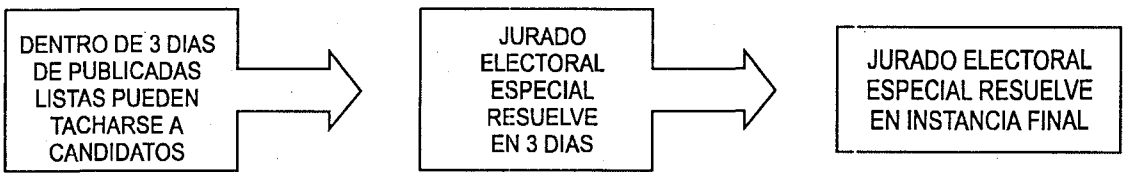
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República

JORGE BACA CAMPODÓNICO Ministro de Economía y Finanzas

Tachas a candidatos distritales

Artículo 17º.- Las tachas contra los candidatos a Alcaldes y Regidores de los Concejos Municipales Distritales son resueltas en única instancia por los Jurados Electorales Especiales en el término de tres (3) días naturales.

TACHAS A CANDIDATOS A CONCEJOS DISTRITALES



Las resoluciones correspondientes se publican al día siguiente de su expedición y se remite una copia a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.

Concordancia: Art. 36° Inc. f) de la LEY 26486.

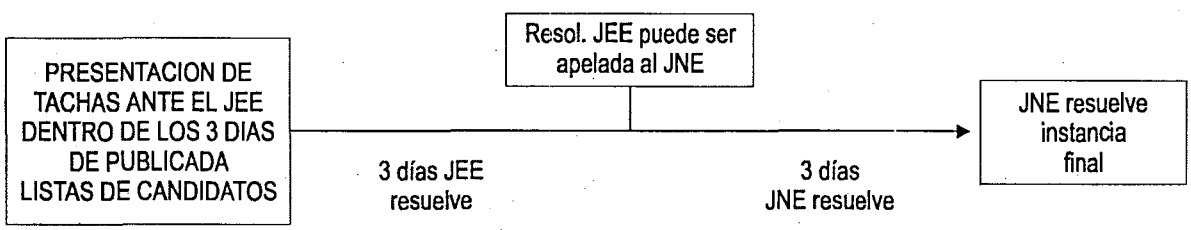
Tachas a candidatos provinciales y Lima metropolitana

Artículo 18º.- Las tachas contra los candidatos a Alcaldes y Regidores de los Concejos Municipales Provinciales y de los Concejos Distritales del Area Metropolitana de Lima son resueltas por los Jurado Electorales Especiales conforme al artículo precedente. La resolución puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones en el término de tres (3) días naturales quien resuelve en igual plazo. Las resoluciones correspondientes se publican al día siguiente de su expedición y se remite una copia a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.

El Jurado Nacional de Elecciones formula denuncia penal por las infracciones que pudieran cometer los Jurados Electorales Especiales al emitir resolución.

Concordancias: Art. 36° Incs. s) y t) de la LEY Nº 26486; Arts. 8º Y 9º de la ley 26864 ; Art. 3º incisos a) y c) de la LEY Nº 26533; y art. 23º de la ley 23853

TACHAS A CANDIDATOS PROVINCIALES Y LIMA METROPOLITANA



Artículo 19º.- La tacha que se declare fundada respecto de uno o más candidatos de un Partido Político, Alianza de Partidos o Listas Independientes no invalida la inscripción de los demás candidatos quienes participan en la elección como si integrasen una lista completa.Tampoco se puede invalidar las inscripciones por muerte o renuncia de alguno de sus integrantes.

Concordancia: Art. 123° de la LEY N° 26859.

Listas aptas

Artículo 20º.- Resueltas las tachas y ejecutadas las resoluciones, cada Jurado Electoral Especial entrega a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales correspondiente las listas que hayan quedado aptas para intervenir en las elecciones dentro del ámbito de su circunscripción .
Todas las tachas contra candidatos deben quedar resueltas antes de la fecha de las elecciones.

Concordancia: Art. 123° de la LEY N° 26859.

Impresión y publicación de los carteles

Artículo 21º.- La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales manda imprimir dos tipos de carteles:

1.- Uno, con el nombre de la provincia y de los Partidos Políticos, Alianza de Partidos y Listas independientes que postulan al Concejo Provincial indicando su símbolo y la relación de todos los candidatos. Este cartel debe fijarse en sitios visibles de la capital de la provincia.

2.- Otro, para cada distrito de la provincia que, además de incluir los datos referidos en el numeral precedente, debe indicar los nombres de los Partidos Políticos, Alianza de Partidos y Listas Independientes que postulan al Concejo Distrital correspondiente, el símbolo de cada uno de ellas y la relación de todos los candidatos. Este cartel debe fijarse en sitios visibles de cada distrito.

Concordáncias: Art. 5° Inc. b) de la LEY N° 26487; y, art. 169° de la LEY N° 26859.

Artículo 22º.- La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales cuida que los carteles referidos en el artículo precedente tengan la mayor difusión posible y que se fijen el día de las elecciones en un lugar visible del local donde funcione la mesa correspondiente y, especialmente, dentro de la Cámara Secreta, bajo responsabilidad de los coordinadores electorales en cada local de votación y de los miembros de la Mesa de Sufragio.
Cualquier elector puede reclamar al Presidente de Mesa por la ausencia del referido cartel.

Concordancias: Arts. 170°, 210º y 256° de la LEY Nº 26859; y, el art. 27° Inc. f) de la LEY N° 26487.

TITULO IV

DEL COMPUTO Y PROCLAMACION

Artículo 23º.- El Presidente del Jurado Electoral Especial correspondiente, proclama Alcalde al ciudadano que ocupe el primer lugar de la lista que obtenga la votación más alta, siempre y cuando ésta represente más del 20% de los votos válidos.
Si ninguna lista alcanza el porcentaje antes señalado, se procede a una segunda elección en la que participan las listas que hubieren alcanzado las dos más altas votaciones, dentro de los treinta (30) días siguientes a la proclamación oficial de los resultados de la primera elección.

Concordancias: Arts. 287º, 316º, 317º y 322° de la LEY Nº 26859; y el art. 36° inc. h) de la LEY N° 26486.

Artículo 24º.- El número de regidores a elegirse en cada Concejo Municipal es determinado por el Jurado Nacional de Elecciones en proporción a su población. En ningún caso será inferior a cinco (5) ni mayor de quince (15). Se exceptúa al Concejo Provincial de Lima que tendrá treinta y nueve (39) regidores.

Concordancias: Resoluciones Nos. 148 y 280-98-JNE.

PRECISAN NÚMERO DE REGIDORES A ELEGIRSE EN LOS CONCEJOS PROVINCIALES Y DISTRITALES DEL PAIS

RESOLUCION No.148-98-JNE

Lima, 21 de abril de1998

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo dispuesto por el Decreto Supremo No.012-98-PCM, el señor Presidente de la República ha convocado a Elecciones Municipales en las provincias y distritos de todo el territorio nacional para el segundo domingo del mes de octubre próximo;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24°de la Ley N° 26864 "Ley de Elecciones Municipales", el número de Regidores a elegirse en cada Concejo Municipal es determinado por el Jurado Nacional de Elecciones en proporción a su población, siendo que en ningún caso será inferior a cinco (05) ni mayor de quince (15), exceptuándose al Concejo Provincial de Lima que tendrá treinta y nueve (39) Regidores;

Que, con Oficio N° 059-98-INEI/DTDES recibido el 10 de marzo pasado, el señor Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Economista Félix Murillo Alfaro, remitió a este Organo Electoral, una relación con la población estimada al 30 de junio de 1998 por cada departamento, provincia y distrito de la República;

Que, es necesario determinar el número de Regidores que corresponde a cada Concejo Municipal, teniendo en cuenta lo dispuesto por la norma legal acotada, y la información

sobre población remitida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la siguiente forma:

Concejos Municipales Provinciales y Distritales con población estimada en 500,0001 o más habitantes :15 Regidores.
Concejos Municipales Provinciales y Distritales con población estimada en 300,001 y hasta 500,000 habitantes: 13 Regidores.
Concejos Municipales Provinciales y Distritales con población estimada en 100,001 y hasta 300,000 habitantes: 11 Regidores.
Concejos Municipales Provinciales y Distritales con población estimada en 50,001 y hasta 100,000 habitantes: 09 Regidores.
Concejos Municipales Provinciales y Distritales con población estimada en 25,001 y hasta 50,000 habitantes: 07 Regidores.
Concejos Municipales Provinciales y Distritales con población estimada en 25,000 o menos habitantes: 05 Regidores.

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- El Concejo Provincial de Lima Metropolitana estará constituido por un Alcalde y 39 Regidores.

Artículo Segundo.- Estarán constituidos por un Alcalde y 15 (quince) Regidores los Concejos Municipales:.

a).- Provinciales de Arequipa, Callao, Chiclayo, Piura y Trujillo; y,
b).- Distrital de la Provincia de Lima: San Juan de Lurigancho.

Artículo Tercero.- Estarán constituidos por un Alcalde y 13 (trece) Regidores los Concejos Municipales:

a).- Provinciales del Cusco, Huancayo, Maynas y Santa y,
b).- Distritales de la Provincia de Lima: Ate, Comas, Los Olivos, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Artículo Cuarto.- Estarán constituidos por un Alcalde y 11 (once) Regidores los Concejos Municipales:

a)- Provinciales de Abancay, Alto Amazonas, Andahuaylas, Ascope, Ayabaca, Azángaro, Barranca, Cajamarca, Canchis, Cañete, Coronel Portillo, Cutervo, Chanchamayo, Chincha, Chota, Huamanga, Huancabamba, Huancavelica, Huánuco, Huaral, Huaráz, Huaura, Ica, Jaén, Jauja, La Convención, Lambayeque, Leoncio Prado, Morropón, Pasco, Pisco, Puno, San Ignacio, San Martín, San Román, Sánchez Carrión, Satipo, Sullana, Tacna, Talara, Tarma, Tayacaja, Tumbes y Utcubamba.; y,

b)- Distritales de Paucarpata, en la Provincia de Arequipa; de Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao, de José Leonardo Ortiz, en la Provincia de Chiclayo; del El Tambo en la Provincia de Huancayo; de Carabayllo, Chorrillos, El Agustino, Independencia, La Molina, La Victoria, Lurigancho, Puente Piedra, Rimac, San Borja, San Miguel, Santa Anita, Santiago de Surco, en la Provincia de Lima; de Castilla, en la Provincia de Piura; y, de La Esperanza, en la Provincia de Trujillo.

Artículo Quinto,- Estarán constituidos por un Alcalde y 09 (nueve) Regidores, los Concejos Municipales:

a)- Provinciales de Ambo. Anta, Bagua, Cajabamba, Calca, Carabaya, Celendín, Concepción, Chepén, Chincheros, Chucuito, Chumbivilcas, Chupaca, El Collao, Espinar, Ferreñafe, Hualgayoc, Huamalíes, Huancané, Huanta, Huari, Huarochirí, Huaylas, Ilo, Islay, La Mar, Lamas, Loreto, Lucanas, Mariscal Cáceres, Mariscal Nieto, Melgar, Moyobamba, Nazca, Otuzco, Oxapampa, Pacasmayo, Pachitea, Padre Abad, Paita, Patáz, Quispicanchis, Requena, Rioja, San Marcos, San Miguel, Sandia, Santiago de Chuco, Tambopata, Tocache, Ucayali, Urubamba, Yauli, Yungay y Yunguyo; y,

b)- Distritales de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar y Miraflores en la Provincia de Arequipa; de Bellavista y la Perla, en la Provincia Constitucional del Callao; Santiago y Wanchaq, en la Provincia del Cuzco; de La Victoria, en la Provincia de Chiclayo; de Chilca, en la Provincia de Huancayo; de Amarílis, en la Provincia de Huánuco; de Independencia, en la Provincia de Huaráz; de Echarate, en la Provincia de La Convención; Breña, Jesús María, Lince, Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro y Surquillo, en la Provincia de Lima; de Punchana, en la Provincia de Maynas; de Catacaos y Tambogrande, en la Provincia de Piura; de Nuevo Chimbote, en la Provincia de Santa; y, de El Porvenir y Víctor Larco Herrera, en la Provincia de Trujillo.

Artículo Sexto.- Estarán constituidos por un Alcalde y 07 (siete) Regidores, los Concejos Municipales:

a)- Provinciales de Acobamba, Acomayo, Angaraes, Atalaya, Aymaraes, Bellavista, Bolognesi, Camaná, Canas, Cangallo, Caravelí, Carhuáz, Casma, Castilla, Caylloma, Condorcanqui, Conturnazá, Cotabambas, Chachapoyas, Churcampa, Daniel Alcides Carrión, Dos de Mayo, El Dorado, Fajardo, Gran Chimú, Grau, Huallaga, Huarmey, Julcán, Junín, Lampa, Lauricocha, Luya, Mariscal Luzurriaga, Mariscal Ramón Castilla, Moho, Pallasca, Paruro, Paucartambo, Picota, Pomabamba, Puerto Inca, San Antonio de Putina, San Pablo, Santa Cruz, Sechura, Virú, Yarowilca, Yauyos y Zarumilla; y,

b)- Distritales de Socabaya, en la Provincia de Arequipa, de Casa Grande, en la Provincia de Ascope; de Pacaipampa, en la Provincia de Ayavaca; de Imaza, en la Provincia de Bagua; de Paramonga, en la Provincia de Barranca; de los Baños del Inca, en la Provincia de Cajamarca; de Carmen de la Legua Reynoso, en la Provin-

cia Constitucional del Callao; de Imperial, en la Provincia de Cañete; de Yarinacocha, en la Provincia de Coronel Portillo; de San Sebastián, en la Provincia del Cusco; de Perené, Pichanaqui y San Ramón, en la Provincia de Chanchamayo; de Monsefú, Saña y Tumán, en la Provincia de Chiclayo; de Pueblo Nuevo, en la Provincia de Chincha; de San Juan Bautista, en la Provincia de Huamanga; de Huarmaca, en la Provincia de Huancabamba; de Yauli, en la Provincia de Huancavelica; de Chinchao, en la Provincia de Huánuco; de Chancay, en la Provincia de Huaral; de Hualmay y Huaura, en la Provincia de Huaura; de La Tinguiña y Parcona, en la Provincia de Ica, Morropón y Olmos, en la Provincia de Leoncio Prado; de Barranco, Chaclacayo, Lurín, Magdalena del Mar, Pachacamac y San Luis, en la Provincia de Lima; de Usquil, en la Provincia de Otuzco; de Guadalupe y Pacasmayo, en la Provincia de Pacasmayo; de la Arena, La Unión y Las Lomas, en la Provincia de Piura; de Acora, en la Provincia de Puno; de Nueva Cajamarca, en la Provincia de Rioja; de Pangoa y Río Negro, en la Provincia de Satipo; de Bellavista, en la Provincia de Sullana; de Alto de la Alianza y Ciudad Nueva en la Provincia de Tacna; de Uchiza, en la Provincia de Tocache; de Florencia de Mora, Huanchaco, Laredo y Moche, en la Provincia de Trujillo; y de Cajaruro, en la Provincia de Utcubamba.

Artículo Séptimo.- Estarán constituidos por un Alcalde y 05 (cinco) Regidores, los Concejos Municipales:

a)- Provinciales de Aija, Antabamba, Antonio Raimondi, Asunción, Bolivar, Bongará, Cajatambo, Candarave, Canta, Carlos Fermín Fitzcarrald, Castrovirreyna, Condesuyos, Contralmirante Villar, Corongo, General Sánchez Cerro, Huacaybamba, Huancasancos, Huaytará, Jorge Basadre, La Unión, Manú, Marañón, Ocros, Oyón, Palpa, Parinacochas, Paucar de Sara Sara, Purús, Recuay, Rodríguez de Mendoza, Sucre, Tahuamanú, Tarata y Vilcashuamán.

b)- Distritales de toda la República que no estén comprendidos en los artículos precedentes

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.—Chocano Marina; Catacora Gonzáles; Muñoz Arce; Hernández Canelo; De Valdivia Cano. Secretario General, Trujillano.

DISPOSICIÓN QUE PRECISA LA CANTIDAD DE VARONES O MUJERES QUE DEBEN PRESENTARSE EN LAS LISTAS DE CANDIDATOS A ALCALDES Y REGIDORES PROVINCIALES Y DISTRITALES

RESOLUCIÓN N° 280-98-JNE

Lima, 11 de junio de 1998

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 148-98 JNE expedida por este Organo Electoral, se determinó que los Concejos Municipales Provinciales y Distritales a elegirse en el proceso de las Elecciones Municipales que culminan el segundo domingo del mes de octubre próximo, estarán constituidos por un Alcalde y 39 Regidores; un Alcalde y 15 Regidores; un Alcalde y 13 Regidores; un Alcalde y 11 Regidores; un Alcalde y 9 Regidores; un Alcalde y 7 Regidores; o, un Alcalde y 5 Regidores; según sea el caso ;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10º de la ley Nº 26864 "Ley de Elecciones Municipales", las listas de candidatos deberán contener el número correlativo que indique la posición de los candidatos a Regidores en la lista, que debe estar conformada por no menos de un 25% de hombres o de mujeres; por lo que resulta necesario precisar el número mínimo de candidatos sean hombres o mujeres que conformarán dichas listas.

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones;

RESUELVE:

Articulo Primero.- Precísase que las listas de candidatos a Alcaldes y Regidores de los Concejos Municipales Provinciales y Distritales con motivo de las Elecciones Municipales del 11 de octubre próximo, deberán tener la siguiente conformación:

a).- En el Concejo Municipal integrado por Alcalde y 39 Regidores, las listas de candidatos a Regidores contarán con un mínimo de 10 candidatos varones cuando la mayoría de postulantes sean mujeres ó 10 mujeres como mínimo cuando la mayoría de los postulantes sean varones.

b).- En los Concejos Municipales integrados por Alcalde y 15 Regidores, las listas de candidatos a Regidores contarán con un mínimo de 4 candidatos varones cuando la mayoría de postulantes sean mujeres ó 4 mujeres como mínimo cuando la mayoría de los postulantes sean varones.

c).- En los Concejos Municipales integrado por Alcalde y 13 Regidores, las listas de candidatos a Regidores contarán con un mínimo de 4 candidatos varones cuando la mayoría de postulantes sean mujeres ó 4 mujeres como mínimo cuando la mayoría de los postulantes sean varones.

d).- En los Concejos Municipales integrados por Alcalde y 11 Regidores, las listas de candidatos a Regidores contarán con un mínimo de 3 candidatos varones cuando la

mayoría de postulantes sean mujeres ó 3 mujeres como mínimo cuando la mayoría de los postulantes sean varones

e).- En los Concejos Municipales integrados por Alcalde y 9 Regidores, las listas de candidatos a Regidores contarán con un mínimo de 3 candidatos varones cuando la mayoría de postulantes sean mujeres ó 3 mujeres como mínimo cuando la mayoría de los postulantes sean varones.

f).- En los Concejos Municipales integrados por Alcalde y 7 Regidores, las listas de candidatos a Regidores contarán con un mínimo de 2 candidatos varones cuando la mayoría de postulantes sean mujeres ó 2 mujeres como mínimo cuando la mayoría de los postulantes sean varones.

g).- En los Concejos Municipales integrados por Alcalde y 5 Regidores, las listas de candidatos a Regidores contarán con un mínimo de 2 candidatos varones cuando la mayoría de postulantes sean mujeres ó 2 mujeres como mínimo cuando la mayoría de los postulantes sean varones.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales la presente resolución para los fines del caso.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. CHOCANO MARINA; CATACORA GONZALES; MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO; DE VALDIVIA CANO; Secretario General, TRUJILLANO.

Aplicación de la cifra repartidora

Artículo 25º.- En las Elecciones Municipales se utiliza el método de la Cifra Repartidora, la cual se aplica a partir del número dos de la lista, siempre que la ganadora obtenga mayoría absoluta de votos válidos.

En caso de no existir tal mayoría, se asigna a la que obtenga la primera mayoría relativa la mitad más uno de los cargos de regidor, redondeando al entero superior. La Cifra Repartidora se aplica para asignar los cargos restantes de regidores entre las demás listas que obtengan una votación no menor a 5% de los votos válidos.

En caso de elegirse en segunda vuelta, será proclamado Alcalde el número uno de la lista ganadora y la mitad más uno de los regidores de la misma lista, redondeando al entero superior. El resto de cargos de regidores se asignarán por aplicación de la Cifra Repartidora entre las demás listas de acuerdo al resultado de la primera elección.

Concordancias: Arts. 29º, 318º inc. f) y 320º inc. 5) de la LEY N° 26859.

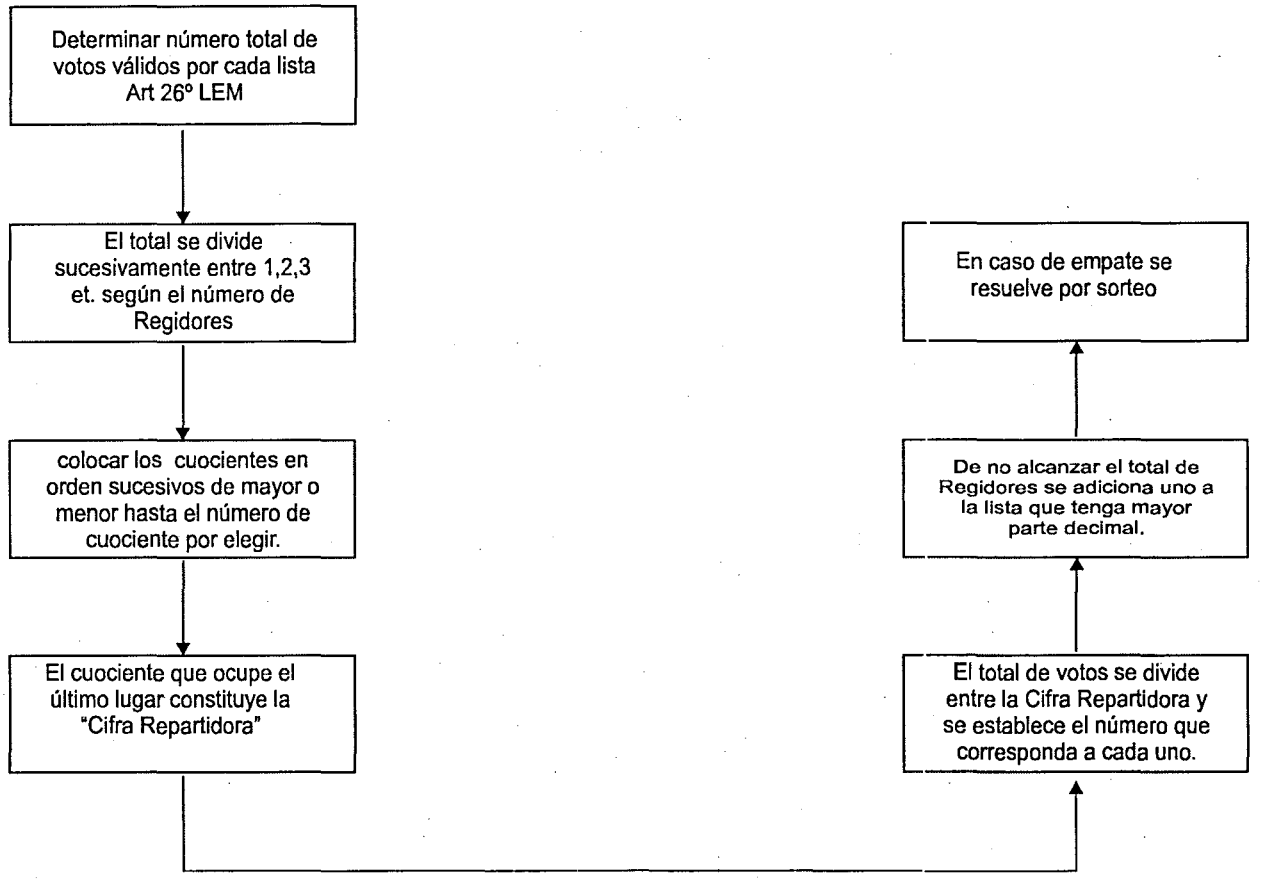
Artículo 26º.- Las normas para la aplicación de la Cifra Repartidora son:

1. Se determina el número total de votos válidos obtenidos por cada lista de candidatos a regidores.
2. Dicho total se divide, sucesivamente, entre uno (1), dos (2), tres (3), etc., según sea el número de regidores que corresponda elegir.

3. Los cuocientes parciales son colocados en orden sucesivo de mayor a menor hasta tener un número de cuocientes igual al número de regidores por elegir. El cuociente que ocupe el último lugar constituye la "Cifra Repartidora".
4. El total de votos válidos de cada lista se divide entre la "Cifra Repartidora" para establecer el número de regidores que corresponde a cada lista.
5. El número de regidores de cada lista está definido por la parte entera del cuociente obtenido a que se refiere el numeral anterior. En caso de no alcanzarse el número total de regidores previstos, se adiciona uno a la lista que tenga mayor parte decimal.
6. En caso de empate, se resuelve por sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación.

Concordancia: Art. 30° de la LEY N° 26859.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LA CIFRA REPARTIDORA



Proclamación del Concejo Distrital

Artículo 27º.- Finalizando cada cómputo distrital la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales aplica la cifra repartidora obteniendo los candidatos elegidos para conformar el respectivo Concejo Municipal Distrital en los distritos donde hubiese funcionado una sola Mesa y siempre que no existiese reclamo alguno contra la elección en ella. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales en base al Acta Electoral Digital correspondiente, determina la cifra repartidora obteniendo los candidatos elegidos; los resultados son entregados inmedia-

tamente al Jurado Electoral Especial, quien procede a proclamar a los elegidos para constituir el Concejo Municipal Distrital.

Concordancias: Art. 36º inc. h) de la LEY N° 26486; arts. 5º inc. l), 27° de la LEY N° 26487; y , arts. 307° y 316° de la LEY N° 26859.

Acta de computo

Artículo 28º.- El Acta de Cómputo Distrital debe estar elaborada de acuerdo con el Artículo 31º de la presente ley, e incluye la enumeración de las listas de candidatos para el Concejo Provincial y para el Concejo Distrital correspondiente y los nombres de los integrantes de cada una de ellas y el número de votos alcanzado por cada lista así como la determinación de la cifra repartidora y la asignación de asientos otorgados a cada lista. Una copia de esta Acta se remite al Concejo Distrital correspondiente, otra al Concejo Provincial, otra a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y una cuarta al Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, se entregan copias del Acta a los candidatos y personeros que lo soliciten.

Concordancias: Art. 27º Inc. c) de la LEY Nº 26487; arts. 317° y 318° de la LEY N° 26859.

Computo Provincial

Artículo 29º.- Después de concluidos los cómputos distritales y efectuada la proclamación de los Concejos Municipales Distritales correspondientes, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales efectúa el cómputo Provincial en base a Actas Electorales de las Mesas que funcionaron en el distrito del Cercado y de las Actas de cómputo distritales.

Concordancia: Art. 5º Inc. l) de la Ley N° 26487.

Acta de Computo Provincial

Artículo 30º.- Efectuado totalmente el cómputo Provincial y determinada la cifra repartidora por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, el Jurado Electoral Especial, elabora el Acta de Cómputo Provincial, y proclama a los elegidos para constituir el Concejo Municipal Provincial.

Concordancias: Art. 36º inc. h) de la LEY Nº 26486; art. 5º Inc. l) de la LEY N° 26487; y , art. 317° de la LEY N° 26859.

Artículo 31º.- El acta de cómputo Provincial debe contener:

1. El número de Mesas de Sufragio que han funcionado.
2. Una síntesis de cada una de las actas de cómputos distritales levantadas por el mismo Jurado Electoral Especial, de conformidad con el artículo anterior, y una síntesis de las Actas Electorales remitida por las Mesas de Sufragio que funcionaron en la capital del distrito del Cercado.
3. Las resoluciones del Jurado Electoral Especial sobre las impugnaciones planteadas en las Mesas que funcionaron en el distrito del Cercado, durante la votación y el escrutinio y que fueron materia de apelación ante el Jurado Electoral Especial.
4. El número de votos declarados nulos y el número de votos en blanco que se hubiesen encontrado en todas las Mesas que funcionaron en la provincia.

5. La enumeración de las listas de candidatos para la elección de Concejo Provincial y los nombres de los integrantes de ellas, así como el número de votos alcanzados por cada una.
6. La determinación de la cifra repartidora y la asignación de asientos otorgados a cada lista.
7. La constancia de las observaciones formuladas y las resoluciones pronunciadas en relación al cómputo efectuado por el propio Jurado Electoral Especial.
8. La relación de los candidatos y personeros que hubiesen asistido otorgados a cada lista.
9. La constancia de las observaciones formuladas y las resoluciones pronunciadas en relación al cómputo efectuado por el propio Jurado Electoral Especial.
10. La relación de los candidatos y personeros que hubiesen asistido a las sesiones.
11. La constancia del acto de la proclamación de Alcalde y Concejales del Concejo Provincial que hubiesen resultado electos.

Concordancias: Arts. 317° y 318° de la LEY N° 26859.

Artículo 32º.- Una copia de esta acta se remite al Concejo Provincial y otra a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo se entrega copia de la misma a los candidatos y personero que la soliciten.

Concordancias: Art. 29º de la LEY N° 26864; y art. 317° de la LEY N° 26859.

Artículo 33º.- Las credenciales de Alcaldes y Regidores se extienden en una hoja de papel simple con el membrete del Jurado Electoral Especial y están firmadas por todos o la mayoría de los miembros del Jurado Electoral respectivo.

Concordancia: Art. 36° Inc. i) de la LEY N° 26486; y art. 319 de la ley Nº 26859

Artículo 34º.- Los Concejos Provinciales y Distritales contra cuya elección no se hubiese interpuesto recurso de nulidad o interpuesto éste, hubiese sido declarado infundado, se instalan públicamente el primer día del mes de enero del año siguiente al de aquél en el que se han efectuado las Elecciones Municipales.

Los Alcaldes electos en segunda vuelta o en elecciones complementarias asumen sus cargos dentro de los treinta días de haber sido proclamados por el Jurado Electoral correspondiente.

Artículo 35º.- Para cubrir las vacantes que se produzcan en los Concejos Municipales, se incorpora al candidato inmediato que no hubiera sido proclamado, siguiendo el orden de los resultados del escrutinio final y que haya figurado en la misma lista que integró el Regidor que produjo la vacante.

Concordancias: Arts. 28° y 42° inc. 3) de la LEY N° 23853.

Artículo 36º.- El Jurado Nacional de Elecciones, de oficio o a pedido de parte, puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en uno o más distritos electorales cuando se comprueben graves irregularidades, por infracción de la ley, que hubiesen modificado los resultados de la votación.

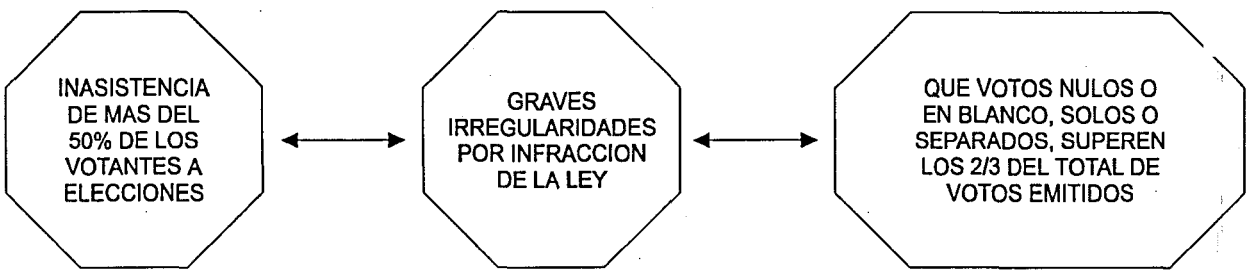
Es causal de nulidad de las elecciones la inasistencia de más de 50% de los votantes al acto

electoral o cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número de votos emitidos.

En estos casos proceden Elecciones Municipales Complementarias.

Concordancias: Art. 184° de la CONSTITUCION POLITICA; art. 5º inc. k) de la LEY Nº 26486; art. 4° de la LEY N° 26864; y, art. 364° de la LEY N° 26859.

CAUSALES DE NULIDAD DE ELECCIONES



DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 37º.- En las Elecciones Municipales Complementarias no se tomará en cuenta la votación mínima a la que se refiere el Artículo 23°. Tampoco se realizará una segunda elección cuando en la circunscripción hubiere postulado sólo una o dos listas de candidatos.

Concordancia: Art. 23º de la LEY N° 26864.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Primera.- Son aplicables a las Elecciones Municipales, en forma supletoria y complementariamente, las disposiciones de la Ley Orgánica de Elecciones.

Segunda.- El mandato de las autoridades municipales electas en 1998 será de cuatro (4) años.

Tercera.- Mientras no entre en vigencia el Documento Nacional de Identidad se entenderá como tal, para los efectos de la presente ley, la Libreta Electoral.

Cuarta.- Derógase la Ley Nº 14669, Ley de Elecciones Municipales, sus modificaciones y ampliatorias, y toda otra norma que se oponga a la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República, para su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y siete.

CARLOS TORRES Y TORRES LARA, Presidente del Congreso de la República. EDITH MELLADO CESPEDES, Primera Vicepresidenta del Congreso de la República.

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República. ALBERTO PANDOLFI ARBULU Presidente del Consejo de Ministros

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES

LEY Nº 23853

TITULO I : DISPOSICIONES GENERALES.

CAPITULO I : Del contenido y alcances de la Ley (Art.1°)
CAPITULO II : De la naturaleza y finalidad de las municipalidades (Arts. 2° al 5°)
CAPITULO III : Jurisdicción municipal y conflictos de jurisdicción (Arts. 6° al 9°)
CAPITULO IV : De la competencia de las municipalidades (Arts. 10° al 13°)

TITULO II : DE LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS

CAPITULO I : De la creación de los municipios (Arts. 14° y 15°)
CAPITULO II : De la organización del gobierno municipal (Arts. 16° al 35°)
CAPITULO III : Del concejo municipal (Art. 36° al 46°).
CAPITULO IV : De la alcaldía (Art. 47°)
CAPITULO V : De la administración y personal municipal (Arts. 48° al 52°)
CAPITULO VI : De la gestión municipal (Arts. 53° al 61°)

TITULO III : DE LA FUNCIÓN MUNICIPAL

CAPITULO I : De las funciones generales (Arts. 62° al 64°)
CAPITULO II : De las funciones específicas (Arts. 65° al 69°)
CAPITULO III : De las atribuciones de las municipalidades provinciales, distritales y delegadas (Arts. 70° y 71°)
CAPITULO IV : Limitaciones a la propiedad privada (Arts. 72° al 78°)

TITULO IV : DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
CAPITULO UNICO (Arts. 79° al 83°)

TITULO V : DE LA ECONOMÍA Y LA HACIENDA MUNICIPAL

CAPITULO I : Del patrimonio municipal (Arts. 84° al 89°)
CAPITULO II : De las rentas municipales (Arts. 90° al 96°)
CAPITULO III : De los fondos municipales de inversión (Art. 97° al 102°).
CAPITULO IV : De los presupuestos municipales y la contabilidad (Art. 103° al 107°)
CAPITULO V : Del control municipal (Art. 108°)

TITULO VI : DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, SANCIONES Y RECURSOS DE IMPUGNACIÓN

CAPITULO I : De las disposiciones municipales (Arts. 109° al 114°)
CAPITULO II : De las sanciones (Arts. 115° al 121°)
CAPITULO III : De los recursos de impugnación (Art. 122° al 124°).
CAPITULO IV : De las interrelaciones municipales (Art. 125° y 126°)

TITULO VII : DEL FOMENTO A LA ACCION MUNICIPAL
CAPITULO UNICO : Del Instituto Nacional de Fomento Municipal (Arts. 127° y 128°)

TITULO VIII : DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLÍTANA

CAPITULO I : Disposiciones generales (Arts.129° al 132°)
CAPITULO II : Del concejo metropolítano (Arts. 133° al 135°)
CAPITULO III : Del alcalde metropolitano (Art. 136°).
CAPITULO IV : De la asamblea metropolitana (Art. 137° al 139°)
CAPITULO V : De los órganos metropolitanos de asesoramiento (Arts. 140° al 143°)
CAPITULO VI : De la administración metropolitana (Art. 144° al 146°)

TITULO IX : DISPOSICIONES FINALES
(Arts. 147 al 164°)

TITULO X : DISPOSICIONES TRANSITORIAS
(Siete Disposiciones Transitorías)

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES

LEY Nº 23853.....

Fecha de Promulgación :18.05.84
Fecha de Publicación : 22.05.84

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

DEL CONTENIDO Y ALCANCES DE LA LEY

Artículo 1.- La presente Ley Orgánica norma la organización, autonomía, competencia, funciones y recursos de las Municipalidades, así como el régimen especial de la Capital de la República.

CAPITULO II

DE LA NATURALEZA Y FINALIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES

Artículo 2.- Las Municipalidades son los Organos del Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Les son aplicables las leyes y disposiciones que, de manera general y, de conformidad con la Constitución, regulen las actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional.

Artículo 3.- Las Municipalidades representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción. No pueden ejercer las funciones de orden político que la Constitución y las leyes reservan para otros órganos del Estado, ni asumir representación distinta de la que le corresponde a la administración de las actividades locales.

Artículo 4.- Existen Municipalidades en:

1.- La Capital de la República, que tiene el régimen especial que se establece en la presente ley.
2.- Las Capitales de Provincia.
3.- Las Capitales de Distrito.
4.- Los pueblos, centros poblados, caseríos, comunidades campesinas y nativas, que determine el Concejo Municipal Provincial. Su denominación es Municipalidad Delegada.

Artículo 5.- Para la creación de una Municipalidad Delegada se requiere:

1.- La comprobada necesidad de servicios locales.
2.- Que su territorio no se halle comprendido dentro de los límites de la capital de la Provincia o en el núcleo poblacional central de su Distrito.
3.- Que cuente con más de 50 personas mayores de edad.
4.- Que posea medios económicos suficientes para organizar y sostener los servicios municipales esenciales.
5.- Que sea solicitado por la mayoría de los habitantes mayores de edad de la localidad.
6.- Que sea aprobada por el Concejo Provincial previo conocimiento del Concejo Distrital respectivo.

CAPITULO III

JURISDICCION MUNICIPAL Y CONFLICTOS DE JURISDICCION

Artículo 6.- Las Municipalidades ejercen jurisdicción con los siguientes alcances:

1.- La Municipalidad Provincial sobre el territorio de la respectiva Provincia y el Distrito del Cercado.
2.- La Municipalidad Distrital sobre el territorio del Distrito.
3.- La Municipalidad Delegada sobre el territorio que le corresponde según delimitación hecha por el respectivo Concejo Provincial.

Artículo 7.- Los conflictos internos de las Municipalidades Distritales y las que surjan entre ellas y otras Municipalidades o autoridades de un mismo Distrito se dirimen por el Juez de Primera Instancia de la respectiva Provincia y, en caso de apelación, por la Corte Superior del Distrito Judicial correspondiente.

Artículo 8.- Los conflictos internos de las Municipalidades Provinciales y los que surjan entre ellas y otras Municipalidades o autoridades de la misma u otra Provincia son dirimidos en Primera Instancia por la Corte Superior del respectivo Distrito Judicial; procede el recurso de nulidad contra la resolución de vista.

Artículo 9.- Los conflictos internos de la Municipalidad de la Capital de la República y los que surgan entre ella y las demás autoridades son dirimidos por la Corte Suprema de Justicia, en instancia única.

CAPITULO IV

DE LA COMPETENCIA DE LAS MUNICIPALIDADES

Artículo 10.- Las Municipalidades son competentes para:

1.- Acordar su régimen de organización interior.
2.- Votar su Presupuesto.
3.- Administrar sus bienes y rentas.
4.- Crear, modificar, suprimir o exonerar sus contribuciones, arbitrios y derechos, con forme a ley.
5.- Regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito.
6.- Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales.
7.- Contratar con otras entidades públicas o no públicas, preferentemente locales, la atención de los servicios que no administren directamente.
8.- Planificar el desarrollo de sus circunscripciones y ejecutar los planes correspondientes.
9.- Exigir el cumplimiento de sus propias normas, sea con sus propios medios o con el auxilio de las Fuerzas Policiales.
10.- Celebrar acuerdos con otras Municipalidades para organizar servicios comunes.
11.- Promover y organizar conforme a ley, la participación de los vecinos en el desarrollo comunal.
12.- Derogado (*).

Artículo 11.- Las Municipalidades Provinciales son competentes además para regular o pronunciarse sobre las siguientes materias:

1.- Zonificación y urbanismo.
2.- Cooperación con la Educación Inicial y Primaria y vigilancia de su normal funcionamiento.
3.- Cultura, recreación y deporte.
4.- Turismo y conservación de monumentos Arqueológicos e Históricos en coordinación con el Organismo Regional; y con las políticas nacionales impartidas a través del Gobierno.
5.- Cementerios.
6.- Los servicios públicos cuya ejecución no está reservada a otros órganos públicos y que tienden a satisfacer las necesidades colectivas de carácter local.
7.- La modificación de la demarcación regional, previa consulta popular, en los casos previstos por el Artículo 260 de la Constitución (*)

(*) Ver art. 190° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

8.- La determinación de los linderos de los Distritos de su jurisdicción en conformidad con sus leyes de creación y previa aprobación de la Asamblea de Alcaldes Distritales. Son competentes asimismo para pronunciarse, en forma previa o para revisar, según sea el caso, toda disposición que las Municipalidades Distritales adopten sobre las materias a que este artículo se refiere.

Artículo 12.- Las Municipalidades Provinciales están facultadas para prestar directamente los servicios comunes de las Municipalidades de su jurisdicción; así como para coordinar y complementar o suplir la acción de éstas cuando lo consideraren necesario.

Artículo 13.- En los lugares que carezcan de servicios de agua y desagüe, de aprovisionamiento energético y cualquier otro servicio encargado a una entidad nacional o regional, las Municipalidades Distritales son competentes para su instalación con métodos y técnicas apropiadas a los recursos de cada localidad; así como para fijar las tarifas.

TITULO II

DE LA CREACION, ORGANIZACION Y GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS

CAPITULO I

DE LA CREACION DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 14.- Los Municipios Provinciales y Distritales nacen de la demarcación territorial respectiva que aprueba el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, en conformidad con el Artículo 186, inciso 7) de la Constitución del Estado(*)

(*) Ver art. 102°, inc. 7 de la CONSTITUCION POLÍTICA

Artículo 15.- Las condiciones y requisitos para la modificación de la demarcación territorial y la creación de Provincias y Distritos son señalados por Decreto Supremo.

CAPITULO II

DE LA ORGANIZACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Artículo 16.- El Concejo Municipal ejerce funciones normativas, administrativas y fiscalizadoras. Está constituido por el Alcalde y los Regidores.

Artículo 17.- Las funciones ejecutivas del Gobierno Municipal corresponden al Alcalde. Los Regidores pueden asumir algunas de tales funciones en determinadas áreas de servicios municipales a propuesta del Alcalde y con acuerdo del Concejo Municipal, con el voto conforme de la mayoría del número legal. El acuerdo establecerá las facultades y obligaciones correspondientes.
En los Concejos Municipales con menos de 10 Regidores o cuya área urbana albergue menos de 20,000 habitantes, las funciones del Gobierno
Municipal se ejercitan por el Alcalde y los Regidores en el modo que establezca el respectivo Reglamento de Organización Interior.

Artículo 18.- Los Alcaldes y Regidores son elegidos en sufragio directo por los vecinos de la respectiva jurisdicción.

Los extranjeros residentes por más de dos años continuos en la circunscripción respectiva pueden elegir y ser elegidos, salvo en las Municipalidades fronterizas.

Artículo 19.- Los Alcaldes y Regidores desempeñan sus cargos por un período de tres años, pudiendo ser reelegidos.

Artículo 20.- Los Concejos Municipales están integrados por un Alcalde y el número de Regidores que se establezca conforme a la Ley Electoral.
En la elección de los Regidores tienen representación las minorías.
Los Concejos Municipales Delegados están integrados por un Alcalde y cinco Regidores. Son elegidos por el Concejo Provincial de las ternas que proponga para cada cargo el Concejo Distrital respectivo, en tanto se efectúen las elecciones conforme a la Ley Electoral.

Artículo 21.- Los Alcaldes y regidores son rentados, conforme lo permita el presupuesto y la disponibilidad de recursos propios de cada Municipalidad, y previo acuerdo del respectivo Concejo Municipal, aplicándose los montos que determinan o autorizan las normas sobre remuneraciones para sus respectivos rangos.
Los alcaldes reciben una remuneración mensual y los regidores perciben dietas por sesión.
Las remuneraciones y las dietas son suprimibles, por Acuerdo unánime del Concejo o por renuncia individual a ellas.

(*) Modificado por LEY N° 26317, de 27/5/94

Artículo 22.- Los Regidores que trabajan como dependientes en el Sector Público o Privado, gozan de licencia de sus centros de trabajo hasta por veinte horas semanales, sin descuentos de sus remuneraciones, tiempo que será dedicado exclusivamennte a las labores municipales.
Los Alcaldes y regidores no serán trasladados ni reasignados sin su consentimiento, mientras ejerzan función municipal.
El empleador está obligado a conceder la licencia semanal, bajo responsabilidad.
Los alcaldes pueden optar entre la remuneración municipal o la de su función pública o privada. En el primer caso gozarán de licencia sin goce de haber por el rérmino de su mandato. En el segundo caso, de la licencia a la que se refiere el primer párrfo y pueden acogerse al beneficio de la dieta.

(*) Modificado mediante LEY Nº 26317, del 27/05/94.

Artículo 23.-No pueden desempeñar los cargos de Alcalde y Regidores:

1.- Los servidores del Estado a los que se refiere la segunda parte del Artículo 60 de la Constitución.
2.- El Contralor General, los Prefectos, Subprefectos y Gobernadores.
3.- Los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Consejo Nacional de la Magistratura y del Jurado Nacional de Elecciones.
4.- Los Presidentes de los Organismos Descentralizados de Gobierno. Los miembros de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales en servicio activo.
6.- Los miembros de otros Concejos Municipales.
7.- Las personas naturales y los representantes legales de las sociedades que tengan

interés en las concesiones o en los contratos otorgados o en trámite de otorgamiento por la Municipalidad.

8.- Los deudores por obligaciones provenientes de contratos o concesiones y los que tengan proceso judicial pendientes con las respectivas municipalidades, así como los que hubieran otorgado fianza u otra garantía para asegurar el cumplimiento de alguna obligación en favor de aquellas.

9.- Los que hayan sufrido condena por delito doloso.(*)

(*) Modificado por el art. 1° de la LEY N° 26491

10.- Los extranjeros, en el caso de Municipalidades Provinciales, Distritales y Delegadas en zonas fronterizas.

11) Los trabajadores de la misma municipalidad (*)

(*) Párrafo adicionado por art. 1° de la LEY N°26483, publicada el 17/06/95.

Artículo 24.- Para ser elegido Alcalde o Regidor de un Concejo Municipal se requiere:

1.- Gozar del derecho de sufragio.

2.- Ser vecino de la respectiva circunscripción municipal con no menos de dos años de residencia contínua antes de la elección.

3.- Hallarse inscrito en el Registro Electoral o en el Registro Electoral Municipal para Extranjeros.

Artículo 25.- Los cargos de Alcaldes y Regidores tienen el carácter de función pública. Son irrenunciables, salvo en caso de postular cargos en Elecciones Políticas, los Alcaldes y Regidores no están obligados a renunciar para postular su reelección.

Artículo 26.- Vaca el cargo de Alcalde o Regidor:

1.- Por enfermedad o por impedimiento físico no susceptible de rehabilitación integral o cualquier otra causa que impida su desempeño por plazo mayor de tres meses.

2.- Por ausencia de la localidad por mas de 30 días consecutivos sin la autorización correspondiente del Concejo Municipal.

3.- Por sobrevenir alguna de las causales del artículo 23º después de la elección.

4.- Por cambio de domicilio fuera de la jurisdicción de la Municipalidad.

5.- Por inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o seis no consecutivas durante tres meses.

6.- Por incurrir en la causal prevista en el artículo 88 de la presente Ley durante tres meses.

Artículo 27.- La vacancia del cargo del Alcalde o Regidor es declarada por el correspondiente Concejo Municipal con el voto aprobatorio de la mayoría del núrnero legal de sus miembros.

El Acuerdo del Concejo que declara la vacancia es susceptible de revisión a solicitud de parte, en el término de ocho (8) días naturales ante el Jurado Nacional de Elecciones, quien resuelve en el plazo máximo de treinta (30) días naturales. La Resolución del Jurado Nacional de Elecciones es inapelable e inimpugnable en la via judicial.

Cualquier vecino también puede solicitar la vacancia ante el Concejo Municipal, aportando prueba escrita que sustente la correspondiente causal. El pronunciamiento debe producirse

en la sesión inmediata siguiente. En cualquier caso, ésta no puede efectuarse más allá de los treinta (30) días calendario. (*)

(*) Modificado por art. 1° de la LEY N° 26491, publicada el 2/07/95.

Artículo 28.- En los casos de vacancia reemplazan:

1.- Al Alcalde: El Teniente Alcalde, que lo es el Regidor hábil que sigue en su propia lista electoral.
2.- A los Regidores: Los suplentes de sus respectivas listas. Caso de no existir suplentes o los llamados por ley se hallaran ausentes, impedidos o se negaran a asumir el cargo, el Jurado Nacional de Elecciones convoca a elecciones complementarias.

Artículo 29.- Los cargos de Alcalde y Regidor se suspenden automáticamente por:

1.- Incapacidad física o mental, temporal.
2.- Por licencia autorizada por el Concejo, por un período máximo de cuarenticinco (45) días naturales.
3.- Por impedimento legal, cuando tienen proceso penal abierto con mandato de detención que ha quedado firme en primera o segunda instancia. (*)

(*) Modificado por art. 1° de la LEY N° 26491.

Artículo 30.- En los casos de suspensión a que se refiere el Artículo 29º, el Alcalde es reemplazado por el Teniente Alcalde y por impedimiento de éste, por el Regidor que determine el Concejo. El reemplazante ejerce a plenitud las funciones con las facultades y atribuciones inherentes al cargo.

Concluido el proceso penal resppectivo, el Alcalde o Regidor absuelto reasume sus funciones en forma automática e inmediata, sn requerir pronunciamiento alguno del Concejo, haciendo de conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones (*)

(*) Modificado por el art. 1° de la LEY N° 26491.

Artículo 31.- La Municipalidad Provincial tiene como órgano de coordinación la Asamblea de Alcaldes Distritales, presidida por el Alcalde Provincial. Sus acuerdos son obligatorios para todos los Distritos cuando son aprobados por el Concejo Provincial y se refieren a las materias del Artículo 255º de la Constitución y el Artículo 11º de la presente Ley. (*)

(*)Se refiere a las competencias de las municipalidades. El artículo pertinente de la actual Constitución es el 192º.

Artículo 32.- Compete a la Asamblea de Alcaldes Distritales con relación a los Concejos Municipales de su respectiva Provincia:

1.- Coordinar la formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo en la Provincia.
2.- Conocer y formular observaciones sobre los presupuestos de los Concejos Provinciales y Distritales, antes de su respectiva aprobación.
3.- Supervisar la adecuada ejecución de las acciones municipales interdistritales e intraprovinciales.

Artículo 33.- La Municipalidad Distrital tiene como órgano de coordinación la Asamblea de Alcaldes de Concejos Municipales Delegados y Agentes Municipales.
Los acuerdos de la Asamblea son obligatorios cuando son aprobados por el Concejo Distrital.
Compete a esta Asamblea las mismas funciones del artículo anterior en cuanto le sean aplicables.

Artículo 34.- Los Concejos Municipales pueden establecer Agencias Municipales en aquellos centros poblados que por la demanda de servicios, el número de sus habitantes o distancia, requieren la desconcentración de determinados servicios municipales.
En las comunidades campesinas, cumplirá las funciones de Agente Municipal, la autoridad comunal designada conforme a sus usos y costumbres.
Los Agentes Municipales son designados o cesados por el Alcalde, salvo en las comunidades campesinas. Representan a la Municipalidad y ejercen las atribuciones que el Concejo les confiere expresamente.

Artículo 35.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, los Concejos Municipales pueden establecer:

1.- Organos consultivos, técnicos y de asesoramiento.
2.- Un cuerpo de vigilancia.

CAPITULO III

DEL CONCEJO MUNICIPAL

Artículo 36.- Los Concejos Municipales ejercen las siguientes atribuciones:

1.- Las previstas en el artículo 10º de esta ley.
2.- Aprobar y controlar los planes y proyectos de desarrollo local.
3.- Dictar, modificar y derogar las ordenanzas y edictos municipales de su competencia.
4.- Aprobar el Presupuesto Anual, la Cuenta General del ejercicio anual del presupuesto y la Memoria.
5.- Autorizar los programas de obras y servicios, así como los de inversiones, cuyo plazo de ejecución exceda de su ejercicio presupuestal.
6.- Aprobar la creación de empresas municipales, la participación de la Municipalidad en las de carácter mixto con los sectores público y privado, con sujeción al artículo 12º en los casos que corresponda.
7.- Aceptar donaciones y legados.
8.- Resolver los recursos de impugnación de su competencia.
9.- Cesar a los Directores Municipales por acuerdo de la mayoría del número legal de sus miembros.
10. Declarar la vacancia de los cargos de Alcalde y de Regidor y resolver los pedidos de licencia que éstos formulen.
11. Practicar las investigaciones que juzgue necesarias y recabar la información sobre entidades municipales y sobre aquellas en las que tenga participación la Municipalidad.
12. Aprobar empréstitos internos y externos exclusivamente para obras y servicios públicos reproductivos con arreglo al Artículo 140º de la Constitución Política (*)

(*) Ver art. 75°, in fine, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

13. Acordar el régimen de la administración de los bienes y rentas encargadas al Municipio, así como el régimen de organización y administración de los servicios públicos locales.
14. Aprobar las formas de participación vecinal con sujeción a la presente ley.
15.- Las demás atribuciones inherentes a sus funciones.

Artículo 37.- Los Regidores del Concejo tienen las siguientes atribuciones:
1.- Proponer proyectos de ordenanzas, edictos y acuerdos.
2.- Desempeñar las funciones ejecutivas que les encomiende el Concejo.
3.- Ejercitar función de fiscalización y vigilancia de los actos de la administración municipal.
4.- Integrar las comisiones permanentes o especiales de Regidores que determine el Reglamento Interno.

Artículo 38.- Los miembros del Concejo Municipal son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la ley practicados en el ejercicio del cargo y solidariamente por las resoluciones y acuerdos adoptados, a menos que salven expresamente su voto, lo que debe constar en Acta.
Los Regidores no pueden ejercer cargos establecidos en el Cuadro de Asignación de Personal, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros del Directorio, Gerente o en las Empresas Municipales o de nivel municipal de su jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta disposición son nulos.(*) (**)
La infracción de la prohibición anterior es causal de vacancia del cargo de Regidor. (*) (**)

(*) Párrafos añadidos por el art. 2° de la LEY N° 26483, publicada el 17/06/95.

(**) Según el art. 3 de la Ley 26483, el Instituto Nacional de Administración Pública emitirá las directivas y normas complementarias que se requieran para la eficiente aplicación de dicha Ley. Por su parte, el art. 5 de la misma norma dispuso que entrara en vigencia a los 90 días calendario siguientes a su publicación. Sin embargo, la Ley 26523, publicada el 9 de agosto de 1995, modificó el art. 5 de la Ley 26483 disponiendo que esta última Ley entrará en vigencia dentro de los noventa días calendario siguientes a la fecha de su publicación, salvo en lo referente a los cargos de Directorio, Gerente u otro de similar nivel en las Empresas Municipales, cuya entrada en vigencia será el 1 de enero de 1996.

Artículo 39.- El Concejo Municipal sesiona ordinariamente cuando menos una vez cada quince días.
Sesiona extraordinariamente cuando lo convoque el Alcalde o lo solicite cuando menos, la tercera parte del número legal de sus miembros.
En el caso de no ser convocado por el Alcalde dentro de los 5 días hábiles siguientes a la petición, puede hacerlo el Teniente Alcalde o cualquier Regidor previa notificación escrita al Alcalde. Entre la convocatoria y la sesión mediarán, cuando menos, dos días hábiles.
Si el Alcalde o Teniente Alcalde concurre a la sesión así convocada, tiene derecho a presidirla.
Todas las sesiones son públicas. Los debates y acuerdos constan en acta autorizada por el Alcalde y el Secretario.

Artículo 40.- El quórum para la instalación y funcionamiento del Concejo se constituye con la presencia de más de la mitad de los miembros hábiles.
Para el cómputo del quórum no se considerará miembros hábiles:

1.- Los enfermos y ausentes que gocen de licencia concedida por el Concejo Municipal.
2.- Los suspendidos en el ejercicio de sus funciones.
Se considerará número legal para los efectos de esta ley al Alcalde y a todos los Regidores elegidos conforme a la Ley Electoral.

Artículo 41.- Los acuerdos se adoptan con el voto conforme de más de la mitad de los miembros asistentes salvo que la Ley exija un número mayor. El Alcalde vota sólo en calidad de dirimente.

Artículo 42.- En el caso que el Concejo no pueda reunirse por falta de quórum, se seguirá el siguiente procedimiento:

1.- El Alcalde conmina a los Regidores cuya inasistencia impide la instalación o funcionamiento del Concejo.
El requerimiento se hace, en el plazo de ocho días, por tres veces, sentándose acta suscrita por el Alcalde, Secretario y Regidores asistentes. El tercer requerimiento se hace bajo apercibimiento de declarar la vacancia.

2.- Si persistiera la inasistencia de los apercibidos en la tercera citación se deja constancia de ello en el acta, suscrita por el Alcalde y los Regidores asistentes, cuya copia autenticada se remite al Jurado Nacional de Elecciones.

3.- El Jurado Nacional de Elecciones declara la vacancia y llama a los suplentes en orden de elección de la lista respectiva. Si los suplentes se excusaren o no se hicieren presentes se cita al siguiente hasta agotar la lista. Agotada ésta, convoca a elecciones complementarias para cubrir los cargos vacantes.
Los Alcaldes y Regidores que ocasionen la vacancia, conforme a este artículo, no pueden postular ni desempeñar cargo público durante los tres años siguientes. Esta inhabilitación no alcanza a los suplentes.

Artículo 43.- Las convocatorias son notificadas por escrito a los interesados y publicadas en lugar visible del local municipal, sin perjuicio de cualquier otro medio de publicidad que se considere idóneo.

Artículo 44.- En el lapso que medie entre la declaración de vacancia y la elección de los nuevos Regidores, los asistentes conforman una Junta Ejecutiva Municipal presidida por el Alcalde, la que ejerce las atribuciones administrativas que la presente ley confiere a los Concejos Municipales. Sus acuerdos se toman por mayoría de sus miembros.

Artículo 45.- El Concejo Municipal constituye comisiones internas de trabajo integradas por los Regidores, en áreas básicas de servicios y de gestión municipal, con la finalidad de efectuar estudios, formular propuestas y proyectos de Reglamento de los servicios respectivos y emitir dictamen entre los asuntos sometidos al acuerdo del Concejo.

Artículo 46.- Los Alcaldes y Regidores de los Concejos Municipales presentarán declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de haber sido juramentados y, al cumplir su mandato, bajo responsabilidad.

CAPITULO IV

DE LA ALCALDIA

Artículo 47.- El Alcalde es el personero legal de la Municipalidad y le compete:

1.- Convocar y presidir las sesiones del Concejo Municipal.
2.- Promulgar las ordenanzas.
3.- Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal y cumplir y hacer cumplir las ordenanzas municipales.
4.- Ejecutar los planes de desarrollo local.
5.- Proponer al Concejo Municipal los proyectos de ordenanzas, edictos y acuerdos.
6.- Dictar decretos y resoluciones, con sujeción a las leyes, ordenanzas y edictos vigentes.
7.- Someter a la aprobación del Concejo Municipal el Proyecto de Presupuesto Municipal para el año siguiente, de acuerdo a los plazos y modalidades establecidas en la Ley General del Presupuesto de la República, la Memoria sobre la marcha y la Cuenta General del ejercicio económico fenecido.
8.- Controlar la recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos, en conformidad con la ley y el presupuesto aprobado.
9.- Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad.
10. Vigilar el cumplimiento de los contratos.
11. Proponer al Concejo Municipal el proyecto de Reglamento interno.
12. Proponer la creación, modificación y supresión o exoneración de contribuciones, arbitrios, derechos, y en su caso, solicitar al Poder Legislativo los tributos que considere necesarios.
13. Nombrar y remover al personal administrativo y de servicio y otorgarles licencias y permisos.
14. Coordinar con las reparticiones públicas correspondientes la atención de los asuntos municipales.
15. Convocar a licitación pública o concurso de precios en los casos previstos en el Artículo 143 de la Constitución Política (*)

(*) Ver art. 76° de la CONSTITUCIÓN POLITICA

16. Tramitar y someter al Concejo Municipal, en su caso, los pedidos que formulen los vecinos.
17. Celebrar todos los actos y contratos necesarios para el ejercicio de su función.
18. Delegar sus atribuciones en los Regidores autorizados por el Concejo o en los Directores Municipales, excepto las señaladas en los incisos 1, 2, 6, 7, 13 y 16.
19.- Otorgar poderes para la defensa del Concejo en asuntos judiciales, administrativos y contencioso-administrativos.
20.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir las disposiciones municipales.
21.- Derogado.

CAPITULO V

DE LA ADMINISTRACION Y PERSONAL MUNICIPAL

Artículo 48.- Los servicios y actividades municipales se prestan y cumplen, respectivamente, a través de las funciones de programación, dirección, ejecución, supervisión y control.

Artículo 49.- La dirección administrativa general y la de los diversos servicios están a cargo del

Director Municipal y de los Directores respectivos, designados de acuerdo con la magnitud de las actividades administrativas y las posibilidades presupuestales. Sus facultades y funciones se establecen en el Reglamento Interno.

Artìculo 50.- El Director Municipal y los Directores de servicios son funcionarios de confianza. Son nombrados por el Alcalde y pueden ser removidos por éste o por acuerdo del Concejo Municipal.

Artículo 51.- Las Municipalidades Provinciales y las Distritales que lo requieran pueden organizar un cuerpo de vigilancia municipal para el debido cumplimiento de los acuerdos, ordenanzas, edictos, decretos y resoluciones, por los vecinos, instituciones y establecimientos de la circunscripción.

Artículo 52.- Los funcionarios, empleados y obreros, así como el personal de vigilancia de las Municipalidades son servidores públicos sujetos exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública y tienen los mismos deberes y derechos de los del Gobierno Central de la categoría correspondiente.
Cada Municipalidad elabora su escalafón de personal, de acuerdo con la Legislación vigente y homologa sus remuneraciones, con arreglo al Artículo 60 de la Constitución (*)

(*) Ver arts. 39° y 40° de la CONSTITUCION POLÍTICA

CAPITULO VI

DE LA GESTION MUNICIPAL

Artículo 53.- Los servicios públicos locales pueden prestarse por cualesquiera de las siguientes modalidades siempre que se asegure el interés de los usuarios, la eficiencia del servicio y el adecuado control municipal:

1.- Por administración directa de la propia Municipalidad.
2.- Por empresas municipales o por empresas con participación municipal.
3.- Por empresas estatales o privadas mediante concesión.
4.- Por cualquier otra modalidad permitida por la ley.

Artículo 54.- La concesión de los servicios municipales se sujeta a las siguientes reglas y condiciones mínimas:

1.- Subasta pública.
2.- Limitación del plazo de la concesión a no más de 30 años.
3.- Garantía suficiente que asegure la eficiencia del servicio y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la naturaleza, calidad o características de los servicios a prestar.
4.- Rescisión de la concesión por incumplimiento del contrato.
5.- Capital que debe invertir el concesionario y forma de su amortización.
6.- Tarifa de los servicios, la que podrá ser modificada por variación justificada de sus costos.

Artículo 55.- Pueden otorgarse concesiones para la construcción y aprovechamiento de obras destinadas a fines recreativos, deportivos y similares, playas de estacionamiento u otros servicios públicos, forestación y reforestación de acuerdo con los planes urbanos.
La concesión puede autorizar el reembolso de la inversión mediante los rendimientos de la obra o el aprovechamiento racional de los recursos naturales generados, según el caso.

Artículo 56.- Es irrenunciable e indelegable la atribución de las Municipalidades de regular, inspeccionar y controlar la prestación de los servicios públicos locales y la de convenir y regular sus tarifas, con excepción de aquellas cuya regulación corresponde a otros órganos del Estado.

Artículo 57.- El Poder Ejecutivo conviene con las Municipalidades, a su solicitud, la transferencia de los servicios públicos locales que estén centralizados o las modalidades de participación municipal en su administración.

Artículo 58.- Las empresas municipales son creadas por acuerdo de la mayoría del número legal de Regidores. Dichas empresas adoptan cualesquiera de las modalidades previstas por la legislación que regula la actividad empresarial del Estado.

Artículo 59.- La adquisición de bienes o servicios, remates, ventas, permutas, transferencias de bienes o de derechos sobre ellos, arrendamiento, constitución de derechos reales de garantía, ejecución de obras y cualesquiera otros actos o contratos similares que celebren las municipalidades, se rigen por las normas relativas o aplicables a los bienes del Estado y a las reparticiones públicas según el caso.

Artículo 60.- La contratación de empréstitos y de operaciones de endeudamiento interno requieren la aprobación de la mayoría del número legal de miembros del Concejo. Pueden ser contratados con la garantía de las rentas municipales que generen y deben ser dedicados, bajo responsabilidad, las obras o servicios públicos que los motivaron y no a gastos corrientes. Los servicios de amortización e intereses no pueden afectar más del 30% de los ingresos del año anterior.

La contratación de empréstitos y operaciones de endeudamiento en el exterior se sujetan a la Ley General de Endeudamiento Público Externo.

Artículo 61.- Los empréstitos que acuerden los Concejos Distritales, deben ser aprobados por los Concejos Provinciales.

TITULO III

DE LA FUNCION MUNICIPAL

CAPITULO I

DE LAS FUNCIONES GENERALES

Artículo 62.- Corresponde a las Municipalidades, según el caso, planificar, ejecutar e impulsar a través de los organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento, educación, recreación, transportes y comunicaciones. Estas acciones son realizadas con los propios recursos municipales y con los previstos por las leyes respectivas a los organismos del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, corporaciones de desarrollo, y en su oportunidad, a los gobiernos regionales. Estos y aquellos deben planificar sus programas de corto, mediano y largo plazo, en función de los requerimientos de las Municipalidades.

Artículo 63.- La acción municipal se ejecuta de acuerdo con planes integrales de desarrollo provincial, elaborados sobre la base de los distritales y comunales, cuya prioridad y programación es aprobada por los respectivos Concejos Municipales, con el voto favorable de la mayoría del número legal de sus miembros.

Su ejecución se lleva a cabo en la forma prevista por el artículo anterior, empezando por los del nivel comunal, y con la asistencia técnica y económica, en su caso, de los organismos centrales y regio-

nales del sector público respectivo. Estos últimos supervisarán que toda acción se sujete a las normas técnicas correspondientes.

Artículo 64.- Los documentos normativos de las acciones de acondicionamiento territorial en cada municipio son los planos urbanos respectivos, que, en lo correspondiente al uso de tierras y a la regulación de las áreas urbanas, deben delimitar

1.- Las áreas agrícolas.
2.- Las áreas de expansión agrícola futura.
3.- Las áreas que serán dedicadas a parques, plazas, bosques y de recreación, educación física y deportes.
4.- Las áreas en que se ubicarán los diversos servicios con fines de abastecimiento, educación, cultura, transportes y otros necesarios para la comunidad.
5.- Las áreas que se dedicarán a los distintos fines urbanos como residenciales, comerciales, industriales, recreación, edificios públicos y otros.
6.- Las áreas inhabitables o de seguridad por su demostrado peligro, sólo dedicables a áreas verdes o forestales.

Las Municipalidades supervisan y controlan el uso de las tierras con sujeción a este artículo, quienquiera que fuera el propietario. En caso de incumplimiento son infractores los propietarios y usuarios. Ambos son pasibles de las sanciones municipales de ley.

CAPITULO II

DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS

Artículo 65.- Son funciones de las Municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva:

1.- Asumir las funciones que corresponden a los Concejos Provinciales y Distritales de Desarrollo; y promover la constitución de los Concejos Comunales de Desarrollo. Quedan modificadas en este sentido o derogadas, en su caso las disposiciones del Título II, Capítulo VI, de la Ley Nº 23339.
2.- Formular, aprobar y supervisar los planes de desarrollo de los asentamientos humanos en concordancia con los planes nacionales y regionales respectivos y los planos urbanos a que se refiere el Artículo 64, con el apoyo técnico de los organismos especializados del Estado.
3.- Velar por la conservación de la flora y fauna locales y promover ante las entidades respectivas las acciones necesarias para el desarrollo, aprovechamiento racional y recuperación de los recursos naturales ubicados en el territorio de su jurisdicción.
4.- Organizar el ámbito de la Municipalidad priorizando y contribuyendo a desarrollar, en forma racional, la infraestructura básica de apoyo a la producción, al transporte, a los servicios sociales, a la comercialización y abastecimientos alimenticios mediante la promoción o ejecución de obras tales como canales de regadío, pequeñas irrigaciones, aulas vecinales, servicios de educación, promoción de la vivienda popular, mercados, silos, frigoríficos y similares.
5.- Mantener y, en la medida de sus recursos, construir la infraestructura urbana y rural (vías vecinales, servicios de agua, desagüe, luz, pavimentos, puentes, monumentos, parques, etc.) indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario.
6.- Promover el aprovechamiento de los recursos energéticos de su jurisdicción y asegurar la prestación del servicio de alumbrado público, el suministro de energía domiciliaria; procurando, además, satisfacer los requerimientos mínimos de energía para el ámbito rural,

mediante fuentes locales no convencionales.

7.- Determinar las zonas de expansión urbana en concordancia con la zonificación y planes de desarrollo urbano.
8.- Elaborar el catastro municipal.
9.- Aprobar las normas sobre ornato.
10.- Disponer la nomenclatura de avenidas, calles, jirones, pasajes, parques y plazas; la numeración predial; y organizar y mantener los sistemas de señales y semáforos del tránsito de vehículos y peatones. No se puede repetir en un mismo distrito, el nombre o número asignado a una avenida, calle, jirón, pasaje, parque o plaza, ni duplicar dicha nomenclatura en los lugares públicos señalados. (*)

(*) Texto según Ley N° 26365

11.- Reglamentar, otorgar licencias y controlar las construcciones, remodelaciones y demoliciones de los inmuebles de las áreas urbanas, de conformidad con las normas del Reglamento Nacional de Construcciones y el Reglamento Provincial respectivo.
12.- Ejecutar, mantener y administrar, en su caso, proyectos de inversión en beneficio de la Comunidad tales como embarcaderos, pistas de aterrizaje, canalizaciones o recuperación de áreas deterioradas y similares.
13.- Procurar, conservar y administrar, en su caso, los bienes de dominio público, como caminos, puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios públicos y otros análogos, con excepción de los que corresponden al Estado conforme a ley.
14.- Promover la construcción de vivienda de tipo económico y el saneamiento de áreas tugurizadas y la renovación de áreas declaradas inhabitables.
15.- Construir, habilitar, conservar y administrar los cementerios que se instalan a partir de la dación de esta ley, supervisar los existentes, organizar los servicios funerarios y reglamentar y supervigilar los existentes.
16.- Supervisar y controlar la construcción, mantenimiento y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene de las salas de espectáculos, estadios, coliseos y otros recintos abiertos al público incluyendo los establecimientos hoteleros y otros de carácter comercial, social, cultural y religioso.
17.- Establecer, y de ser el caso, controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y promover los servicios públicos necesarios, contra incendios, inundaciones y otras catástrofes.
18.- Regular y autorizar la ubicación de avisos luminosos, publicidad comercial y propaganda política.
19.- Controlar y fiscalizar, las asociaciones formadas por vecinos, cualquiera que fuera su finalidad, que recauden, previa autorización municipal, cotizaciones o administren bienes o recursos cuya propiedad sea del vecindario, para garantizar el cumplimiento de sus fines.

En caso de constatar irregularidades, la Municipalidad procederá a denunciar ante el Ministerio Público a los autores de actos punibles y solicitará la intervención temporal para conformar los órganos administrativos conforme a ley. La intervención es autorizada por el Juez de Paz del Distrito respectivo, por el mérito de los actuados de la fiscalización municipal. Su resolución sólo es apelable ante el Juez de Primera Instancia. La intervención termina una vez regularizada la administración y conformados los órganos de acuerdo a ley y a sus Estatutos, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran derivarse.

Artículo 66.- Son funciones de las Municipalidades en materia de población, salud y saneamiento ambiental:

1.- Normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental.
2.- Difundir programas de educación ambiental.

3.- Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos.
4.- Propiciar campañas de forestación y reforestación.
5.- Instalar y mantener servicios higiénicos y baños públicos.
6.- Promover y organizar acciones de medicina preventiva, primeros auxilios, postas médicas.
7.- Construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de primeros auxilios.
8.- Realizar programas de prevención y de educación sanitaria y profilaxia local.
9.- Realizar campañas de saneamiento rural y control de epidemias.
10. Establecer medidas de control de ruido del tránsito y de los transportes colectivos.
11. Organizar los registros civiles llevando las estadísticas correspondientes de acuerdo con la legislación sobre la materia.
12. Ejecutar el servicio de limpieza pública, ubicar las áreas para la acumulación de basura y/o el aprovechamiento industrial de desperdicios.
13.- Controlar la sanidad animal.

Artículo 67.- Son funciones de las Municipalidades en materia de educación, cultura, conservación de monumentos, turismo, recreación y deportes:

1.- Inspeccionar permanentemente la forma en que se imparte la educación en el área de su jurisdicción e informar, cuando menos semestralmente, a la autoridad competente respecto de los centros poblados, áreas marginales y núcleos rurales carentes de escuelas primarias así como respecto de la capacidad, seguridad, idoneidad, higiene y mantenimiento de los locales escolares y de las condiciones de funcionamiento de los servicios educativos correspondientes.
2.- Participar con las autoridades competentes en la realización de programas de alfabetización y cooperar o promover su realización por la comunidad.
3.- Derogado.
4.- Promover, cooperar, organizar y sostener cunas y guarderías infantiles, establecimiento de protección al niño desvalido, al minusválido y al anciano.
5.- Promover, en general, las actividades culturales, fomentando la creación de grupos culturales folklóricos, musicales, de historia y arte así como la organización de conservatorios, teatros y similares.
6.- Promover todo tipo de espectáculos culturales y supervigilar el cumplimiento de las normas a que ellos están sujetos a imponer las sanciones a que haya lugar en resguardo de la moral y de las buenas costumbres.
7.- Crear, organizar y mantener bibliotecas municipales y casas de cultura.
8.- Normar, coordinar, programar y fomentar la recreación deportiva de la niñez, y del vecindario mediante la promoción o la construcción de campos deportivos y parques o la reserva y acondicionamiento de bosques, áreas de paisaje natural o el empleo temporal de áreas y zonas urbanas apropiadas.
9.- Promover la organización de Comités Municipales de Deportes y la construcción, habilitación y uso de sus instalaciones deportivas.
10. Establecer y conservar parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales y parques recreacionales ya sea directamente o mediante contrato o concesión.
11. Promover y asegurar la conservación y custodia del patrimonio cultural local y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos colaborando con

los organismos regionales y nacionales correspondientes en su restauración y conservación.

12. Fomentar el turismo, restaurar el patrimonio histórico local y cuidar de su conservación, regular las instalaciones y servicios destinados al turismo y organizar, en cooperación con las entidades competentes, programas turísticos de interés local.
13. Promover y estimular la creación de fuentes de trabajo, la formación de asociaciones y grupos de desarrollo de tareas comunales en coordinación con el Sistema Nacional de Cooperación Popular.
14. Estimular el ahorro personal y familiar y el desarrollo del cooperativismo.

Artículo 68.- Son funciones de las Municipalidades en materia de abastecimiento y comercialización de productos:

1.- Regular, cuando el interés social lo aconseje, el acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de los productos alimenticios, sancionando la especulación, adulteración, acaparamiento y el falseamiento de pesas y medidas.
2.- Vigilar el cumplimiento de las normas legales referente a calidad y precios de los alimentos y bebidas así como las condiciones de higiene de quienes los distribuyen y comercian.
3.- Regular y controlar el comercio ambulatorio.
4.- Promover y organizar ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales, así como apoyar la creación de mecanismos de comercialización directa por los productores rurales.
5.- Fomentar la producción y consumo de productos propios de la localidad.
6.- Construir, organizar, supervisar y controlar, según el caso, mercados de abastos, camales, silos y terminales pesqueros, a fin de controlar los precios y calidad de los productos y el saneamiento ambiental.
7.- Otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales e industriales y de actividades profesionales y controlar su funcionamiento de acuerdo a ellas.
8.- Las demás que señala la Ley.

Artículo 69.-Son funciones de las Municipalidades en materia de transporte colectivo, circulación y tránsito:

1.- Regular el transporte urbano y otorgar las licencias o concesiones correspondientes de conformidad con los Reglamentos de la materia.
2.- Regular el transporte colectivo y controlar el cumplimiento de las normas y requisitos que correspondan conforme a Ley.
3.- Otorgar permisos para el uso de vehículos menores, tales como carretillas, bicicletas, triciclos y análogos.
4.- Organizar y mantener los sistemas de señales y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos.

CAPITULO III

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES, DISTRITALES Y DELEGADAS

Artículo 70.- Las Municipalidades Provinciales tienen las siguientes atribuciones:

1.- Formular, aprobar, ejecutar, supervisar:
   a. El Plan Integral de Desarrollo Provincial.
   b. El Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia.
   c. Los Planes Urbanos o Planes de Desarrollo de los asentamientos humanos, previa coordinación con la Municipalidad Distrital respectiva.

2.- Aprobar las solicitudes de habilitación urbana de áreas agrícolas en los siguientes casos: Cuando no hayan sido adjudicadas con fines de Reforma Agraria, salvo que hubieran quedado como islas rústicas. Inexistencia de terrenos eriazos. Inexistencia de áreas urbanas susceptibles de mayor densificación.

3.- Usar de los terrenos de su propiedad y de los que le fueron cedidos por el Estado para la vigencia de su programa de desarrollo, ya sea por cuenta propia, o mediante la adjudicación o arrendamiento en pública subasta, a favor de personas naturales o jurídicas que se comprometen a realizarlos.
En caso de emergencia o con fines de inversión que generen ocupación o cumplan fines sociales, la adjudicación puede ser directa, a precio de tasación oficial, a personas naturales o jurídicas que garanticen su ejecución. Dicha adjudicación quedará sin efecto si es dedicada a fines municipales, de acuerdo a ley.

4.- Representar al Estado en los procedimientos de expropiación de bienes con fines municipales, de acuerdo a ley.

5.- Prestar asistencia a los pobladores de los asentamientos humanos, establecidos conforme a ley dentro de su jurisdicción, para el saneamiento de su estructura físico-legal, hasta el otorgamiento del título de propiedad por el Concejo Provincial respectivo, y planificar otros nuevos, señalando en ambos casos las tasas y condiciones a cumplir por los beneficiarios.

6.- Delegar en las Municipalidades Distritales determinadas funciones para el mejor cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior.

7.- Adjudicar a terceros previa subasta pública, los lotes de terrenos eriazos o ribereños que le sean transferidos por el Estado. Asimismo, recepcionar, calificar y tramitar ante los órganos competentes las solicitudes particulares sobre los mismos.

8.- Prestar, a nivel provincial, los servicios que requieran esta extensión para su mayor eficiencia y economía; Asimismo concertar los acuerdos del caso con los Concejos Distritales de su jurisdicción o Provinciales o Distritales vecinos a los que pudiera alcanzar el servicio de que se trata.

9.- Registrar los planos urbanos de las Municipalidades Distritales, así como de sus modificaciones y resolver los reclamos que formulen los vecinos por incumplimiento de los mismos.

10.- Crear las Municipalidades Delegadas, con arreglo al artículo 5º de la presente ley, encargándole los servicios públicos que deben atender.

11.- Vender en pública subasta los bienes no destinados a uso público.

Artículo 71.- Las Municipalidades Distritales son competentes para sostener o supervigilar, por lo menos, los siguientes servicios públicos esenciales para la comunidad:

1.- Abastecimiento de agua potable y desagüe;
2.- Mercados de abasto;
3.- Camal o matadero;
4.- Limpieza de vías públicas;
5.- Caminos vecinales carrozables;
6.- Alumbrado público y doméstico;
7.- Posta sanitaria;
8.- Registros Civiles;
9.- Cementerios;
10.- Bibliotecas Populares.

CAPITULO IV
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD PRIVADA

Artículo 72.- Corresponde a las Municipalidades la determinación de las limitaciones y modalidades de la propiedad privada en armonía con el interés social, en sus respectivas jurisdicciones y dentro del ámbito de su competencia, conforme a la presente ley.

Artículo 73.- Las modalidades que pueden imponer las Municipalidades a la propiedad privada son las siguientes:

1.- La fijación del uso de la tierra de conformidad con la zonificación, planes reguladores y el Reglamento Nacional de Construcciones, a los que se someterá todo proyecto de urbanización, transferencia o cesión de uso para cualquier fin de terrenos urbanos y suburbanos.
2.- La obligación de no construir, reconstruir, ampliar, modificar o reformar un inmueble sino en la forma que establezca la ley, el Reglamento Nacional de Construcciones, el Provincial respectivo y ordenanzas sobre seguridad, salubridad y estética en la edificación o por razón de conservación de zonas monumentales y de edificios declarados monumentos históricos y artísticos de conformidad con las leyes de la materia o las ordenanzas municipales.
3.- La demolición de edificios construidos en contravención del Reglamento Nacional de Construcción y de las ordenanzas vigentes al tiempo de su edificación.
4.- La obligación de conservar el alineamiento o retiro establecidos y la de no sobrepasar las alturas máximas permitidas.
5.- La obligación de cercar propiedades y de usar o no determinados colores o de pintar periódicamente las fachadas.

Los artículos 74°, 75°, 76°, 77° y 78° fueron derogados por la LEY Nº 23854

TITULO IV

DE LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

CAPITULO UNICO

Artículo 79.- Los vecinos participan en el gobierno local mediante:
1.- Elecciones Municipales legalmente efectuadas.
2.- Juntas de Vecinos y Comités Comunales creados de acuerdo con la presente Ley.
3.- El ejercicio del derecho de petición.
4.- Las consultas que se formulen; y,
5.- La información que deben proporcionarles las Municipalidades.

Artículo 80.- Los Concejos Municipales pueden constituir, a propuesta del Alcalde, de los Regidores, o a petición de los vecinos Juntas de Vecinos encargadas de supervisar la prestación de servicios públicos locales, el cumplimiento de las normas municipales y la ejecución de obras comunales.

Artículo 81.- Los Comités Comunales son órganos consultivos y de apoyo que dependen del Alcalde. Su creación corresponde al Concejo Municipal, que señala su composición.

Artículo 82.- La Municipalidad informará cada 90 días a los vecinos de la marcha de los asuntos comunales y del estado de la economía Municipal. Cada sesenta días, el Concejo dedicará una de sus sesiones para tratar públicamente las materias de interés comunal que los vecinos así soliciten. El reglamento interno establecerá las normas de su desarrollo.

Artículo 83.- En los Municipios con población electoral no mayor de 3,000 votantes, y por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de su Concejo, los vecinos pueden ser consultados en Cabildo abierto, en vía ilustrativa, para que expresen su opinión sobre materias de la competencia municipal.
Los Cabildos Abiertos no pueden ser convocados ni pronunciarse sobre temas ajenos a la convocatoria ni sobre pedidos de renuncia, suspensión, destitución o reemplazo de los miembros del Concejo Municipal.

TITULO V

DE LA ECONOMIA Y LA HACIENDA MUNICIPAL

CAPITULO I

DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

Artículo 84.- El patrimonio municipal esta constituido por los bienes y rentas de cada Municipalidad.

Artículo 85.- Son bienes de las Municipalidades:

1.- Los inmuebles y muebles destinados a servicios públicos locales, edificios municipales y sus instalaciones y en general, todos los adquiridos, construidos y sostenidos por la Municipalidad.
2.- Los que posean a título privado y que no estén destinados a un servicio público.
3.- Los terrenos eriazos o ribereños, ubicadas en las áreas de expansión urbana, que les transfiera el Estado.
4.- Los legados y donaciones que se hagan a su favor.

Artículo 86.- Los bienes municipales gozan de los mismos privilegios que los bienes estatales. Los destinados a uso público son inalienables e imprescriptibles.

Artículo 87.- Es obligación de los Concejos Municipales, bajo responsabilidad de sus miembros, constituir y mantener al día el Margesí de Bienes.

Artículo 88.- No pueden rematar o contratar obras y servicios públicos municipales, ni adquirir sus bienes o por interpósita persona el Alcalde, los Regidores y los empleados y funcionarios públicos. Los contratos, escrituras y resoluciones que contravengan lo dispuesto en este artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, inclusive la de vacar en el cargo municipal o en la función pública.

Artículo 89.- Las Municipalidades pueden donar a los Poderes del Estado o a otros organismos del Sector Público, bienes inmuebles de su propiedad, o cederlos en uso a favor de personas jurídicas del Sector Privado sin fines de lucro a condición de que sean destinados exclusivamente a la realización de obras o servicio de interés o necesidad social.
En caso de incumplimiento parcial o total de la finalidad que motivo la donación o cesión, el inmueble revierte al dominio municipal.

CAPITULO II

DE LAS RENTAS MUNICIPALES

Artículo 90.-Son rentas de las Municipalidades:
1.- Las señaladas en el Artículo 257 de la Constitución (*)

(*) Ver art. 193° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

2.- El impuesto de alcabala.
3.- Los aportes en terrenos o dinero, según el caso, para fines de recreación pública y parques zonales, que deben efectuar las personas naturales o jurídicas por los diferentes tipos de tierra para uso de vivienda en cumplimiento con el Reglamento Nacional de Construcciones.
4.- Las transferencias que reciban del Tesoro Público.
5.- Los frutos y los productos de sus bienes; el producto de la venta de los bienes municipales y los ingresos que perciben provenientes de tarifas que cobren, a título de precio, por los servicios que presten.
6.- Las utilidades generadas por las empresas de su propiedad o en las que tengan participación.
7.- Las demás que les correspondan por leyes especiales.

Artículo 91.- Este artículo ha sido derogado por la Primera Disposición Final inc. u) del Decreto Legislativo 776.

Artículo 92.- Este artículo ha sido derogado por la Primera Disposición Final inc. u) del Decreto Legislativo 776.

Artículo 93.- Los tributos municipales no pueden gravar la entrada, salida o tránsito de bienes, mercaderías, productos y animales, salvo el peaje o pontazgo que gravan el uso por vehículo de la vía pública o puente, cuando estos han sido construidos por el Municipio o son mantenidos por éste.

Artículo 94.- Las contribuciones, arbitrios, derechos y licencias se aprueban por la Municipalidad mediante Edictos que deben adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de miembros del Concejo.
Los edictos de las Municipalidades Distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial para su vigencia.
Las exoneraciones de los mencionados tributos se aprueban mediante edictos de la Municipalidad con el voto conforme de no menos de las dos terceras partes del número legal de miembros del Concejo.

Artículo 95.- Los edictos de la Municipalidad a que se refiere el artículo 94 deben publicarse en el diario Oficial «El Peruano», o en el diario encargado de las publicaciones judiciales de la jurisdicción de la Municipalidad para su vigencia.

Cuando la publicación no se efectué en el Diario Oficial «El Peruano», la Municipalidad correspondiente debe remitir copia autenticada de la respectiva publicación al Tribunal Fiscal, para su conocimiento.

Artículo 96.- Las reclamaciones sobre materia tributaria que interpongan individualmente los contribuyentes se rigen por las disposiciones del Código Tributario.
Corresponde al Alcalde Provincial o Distrital, en su caso expedir la Resolución en primera instancia.
Contra la resolución del Alcalde Provincial procede el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal.
Cuando la resolución se expida por un Alcalde Distrital, antes de recurrirse al Tribunal Fiscal, debe agotarse el recurso jerárquico correspondiente ante el Alcalde Provincial respectivo.

CAPITULO III

DE LOS FONDOS MUNICIPALES DE INVERSION

Artículo 97.- Creánse los Fondos Municipales de Inversión, con el objeto de proporcionar los recursos para el financiamiento del Programa de Inversiones y Obras de las Municipalidades Provinciales de la República.
El Fondo Municipal de Inversiones del Concejo Provincial de Lima, estará constituido por el Fondo Metropolitano de Inversiones, INVERMET, el que se regirá por lo establecido en su ley de creación y su reglamento, así como en la presente Ley Orgánica.

Artículo 98.- Son recursos de los Fondos Municipales de Inversión:

1.- El establecido en el inciso 2) del artículo 90.
2.- La participación provincial en la renta establecida por el Artículo 121 de la Constitución (*)

(*) Ver arts. 77°, in fine, y 193°, inc. 6 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

3.- Las donaciones de personas naturales o jurídicas a favor de obras específicas en los centros poblados. Estas donaciones son deducibles de la renta neta anual por un monto igual a su valor.
4.- La proporción del impuesto de rodaje correspondiente a cada Provincia.
5.- Los que cada Concejo acuerde aportar de sus rentas propias.

Artículo 99.- Los Fondos Provinciales de Inversión se aplicarán a la ejecución del Plan Provincial de Desarrollo Municipal, que apruebe la Asamblea de Alcaldes Distritales.
Se observará en lo posible la siguiente distribución:

1.- 40% en obras de interés interdistrital.
2.- 60% en obras específicas en cada Distrito en proporción al número de habitantes y las proyecciones de su crecimiento demográfico.

Artículo 100.- La prioridad en el Programa Distrital de obras en centros poblados se definirá por las donaciones a que se refiere el inciso 3) del artículo 98.

Artículo 101.- Los arbitrios destinados al mantenimiento de los servicios públicos en los Distritos con población urbana menor de 10,000 habitantes pueden ser redimidos por los usuarios mediante aportes personales en bienes y/o servicios para su instalación, mantenimiento y funcionamiento, mediante contrato con el respectivo Concejo Municipal.

Artículo 102.- Los Fondos Provinciales de Inversiones Municipales serán regidos por Estatutos propios los que adoptarán las normas sustanciales del INVERMET en lo referente a su administración y proporción dedicada a la inversión y gastos corrientes.

CAPITULO IV

DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES Y LA CONTABILIDAD

Artículo 103.- Las Municipalidades se rigen por presupuestos anuales como instrumentos de administración y gestión.
Los presupuestos contienen provisiones de ingreso y presupuestos de gastos. Los presupuestos de gastos municipales son corrientes y de inversión. Los presupuestos de gastos corrientes contienen partidas de egresos para la atención de las funciones, actividades y servicios municipales.
Los presupuestos de inversión especifican obras y estudios a ser ejecutados de conformidad con el plan y programa anual de Inversiones Municipales.

Artículo 104.- Los aumentos de remuneraciones dispuestos por el Gobierno Central y que no estén provistos en el presupuesto municipal, serán cubiertos mediante transferencia de aquél.

Artículo 105.- Vencido el ejercicio de Presupuesto el Director Municipal o en su caso el Alcalde o el Concejal encargado de esta función formulan la Cuenta Municipal del ejercicio fenecido, que debe ser sometido al Concejo Municipal para su aprobación respectiva, a mas tardar el 31 de marzo de cada año.

Artículo 106.- La contabilidad deberá llevarse de acuerdo con las normas generales de contabilidad pública. Los registros y libros respectivos deben estar legalizados conforme a ley.

Artículo 107.- La contabilidad puede ser llevada, en virtud de contrato por empresas de servicio, mediante Contrato con el Concejo Provincial, para todos los Concejos Distritales de su jurisdicción, previo acuerdo de la Asamblea de Alcaldes Distritales.

CAPITULO V

DEL CONTROL MUNICIPAL

Artículo 108.- La administración y uso de fondos por las Municipalidades están regidos por las normas del Sistema Nacional de Control.

TITULO VI

DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES SANCIONES Y RECURSOS DE IMPUGNACION

CAPITULO I

DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES

Artículo 109.- Los Concejos Municipales ejercen funciones de gobierno mediante Ordenanzas, Edictos y Acuerdos y sus funciones administrativas mediante Decretos y Resoluciones.
Los Alcaldes ejercen sus funciones mediante Decretos y Resoluciones.

Artículo 110.- Las Ordenanzas son normas generales que regulan la organización, administración o prestación de los servicios públicos locales, el cumplimiento de las funciones generales o específicas de las Municipalidades o establecen las limitaciones y modalidades impuestas a la propiedad privada.
Los Edictos son normas generales por cuya virtud se aprueban los tributos municipales y el Reglamento de Organización Interior.
Los Acuerdos son decisiones específicas sobre cualquier asuntos de interés público, vecinal o institucional que expresan la opinión de la Municipalidad, su voluntad de practicar un determinado acto o de sujetarse a una conducta o norma institucional.

Artículo 111.- Los Decretos establecen normas de ejecución de las Ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios a la administración Municipal o resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario
Las Resoluciones resuelven asuntos de carácter administrativo.

Artículo 112.- Las Ordenanzas Municipales, los Edictos y los Decretos deben ser publicados, salvo lo dispuesto en el artículo 96 para las normas de carácter tributario:

1.- En el diario oficial «El Peruano», si las normas son expedidas por las Municipalidades de la Provincia de Lima, del Departamento de Lima.
2.- En el diario encargado de las publicaciones judiciales del lugar, si son expedidos por la Municipalidad de la capital de un distrito judicial.
3.- Mediante Bandos públicos y carteles impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, en todas las demás circunscripciones que no sean capital de Distrito Judicial, de lo que dará fe la Autoridad Judicial respectiva.

Sin el requisito de publicidad las normas a que este artículo se refiere no son obligatorias Salvo casos de calamidad o fuerza mayor debidamente justificada las normas municipales rigen a partir del décimo día calendario siguiente al de su publicación.

Artículo 113.- Las disposiciones municipales y las de Alcaldía de interés particular se notifican en forma personal y de modo que acrediten la efectiva recepción por los interesados.
Las notificaciones de carácter tributario se sujetan a las normas del Código Tributario.

Artículo 114.- Para el mejor cumplimiento de las resoluciones municipales, se observará las siguientes normas:

1.- Las autoridades políticas, administrativas y policiales, ajenas al Gobierno Local, tienen la obligación de reconocer y respetar la preeminencia de la autoridad municipal en los asuntos

de su competencia. No pueden interferir en el cumplimiento de las Ordenanzas, edictos, acuerdos y resoluciones municipales ni en la recaudación y aplicación de sus rentas aprobadas conforme a ley.

2.- La interposición de acciones legales contra las resoluciones municipales no suspende ni impide el cumplimiento de las mismas, las que continuarán surtiendo sus efectos hasta que el órgano jurisdiccional respectivo expida su fallo de última instancia, salvo que el reclamante exponga razones atendibles ante el Juez de la causa.

3.- Las Fuerzas Policiales deben prestar el apoyo que requiera la autoridad municipal, para hacer cumplir sus disposiciones.

El incumplimiento de las normas contenidas en los incisos 1) y 3) precedentes, dará lugar a la denuncia ante la autoridad superior respectiva para la aplicación de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar.

CAPITULO II

DE LAS SANCIONES

Artículo 115.- Las Ordenanzas Municipales pueden establecer las sanciones de multa, decomiso y clausura por infracción de sus disposiciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar conforme a ley.
Las sanciones pueden aplicarse simultáneamente y o alternativamente.

Artículo 116.- Los Concejos Municipales, por propia iniciativa o a solicitud de los Concejos Distritales, aprueban y modifican la escala de multas dentro de los límites mínimos y máximos.
Las multas de carácter tributario se sujetan a lo establecido por el Código Tributario.

Artículo 117.- La autoridad Municipal no puede aplicar multas sucesivas por la misma infracción ni por falta de pago de una multa o cuando la infracción haya sido sancionada por el Poder Ejecutivo. Asimismo no puede hacerlo por sumas mayores o menores a las previstas en la tabla pertinente. Las multas no devengan interés.

Artículo 118.- La autoridad municipal debe ordenar el decomiso, previa acta, de artículos de consumo humano adulterados, falsificados, o en estado de descomposición; de productos que constituyen peligro contra la vida o la salud y de los artículos de circulación o consumo prohibidos por la ley. Las especies en estado de descomposición y los productos de circulación o consumo prohibidos se destruyen o eliminan, inmediatamente bajo responsabilidad de los órganos municipales respectivos.

Artículo 119.- Las autoridades municipales pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente y constituye peligro o sean contrarios a las normas reglamentarias, o produzcan olores, humos, ruidos u otros daños perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario.

Artículo 120.- La autoridad municipal puede ordenar el retiro de materiales o la demolición de obras e instalaciones que ocupen las vías públicas o mandar ejecutar la orden por cuenta del infractor. Puede asimismo, demandar autorización judicial en la vía coactiva para la demolición de obras inmobiliarias prohibidas por Decreto Ley Nº 17355, reglamentos y ordenanzas municipales.

Artículo 121.- Los vecinos pueden denunciar ante la respectiva Municipalidad, las infracciones de las Ordenanzas o de las demás disposiciones municipales en que incurren los funcionarios y servidores municipales y los particulares.

Las autoridades municipales deben pronunciarse sobre la denuncia, necesaria y obligatoriamente, e imponer las sanciones correspondientes o declarar improcedente la denuncia, en un plazo no mayor de 30 días. En este último caso se impone al o a los denunciantes una multa, si la denuncia fuese maliciosa o carente de fundamento.

CAPITULO III

DE LOS RECURSOS DE IMPUGNACION

Artículo 122.- Los actos administrativos municipales que den origen a reclamaciones individuales, se rigen por el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. (*)
Los asuntos de índole tributario se regulan por las normas del Código Tributario.

(*) Ver DECRETO SUPREMO N° 02-94-JUS del 31.10.94

Artículo 123.- Los miembros del Concejo Distrital pueden apelar ante el Concejo Provincial respectivo de las Ordenanzas, Edictos y Decretos dentro del término de tres días hábiles, más el término de la distancia, posteriores a la fecha de aprobación. Con la resolución que expida el Concejo Provincial queda agotada la vía administrativa.
Los miembros del Concejo Provincial pueden ejercer derecho similar ante el órgano de Gobierno Regional, con la Resolución que expide el Gobierno Regional, queda agotada la vía administrativa.

Artículo 124.-
Agotada la vía administrativa, proceden las siguientes acciones:

1.- Acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, contra l las Ordenanzas Municipales (*).

(*) Ver Ley 26453, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

2.- Acción popular ante el Poder Judicial contra los edictos y los decretos de Alcaldía que aprueben normas de aplicación de las ordenanzas o resuelvan cualquier asunto de carácter general en contravención con las normas legales vigentes.
3.- Acción de contradicción o impugnación judicial contra los Acuerdos del Concejo Municipal, y las Resoluciones que resuelvan asuntos de carácter subjetivo ante el órgano jurisdiccional.

Las acciones se interponen en los términos que señalan las leyes de la materia. Las acciones de contradicción o impugnación de resoluciones
Administrativas se interponen dentro de los 60 días siguientes a la fecha de notificación de la Resolución que puso fin a la instancia.

CAPITULO IV

INTERRELACIONES MUNICIPALES

Artículo 125.- Las Municipalidades pueden celebrar Congresos Nacionales o Regionales para intercambiar experiencias, coordinar su acción y contribuir al perfeccionamiento de la legislación municipal.
Pueden constituir, asimismo una asociación de municipalidades con fines análogos a los señalados en el párrafo anterior.

Artículo 126.- Las Municipalidades, se relacionan con los Poderes Públicos, Gobiernos Regionales y entre sí, a fin de coordinar sus acciones en los distintos niveles e instancias. Asimismo las Munici-

palidades proporcionan la información que requieren los Senadores y Diputados, de conformidad con el artículo 179 de la Constitución Política del Perú y la que le sea solicitada por los Ministerios del Estado y por la Contraloría General (*)

(*) Ver art. 96° de la CONSTITUCION POLÍTICA

TITULO VII

DEL FOMENTO A LA ACCION MUNICIPAL

CAPITULO UNICO

DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL

Artículo 127.- Creáse el Instituto Nacional de Fomento Municipal con sede en la Capital de la República. Es persona jurídica de derecho público interno dependiente de la Oficina del Primer Ministro. Su organización, atribuciones y recursos serán fijados por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.
El órgano rector del Instituto es el Consejo Directivo Nacional integrado por:
Un representante del Presidente de la República, que lo preside.
Un representante del Ministerio de Vivienda.
Un representante del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio.
Un representante del Instituto Nacional de Administración Pública.
Un representante del Instituto de Planificación.
Cuatro representantes de las Municipalidades; uno por el norte, uno por el centro, uno por el sur y uno por el oriente.

Artículo 128.- Son funciones del Instituto Nacional de Fomento Municipal:

1.- Prestar apoyo técnico a las Municipalidades y asesorarlas en el cumplimiento de sus atribuciones a requerimiento de ellas mismas, a fin de lograr eficiencia en la prestación de los servicios públicos locales y un racional aprovechamiento de los recursos de que disponen.
2.- Cooperar en los estudios de financiamiento de los proyectos municipales de desarrollo local, servicios públicos y similares.
3.- Realizar investigaciones y/o estudios sobre la realidad municipal y difundirlas para uso de las Municipalidades.
4.- Proporcionar a las Municipalidades, servicios de capacitación de personal, compilación y difusión de la legislación necesaria para el desarrollo de la vida municipal.
5.- Representar a las Municipalidades ante los órganos del Gobierno Central o de empresas públicas ante las cuales deban efectuar trámites relacionados con sus funciones.

TITULO VIII

DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 129.- La Capital de la República tiene el régimen especial del presente Título, en conformidad con el artículo 258 de la Constitución Política del Perú (*)

(*) Ver art. 196° de la CONSTITUCION POLÍTICA

Artículo 130.- La Capital de la República es sede de la Municipalidad Metropolitana la que ejerce jurisdicción sobre la Provincia de Lima.

Artículo 131.- Son órganos de gobierno de la Municipalidad Metropolitana:

1.- El Concejo Metropolitano.
2.- El Alcalde Metropolitano.
3.- La Asamblea Metropolitana de Alcaldes.

Son órganos de asesoramiento de la Municipalidad Metropolitana:

1.- La Junta de Planeamiento Metropolitana.
2.- La Junta de Participación y Cooperación Metropolitana.
3.- Las Comisiones especiales de asesoramiento.

Artículo 132.- Las Municipalidades Distritales integrantes de la Municipalidad Metropolitana se rigen por las disposiciones que se señalan en la presente ley para los Concejos Distritales en general, con las limitaciones comprendidas en el presente Título (*)

(*) Modificado por LEY N° 26317 de 29.05.94

CAPITULO II

DEL CONCEJO METROPOLITANO

Artículo 133.- El Concejo Metropolitano de Lima esta integrado por un Alcalde y los Regidores que establezca la Ley Electoral.

Artículo 134.- Compete al Concejo Metropolitano:

1.- Ejercer las atribuciones que, conforme a esta ley corresponden a los Concejos Provinciales.
2.- Aprobar y evaluar el Plan de Desarrollo Metropolitano en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.
3.- Coordinar con los Ministerios y demás organismos del Gobierno Central las acciones necesarias en asuntos de su competencia.
4.- Dictar ordenanzas, edictos y adoptar acuerdos de alcance Metropolitano.
5.- Aprobar, ejecutar, evaluar y controlar el presupuesto de la Municipalidad Metropolitana.
6.- Acordar el régimen de organización interior de la Municipalidad Metropolitana y orientar el régimen de organización de los Distritos de su jurisdicción.
7.- Normar y organizar y de ser el caso administrar los servicios públicos y aprobar las obras

públicas municipales metropolitanas.
8.- Regular el transporte colectivo, la circulación y el transporte metropolitano.
9.- Aprobar y autorizar la celebración de contratos con entidades públicas y privadas, preferentemente locales, la atención de servicios públicos, inversiones y obras de carácter metropolitano.
10. Aprobar y autorizar la celebración de contratos de créditos internos para la ejecución de obras de carácter metropolitano, y la contratación de créditos externos, de conformidad con las autorizaciones legislativas correspondientes.
11. Supervisar y fiscalizar el servicio de vigilancia municipal metropolitana.
12. Cooperar con la educación inicial y primaria y vigilancia de su normal funcionamiento, de acuerdo con los artículos 24 y 30 de la Constitución Política del Perú (*)

(*) Ver arts. 16° y 17° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA

13. Proponer al Poder Ejecutivo la modificación, creación o supresión de Distritos de su circunscripción. Aprobar los planos de la zonificación metropolitana para los efectos de una mejor prestación de servicios y administración municipal en general.
14. Dirigir y controlar las empresas municipales.
15. Participar mayoritariamente en los Directorios de las empresas del sector público, que dentro de su jurisdicción, tengan a su cargo los servicios que la Constitución y la ley reservan a las Municipalidades.
16. Ejecutar las demás funciones que la ley señale.

Artículo 135.- Contra las ordenanzas, edictos y acuerdos de la Municipalidad Metropolitana se puede interponer recurso de reconsideración, con lo que se da por agotada la vía administrativa, en la forma prevista en el artículo 124 de esta ley.

CAPITULO III

DEL ALCALDE METROPOLITANO

Artículo 136.- Para ser Alcalde de Lima se necesitan los mismos requisitos que para ser elegido Diputado, excepto ser peruano de nacimiento.
Corresponden al Alcalde Metropolitano de Lima además de las atribuciones inherentes a los demás Alcaldes Provinciales, las siguientes:

1. Coordinar con los Ministros y demás órganos del Gobierno Central las acciones necesarias en asuntos de su competencia.
2. Formular el Plan de Desarrollo Metropolitano, en coordinación con la Municipalidad del Callao y las reparticiones pertinentes de la administración, con sujeción a los planes nacionales de desarrollo.
3. Ejecutar, evaluar y controlar el Presupuesto de la Municipalidad Metropolitana.
4. Organizar, ejecutar y administrar los servicios públicos locales y la ejecución de las obras.
5. Organizar y controlar el sistema del transporte colectivo, la circulación y el tránsito metropolitano.
6. Suscribir los contratos en que sea parte la Municipalidad.
7. Otorgar licencias para obras de habilitación urbana, construcción, renovación y demolición en la Provincia de Lima, ya sea directamente o por intermedio de las Municipalidades Distritales.
8. Aprobar la identificación, calificación, planos definitivos de trazado y lotización, así como el otorgamiento de títulos de propiedad en los asentamientos humanos de la Provincia poniéndolos en conocimiento de las Municipalidades Distritales para su cumplimiento.

9. Aprobar los cambios de los estudios a nivel específico.
10. Organizar y dirigir la política municipal metropolitana.
11. Nombrar y contratar a los funcionarios y servidores en general.
12. Designar a los Directores de las empresas municipales y los de las empresas del sector público que tengan a su cargo la prestación de los servicios que la Constitución y la ley reserven a las Municipalidades.
13. Presidir el Concejo Metropolitano y la Asamblea Metropolitana.

CAPITULO IV

DE LA ASAMBLEA METROPOLITANA

Artículo 137.- La Asamblea Metropolitana de Alcaldes se integra por el Alcalde Metropolitano y los Alcaldes Distritales de la Provincia de Lima. Sus funciones son de coordinación para la eficiente ejecución de las funciones, el desarrollo de los planes y el cumplimiento de los fines de la Municipalidad Metropolitana. Se reúne por lo menos una vez cada dos meses.

Artículo 138.- La Asamblea Metropolitana puede crear Comisiones de Regidores Provinciales y Distritales para los fines previstos en el artículo 43 de la presente ley.

Artículo 139.- La organización, funcionamiento y el número de las Comisiones de Regidores son determinados por la Asamblea Metropolitana.

CAPITULO V

DE LOS ORGANOS METROPOLITANOS DE ASESORAMIENTO

Artículo 140.- La Municipalidad Metropolitana tiene una Junta de Planeamiento Metropolitano a fin de asesorar al Alcalde en:

1. La formulación y evaluación de la planificación del desarrollo integral de la circunscripción.
2. La formulación y evaluación del plan de acondicionamiento territorial.
3. La formulación y supervisión del servicio de catastros.
4. La organización y control del servicio de información y estadística.

Artículo 141.- La Junta de Planeamiento Metropolitano será presidida por el Alcalde de Lima, es integrada por los representantes de más alto nivel de los Ministerios de Economía, Finanzas y Comercio; de Vivienda; de Transportes y Comunicaciones; de Agricultura; de Salud; del Instituto Nacional de Planificación; del Instituto Nacional de Cultura; un representante de las Universidades del Estado y otro de las Universidades privadas.

Artículo 142.- La Junta de Participación y Cooperación Metropolitana asesora y apoya al Concejo Metropolitano en la gestión de los servicios y obras metropolitanas. Esta integrada por los delegados de las instituciones representativas, de las actividades económicas, culturales, laborales y sociales de la Provincia de Lima. El Reglamento Interno de la Municipalidad Metropolitana determina el número de representantes y sus funciones.

Artículo 143.- El Alcalde de Lima puede constituir Comisiones para que presten servicios de asesoramiento con carácter de ad honorem, en los asuntos metropolitanos que estime necesario.

CAPITULO VI

DE LA ADMINISTRACION METROPOLITANA

Artículo 144.- Los actos y contratos municipales, la prestación de los servicios públicos locales y los regímenes de la economía municipal, presupuestal, de las empresas municipales, de los servicios municipales, así como todo lo relacionado con las sanciones, se sujetan a las normas generales de la presente ley.

Artículo 145.- El Concejo Metropolitano determina, previo pronunciamento de la Asamblea Metropolitana de Coordinación, la distribución de los recursos que corresponden en los casos que la ley no lo establezca.
La distribución se efectúa teniendo en cuenta la proporción en que los Distritos aportan los recursos respectivos, requerimientos de los servicios públicos locales de carácter metropolitano y las necesidades de cada Distrito. Se exceptúan de esta disposición los recursos que por ley especial se asigne a determinadas Municipalidades.

Artículo 146.- Rigen las demás disposiciones de la presente ley para la Municipalidad Metropolitana y los Distritos de su jurisdicción en todo aquello que no se oponga expresamente.

TITULO IX

DISPOSICIONES ESPECIALES

Revisión de Expedientes de Adjudicación

Artículo 147.- Los expedientes sobre adjudicación de terrenos, iniciados al amparo de la Ley Nº 4940 y Decreto Ley Nº 18460, con posterioridad al 1 de Enero de 1971, incluyendo aquellos en los que se haya expedido resoluciones aprobatorias de la adjudicación, serán revisados y resueltos los que así requieran por las Municipalidades Provinciales. Para este efecto, el Ministerio de Vivienda les remitirá los expedientes respectivos.

Artículo 148.- Respecto de dichos expedientes, las Municipalidades Provinciales quedan facultadas para proceder en la forma siguiente:

1.- Proseguir el trámite en los que no se haya expedido resolución de adjudicación, pero adecuándolos a los criterios establecidos en el artículo 70, inciso 3) y en el Decreto Supremo a que se refiere el artículo siguiente de esta ley, siempre que no se afecten derechos de terceros legalmente adquiridos.

2.- Determinar el incumplimiento o transgresión de las disposiciones legales vigentes al momento de la expedición de las resoluciones autoritativas de la jurisdicción, en los expedientes en los que se haya expedido tales resoluciones, aunque la transferencia de dominio se encuentre inscrita en los Registros Públicos.

Adjudicación de Terrenos Eriazos y Ribereños

Artículo 149.- A partir de la vigencia de la presente ley, las solicitudes de adjudicación de terrenos eriazos o ribereños ubicados dentro de las áreas de expansión urbana, serán presentados a las Municipalidades Provinciales de la jurisdicción en que se encuentren ubicados los terrenos de la petición.
Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Vivienda, se señalará los requisitos, condiciones y procedimientos de la adjudicación, la que se efectuará necesariamente con arreglo a los criterios que para el efecto se señala en el inciso 3) del artículo 70 de la presente ley.

Regularización de Títulos en Asentamientos Humanos
Artículo 150.- Los poseedores de terrenos en los Asentamientos a que se contrae el artículo 70 inciso 5) tienen derecho a adquirir la propiedad de los mismos, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.- Acreditar una posesión continua personal no menor de tres años a la vigencia del Decreto Legislativo Nº 51, en terrenos de libre disposición del Estado, no comprometidos o reservados por las entidades del Sector Público Nacional para otros fines o en terrenos de propiedad privada que serán debidamente expropiadas a condición que no estuvieran dedicados a uso agropecuario o con viviendas construidas, en construcción u obras de urbanización autorizadas o en ejecución, dentro del plazo de ley. Es condición indispensable que sea la única propiedad inmobiliaria y que este destinada a vivienda o lugar de trabajo del ocupante.

2.- Estar empadronados como poseedores en los registros que establezcan al efecto las Municipalidades Provinciales de las jurisdicciones en la que se ubiquen los asentamientos.

3.- Satisfacer las exigencias de identidad personal y seguridad de los ocupantes de dichos asentamientos.

Artículo 151. El título de propiedad referido en el artículo anterior será expedido por las Municipalidades Provinciales de la jurisdicción correspondiente. Los títulos respectivos se expiden en documento impreso para ese fin de acuerdo con las normas dictadas por los Ministerios de Justicia y de Vivienda. Dichos títulos son suficientes para la primera inscripción de dominio de los inmuebles respectivos en los Registros Públicos, la que estará exonerada de derecho de estudios de título y de inscripción. En caso de controversia sobre el mejor derecho al título procede la impugnación ante el Poder Judicial.

Artículo 152.- Derogado por la Ley 23854

Artículo 153.-Derogado por la Ley 23854

Artículo 154.-Derogado por la Ley 23854

Artículo 155.- Sólo tendrán derecho a lo establecido en el artículo 70 inciso 5) los integrantes de asentamientos humanos debidamente registrados y con expedientes en trámite de adjudicación, a la fecha de promulgación de la presente.
Carecen de este derecho los asentamientos que se establecieren en el futuro sin haber recabado previamente la autorización del Concejo Provincial ni haber cumplido los requisitos señalados por éste. Las autoridades competentes procederán a desalojar a solicitud de las Municipalidades Provinciales los terrenos ocupados sin autorización municipal previa. Los promotores y ejecutores de tales actos, serán pasibles de las acciones penales a que hubiere lugar.

CAPITULO VI

DE LA ADMINISTRACION METROPOLITANA

Artículo 144.- Los actos y contratos municipales, la prestación de los servicios públicos locales y los regímenes de la economía municipal, presupuestal, de las empresas municipales, de los servicios municipales, así como todo lo relacionado con las sanciones, se sujetan a las normas generales de la presente ley.

Artículo 145.- El Concejo Metropolitano determina, previo pronunciamento de la Asamblea Metropolitana de Coordinación, la distribución de los recursos que corresponden en los casos que la ley no lo establezca.
La distribución se efectúa teniendo en cuenta la proporción en que los Distritos aportan los recursos respectivos, requerimientos de los servicios públicos locales de carácter metropolitano y las necesidades de cada Distrito. Se exceptúan de esta disposición los recursos que por ley especial se asigne a determinadas Municipalidades.

Artículo 146.- Rigen las demás disposiciones de la presente ley para la Municipalidad Metropolitana y los Distritos de su jurisdicción en todo aquello que no se oponga expresamente.

TITULO IX

DISPOSICIONES ESPECIALES

Revisión de Expedientes de Adjudicación

Artículo 147.- Los expedientes sobre adjudicación de terrenos, iniciados al amparo de la Ley Nº 4940 y Decreto Ley Nº 18460, con posterioridad al 1 de Enero de 1971, incluyendo aquellos en los que se haya expedido resoluciones aprobatorias de la adjudicación, serán revisados y resueltos los que así requieran por las Municipalidades Provinciales. Para este efecto, el Ministerio de Vivienda les remitirá los expedientes respectivos.

Artículo 148.- Respecto de dichos expedientes, las Municipalidades Provinciales quedan facultadas para proceder en la forma siguiente:

1.- Proseguir el trámite en los que no se haya expedido resolución de adjudicación, pero adecuándolos a los criterios establecidos en el artículo 70, inciso 3) y en el Decreto Supremo a que se refiere el artículo siguiente de esta ley, siempre que no se afecten derechos de terceros legalmente adquiridos.

2.- Determinar el incumplimiento o transgresión de las disposiciones legales vigentes al momento de la expedición de las resoluciones autoritativas de la jurisdicción, en los expedientes en los que se haya expedido tales resoluciones, aunque la transferencia de dominio se encuentre inscrita en los Registros Públicos.

Adjudicación de Terrenos Eriazos y Ribereños

Artículo 149.- A partir de la vigencia de la presente ley, las solicitudes de adjudicación de terrenos eriazos o ribereños ubicados dentro de las áreas de expansión urbana, serán presentados a las Municipalidades Provinciales de la jurisdicción en que se encuentren ubicados los terrenos de la petición.
Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Vivienda, se señalará los requisitos, condiciones y procedimientos de la adjudicación, la que se efectuará necesariamente con arreglo a los criterios que para el efecto se señala en el inciso 3) del artículo 70 de la presente ley.

Regularización de Títulos en Asentamientos Humanos
Artículo 150.- Los poseedores de terrenos en los Asentamientos a que se contrae el artículo 70 inciso 5) tienen derecho a adquirir la propiedad de los mismos, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.- Acreditar una posesión continua personal no menor de tres años a la vigencia del Decreto Legislativo Nº 51, en terrenos de libre disposición del Estado, no comprometidos o reservados por las entidades del Sector Público Nacional para otros fines o en terrenos de propiedad privada que serán debidamente expropiadas a condición que no estuvieran dedicados a uso agropecuario o con viviendas construidas, en construcción u obras de urbanización autorizadas o en ejecución, dentro del plazo de ley. Es condición indispensable que sea la única propiedad inmobiliaria y que este destinada a vivienda o lugar de trabajo del ocupante.

2.- Estar empadronados como poseedores en los registros que establezcan al efecto las Municipalidades Provinciales de las jurisdicciones en la que se ubiquen los asentamientos.

3.- Satisfacer las exigencias de identidad personal y seguridad de los ocupantes de dichos asentamientos.

Artículo 151. El título de propiedad referido en el artículo anterior será expedido por las Municipalidades Provinciales de la jurisdicción correspondiente. Los títulos respectivos se expiden en documento impreso para ese fin de acuerdo con las normas dictadas por los Ministerios de Justicia y de Vivienda. Dichos títulos son suficientes para la primera inscripción de dominio de los inmuebles respectivos en los Registros Públicos, la que estará exonerada de derecho de estudios de título y de inscripción. En caso de controversia sobre el mejor derecho al título procede la impugnación ante el Poder Judicial.

Artículo 152.- Derogado por la Ley 23854

Artículo 153.-Derogado por la Ley 23854

Artículo 154.-Derogado por la Ley 23854

Artículo 155.- Sólo tendrán derecho a lo establecido en el artículo 70 inciso 5) los integrantes de asentamientos humanos debidamente registrados y con expedientes en trámite de adjudicación, a la fecha de promulgación de la presente.
Carecen de este derecho los asentamientos que se establecieren en el futuro sin haber recabado previamente la autorización del Concejo Provincial ni haber cumplido los requisitos señalados por éste. Las autoridades competentes procederán a desalojar a solicitud de las Municipalidades Provinciales los terrenos ocupados sin autorización municipal previa. Los promotores y ejecutores de tales actos, serán pasibles de las acciones penales a que hubiere lugar.

Artículo 156.- Es nulo todo certificado de posesión o adjudicación de terrenos a que se refiere este Capítulo, que no haya sido otorgado por las Municipalidades Provinciales.
Adjudicación de Terrenos para Urbanizaciones Populares

Artículo 157.- Antes de acceder a cualquier pedido de adjudicación de terrenos con fines de lotización o urbanización de tipo popular, las Municipalidades Provinciales notificarán a los propietarios de terrenos colindantes, quienes pueden formular observaciones sobre lo siguiente:

1.- Areas de su propiedad afectadas.
2.- Derechos reales afectados, tales como entradas, salidas, usos, costumbres, servidumbres, y cualesquiera otras.
3.- Infracciones al Plano regulador y la Carta reguladora de usos de tierras.

Artículo 158.- Con las observaciones formuladas las Municipalidades modificarán la ubicación y linderos de los terrenos solicitados, poniendo en conocimiento de los colindantes la resolución tomada.

Artículo 159.- Terminados los procedimientos a que se refiere el artículo anterior el Concejo Provincial comunicará lo actuado a la Dirección de Bienes Nacionales para que haga las anotaciones y efectué las transferencias correspondientes a favor de la Municipalidad. Si en el plazo de 90 días la Dirección de Bienes Nacionales no formulare observaciones ni otorgare la respectiva escritura de transferencia de dominio a favor de la Municipalidad, ésta recurrirá al Juez de Primera Instancia, solicitando su otorgamiento por el mérito de lo actuado.

Artículo 160.- El Concejo Provincial puede proceder a otorgar las autorizaciones provisionales de posesión simultáneamente con la solicitud ante el Juez de
Primera Instancia, señalando los precios de transferencia y derechos de lotización a ser pagados por los solicitantes. Los primeros serán rentas del Concejo Distrital y los segundos del Provincial.
Exoneración Ley Nº 16000.

Artículo 161.- Las Municipalidades están exoneradas de los alcances del inciso b) del artículo 5 de la Ley Nº 16000.

Rentas de Municipalidades Delegadas

Artículo 162.- En los Distritos en que existan Municipalidades Delegadas las rentas recaudadas se distribuirán en proporción de los servicios públicos delegados.
La Asamblea Distrital de Alcaldes de Municipalidad Delegada acordará el procedimiento para la consolidación mensual de la recaudación y la determinación de la cuota de cada Municipalidad. La Municipalidad Delegada que hubiera recaudado por encima de su cuota remitirá el excedente a la Distrital y ésta remitirá el faltante a la que hubiere recaudado por debajo de su cuota, dentro de los treinta días del mes siguiente, bajo responsabilidad del Alcalde respectivo.

Derogatoria del D. Leg. Nº 51

Artículo 163.- Derógase el Decreto Legislativo Nº 51 en la fecha señalada en el artículo siguiente. Deróganse, igualmente o modifíquense según el caso, las leyes que se opongan a la presente.

Artículo 164.- Esta Ley entrará en vigencia el 1 de Enero de 1984, salvo el Título X que regirá a partir del día siguiente de su publicación.

TITULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA Las normas del presente Título tienen el carácter de Disposiciones Ordinarias

SEGUNDA El Gobierno Central a solicitud de las Municipalidades dispondrá la transferencia progresiva, a ellas, de los organismos y servicios que cumplen fun
ciones que, conforme a la Constitución y a esta ley sean de competencia de los Concejos Municipales.

TERCERA (*).Derogada por la Ley 26317 de 29/05/94

CUARTA.- En tanto se constituyan los Gobiernos Regionales, la vía administrativa queda agotada con las Resoluciones que expidan los Concejos Provinciales, respecto de las apelaciones interpuestas contra Resoluciones de Concejos Distritales y contra las que dichos Concejos Provinciales expidan sobre las reconsideraciones que se interponga, contra sus propias Resoluciones. Se exceptúan de esta forma las Resoluciones que expidan los Concejos Municipales disponiendo la expropiación de bienes y similares cuya tramitación concluya con la resolución que, en última instancia, expida la Corporación Departamental respectiva. Se exceptúan igualmente las Resoluciones recaídas en reclamaciones tributarias y en las relacionadas con los derechos de los servidores municipales, que se regularán por las normas específicas correspondientes.

QUINTA Autorízase al Poder Ejecutivo para que, de conformidad con el Artículo 188 de la Constitución con cargo de dar cuenta al Congreso y por el término de 90 días, integre las disposiciones legales y administrativas vigentes en materia tributaria municipal formulando para este propósito el o los textos únicos concordados correspondientes.
El Poder Ejecutivo publicará un Manual con los textos a que este artículo se refiere bajo el Título de «Tributación Municipal del Perú».

SEXTA Delégase, asimismo, facultades legislativas en el Poder Ejecutivo para que en el término de 90 días dicte una nueva Ley de Impuestos de Alcabala y modifique el Decreto Legislativo Nº 57 y la Ley Nº 23552, todo lo cual regirá a partir del 1 de Enero de 1984 de conformidad con las siguientes bases:

1.- El impuesto gravará la transferencia de inmuebles urbanos y rústicos a título oneroso o gratuito, con excepción de los anticipos de legítima y transferencia a título hereditario y las naves y aeronaves.
2.- La base imponible estará constituida por el monto de la transferencia y en todo caso por un monto no menor del valor vigente del inmueble determinado o conforme las normas que rigen el impuesto al valor de la propiedad predial.
3.- La tasa del Impuesto será de 6%.
4.- Los contribuyentes serán tanto el comprador como el vendedor a razón del 50% cada uno.
5.- Son sujetos inafectos al impuesto en la parte que le correspondería: El Gobierno Central, los Gobiernos regionales y las Municipalidades; las Instituciones Públicas, los Organismos Internacionales, los Gobiernos extranjeros, las Universidades y los Centros educativos y Culturales. La ley no concederá ninguna exoneración teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso f) del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 259.
6.- Las Municipalidades percibirán el íntegro del rendimiento del Impuesto de alcabala y asumirán su administración a partir del 1 de enero de 1985.
Durante el año 1984 percibirán el 25% del rendimiento de dicho Impuesto, cuota que se

pagará por separado, en la respectiva Municipalidad Distrital.
Son aplicables al Impuesto de Alcabala las normas de los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Nº 23552.

7.- La tasa mínima a que se refiere el párrafo primero del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 57 será del 0.20 de la unidad impositiva tributaria.

8.- El primer tramo de la escala del artículo 9 de la Ley Nº 23552 queda modificado en la siguiente forma:
Tramo Autovalúo Alícuota
Hasta 12 UIT 0.05%

SEPTIMA Los terrenos que a la fecha de la promulgación de esta ley correspondan a las Municipalidades Provinciales en aplicación de las disposiciones transitorias primera y segunda del Decreto Legislativo Nº 143, se inscribirán en los Registros Públicos a nombre de éstas, por el sólo mérito de su solicitud, siempre que no exista asentamiento de transferencia a favor de terceros.

POR TANTO Habiendo sido considerado por el Congreso el proyecto de ley con excepción del artículo observado por el Señor Presidente de la República; y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 193 de la Constitución, mando se comunique al Ministerio del Interior, para su publicación y cumplimiento.
Casa del Congreso, en Lima, a los veintiocho días del mes de mayo de mil novecientos ochenticuatro.

DAGOBERTO LAINEZ VODANOVIC,
Presidente del Congreso.

ALBERTO GOICOCHEA ITURRI,
Senador Secretario del Congreso.

RAUL MEZA GAMARRA,
Diputado Secretario del Cogreso

Lima, 8 de Junio de 1984.

Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

LUIS PERCOVICH ROCA,
Ministro del Interior.

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES QUEDA MODIFICADA, A PARTIR DE SU PROMULGACION

LEY Nº 23854

Artículo 1.- La Ley Orgánica de Municipalidades queda modificada, a partir de su promulgación, en la siguiente forma:

1.- La denominación «Municipalidad Delegada» queda sustituida por la de «Municipalidad de Centro Poblado Menor»
2.- Delégase, durante 60 días, en el Poder Ejecutivo de conformidad con el Artículo 188 de la Constitución Política del Perú, la facultad de dictar, mediante sendos decretos legislativos, la Ley General de Expropiación y la Ley de Impuesto de Alcabala y adicional de Alcabala, y modifique el Decreto Legislativo Nº 057 y la Ley Nº 23552. Mientras tanto, queda vigente a plenitud, la Ley Nº 9125 y derogadas las disposiciones sobre expropiación de la Ley Orgánica de Municipalidades.
3.- Las contribuciones que, de conformidad con el inciso 10 del Artículo 257 de la Constitución, pueden establecer las Municipalidades por mejoras, peaje, pontazgo, barcaje y otros similares, se refieren a obras ejecutadas por ellas.

Artículo 2.- Esta ley entra en vigencia el mismo día que la Ley Orgánica de Municipalidades.

Casa del Congreso, en Lima, a los once días del mes de mayo de mil novecientos ochenticuatro.

MODIFICAN ARTICULOS 21°, 22° Y 132° DE LA LEY 23853

LEY Nº 26317

Artículo 1º.- Modifícanse los Artículos 21º, 22º y 132º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, con el texto siguiente:

«Artículo 21º.- Los Alcaldes y Regidores son rentados, conforme lo permita el presupuesto y la disponibilidad de recursos propios de cada Municipalidad y previo acuerdo del respectivo Concejo Municipal, aplicándose los montos que determinan o autorizan las normas sobre remuneraciones para sus respectivos rangos.
Los alcaldes reciben una remuneración mensual y los regidores perciben dietas por sesión.
Las remuneraciones y las dietas son suprimibles, por Acuerdo unánime del Concejo o por renuncia individual a ellas.»

«Artículo 22º.- Los Regidores que trabajan como dependientes en el Sector Público o Privado, gozan de licencia de sus centros de trabajo hasta por veinte horas semanales, sin descuentos de sus remuneraciones, tiempo que será dedicado exclusivamente a las labores municipales.
Los Alcaldes y Regidores no serán trasladados ni reasignados sin su consentimiento, mientras ejercen función municipal.
El empleador está obligado a conceder la licencia semanal, bajo responsabilidad.

Los alcaldes pueden optar entre la remuneración municipal o la de su función pública o privada. En el primer caso gozarán de licencia sin goce de haber por el término de su mandato. En el segundo caso, de la licencia a que se refiere el primer párrafo y pueden acogerse al beneficio de la dieta.»

«Artículo 132º.- Las Municipalidades Distritales integrantes de la Municipalidad Metropolitana se rigen por las disposiciones que se señalan en la presente ley para los Concejos Distritales en general, con las limitaciones comprendidas en el presente Titulo.»

Artículo 2º.- La percepción de la dieta está condicionada a la asistencia efectiva del Regidor a la correspondiente sesión de Concejo, abonándose proporcionalmente hasta un máximo de cuatro (4) sesiones al mes.

Artículo 3º.- El Acuerdo para fijar el monto de la dieta se adopta una vez al año hasta el 31 de marzo de cada ejercicio presupuestal. El Acuerdo aprobado se pública obligatoriamente:

a) En el Diario Oficial El Peruano, en el caso de las municipalidades provinciales y distritales de Lima Metropolitana y Callao.
b) En el diario encargado de las publicaciones judiciales o mediante bandos públicos y carteles impresos en el local municipal, en las demás municipalidades provinciales y distritales.

Artículo 4º.- Las dietas a que se refiere la presente Ley no tienen carácter remunerativo. Su percepción es excluyente de cualquier otra bonificación o asignación por igual o similar concepto.

Artículo 5º.- Deróganse la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 23853 y demás disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente Ley.

Artículo 6º.- La presente Ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Disposiciones transitoria

El acuerdo a que se refiere el Art 3º de esta LEY, para el ejercicio presupuestal de 1994 será adoptado en el plazo de 30 días contados a partir de la vigencia de la presente LEY

LEYES ORGANICAS DE SISTEMA ELECTORAL

LEY ORGANICA DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

LEY Nº 26487

TITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1°.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales es la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares. Es un organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho público interno y goza de atribuciones en materia técnica administrativa, económica y financiera.

Concordancia: Art. 176° de la CONSTITUCION POLITICA.

Artículo 2°.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene como función esencial velar por la obtención de la fiel Y libre expresión de la voluntad popular manifestada a través de los procesos electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular a su cargo.

Concordancia: Art. 176° de la CONSTITUCION POLITICA.

Artículo 3°.- La oficina Nacional de Procesos Electorales, conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil conforman el Sistema Electoral peruano de conformidad con lo establecido por el Artículo 177° de la Constitución Política del Perú. Mantiene permanentes relaciones de coordinación con dichas entidades, de acuerdo a sus atribuciones.

Concordancia: Art. 177° de la CONSTITUCION POLITICA.

Artículo 4°.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene su domicilio legal y sede central en la capital de la República.

TITULO II

De las Funciones

Artículo 5°.- Son funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales:

a) Organizar todos los procesos electorales, del referéndum y otras consultas populares.

b) Diseñar la cédula de sufragio, actas electorales, formatos y todo otro material en general, de manera que se asegure el respeto de la voluntad del ciudadano en la realización de los procesos a su cargo.

c) Planificar, preparar y ejecutar todas las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos a su cargo en cumplimiento estricto de la normatividad vigente.

d) Preparar y distribuir a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales el material necesario para el desarrollo de los procesos a su cargo.

e) Brindar, desde el inicio del escrutinio, permanente información sobre el cómputo en las mesas de sufragio y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales a nivel nacional.

f) Dictar las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios.

g) Dictar las resoluciones y la reglamentación necesaria para su funcionamiento.

h) Divulgar por todos los medios de publicidad que juzgue necesarios, los fines, procedimientos y formas del acto de la elección y de los procesos a su cargo en general.

i) Garantizar al ciudadano el derecho al ejercicio del sufragio.

j) Coordinar con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil la elaboración de los padrones electorales.

k) Recibir del Jurado Nacional de Elecciones los Padrones electorales debidamente autorizados.

l) Obtener los resultados de los procesos a su cargo y remitirlos a los Jurados Electorales.

m) Recibir y remitir al Jurado Nacional de Elecciones a solicitud de inscripción de candidatos u opciones en procesos de ámbito nacional, para la expedición de credenciales, informando respecto del cumplimiento de los requisitos formales exigidos.

n) Revisar, aprobar y controlar los gastos que efectúen las Oficinas Descentralizadas a su cargo, de acuerdo con los respectivos presupuestos.

ñ) Diseñar y ejecutar un programa de capacitación Operativa dirigida a los miembros de mesa y ciudadanía en general, durante la ejecución de los procesos electorales.

o) Evaluar las propuestas de ayuda técnica de los organismos extranjeros y concertar y dirigir la ejecución de los Proyectos acordados en los temas de su competencia.

p) Establecer los mecanismos que permitan a los personeros de las organizaciones políticas y de los organismos de observación hacer el seguimiento de todas las actividades durante los procesos a su cargo.

q) Ejercer las demás atribuciones relacionadas con su competencia.

Concordancia: Art. 182° de la CONSTITUCION POLITICA.

Artículo 6°.- Las instrucciones y disposiciones referidas en el inciso f) del Artículo 5 de la presente ley, son obligatorias y de estricto cumplimiento para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Concordancias: Arts. 166° y 186° de la CONSTITUCION POLITICA.

TITULO III

Estructura Orgánica

Artículo 7°.- La estructura orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la siguiente:

a) **Organos Permanentes:**

Alta Dirección:
Jefatura Nacional

Organos de Línea:
Gerencia de Información y Educación Electoral
Gerencia de Gestión Electoral

Organos de Asesoramiento y de Apoyo

Organo de Control

Oficina de Control Interno y Auditoría

b) **Organos Temporales:**

Comité de Gerencia de Procesos Electorales

Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales

CAPITULO I

De los Organos Permanentes

Artículo 8°.- El Jefe es la autoridad máxima de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro (4) años y mediante concurso público. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Puede ser removido por el propio Consejo Nacional de la Magistratura por la comisión de falta grave. Se considera falta grave, a título enunciativo mas no limitativo, la comisión de actos que comprometan la dignidad del cargo o lo desmerezca en el concepto público.
Concordancia; Art. 182° de la CONSTITUCION POLITICA.

Artículo 9°.- Se encuentran impedidos de ser elegidos Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales:

a) Los menores de cuarenta y cinco y mayores de setenta años de edad;
b) Los candidatos a cargos de elección popular;
c) Los ciudadanos que pertenecen o hayan pertenecido en los últimos cuatro (4) años a una organización política, que desempeñen cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas, o que los han desempeñado en los cuatro (4) años anteriores a su postulación; o que hayan sido candidatos a cargos de elección popular en los últimos cuatro (4) años;

d) Los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional que se hallen en servicio activo.

Artículo 10°.- El ejercicio del cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es incompatible con cualquier otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial. El cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es irrenunciable durante el proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular, salvo que sobrevenga impedimento debidamente fundamentado.

Artículo 11°.- El ejercicio del cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es a tiempo completo y de dedicación exclusiva. Su remuneración no excederá la de un Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Artículo 12°.- El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales deberá contar con experiencia probada en administración e informática.

Artículo 13°.- El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es responsable de normar, coordinar y desarrollar el funcionamiento y la organización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Se encarga de crear o desactivar oficinas, nombrar o destituir personal, según las leyes y la normatividad vigentes.

Concordancia: Art. 182° de la CONSTITUCION POLITICA.

Artículo 14°.- Son causales de vacancia del cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales las siguientes:

a) Renuncia, sin perjuicio de la limitación contenida en el Artículo 10 de la presente ley;
b) Muerte;
c) Incapacidad física grave, temporal mayor de doce meses o permanente e incapacidad mental comprobada;
d) Impedimento sobreviniente;
e) Destitución por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Artículo 15°.- Corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura declarar la vacancia del cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en un término no mayor de cinco (5) días en los casos previstos en los incisos a) y b), y en un plazo no mayor de treinta (30) días en los casos previstos en los incisos c) y d). El Consejo Nacional de la Magistratura deberá designar al reemplazante dentro de los cuarenticinco (45) días hábiles de declarada la vacancia.
Cuando las causales previstas en el artículo precedente se produzcan durante procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares, asumirá provisionalmente el cargo, en el término no mayor de tres (3) días, el funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de jerarquía inmediatamente inferior al Jefe.

Artículo 16°.- Los demás funcionarios y servidores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales estarán afectos a las mismas incompatibilidades señaladas en el Artículo 9, incisos b) y c), salvo que la ley disponga lo contrario.

Artículo 17°.- La Gerencia de Información y Educación Electoral estará a cargo de las comunicaciones con las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y con los Jurados Electorales, las relaciones interinstitucionales, campaña de educación, difusión y orientación al elector, relaciones con los medios de prensa, comunicación a los ciudadanos designados miembros de mesa, así como de la difusión de los resultados.

Artículo 18°.- La Gerencia de Gestión Electoral estará a cargo de las operaciones del proceso electoral y efectúa las labores de adquisición, preparación, distribución y acopio del material electoral, la determinación de locales de votación, definición de equipos y programas para el cómputo, diseño de formatos, distribución de padrones electorales, sorteo de miembros de mesa, recibir, y coordinar la inscripción de candidatos u opciones y la coordinación con las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.

Artículo 19°.- La Oficina de Control Interno y Auditoría estará encargada de fiscalizar la gestión administrativa de los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y supervigilar el desempeño administrativo, para asegurar el estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

Artículo 20°.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales, mediante Resolución interna, determinará los órganos de asesoramiento y de apoyo con que ha de contar.

Concordancia: Art. 182° de la CONSTITUCION POLITICA.

Artículo 21°.- Los trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales estarán sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Los puestos de trabajo, sean permanentes o temporales, serán cubiertos por concurso público, salvo aquellos calificados de confianza, conforme a las leyes vigentes, que no excederán del 10% del total respectivo de trabajadores.
Los trabajadores estarán afectos a las incompatibilidades previstas en los incisos b) y c) del Artículo 9º de la presente Ley.

Artículo 22°.- El desarrollo de las funciones, composición, designación de sus miembros y relaciones de los órganos que integran la Oficina Nacional de Procesos Electorales serán delimitados en el Reglamento de Organización y Funciones de la institución.

CAPITULO II

De los Organos Temporales

Artículo 23°.- El Comité de Gerencia tendrá vigencia dentro de cada Proceso Electoral, estará presidido por el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y conformado por el gerente de información y educación electoral, el gerente de gestión electoral y algún otro funcionario convocado por la máxima autoridad. Su función principal será la de coordinar las acciones operativas para llevar a cabo los Procesos Electorales, referéndum y otras consultas populares.

Artículo 24°.- Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales se conformarán para cada proceso electoral de acuerdo a las circunscripciones electorales y tipo de distrito electoral que regirá en el proceso en curso. El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales establecerá el número, ubicación y organización de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, de acuerdo con las circunscripciones electorales que determine el Jurado Nacional de Elecciones.

Concordancia: Art. 39° de la LEY N° 26859.

Artículo 25°.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales según sea el caso, podrá emplear, previa coordinación, la infraestructura material y recursos humanos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para cuyos efectos, ésta deberá brindar las máximas facilidades.

Concordancia: Art. 177° de la CONSTITUCION POLITICA.

Artículo 26°.- Dependiendo del tipo de elección y del número de electores, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales podrá solicitar al Jurado Nacional de Elecciones la división o

integración de determinadas circunscripciones electorales, a fin de agilizar las labores del proceso electoral.

Artículo 27°.- Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales tendrán dentro de su respectiva circunscripción las siguientes funciones:

a. Reportar a la Jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales o a quien esta designe;

b. Ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales, de referéndum u otras de consultas populares, de acuerdo a las directivas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la normatividad electoral vigente;

c . Entregar las actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de sus resultados en las respectivas mesas de sufragios;

d. Brindar, desde el inicio del escrutinio, permanente información sobre el cómputo de los votos;

e. Asegurar la ejecución de las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios;

f. Velar por el cumplimiento de las resoluciones y directivas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y demás disposiciones referidas a materia electoral;

g. Garantizar al ciudadano el derecho al ejercicio del sufragio;

h. Obtener los resultados de los procesos a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y remitirlos a los Jurados Electorales y a la Gerencia de Información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales;

i. Recibir y remitir las solicitudes de inscripción de candidatos u opciones en su ámbito y comunicar a los respectivos Jurados Electorales para la expedición de credenciales;

j. Presentar, bajo responsabilidad, antes de su cese, los estados de cuenta y ejecución de presupuesto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales;

k. Administrar los fondos que se le asigne;

l. Designar conforme a ley a los miembros de mesas y entregar sus credenciales;

m. Para el cumplimiento de sus labores, de acuerdo a su presupuesto, proponer a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la contratación del personal necesario;

n. Determinación de los locales de votación y distribución de las mesas;

ñ. Instalación de las cámaras secretas y verificación de seguridad de los ambientes;

o. Difundir por los medios de publicidad adecuados en cada localidad las publicaciones relacionadas con las diversas etapas del acto electoral;

p. Ejercer las demás atribuciones relacionadas con su competencia.

TITULO IV

Régimen Económico

Artículo 28°.- Los recursos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales están constituidos por:

a) Las asignaciones que se le confiere mediante la Ley General de Presupuesto de la República dentro del pliego correspondiente al Sistema Electoral;

b) Los aportes, asignaciones, legados, donaciones, transferencias, subvenciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o especies que le otorguen personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, incluyendo las que provengan de la cooperación técnica internacional;

c) Los recursos propios que genere en virtud de las acciones de su competencia, conforme a las normas pertinentes.

Artículo 29°.- El Presupuesto ordinario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es presentado por el Jurado Nacional de Elecciones al Poder Ejecutivo como un programa separado dentro del pliego correspondiente al Sistema Electoral. El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustenta el presupuesto ante dicha instancia y ante el Congreso de la República.

Concordancia: Art. 178° de la CONSTITUCION POLITICA.

Artículo 30°.- El Presupuesto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales deberá contemplar la ejecución de todos los procesos electorales con calendario fijo, según la Constitución Política del Perú. En el presupuesto deberá estar claramente diferenciado cada proceso electoral.
En el caso de ser convocado un proceso electoral especial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales deberá remitir al Jurado Nacional de Elecciones el presupuesto requerido.
El Jurado Nacional de Elecciones deberá presentarlo ante el Poder Ejecutivo dentro del plazo de siete (7) días calendario de la convocatoria.

Concordancia: Art. 182° de la CONSTITUCION POLITICA.

Artículo 31°.- Los presupuestos destinados a la ejecución de procesos electorales, según lo dispuesto en el artículo anterior y el Artículo 29 de la presente ley, estarán dedicados exclusivamente al proceso electoral de la convocatoria y, por excepción, podrá ser dispensado del cumplimiento de las normas presupuestales vigentes. Su ejecución estará a cargo del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 32°.- Una vez concluido el proceso electoral, los recursos remanentes del presupuesto especial deberán ser restituidos al Tesoro Público, bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 33°.- La titularidad del Pliego presupuestal del Sistema Electoral es ejercida colegiadamente por el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con las atribuciones y responsabilidades de ley, sin perjuicio de las que le corresponda como jefe de programa presupuestal.

Artículo 34°.- Salvo lo dispuesto en el Artículo 11 de la presente ley, las remuneraciones de los demás funcionarios y servidores, sean estos permanentes o temporales, serán establecidas, por el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de acuerdo a la normatividad vigente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera Disposición Transitoria.- El Consejo Nacional de la Magistratura designará al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en un plazo no mayor de cuarenticinco (45) días de la entrada en vigencia de la presente Ley.

Segunda Disposición Transitoria.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales se organizará en base a la estructura, personal y acervo documentario del Jurado Nacional de Elecciones que a la dación de la presente ley están referidos a todos aquellos órganos no previstos por la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones N° 26486.

Tercera Disposición Transitoria.- Autorízase al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales a disponer las medidas administrativas y de personal que fueren necesarias para su organización y adecuación a lo dispuesto en la Constitución y en la presente ley, por un período que no excederá de sesenta (60) días calendario de la entrada en vigencia de la presente ley. La Oficina Nacional de Procesos Electorales podrá aplicar un programa de reducción de personal basado en:

1. Programa de retiro voluntario con incentivos, que estará sujeto a las siguientes normas:

a. Para los trabajadores no sujetos al régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530:
Cuatro (4) ingresos totales mensuales, si el funcionario o trabajador tiene una antigüedad mayor de un (1) año y hasta cinco (5) años;
Ocho (8) ingresos totales mensuales si el trabajador tiene una antigüedad mayor de cinco (5) y hasta diez (10) años;
Diez (10) ingresos totales mensuales si el trabajador tiene una antigüedad mayor de diez (10) y hasta quince (15) años;
Doce (12) ingresos totales mensuales si el trabajador tiene una antigüedad mayor de quince (15) años.

b. Para los trabajadores sujetos al régimen de pensiones establecido por el Decreto Ley N° 20530: Reconocimiento de tres (3) años de servicios adicionales. Este beneficio no podrá ser utilizado para solicitar la incorporación en el régimen del Decreto Ley N° 20530.

El ingreso total mensual a que se refiere el presente inciso es aquel que le corresponde percibir al trabajador a la fecha de acogerse al programa de retiro voluntario.
Dentro de diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la presente ley, los trabajadores podrán acogerse al programa de retiro voluntario presentando sus respectivas renuncias a la Comisión, la misma que se reservará el derecho de denegarlas.
Los trabajadores que se retiren voluntariamente, gozando de incentivos, no podrán reingresar a laborar en la administración pública bajo cualquier forma o modalidad de contratación o régimen legal, en un plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su cese.

2. Programa de calificación, capacitación, evaluación y selección, que estará sujeto a las siguientes normas:

Vencido el plazo para la presentación de renuncias voluntarias, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ejecutará un programa de precalificación, evaluación integral y selección de personal.

Concluido este programa, los trabajadores que no aprueben los exámenes establecidos, así como aquellos que decidan no presentarse a aquellos, serán cesados por causal de reorganización y adecuación y sólo tendrán derecho a percibir la compensación por tiempo de servicios y demás beneficios que corresponda, de acuerdo a ley.
Los trabajadores que continúen laborando luego de culminado el proceso de racionalización, quedarán automáticamente incorporados a las disposiciones de la Ley N° 4916 y demás normas modificatorias y conexas.

Cuarta Disposición Transitoria.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales asume el Registro Electoral, fundamentalmente la actualización del padrón electoral hasta que entre en funciones el Registro Nacional de identificación y Estado Civil. Durante ese lapso el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizará la legalidad de la elaboración del padrón electoral, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera Disposición Final.- El Reglamento de Organización y Funciones a que se refiere el Artículo 22 de la presente ley, deberá ser aprobado por el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales dentro de los treinta (30) días de designado.

Segunda Disposición Final.- Derógase todas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la presente ley.

Tercera Disposición Final. - La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Esta Ley fue promulgada el 17.06.95 y publicada el 21.06.95

LEY ORGANICA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

LEY N° 26486

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho público encargado de administrar justicia en materia electoral; de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares y de la elaboración de los padrones electorales; de mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas; y demás atribuciones a que se refieren la Constitución y las leyes.

Concordancia: Art. 176° de la CONSTITUCION POLITICA.

Artículo 2°.- Es fin supremo del Jurado Nacional de Elecciones velar por el respeto y cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales.
El Jurado Nacional de Elecciones ejerce sus funciones a través de sus órganos jerárquicos constituidos con arreglo a la presente ley. No existe ni puede instituirse jurisdicción electoral alguna independiente a la del Jurado Nacional de Elecciones.

Artículo 3°.- El Jurado Nacional de Elecciones, conjuntamente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conforman el Sistema Electoral Peruano de conformidad con lo establecido por el Artículo 177° de la Constitución Política del Perú. Mantiene permanentes relaciones de coordinación con dichas entidades, de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo 4°.- El Jurado Nacional de Elecciones tiene su domicilio legal y sede central en la capital de la República.

TITULO II

DE LAS FUNCIONES

Artículo 5°.- Son funciones del Jurado Nacional de Elecciones:

a. Administrar justicia, en instancia final en materia electoral;
b. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio;
c. Fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares; en cumplimiento del Artículo 178° de la Constitución Política del Perú y de las normas legales que regulan los procesos;
d. Fiscalizar la legalidad de la elaboración de los padrones electorales; luego de su actualización y depuración final previa a cada proceso electoral;
e. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas;
f. Resolver en instancia última y definitiva, sobre la inscripción de las organizaciones políticas y la de sus candidatos en los procesos electorales;
g. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral;

h. Proclamar los resultados del referéndum o de cualquier otro tipo de consulta popular;
i. Proclamar a los candidatos u opciones elegidos en los respectivos procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares;
j. Expedir las credenciales a los candidatos elegidos en los respectivos procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares;
k. Declarar la nulidad de un proceso electoral, de referéndum u otras consultas populares, en los casos señalados en el Artículo 184° de la Constitución Política del Perú y las leyes;
l. Dictar las resoluciones y la reglamentación necesarias para su funcionamiento;
m. Resolver, en última instancia, las reclamaciones que se presente sobre la constitución y el funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales;
n. Recibir y admitir las credenciales de los personeros de las organizaciones políticas;
o. Resolver las apelaciones, revisiones y quejas que se interpongan contra las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales;
p. Absolver las consultas de carácter genérico no referidas a casos concretos, que los Jurados Electorales Especiales y los demás organismos del Sistema Electoral le formulen sobre la aplicación de las leyes electorales;
q. Denunciar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones penales y previstas en la ley;
r. Revisar, aprobar y controlar los gastos que efectúen los Jurados Electorales Especiales, de acuerdo con los respectivos presupuestos;
s. Dividir, a solicitud de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, las circunscripciones electorales en unidades menores, a fin de agilizar las labores del proceso electoral;
t. Resolver, en última instancia, las tachas formulada contra la inscripción de candidatos u opciones;
u. Declarar la vacancia de los cargos y proclamar a los candidatos que por ley deben asumirlos;
v. Autorizar para cada proceso electoral el uso del Padrón Electoral, elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil;
w. Diseñar y ejecutar programas de capacitación electoral dirigidos a los miembros de los organismos conformantes del Sistema Electoral;
x. Desarrollar programas de educación electoral que permitan crear conciencia cívica en la ciudadanía. Para tal efecto podrá suscribir convenios con los colegios, universidades y medios de comunicación. Esta función no será ejercida durante los procesos electorales;
y. Designar o cesar al Secretario General del Jurado Nacional de Elecciones;
z. Ejercer las demás atribuciones relacionadas con su competencia establecidas en la presente ley y la legislación electoral vigente.

Concordancia: Art. 2° de la LEY N° 26954.

Articulo 6°.- Las contiendas que se promuevan respecto de la competencia del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales o el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil serán resueltas por el Tribunal Constitucional conforme a la ley pertinente.

Concordancias: Art. 2° inciso 3) de la CONSTITUCION POLITICA; Art. 46° de la LEY N° 26435 LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Artículo 7°.- El Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la formación de leyes en materia electoral.

TITULO III

ESTRUCTURA ORGANICA

Artículo 8°.- La estructura orgánica del Jurado Nacional de Elecciones es la siguiente:

a:) Organos Permanentes:
Alta Dirección:
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
Secretaria General
Organo de Control:
Oficina de Control Interno y Auditoría
Organos de Asesoramiento y de Apoyo

b.) Organos Temporales:
Jurados Electorales Especiales

CAPITULO I

De los Organos Permanentes

Artículo 9°.- El Pleno es la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones. Es un órgano colegiado compuesto por cinco miembros, designados conforme a las disposiciones de la presente ley y al Artículo 179° de la Constitución Política del Perú. Tiene su sede en la capital de la República y competencia a nivel nacional.

Artículo 10°.- Los Miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones son elegidos:

a) Uno, mediante votación secreta por la Corte Suprema de la República, entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido;
b) Uno, en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos entre los Fiscales Supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido;
c) Uno, en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus miembros;
d) Uno, en votación secreta por los decanos de las facultades de derecho de las universidades públicas, entre sus ex-decanos;
e) Uno, en votación secreta por los decanos de las facultades de derecho de las universidades privadas, entre sus ex-decanos

Concordancia: Art. 179° de la CONSTITUCION POLITICA .

Artículo 11°.- Los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones serán elegidos por las instituciones mencionadas en el Artículo 10° de la presente ley, mediante voto secreto, directo y universal de sus miembros y por mayoría simple.
En la misma oportunidad, dichas instituciones elegirán a dos miembros suplentes quienes reemplazarán, sucesivamente al miembro titular en caso de muerte o incapacidad permanente o temporal, mientras dure ésta, o impedimento sobreviviente.

Artículo 12°.- Se encuentran impedidos de integrar el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones:

a) Los menores de cuarenta y cinco y mayores de setenta años de edad;
b) Los candidatos a cargos de elección popular;
c) Los ciudadanos que pertenecen formalmente o hayan pertenecido en los últimos cuatro (4) años a una organización política, que desempeñen cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas o que los han desempeñado en los cuatro (4) años anterio-

res a su postulación, o que hayan sido candidatos a cargos de elección popular en los últimos cuatro (4) años;

d) Los miembros de la fuerza armada y policía nacional que se hallen en servicio activo.

Artículo 13°.- Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones gozarán, durante el ejercicio de sus funciones, de los mismos honores y preeminencia de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República. Les son aplicables en lo pertinente las normas sobre responsabilidades y sanciones previstas para estos.

Artículo 14°.- El ejercicio del cargo de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es a tiempo completo y de dedicación exclusiva. Su remuneración equivale a la de un Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Artículo 15°.- El ejercicio del cargo de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es incompatible con cualquier otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial.

Artículo 16°.- El cargo de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es irrenunciable durante los procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares.

Artículo 17°.- Los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones son elegidos por un periodo de (4) cuatro años, pudiendo ser reelegidos, de inmediato, para un período adicional. Transcurrido otro periodo, pueden volver a ser elegidos miembros del Pleno, sujetos a las mismas condiciones.

Artículo 18°.- Son causales de vacancia de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones las siguientes:

a) Renuncia, sin perjuicio de la limitación contenida en el Artículo 16° de la presente ley.
b) Muerte.
c) Incapacidad física grave, temporal mayor de doce meses o permanente e incapacidad mental comprobada.
d) Impedimento sobreviniente.

En los casos previstos en los incisos a) y b) corresponde al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones declarar la vacancia, dentro de los cinco (5) días de producida. En los casos restantes, la declaración de vacancia corresponde al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, dentro del término de treinta (30) días.

Cuando las causales previstas en este artículo se produzcan durante procesos electorales, del referéndum u de otras consultas populares, se cubrirá provisionalmente el cargo en el término no mayor de tres (3) días, en la forma sucesiva y con el apercibimiento previsto en los Artículos 11° y 19° de la presente Ley

Artículo 19°.- El primer miembro suplente deberá asumir el cargo e integrarse al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones inmediatamente de declarada la vacancia del cargo del titular conforme al artículo 18° de esta Ley.

En todo caso, la incorporación del primer suplente al Pleno deberá producirse dentro de los cinco (5) días calendario de declarada la vacancia, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de su elección. Igual regla se aplica para el caso del segundo miembro suplente.

Artículo 20°.- En caso de que el segundo miembro suplente no se incorporase o tenga algún impedimento para hacerlo, debidamente fundamentado, las instituciones correspondientes deberán convocar a votación para designar a un nuevo miembro titular y dos miembros suplentes ante el Pleno del Jurado Nacional de Elección es. La designación deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al vencimiento del plazo del que gozaba el segundo miembro suplente para asumir el cargo.

Artículo 21°.- Cada dos (2) años se procederá a renovar alternadamente a los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Artículo 22°.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es presidido por el miembro elegido por la Corte Suprema y tienen las siguientes funciones:

a) Representar al Jurado Nacional de Elecciones en todos sus actos.
b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, dirigir los debates y conservar el orden durante los mismos.
c) Ejecutar los acuerdos del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
d) Ejecutar el presupuesto del Jurado Nacional de Elecciones.
e) Ejercer en forma colegiada con los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Estado Civil e Identificación la titularidad del Pliego Presupuestal del Sistema Electoral
f) Coordinar con los Jefes de los otros organismos del Sistema Electoral.

Artículo 23°.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve, oportunamente, con arreglo a la Constitución Política del Perú, las leyes y los principios generales del derecho. En materias electorales, de referéndum o de otras consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son susceptibles de revisión. Contra ellas no procede recurso ni acción de garantía alguna.

Artículo 24°.- El quórum necesario para las sesiones del Pleno es de cuatro (4) miembros. Para la adopción de decisiones o la emisión de un fallo, se requiere el voto de la mayoría simple de los miembros concurrentes, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. En caso de empate, el presidente tiene voto dirimente.

Artículo 25°.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones podrá deliberar en secreto, pero emitirá sus decisiones en forma pública. A las sesiones del Pleno sólo pueden asistir los miembros titulares y, en su caso, los miembros suplentes que los reemplacen, excepto lo dispuesto en el presente artículo y en el Artículo 27° de la presente ley.
El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional e Identificación y Estado Civil pueden concurrir a las sesiones del Pleno y participar en sus debates con las mismas prerrogativas de los miembros del Pleno, salvo la de votar. Concurren también cuando son invitados para informar.

Artículo 26°.- Los trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones, estarán sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Los puestos de trabajo serán permanentes o temporales, serán cubiertos por concurso público, salvo los calificados de confianza, conforme a las leyes vigentes; que no excederán del 10% del total respectivo de trabajadores.
Los trabajadores estarán afectos a las incompatibilidades previstas en los incisos b) y c) del artículo 12º de la presente ley

Artículo 27°.- El Jurado Nacional de Elecciones contará con un Secretario General quien deberá ser abogado. En el ejercicio de sus funciones coadyuva en la labores jurisdiccionales del Jurado, actúa como Fedatario de los acuerdos adoptados y tiene a su cargo la agenda del Pleno del Jurado.
El Secretario General concurre a las sesiones de deliberación, pero carece del derecho a voto.

Artículo 28°.- La Oficina de Control Interno y Auditoria estará a cargo de fiscalizar la gestión administrativa de los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y supervigilar el desempeño administrativo para asegurar el estricto cumplimiento de la normatividad vigente

Artículo 29°.- El Jurado Nacional de Elecciones, mediante Resolución Interna, determinará los órganos de asesoramiento y de apoyo con que ha de contar.

Artículo 30°.- El desarrollo de las funciones, composición, designación de sus miembros y relaciones de los órganos que integran el Jurado Nacional de Elecciones son delimitados en el Reglamento de Organización y Funciones.

CAPITULO II

De los Organos Temporales

Artículo 31°.- Los Jurados Electorales Especiales son órganos de carácter temporal creados para un proceso electoral específico.

Artículo 32°.- Convocado un proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones deberá definir las circunscripciones sobre las cuales se convocarán Jurados Electorales Especiales y sus respectivas sedes, así como notificar a las instituciones indicadas en el articulo siguiente a fin de que designen a sus representantes. Las circunscripciones electorales y sus respectivas sedes podrán ser modificadas por razones técnicas, a solicitud de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 33°.- Los Jurados Electorales Especiales estarán conformados por:

a) Un (1) miembro nombrado por la Corte Superior bajo cuya circunscripción se realiza el proceso electoral, entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. El miembro de la Corte Superior preside el Jurado Electoral Especial. La Corte Superior deberá en el mismo acto de nombramiento, designar a un miembro suplente.
b) Cuatro (4) miembros designados por el Jurado Nacional de Elecciones mediante sorteo en acto público de una lista de veinticinco (25) ciudadanos que residan en la sede del Jurado Electoral Especial y que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La lista sobre la cual se realizará el sorteo será elaborada por una Comisión integrada por tres (3) miembros del Ministerio Público.

En los casos donde no existan tres Fiscales, la Comisión estará integrada de la siguiente manera:

1) En los casos donde existan sólo dos Fiscales, la Comisión estará integrada por dichos Magistrados.
2) En las provincias donde exista un Fiscal, la Comisión estará integrada por dicho Magistrado y el Registrador Provincial.
3) En las provincias donde no existan Fiscales, la Comisión estará integrada por un Juez Especializado o el Juez de Paz Letrado y el Registrador Provincial.
4) En las provincias donde sólo exista un Juez, la Comisión estará formada por dicho Magistrado y el Registrador Provincial.

En las provincias donde no existan Jueces o Fiscales, la lista será elaborada por el Registrador Provincial.

Los ciudadanos propuestos deberán reunir los siguientes requisitos: Residir en la capital de la provincia, estar inscrito en el Registro Provincial y ser escogidos entre los ciudadanos de mayor grado de instrucción. No podrán ser candidatos las personas indicadas en el Artículo 11° del Texto Unico Integrado de la Ley N° 14250.

Las Listas de los ciudadanos propuestos serán publicadas, una sola vez, en el Diario Oficial El Peruano para la Provincia de Lima, en el diario de los Avisos Judiciales para las demás provincias, y a falta de éste mediante carteles que se colocarán en los municipios y lugares públicos de la localidad.

Las tachas se formularán en el plazo de tres días a partir de la publicación de las listas, y serán resueltas por la Comisión o el Registrador Provincial en su caso, en el término de tres días. Sólo se admitirán tachas sustentadas con prueba documental.
El sorteo determinaría la designación de cuatro (4) miembros titulares y cuatro (4) miembros suplentes.

Texto modificado por el Art. 45° de la LEY N° 26859.

Artículo 34°.- El cargo de miembro de Jurado Electoral Especial es remunerado e irrenunciable, salvo impedimento debidamente fundamentado. Su remuneración equivale a la de un vocal de la Corte Superior de la circunscripción. En casos de muerte o impedimento del Presidente del Jurado Electoral Especial asumirá el cargo el miembro suplente designado por la Corte Superior. En casos de muerte o impedimento del miembro titular, asumirá el cargo el primer miembro suplente y así sucesivamente.

Artículo 35°.- A efecto de la normatividad que rige a los Jurados Electorales Especiales, se aplicarán las mismas reglas que rigen para el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en lo concerniente a obligaciones, impedimentos, quórum, sesiones, acuerdos, fallos, deliberaciones, nulidades y votaciones, sin considerar la edad como impedimento. En el caso de no existir magistrados jubilados o en actividad se nombrará excepcionalmente al Fiscal más antiguo de la provincia sede del Jurado Electoral Especial o en su defecto, un abogado que reúna los requisitos para ser Vocal Superior.

Según texto del Artículo Unico de la LEY N° 26524.

Artículo 36°.- Los Jurados Electorales Especiales tendrán dentro de su respectiva jurisdicción las siguientes funciones:

a) Inscribir y expedir las credenciales de los candidatos o sus listas,
b) Expedir las credenciales de los personeros de las agrupaciones que participen en los procesos electorales del referéndum u otras consultas populares;
c) Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio;
d) Fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares;
e) Velar por el cumplimiento de las resoluciones y directivas del Jurado Nacional de Elecciones, de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a la administración de justicia electoral;
f) Administrar, en primera instancia, justicia en materia electoral;
g) Proclamar los resultados del referéndum o de otro tipo de consulta popular llevados a cabo en ese ámbito;
h) Proclamar a los candidatos elegidos en virtud de proceso electoral;
i) Expedir las credenciales correspondientes a los candidatos elegidos en virtud de proceso electoral ante su jurisdicción;
j) Declarar, en primera instancia, la nulidad de un proceso electoral, del referéndum u otras consultas populares llevados a cabo en su ámbito, en los casos en que así lo señale la ley;
K) Resolver las tachas formuladas contra los ciudadanos sorteados para conformar las mesas de sufragio;
l) Efectuar las consultas de carácter genérico no referidas a casos específicos, ante el Jurado Nacional de Elecciones sobre la aplicación de las normas electorales, en caso de ser necesario;
m) Poner en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones las infracciones o delitos cometidos por las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos, en aplicación de las normas electorales;
n) Resolver las impugnaciones que hubiesen sido hechas durante la votación y el escrutinio en las mesas de sufragio;

o) Remitir al Jurado Nacional de Elecciones los resultados electorales obtenidos
p) Administrar los fondos que se le asignen;
q) Designar a su personal administrativo para el cumplimiento de sus labores, de acuerdo a su presupuesto;
r) Presentar, antes de su cese, los estados de cuenta y ejecución de presupuesto al Jurado Nacional de Elecciones, bajo responsabilidad de sus miembros;
s) Aprobar o rechazar las tachas formuladas contra la inscripción de candidatos, organizaciones políticas u opciones y conceder los recursos de apelación, revisión o queja que interponga contra sus resoluciones, elevando los actuados al Jurado Nacional de Elecciones;
t) Ejercer las demás atribuciones relacionadas con su competencia.

Articulo 37°.- Los cargos de los miembros de los Jurados Electorales Especiales se mantendrán vigentes hasta la proclamación de los candidatos y la entrega de las respectivas credenciales.

TITULO IV

REGIMEN ECONOMICO

Articulo 38°.- Los recursos del Jurado Nacional de Elecciones están constituidos por:
a) Las asignaciones que se le confiere mediante la Ley General de Presupuesto de la Re pública;
b) Los aportes, asignaciones, legados, donaciones, transferencias, subvenciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o especies que le otorguen personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, incluyendo las que provengan de la cooperación técnica internacional;
c) Los recursos propios que genere en virtud de las acciones de su competencia, conforme a las normas pertinentes.

Artículo 39°.- El presupuesto ordinario del Jurado Nacional de Elecciones es presentado al Poder Ejecutivo como un programa separado dentro del pliego correspondiente al Sistema Electoral.
El presupuesto del Jurado Nacional de Elecciones deberá contemplar la ejecución de todos los procesos electorales con calendario fijo, según la Constitución Política del Perú. En el Presupuesto deberá estar claramente diferenciado cada proceso electoral.

Artículo 40°.- El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del Sistema Electoral que incluye por separado las partidas solicitadas para cada organismo. Lo sustenta ante esa instancia y ante el Congreso, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 80° y 178° de la Constitución Política del Perú.
Aprobado el proyecto de presupuesto del Sistema Electoral, el Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia directa de los montos correspondientes a cada uno de los organismos que lo integran.
La titularidad del pliego presupuestal del Sistema Electoral es ejercida colegiadamente por el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. con las atribuciones y Responsabilidades de ley, sin perjuicio de las que le corresponda como jefe de programa presupuestal.

Artículo 41°.- Convocado a un proceso electoral especial, los organismos del Sistema Electoral deberán remitir al Jurado Nacional de Elecciones el presupuesto requerido. El Jurado Nacional de Elecciones deberá presentarlo ante el Poder Ejecutivo dentro del plazo de (7) días calendario de efectuada la convocatoria.
El presupuesto especial estará dedicado exclusivamente al proceso electora de la convocatoria y, por excepción, podrá ser dispensado del cumplimiento de las normas presupuestales vigentes.

Artículo 42°.- Una vez concluido el proceso electoral, los recursos remanentes del presupuesto de cada organismo del Sistema Electoral deber ser restituidos al Tesoro Público, bajo responsabilidad de la máxima autoridad de cada uno de ellos.

Artículo 43°.- Salvo lo dispuesto en los Arts. 14° y 34° de la presente ley, las remuneraciones de los demás funcionarios y servidores, sean éstos permanentes o temporales, serán establecidas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a la normatividad vigente.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA UNICA

La renovación alternada de miembros del Jurado Nacional de Elecciones a que se refieren el Artículo 21° de la presente ley y la Novena Disposición final de la Constitución Política del Perú, se iniciará a los (2) años de transcurrida la instalación formal del actual Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la renovación se iniciará con los miembros elegidos por el Colegio de Abogados de Lima y por las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas. Transcurridos dos (2) años de la primera renovación, se procederá a una segunda con los miembros nombrados por la Corte Suprema, Junta de Fiscales Supremos y Junta de Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas.
Las posteriores renovaciones alternadas se sujetarán al mismo orden señalado precedentemente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera Disposición Transitoria.- Las incompatibilidades previstas en el Art. 12° de la presente ley no se aplican y por tanto no pueden significar impedimento sobreviniente respecto de los actuales miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Segunda Disposición Transitoria.- En tanto entre en funciones el Tribunal Constitucional, las contiendas de competencia a que se refiere el Artículo 6° de la presente ley serán resueltas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

Tercera Disposición Transitoria.- El Jurado Nacional de Elecciones se adecuará a lo dispuesto en la Constitución y la presente ley teniendo como base la estructura, personal y acervo documentario que a la dación de la presente ley están referidos a la Presidencia, la Secretaría General, la Oficina de Asuntos Electorales, la Oficina de Administración documentaria, la OficinaTécnica de Planificación y Presupuesto, la Oficina General del Planificación, la Oficina General de Presupuesto, la Oficina General de Racionalización y la Oficina General de Asesoría Jurídica.
Concordar con el Art. 1° de la LEY N° 26494.

Cuarta Disposición Transitoria.- Autorízace al Jurado Nacional de Elecciones a disponer las medidas administrativas y de personal que fueren necesarias para su adecuación a lo dispuesto en la Constitución y en la presente ley, por un período que no excederá de sesenta (60) días calendarios de la entrada en vigencia de la presente ley.
El Jurado Nacional de Elecciones podrá aplicar un programa de reducción de personal basada en:

1.- **Programa de retiro voluntario con incentivos, que estará sujeto a las siguientes normas: Para los trabajadores no sujetos al régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530;**

Cuatro (4) ingresos totales mensuales, si el funcionario o trabajo tiene una antigüedad mayor de un (1) año y hasta cinco (5) años;

Ocho (8) ingresos totales mensuales si el trabajador tiene una antigüedad mayor de cinco (5) y hasta diez (10) años.

Diez (10) ingresos totales mensuales si el trabajador tiene una antigüedad mayor de diez (10) y hasta quince (15) años;

Doce (12) ingresos mensuales si el trabajador tiene una antigüedad mayor de quince (15) años.
Para los trabajadores sujetos al régimen de pensiones establecido por el Decreto Ley N° 20530. Reconocimiento de tres (3) años de servicios adicionales.

Este beneficio no podrá ser utilizado para solicitar la incorporación en régimen del Decreto Ley N° 20530.
El ingreso total mensual a que se refiere el presente inciso es aquel que le corresponde percibir al trabajador a la fecha de acogerse al programa de retiro voluntario.

Dentro de diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la presente ley, los trabajadores podrán acogerse al programa de retiro voluntario presentando sus respectivas renuncias al Jurado Nacional de Elecciones, el mismo que se reservará el derecho de denegarlas.

Los trabajadores que se retiren voluntariamente, gozando de incentivos, no podrán reingresar a laborar en la administración pública bajo cualquier forma o modalidad de contratación o régimen legal, en un plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su cese.

2. El Jurado Nacional de Elecciones ejecutará un programa de calificación, capacitación, evaluación y selección, que estará sujeto a las siguientes normas:

Vencido el plazo para las renuncias voluntarias, el Jurado Nacional de Elecciones ejecutará un programa de precalificación, evaluación integral y selección de personal.

Concluido este programa, los trabajadores que no aprueben los exámenes establecidos, así como aquellos que decidan no presentarse a aquellos, serán cesados por la causal de reorganización y adecuación y sólo tendrán derecho a percibir la compensación por tiempo de servicios y demás beneficios que corresponda, de acuerdo a ley.

Los trabajadores que continúen laborando luego de culminar el proceso de racionalización, quedarán, automáticamente incorporados a las disposiciones de la Ley N° 4916 y demás normas modificatorias y conexas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera Disposición Final. - El Reglamento de Organización y Funciones al que se hace referencia en el Articulo 30º de la presente ley, deberá ser aprobado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dentro de los treinta (30) días de publicada la presente ley.

Segunda Disposición Final.- Deróguese todas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la presente ley.

Tercera Disposición Final.- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Esta Ley fue promulgada el 17.06.95 y publicada el 21.06.95

LEY ORGANICA DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

LEY 26497

Titulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1º.- Créase el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con arreglo al mandato de los Artículos 177º y 183º de la Constitución Política del Perú. El registro es un organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho público interno y goza de atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, económica y financiera.

Artículo 2º.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil. Con tal fin desarrollará técnicas y procedimientos automatizados que permitan un manejo integrado y eficaz de la información.

Artículo 3º.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, conforman el sistema electoral peruano, de conformidad con lo establecido por el Artículo 177º de la Constitución Política del Perú. Mantiene relaciones de coordinación con dichas entidades, de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo 4º.- El Registro Nacional de Identificación y Estado civil tiene su domicilio legal y sede central en la capital de la República. Podrá establecer, trasladar o desactivar oficinas registrales en diversas áreas del territorio nacional.

Artículo 5º.- La inscripción en el Registro se efectuará bajo criterios simplificados, mediante el empleo de formularios y de un sistema automático y computarizado de procesamiento de datos, que permita la confección de un registro único de identificación de todas las personas naturales, así como la asignación de un código único de identificación.

TITULO II

De las Funciones

Artículo 6º.- Al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil le corresponde planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades de registro e identificación de las personas señaladas en la presente ley, el reglamento de las inscripciones y normas complementarias.

Artículo 7º.- Son funciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil:

a) Planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripciones de su competencia.
b) Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos que modifiquen el estado civil de las personas, así como las resoluciones judiciales o administrativas que a ellos se refieran susceptibles de inscripción y los demás actos que señale la ley,
c) Emitir las constancias de inscripción correspondientes;
d) Preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales;
e) Proporcionar al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

f) Mantener el Registro de Identificación de las personas;
g) Emitir el documento único que acredita la identidad de las personas, así como sus duplicados;
h) Promover la formación de personal calificado que requiera la institución;
i) Colaborar con el ejercicio de las funciones de las autoridades policiales y judiciales pertinentes para la identificación de las personas, dejando a salvo lo establecido en el inciso siguiente y en los incisos 1), 5) y 6) del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú.
j) Velar por el irrestricto respeto del derecho a la intimidad e identificación de la persona y los demás derechos inherentes a ella derivados de su inscripción en el registro;
k) Garantizar la privacidad de los datos relativos a las personas que son materia de inscripción;
l) Implementar, organizar, mantener y supervisar el funcionamiento de los registros dactiloscópico y pelmatoscópico de las personas;
m) Brindar, durante los procesos electorales, la máxima cooperación a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, facilitando el uso de su infraestructura material y humana;
n) Cumplir las demás funciones que se le encomiende por ley.

Concordancia: Art. 183° de la CONSTITUCION POLITICA.

Artículo 8º.- Para el ejercicio de sus funciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil mantiene estrecha y permanente coordinación con las siguientes entidades:

a) Municipalidades provinciales y distritales;.
b) Municipios de centro poblado menor;
c) Instituto Nacional de Bienestar Familiar;
d) Consulados del Perú;
e) Comunidades campesinas y nativas reconocidas;
f) Centros de salud públicos o privados que intervienen en el proceso de certificación del nacimiento o defunciones;
g) Agencias municipales autorizadas;
h) Poder Judicial;
i) Cualquier otra dependencia, instancia o entidad, pública o privada, cuando ello fuese necesario.

TITULO III

Estructura Orgánica

Artículo 9º.- La estructura orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es la siguiente:

a) Alta Dirección
Jefatura Nacional
Consejo Consultivo
Gerencia General

B) Organo de Línea
Oficina central
Oficinas registrales

C) Organos de Asesoramiento
Gerencia de Informática, estadística y planificación
Gerencia de Asesoría Jurídica

D) **Organos de Apoyo**
Gerencia de Administración
Gerencia de Presupuesto

E) **Organos de Control**
Oficina General de Control Interno

Artículo 10º.- El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, en base a una terna propuesta por el Comité Consultivo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, por un período renovable de cuatro (4) años, conforme al Artículo 183º de la Constitución Política del Perú.
El desempeño del cargo es incompatible con cualquier otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial. Están impedidos de ser nombrados Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los candidatos a cargo de elección popular, los candidatos que desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas o que los han desempeñado en los cuatro (4) años anteriores a su postulación.

Artículo 11º.- El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es la máxima autoridad de dicho organismo, ejerce su representación legal y es el encargado de dirigir y controlar la institución. Ejerce en forma colegiada, con el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales la titularidad del pliego presupuestal del Sistema Electoral. Se encarga de designar las oficinas registrales en todo el país. Está autorizado para efectuar las modificaciones convenientes para un mejor servicio a la población, creando o suprimiendo las dependencias que fueren necesarias.

Concordancia: Art. 183° de la CONSTITUCION POLITICA.

Artículo 12º.- El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil sólo puede ser removido por acuerdo del Consejo Nacional de la Magistratura y en virtud de la comisión de actos que, a su juicio constituyan falta grave. Se considera falta grave a título enunciativo más no limitativo, la comisión de actos que comprometan la dignidad del cargo o la desmerezcan en el concepto público.

Artículo 13º.- Son causales de vacancia del cargo de Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil:

a). Renuncia
b). Muerte
c). Incapacidad física grave, temporal mayor de doce (12) meses; e
d). Impedimento sobreviniente.

Las causales de vacancia antes señaladas se aplican a los demás miembros de la Dirección Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo 14º.- Corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura declarar la vacancia del cargo de Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En los casos previstos en los incisos a) y b), del artículo anterior, declarará la vacancia dentro de los cinco (5) días de producidos. En los casos restantes, la declaración de vacancia se hará dentro del término de treinta (30) días.
La designación del Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la remoción o vacancia.

Artículo 15º.- El Consejo Consultivo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil está compuesto por tres miembros, uno designado por la Corte Suprema, uno por el Ministerio de Justicia y

uno por el Ministerio del Interior, por un período renovable por igual duración de dos (2) años. Les afectan las mismas incompatibilidades que la ley prevé para el Jefe del Registro de Identificación y Estado Civil.

Artículo 16º.- La Gerencia General es el órgano ejecutivo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo 17º.- La Oficina Central unifica la información de los hechos y actos inscritos en las oficinas registrales, se encarga de la organización y mantenimiento del archivo central y administra la base de datos del país.

Artículo 18º.- Las Oficinas Registrales se encontrarán a cargo de jefes de registro civil. Son las encargadas de registrar y observar los actos que la presente ley y el reglamento de las inscripciones disponen, así como de proporcionar la información necesaria a la Oficina Central, a efectos de la elaboración y mantenimiento del registro único de las personas y la asignación del código único de identificación.

Artículo 19º.- La Gerencia de Informática, Estadística y Planificación sugiere las acciones y procedimientos del sistema registral, dirige las actividades relacionadas con el procesamiento de datos. Igualmente, formula los planes y programas de la institución e informa sobre el cumplimiento de las metas programadas.

Artículo 20º.- La Gerencia de Asesoría Legal se encarga de brindar la asesoría en materia de su competencia a la Alta Dirección y las demás instancias del Registro de Identificación y Estado Civil.

Artículo 21º.- La Gerencia de Administración estará a cargo de organizar y ejecutar las actividades administrativas de la institución. Propone a la Alta Dirección la política en la administración de los recursos humanos, Financieros y materiales.

Artículo 22º.- La Gerencia de Presupuesto se encarga de coordinar y conducir los sistemas de presupuesto y racionalización. Establece y evalúa la ejecución presupuestal y conduce la racionalización de la organización.

Artículo 23º.- La Oficina General de Control Interno, estará a cargo de fiscalizar la gestión administrativa de los funcionarios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y supervigilar el desempeño administrativo para asegurar el estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

TITULO IV

Régimen Económico

Artículo 24º.- Los recursos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil están constituidos por:

a) Ingresos propios, en especial los que se recaudan por conceptos de la emisión de constancias de inscripción de los actos de su competencia y los que se recaudan por concepto de los servicios que presta el Registro.
b) Las asignaciones que se le confiere mediante la Ley General de Presupuesto de la República dentro del pliego correspondiente al Sistema Electoral.

c) Los aportes, asignaciones, legados, donaciones, transferencias y subvenciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especies que le otorguen personas naturales o jurídica, nacional o extranjera, incluyendo las que provengan de la cooperación técnica internacional.

Artículo 25º.- El Presupuesto del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es presentado por el Jurado Nacional de Elecciones al Poder Ejecutivo como un programa separado dentro del pliego correspondiente al Sistema Electoral. El Jurado Nacional de Elecciones sustenta el presupuesto ante dicha instancia y ante el Congreso de la República.
La titularidad del pliego presupuestal del Sistema Electoral es ejercida colegiadamente por el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con las atribuciones y responsabilidades de ley, sin perjuicio de las que le corresponda como Jefe de Programa Presupuestal.

TITULO V

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Artículo 26º.- El Documento Nacional de Identificación (DNI) es un documento público, personal e intransferible. Constituye la única cédula de Identidad Personal para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y en general, para todos aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser presentado. Constituye también el único título de derecho al sufragio de la persona a cuyo favor ha sido otorgado.

Artículo 27º.- El uso del Documento Nacional de Identidad (DNI) es obligatorio para todos los nacionales . Su empleo se encuentra sujeto a las disposiciones de la presente ley, el reglamento de las inscripciones y demás normas complementarias.

Artículo 28º.- El Documento Nacional de Identidad (DNI) será impreso y procesado con materiales y técnicas que le otorguen condiciones de máxima seguridad, inalterabilidad, calidad e intransferibilidad de sus datos, sin perjuicio de una mayor eficacia y agilidad en su expedición.

Artículo 29º.- El Documento Nacional de Identidad (DNI), para surtir efectos legales, en los casos que corresponda, debe contener o estar acompañado de la constancia de sufragio en las últimas elecciones en las que se encuentra obligada a votar la persona o, en su defecto, la correspondiente dispensa de no haber sufragado. En todo caso, queda a salvo el valor identificatorio del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Artículo 30º.- Para efectos identificatorios ninguna persona, autoridad o funcionario podrá exigir, bajo modalidad alguna, la presentación de documento distinto al Documento Nacional de Identidad (DNI). Tampoco podrá requisarse o retenerse el documento bajo responsabilidad.

Artículo 31º.- El Documento Nacional de Identidad (DNI) es otorgado a todos los peruanos nacidos dentro o fuera del territorio de la República desde la fecha de su nacimiento y a los que se nacionalicen, desde que se aprueba el trámite de nacionalización. El documento emitido deberá asignar un Código Unico de Identificación el mismo que se mantendrá invariablemente hasta el fallecimiento de la persona, como único referente identificatorio de la misma.

Artículo 32º.- El Documento Nacional de Identificación (DNI) deberá contener, como mínimo la fotografía del titular de frente con la cabeza descubierta, la impresión de la huella dactilar del índice de la mano derecha del titular o de la mano izquierda a falta de éste, además de los siguientes datos:

a) La denominación de Documento Nacional de Identidad ó "D.N.I".
b) El código único de identificación que se le ha asignado a la persona;
c) Los nombres y apellidos del titular;
d) El sexo del titular;
e) El lugar y fecha de nacimiento del titular
f) El estado civil del titular;
g) La firma del titular;
h) La firma del funcionario autorizado;
i) La fecha de emisión del documento; y,
j) La fecha de caducidad del documento.

Artículo 33º.- En el primer ejemplar del Documento Nacional de Identidad Nacional (D.N.I) que se emita, constará además de los datos consignados en el artículo anterior, la identificación pelmatoscópica del recién nacido.
En sustitución de la huella dactilar y la firma del titular se consignará la de uno de los padres, los tutores, guardadores o quienes ejerzan la tenencia del recién nacido.

Artículo 34º.- Excepcionalmente, se autorizará la emisión del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) sin la impresión de la huella dactilar, cuando el titular presente un impedimento de carácter permanente en todos sus dedos que imposibilite su impresión. Igualmente, podrá omitirse el requisito de la firma cuando la persona sea analfabeta o se encuentre impedida permanentemente de firmar.

Artículo 35º.- El Código Unico de Identificación de la persona constituye la base sobre la cual la sociedad y el Estado la identifica para todos los efectos. En tal virtud será adoptado obligatoriamente por sus distintas dependencias como número único de identificación de la persona en los registros de orden tributario y militar, licencias de conducir, pasaportes, documentos acreditativos de pertenencia al sistema de seguridad social y, en general en todos aquellos casos en los cuales se lleve un registro previo de trámite o autorización.

Artículo 36º.- El Registro emitirá duplicado del Documento Nacional de Identidad (DNI) en casos de pérdida, robo, destrucción o deterioro. El duplicado contendrá los mismos datos y características que el Documento Nacional de Identidad (DNI) original, debiendo constar además una indicación en el sentido que el documento es duplicado.

Artículo 37º.- El Documento Nacional de Identidad (DNI) tendrá una validez de seis (6) años, en tanto no sufra deterioro considerable o no produzca en su titular cambios de estado civil, nombre o alteraciones sustanciales en su apariencia física, como consecuencia de accidentes o similares, en virtud del cual la fotografía pierda valor identificatorio. En este caso el registro emitirá un nuevo documento con los cambios que sean necesarios. Vencido el período ordinario de validez, el Documento Nacional de Identidad (DNI) deberá ser renovado por igual plazo. El Documento Nacional de Identidad (DNI) a que se refiere el Artículo 33º de la presente ley, deberá ser renovado cada tres (3) años hasta que la persona alcance los seis (6) años de edad. Posteriormente, el documento se renovará según el plazo señalado en el primer párrafo del presente artículo.

Artículo 38º.- Todas las personas tienen la obligación de informar a las dependencias del registro la verificación de cualquiera de los hechos mencionados en el párrafo primero del artículo anterior en lo que respecta a su persona a efectos de la emisión de un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI).

Artículo 39º.- Los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) que se otorguen a las personas nacionales con posterioridad a la fecha en que éstos hayan cumplido los sesenta (60) años, tendrá vigencia indefinida y no requerirán de renovación alguna.

TITULO VI

De las Inscripciones en el Registro

Artículo 40º.- El Registro de Estado Civil es público. Se inscriben en él los actos que la ley y el reglamento de las inscripciones determinan.

Artículo 41º.- El registro del Estado Civil de las personas es obligatorio y concierne a los directamente involucrados en el acto susceptible de inscripción. Es imprescindible e irrenunciable el derecho a solicitar que se inscriban los hechos y actos relativos a la identificación y estado civil de las personas, con arreglo a ley.

Artículo 42º.- La ley y el reglamento determinan los actos cuya inscripción en el registro es totalmente gratuita.

Artículo 43º.- La no inscripción en el Registro del Estado Civil de las personas impide la obtención del Documento Nacional de Identidad y la expedición de constancia alguna por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las autoridades políticas, judiciales, administrativas o policiales se encuentran en la obligación de poner en conocimiento del hecho a la dependencia del registro más próximo,bajo responsabilidad.

Artículo 44º.- Se inscriben en el Registro de Estado Civil:

a) Los nacimientos;
b) Los matrimonios;
c) Las defunciones;
d) Las resoluciones que declaran la incapacidad y las que limitan la capacidad de las personas;
e) Las resoluciones que declaren la desaparición, ausencia, muerte presunta y el reconocimiento de existencia de las personas;
f) Las sentencias que impongan inhabilitación, interdicción civil o pérdida de la patria potestad;
g) Los actos de discernimiento de los cargos de tutores o curadores, con enumeración de los inmuebles inventariados y relación de las garantías prestadas, así como cuando la tutela o curatela acaba, o cesa en el cargo el tutor o curador.
h) Las resoluciones que rehabiliten a los interdictos en el ejercicio de los derechos civiles;
i) Las resoluciones que declaren la nulidad del matrimonio, el divorcio, la separación de cuerpos y la reconciliación;
j) El acuerdo de separación de patrimonio y sustitución, la separación de patrimonio no convencional, las medidas de seguridad correspondientes y su cesación;
k) Las declaraciones de quiebra;
l) La sentencia de filiación;
m) Los cambios o adiciones de nombre;
n) El reconocimiento de hijos;
o) Las adopciones;
p) Las naturalizaciones y la pérdida o recuperación de la nacionalidad;
q) Los actos que, en general, modifiquen el estado civil de las personas, las resoluciones judiciales o administrativas susceptibles de inscripción y los demás actos que la ley señale.

Artículo 45º.- Las inscripciones, y las certificaciones de ellas derivadas, de cualquiera de los actos mencionados en el artículo anterior podrán efectuarse en cualquiera de las dependencias del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil a nivel nacional.

Artículo 46º.- Las inscripciones de los nacimientos producidos en los hospitales del Ministerio de Salud y del Instituto Peruano de Seguridad Social se realizarán obligatoriamente dentro del tercer día de producido el nacimiento, en las oficinas de registros civiles instaladas en dichas dependencias. Las inscripciones de los nacimientos no contemplados en el párrafo anterior, se efectuarán dentro de un plazo de treinta (30) días y se llevarán a cabo preferentemente en la dependencia del registro bajo cuya jurisdicción se ha producido el nacimiento o del lugar donde reside el niño. Transcurrido dicho plazo, se procederá a la inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 47º.- Los menores no inscritos dentro del plazo legal, pueden ser inscritos a solicitud de sus padres, tutores, guardadores, hermanos mayores de edad o quienes ejerzan su tenencia, bajo las mismas condiciones que una inscripción ordinaria y, adicionalmente, observando las siguientes reglas:

a) Son competentes para conocer de la solicitud únicamente las oficinas del registro dentro de cuya jurisdicción ha ocurrido el nacimiento o del lugar donde reside el menor.
b) El solicitante deberá acreditar ante el registrador su identidad y parentesco con el menor;
c) La solicitud deberá contener los datos necesarios para la identificación del menor y de sus padres o tutores;
d) A la solicitud deberá acompañarse certificado de nacimiento o documento similar o, en su defecto, cualquiera de los siguientes documentos; partida de bautismo, certificado de matrícula escolar con mención de los grados cursados o declaración jurada suscrita por dos personas en presencia del registrador.

Artículo 48º.- En caso de orfandad paterna o materna, desconocimiento de sus padres, ausencia de familiares o abandono, la inscripción de nacimiento la podrán solicitar los ascendientes del menor, sus hermanos mayores de edad, los hermanos mayores de edad del padre o la madre, los directores de centros de protección, los directores de centros educativos, el representante del Ministerio Público, el representante de la Defensoría del Niño a que alude el Capítulo III del Libro Segundo del Código de los Niños y Adolescentes o el juez especializado, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo precedente. El procedimiento es gratuito.

Artículo 49º.- Los mayores de dieciocho años no inscritos podrán solicitar la inscripción de su nacimiento en el registro, observando las reglas del Artículo 47º de la presente ley, en lo que fuere aplicable.

Artículo 50º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la inscripción de los nacimientos de los mayores de dieciocho años no inscritos podrá ser solicitada por ambos padres o por uno de ellos, con el consentimiento escrito del interesado en presencia del registrador. Para dichos efectos se aplican las mismas reglas del Artículo 47º de la presente ley.

Artículo 51º.- Excepcionalmente, en los lugares de difícil acceso a los centros poblados que poseen registros civiles, tales como zonas fronterizas, regiones de selva y ceja de selva y comunidades campesinas y nativas, la inscripción extraordinaria a que se refiere el Artículo 47º podrá ser efectuada por las guarniciones militares de frontera o por los misioneros debidamente autorizados por la Dirección Nacional, dando cuenta a la oficina registral que corresponda.

Artículo 52º.- Las inscripciones reguladas en los Artículos 48º, 49º, 50º y 51º de la presente ley probarán únicamente el nacimiento y el nombre de la persona. No surten efectos en cuanto a filiación, salvo que se hayan cumplido las exigencias y normas del Código Civil sobre la materia.

Artículo 53º.- Es imprescriptible el derecho para impugnar judicialmente las partidas inscritas de conformidad con el trámite de los Artículo 48º, 49º, 50º y 51º, pudiendo ejercerlo toda persona que por tal inscripción se sienta afectada en sus derechos legítimos.

Artículo 54º.- Las clínicas, hospitales, maternidades, centros de salud públicos o privados y similares están obligados a remitir mensualmente a la oficina del registro de su jurisdicción, una relación de los nacimientos producidos en dicho período. El reglamento de las inscripciones establece la sanción por el incumplimiento de dicha obligación.

Artículo 55º.- Las inscripciones de resoluciones judiciales se efectuarán únicamente en caso que éstas se encuentren ejecutoriados, salvo disposición legal en contrario. Para dichos efectos, los jueces dispondrán, bajo responsabilidad, se pasen los respectivos partes al registro para su inscripción, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que quedó ejecutoriada la resolución.

Artículo 56º.- Pueden efectuarse rectificaciones o adiciones en las partidas de registro, en virtud de resolución judicial, salvo disposición distinta de la ley. Mediante Decreto Supremo se establecerán los actos sujetos a procedimientos administrativos y aquellos sujetos a resolución judicial.

Artículo 57º.- Las inscripciones se cancelan cuando se ordene mediante resolución judicial firme o cuando la justificación de la cancelación resulte clara y manifiestamente de los documentos que se presenten al solicitarla.

Artículo 58º.- Las constancias de inscripción emitidas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil serán consideradas instrumentos públicos y probarán fehacientemente los hechos a que se refieren, salvo que se declare judicialmente la nulidad de dicho documento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera Disposición Complementaria.- En un plazo no mayor de treintiséis (36) meses computados a partir de la vigencia de la presente ley, el personal y acervo documentario de las oficinas del registro civil de los gobiernos locales quedará incorporado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
La Jefatura Nacional del Registro de Identificación y Estado Civil queda autorizada para establecer los mecanismos necesarios, para la transferencia e integración pertinente.

Segunda Disposición Complementaria.- Una vez culminado el proceso de integración referido en la disposición anterior, los trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil quedarán automáticamente incorporados a las disposiciones de la Ley 4916 y demás normas modificatorias y conexas.

Tercera Disposición Complementaria.- Las municipalidades del país podrán celebrar contratos con la autoridad correspondiente del registro a efecto que las oficinas registrales funcionen en los locales o recintos que actualmente están destinados para el registro civil. Podrá establecerse igualmente la asignación del personal especializado de la municipalidad, así como de la infraestructura, mobiliario y equipos con la que actualmente se cuente.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, capacitará al personal asignado y proporcionará el equipamiento y los suministros necesarios para el funcionamiento de las oficinas registrales. Adicionalmente, el presupuesto del registro contemplará, a título de contraprestación, la asignación de recursos a los municipios.

Cuarta Disposición Complementaria.- La Jefatura Nacional del Registro de Identificación y Estado Civil establecerá los mecanismos para la adecuada difusión a la población de los alcances de la presente ley.

Quinta Disposición complementaria.- Los jefes de las oficinas de registro deberán adoptar, dentro de su jurisdicción, las acciones pertinente para propiciar y fiscalizar, con una periodicidad semestral, la inscripción de todos los actos que deban registrarse.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera Disposición Transitoria.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley y hasta en tanto no se implementen sistemas automáticos de transferencia de información en las oficinas registrales, las inscripciones de los actos que la presente ley y el reglamento de las inscripciones señalan se efectuarán manualmente en los libros de Registro que para dichos efectos serán diseñados y distribuidos por el Registro de Identificación y Estado Civil y que permitirán la asignación del Código único de identificación a las personas.

Segunda Disposición Transitoria.- En una primera etapa se encontrarán obligadas a gestionar la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) todas aquellas personas nacionales mayores de dieciocho (18) años de edad. Posteriormente, esta obligación se hará extensiva a todos los nacionales, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 25º de la presente ley.

Tercera Disposición Transitoria.- La referencia a documentos identificatorios distintos al Documento Nacional de Identificación (DNI) deberá ser actualizada por las entidades públicas correspondientes, dentro de un plazo que no excederá de seis (06) años de publicada la presente ley.

Cuarta Disposición Transitoria.- Los Jefes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales quedan encargados del proceso de adecuación y organización a que se refiere la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Dicho proceso culminará con la asignación del personal que deba laborar sea en la Oficina Nacional de Procesos Electorales como en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Quinta Disposición Transitoria.- El Consejo Nacional de la Magistratura designará al primer Jefe Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días de la entrada en vigencia de la presente ley a partir de una terna presentada por el Poder Ejecutivo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera Disposición Final.- Los registros especializados de las Oficinas de Registro Civil a los que se refiere la Ley 26242, continuarán con la reinscripción de los nacimientos, matrimonio y defunciones en las localidades donde los libros de actas originales hubieran desaparecido, hayan sido mutilados o destruidos a consecuencia de hechos fortuitos o actos delictivos, hasta que no se instalen las dependencias del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en cada una de las localidades respectivas.

Segunda Disposición Final.- Modifícase el Artículo 7º del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia, en los siguientes términos.

Artículo 7º.- El Ministerio de Justicia cuenta con la siguiente estructura:

Alta Dirección
Ministro - Despacho Ministerial
Viceministro - Despacho Viceministerial
Secretario General - Secretaría General
Asesoría Técnica

Organo Consultivo
Comisión Consultiva

Organo de Control
Inspectoría Interna

Organo de Defensa Judicial
Procuraduría Pùblica a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia.

Organos de Asesoramiento
Oficina General de Economía y Desarrollo
Oficina General de Asesoría Jurídica

Organos de Apoyo
Oficina General de Administración
Oficina General de Informática

Organos de Línea
Dirección Nacional de Justicia
Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos

Consejos y Comisiones
Consejo de Defensa Judicial del Estado
Consejo del Notariado
Consejo de Supervigilancia de Fundaciones
Consejo Nacional de Derechos Humanos
Consejo de la Orden del Servicio Civil
Comisión Permanente de Calificación de Indultos*

Tercera Disposición Final.- Modifícase los Artículos 6º y 7º del Código de los Niños y Adolescentes, aprobado mediante el Decreto Ley Nº 26102, en los siguientes términos:

"Artículo 6º.- AL NOMBRE, IDENTIDAD Y NACIONALIDAD. El niño y el adolescente tienen derecho a un nombre, a la nacionalidad peruana, a conocer a sus padres y a ser cuidado por éstos. Será registrado por su madre o responsable inmediatamente después de su nacimiento en el registro civil correspondiente.
De no hacerlo en el plazo de treinta días, se procederá a la inscripción conforme a lo prescrito en el Título VI de la Ley del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

La dependencia a cargo del registro extenderá la primera constancia de nacimiento en forma gratuita y dentro de un plazo que no excederá de veinticuatro horas.
El estado garantiza este derecho mediante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Para los efectos del derecho al nombre, se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil.

Artículo 7º.- IDENTIFICACION.- En el certificado de nacimiento vivo, así como en el primer ejemplar del Documento Nacional de Identidad que se emita, constará la identificación dactilar de la madre y la identificación pelmatoscópica del recién nacido, además de los datos que corresponden a la naturaleza del documento"

Cuarta Disposición Final.- Dentro del plazo de ciento ochenta (180) días calendario de publicada la presente ley, el Ejecutivo aprobará el reglamento de las inscripciones en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Quinta Disposición Final.- Las demás funciones, composición, designación de sus miembros y relaciones de los órganos que integran el registro son delimitadas en el Reglamento de Organización y Funciones que será aprobado mediante resolución de la Jefatura del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, dentro de los noventa (90) días calendario de haber asumido sus funciones el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Sexta Disposición Final.- Dentro del plazo de ciento veinte(120) días calendario de publicada la presente ley, la Dirección Nacional del Registro Nacional de identificación y Estado Civil deberá aprobar el correspondiente Texto Unico de Procedimientos Administrativos (T.U.P.A), el mismo que será aprobado por Decreto Supremo.

Séptima Disposición Final.- *Derógese los Decretos Leyes Nºs. 19987 y 26127, los Artículos 78º, 79º, 80º y 81º del Código de los Niños y Adolescentes, aprobado mediante el Decreto Ley Nº 26102, los Artículos 70º, 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 2030º, 2031º, 2032º, 2033º, 2034º Y 2035º del Código Civil* aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 295, *la Ley Nº 25025, el Decreto Supremo Nº 008-90-JUS, el Decreto Supremo Nº 043-93JUS* y todas las demás disposiciones que se opongan a la presente ley.

Octava Disposición Final.- El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones ejercerá las funciones de titular del pliego presupuestal del Sistema Electoral, en tanto no asuman sus funciones el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Los recursos presupuestarios necesarios para la implementación del Sistema Electoral, serán dispuestos de la asignación prevista al pliego Jurado Nacional de Elecciones en la Ley Nº 26404 y con cargo a la reserva financiera. A tales efectos, autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias pertinentes, con prescindencia de lo dispuesto en la Ley 26199 Marco del Proceso Presupuestal.

Novena Disposición Final.- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Esta Ley fue promulgada el 11.07.95 y publicada el 12.07.95

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.
En Lima a los veintiocho días del mes de junio de de mil novecientos noventa y cinco

Jaime Yoshiyama
Presidente del Congreso Constituyenre Democrático

Carlos Torres y Torres Lara
Primer Vice Presidente del Congreso Constituyente Democrático

Al Señor Presidente Constitucional de la República.

Por Tanto:

Mando se publique y cumpla

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los once días de mes de julio de mil novecientos noventa y cinco

Alberto Fujimori Fujimori
Presidente Constitucional de la República

Efraín Goldenberg Schreiber
Presidente del Consejo de Ministros

ANEXOS

CONVOCAN A ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS PARA EL 04 DE JULIO DE 1999

DECRETO SUPREMO N° 004-99-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-98-PCM de fecha 2 de abril de 1998, se convocó a elecciones de Alcaldes y Regidores de los Concejos Provinciales y Distritales de toda la República para el día domingo 11 de octubre de 1998;
Que, en la actualidad existen diversas circunscripciones electorales en las cuales, por causas de fuerza mayor, no se llegaron a realizar las mencionadas elecciones municipales o en las que estas fueron declaradas nulas de conformidad con la normativa electoral vigente;
Que, resulta necesario convocar a elecciones municipales complementanas a fin de subsanar la situación descrita en el considerando precedente y dotar de las autoridades respectivas a los lugares que asi lo requieran;
Que, tales elecciones deben realizarse por una sola vez el primer domingo del mes de julio del año siguiente al de las elecciones municipales;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 26864;
En uso de la atribución conferida en el inciso 5) del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1°.- Convócase a Elecciones Municipales Complementarias de Alcaldes y Regidores, para el día domingo 4 de julio del presente año, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo.

Articulo 2°.- El Jurado Nacional de Elecciones señalará las provincias y distritos en los que se realizarán los comicios a que se alude en el Artículo 1° del presente Decreto Supremo.

Articulo 3°.- Los Jurados Electorales Especiales que se constituyeron en las elecciones municipales de 1998, conducirán las elecciones complementarias en su jurisdicción.

Articulo 4°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro del Interior.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, Presidente Constitucional de la República
VICTOR JOY WAY ROJAS, Presidente del Consejo de Ministros
JOSE VILLANUEVA RUESTA, Ministro del Interior.

DICTAN NORMAS PRESUPUESTALES DEL SISTEMA ELECTORAL Y ESTABLECEN CASOS EN QUE EL JNE RESUELVE EN INSTANCIA FINAL RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEL ONPE Y RENIEC

LEY Nº 26533

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República a dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA:

Ha dado la Ley siguiente:

Artículo 1.- El Jurado Nacional de Elecciones resuelve, en instancia final y definitiva, el recurso que se interponga contra las resoluciones que expidan la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, sólo en asuntos electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares.

Artículo 2.- El recurso a que se refiere el artículo anterior, se interpondrá dentro de los tres (3) días hábiles de publicada la resolución que se impugna; y será resuelto, previa citación a Audiencia, en un plazo no mayor de los tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de su recepción por el Jurado Nacional de Elecciones. Corresponde a este organismo expedir las normas reglamentarias que requiere el trámite del indicado recurso.

Artículo 3.- El Jurado Nacional de Elecciones tiene a su cargo la fiscalización de la legalidad del ejercicio de sufragio y de la realización de los procesos electorales. Ejerce sus atribuciones con sujeción a su Ley Orgánica y a la presente Ley. Son funciones del Jurado Nacional de Elecciones, entre otras, las siguientes:

a) Administrar Justicia Electoral

1. Resolver tachas contra:

a) Inscripciones de Organizaciones Políticas, Frentes, Agrupaciones Independientes o, Alianzas.
b) Miembros de los Jurados Electorales Especiales.
c) Candidatos o Listas de Candidatos.

2. Declarar la nulidad parcial o total del proceso electoral, referéndum u otras consultas populares.

3. Proclamar los resultados.

b) Mantener y custodiar el Registro de Organizaciones Políticas

1. Registrar o cancelar las inscripciones de las Organizaciones Políticas.

2. Efectuar el Control de las listas de adherentes.

3. Definir controles que se utilizan en la depuración de adherentes.

c) Administrar a los Jurados Electorales Especiales

1. Definir el Reglamento de los Jurados Electorales Especiales.

2. Aprobar el Presupuesto de los Jurados Electorales Especiales.

3. Resolver las consultas de los Jurados Electorales Especiales sobre la presente Ley.

4. Aprobar la rendición de cuentas de los Jurados Electorales Especiales.

d) Fiscalizar la legalidad del Padrón Electoral

1. Verificar y resolver, a solicitud de cualquier ciudadano, la información específica de las personas incluidas en el Padrón Electoral, dentro del plazo a que se contrae el numeral 3 del presente inciso.

2. Definir los criterios específicos para auditar el Padrón Electoral.

3. Aprobar el uso del padrón electoral dentro de los cinco días naturales, contados a partir de la fecha de recepción del mismo. En caso que el Jurado Nacional de Elecciones no se pronuncie en este plazo, el Padrón queda automáticamente aprobado.

4. Garantizar la inviolabilidad del Padrón Electoral aprobado.

e) Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones referidas a material electoral

1. Garantizar el respeto de los derechos de los partidos políticos, agrupaciones y alianzas.

a) Designar al funcionario observador en los sorteos que realice la Oficina Nacional de Procesos Electorales .

b) Garantizar que todos los partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas, estén incluidos en las cédulas, carteles y demás documentos electorales.

c) Fiscalizar la correcta distribución de espacios en los medios de comunicación social del Estado, efectuada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

d) Garantizar el respeto a los derechos de los personeros de acuerdo al Artículo 17º de la presente ley.

2. Denunciar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos, que cometan delitos contra la voluntad popular previstos en las leyes vigentes.

Artículo 4º.- Las contiendas de competencia entre cualquier organismo, distinto al Jurado Nacional de Elecciones con este último, se resuelven con arreglo al inciso 3) del Artículo 202º de la Constitución Política y transitoriamente conforme al Artículo 6º y a la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 26486.
Contra las Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, en materia electoral, no procede recurso alguno ni acción de garantía.

Artículo 5º.- La estructura del Presupuesto del Sistema Electoral está conformada por tres pliegos presupuestales: el del Jurado Nacional de Elecciones, el de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los mismos que están incluidos en el Volumen 01-Gobierno Central del presupuesto del Sector Público.

Artículo 6º.- El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones ejerce la titularidad del pliego de éste Organo Electoral; el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ejerce la titularidad del pliego de esta Oficina; y la titularidad del pliego del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se ejerce por su Jefe.

Artículo 7º.- El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del Sistema Electoral que incluye por separado las partidas de los pliegos presupuestales de cada Organo Electoral. Lo sustenta ante esa instancia y ante el Congreso, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 80º y 178º de la Constitución Política del Perú. A dichos actos también asisten, en forma obligatoria, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil con el proposito de absolver cualquier consulta en temas de su competencia.

Artículo 8º.- El presupuesto ordinario de cada Organo Electoral es presentado al Poder Ejecutivo como un programa separado dentro del pliego correspondiente a cada uno de dichos Organos.
El presupuesto de cada Organo Electoral debe contemplar la ejecución de todos los procesos electorales con calendario fijo, según la Constitución Política del Perú.
En los presupuestos, cada proceso electoral debe estar claramente diferenciado.

Artículo 9º.- Corresponde al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, unicamente efectuar las coordinaciones necesarias para una presentación oportuna del Proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral diferenciando cada pliego que lo conforma. Corresponde a cada titular de pliego del Sistema Electoral la responsabilidad en su ejecución de acuerdo a las leyes pertinentes.

Artículo 10º.- Convocado un proceso electoral no previsto en el calendario fijo, los organismos del Sistema Electoral deben coordinar con el Jurado Nacional de Elecciones la presentación de los presupuestos requeridos. El Jurado Nacional de Elecciones debe presentarlo ante el Poder Ejecutivo dentro del plazo de siete (7) días naturales de efectuada la convocatoria.

Artículo 11º. Los egresos, debidamente clasificados por partidas presupuestales son publicados dentro de los 15 días posteriores a la fecha de las elecciones.

Artículo 12º.- En un plazo no mayor de tres meses después de concluidas las elecciones, se efectúa una auditoría financiera de la ejecución del presupuesto electoral a través de una firma de auditoría debidamente registrada. Se envian copias de los informes a Contraloría General de la República, al

Ministerio de Economía y Finanzas y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República.

Artículo 13º.- Una vez concluido el proceso electoral, los recursos remanentes del presupuesto de cada organismo del Sistema Electoral deben ser devueltos al Tesoro Público, bajo responsabilidad de la máxima autoridad de cada uno de ellos.

Artículo 14º.- Constituyen recursos propios del Jurado Nacional de Elecciones, entre otros:

a) Las tasas correspondientes a los recursos de impugnación que se interpongan ante este organismo electoral.

b) El 50% de las multas que se impongan a los ciudadanos por no concurrir injustificadamente a ejercer su función de Miembro de Mesa para el que se le ha designado o negarse a integrarla.

c) El 10% de lo recaudado por concepto de multa aplicada a los ciudadanos omisos al acto de sufragio.

Artículo 15º.- Constituyen Recursos propios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, entre otros:

a) El 30% de lo recaudado por concepto de las multas aplicadas a los ciudadanos omisos al acto de sufragio.

b) El 50% de las multas que se impongan a los ciudadanos por no asistir injustificadamente a ejercer su función de Miembro de Mesa para el que se le ha designado o negarse a integrarla.

Artículo 16º.- Constituyen Recursos propios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, entre otros:

a) Los derechos, tasas y multas correspondientes a los actos registrales materia de su competencia.

b) El 60% de lo recaudado por concepto de las multas aplicadas a los ciudadanos omisos al acto de sufragio.

Artículo 17º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales facilita, a los personeros acreditados ante el Jurado Nacional de Elecciones, el acceso a documentos, actas, información digitada u obtenida por otro medio de consolidación.
El Jurado Nacional de Elecciones y los Jurados Especiales facilitan, a los personeros el acceso directo al proceso de digitación y procesamiento informático de los resultados electorales, bajo las condiciones y limitaciones que regule el Jurado Nacional de Elecciones.

Artículo 18º.- Los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil pueden ser invitados a las sesiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Artículo 19º.- La preparación del material de capacitación para miembros de mesa y de la ciudadanía esta a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 20º.-Las resoluciones expedidas por el Jurado Nacional de Elecciones, al amparo de su facultad constitucional de fiscalización y de acuerdo con la presente ley, son de cumplimiento obligatorio por las entidades que conforman el Sistema Electoral.

Primera Disposición Transitoria

Autorízase a los organismos conformantes del Sistema Electoral Peruano, a contratar directamente la adquisición de bienes o la prestación de servicios no personales. Se les exonera del requerimiento que señala el Reglamento Unico de Adquisiciones, para el suministro de bienes y servicios no personales.

Segunda Disposición Transitoria

Autorízase al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para efectuar un proceso de depuración del Padrón Electoral, obteniendo la informnación durante el proceso de votación y comparándola con las boletas de inscripción, que para tal efecto se envían a los Centros de Votación.

Tercera Disposición Transitoria

Las autoridades electorales no pueden dejar de cobrar ni condonar tipo alguno de multa, bajo responsabilidad, excepto por mandato de Ley.

Cuarta Disposición Transitoria

Para las elecciones municipales del presente año, la conformación de las Mesas de Sufragio es la misma que la del último proceso electoral o la que determine la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Quinta Disposición Transitoria

Para las elecciones municipales del presente año, la totalidad de la gestión Gerencial y la organización de las mismas están a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Sexta Disposición Transitoria

Para efecto de las Elecciones Municipales a realizarse el presente año, la depuración, la actualización del Padrón Electoral y la preparación de la Lista de Electores son responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y se efectúan en base al Padrón Electoral, utilizado por el Jurado Nacional de Elecciones en el último proceso electoral.

Disposición Final

Deróganse o déjanse en suspenso, según sea el caso, las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintiún días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y cinco.

VICTOR JOY WAY ROJAS
Primer Vicepresidente
Encargado de la Presidencia del Congreso de la República

ARLOS TORRES Y TORRES LARA
egundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, Presidente Constitucional de la República
DANTE CORDOVA BLANCO, Presidente del Consejo de Ministros.

PRECISAN FUNCIONES DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Y DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

LEY N° 26591

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la Republica ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ha dado la ley siguiente:

Artículo 1º- Precísase que la función del Jurado Nacional de Elecciones a que se refiere el numeral 2 del inciso b) del Artículo 3º de la Ley Nº 26533 comprende el diseño, impresión y expedición de los formatos, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos formales exigidos; para la inscripción de las organizaciones políticas en el Registro de Organizaciones Políticas.

Artículo 2º.- Precísase que la función de la Oficina Nacional de Procesos Electorales a que se refiere el inciso m) del Artículo 5º de la Ley Nº 26487 comprende el diseño, impresión y expedición de los formatos requeridos para la inscripción de candidatos independientes a elecciones y de opciones en procesos de referéndum u otras consultas populares a su cargo, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos formales exigidos para ella y la remisión al Jurado Nacional de Elecciones la información respectiva.

Artículo 3º.- Modifícanse o deróganse las normas que se opongan a la presente ley.

DISPOSICION TRANSITORIA

Para el efecto de informar el cumplimiento de los requisitos formales mencionados en el Artículo 2º de la presente ley, y en tanto no se implemente el Documento de Identidad, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil entregará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en los medios magnéticos y digitalizados requeridos por ésta, los datos contenidos en las boletas de inscripción electoral, las cuales serán actualizadas mensualmente.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los quince días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.

MARTHA CHAVEZ COSSIO DE OCAMPO
Presidenta del Congreso de la República

VICTOR JOY WAY ROJAS
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, Presidente Constitucional de la República
ALBERTO PANDOLFI ARBULU, Presidente del Consejo de Ministros.

NORMAS APLICABLES AL CIUDADANO QUE EJERZA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y QUE POSTULE A LA REELECCIÓN

LEY Nº 26430

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO;

Ha dado la Ley siguiente:

Artículo 1°.- A partir de los 90 días anteriores al acto de sufragio, el ciudadano que ejerza la Presidencia de la República y que en virtud del Artículo 112° de la Constitución postule a la reelección, queda impedido de:

a) Hacer proselitísmo político en la inauguración e inspección de obras publicas;

b) Repartir a personas o entidades privadas bienes adquiridos con dinero del Estado o como producto de donaciones de terceros al Gobierno de la República;

c) Referirse directa o indirectamente a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones, discursos o presentaciones públicas.

Soló podrá hacer proselitísmo cuando no realice actos de gobierno ni utilice medios de propiedad pública. En tales casos se procederá de la siguiente manera:

a) Cuando utilice bienes o servicios de propiedad del Estado abonará todos los gastos inherentes al desplazamiento y alojamiento propio y el de sus acompañantes, dando cuenta documentada al Jurado Nacional de Elecciones; y

b) En el caso de repartir bienes a personas o entidades privadas, éstos deberán ser adquiridos con recursos propios del candidato o donados a éste en su condición de candidato o a la agrupación política que apoya su candidatura.

Las limitaciones que esta ley establece para el candidato Presidente comprenden a todos los funcionarios públicos que postulen a cargos de elección o reelección popular, en cuanto les sean aplicables.

Artículo 2°.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones queda facultado para sancionar la infracción de la norma contenida en el artículo anterior, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a) Al primer incumplimiento, y a solicitud de cualquier personero acreditado ante el Jurado Nacional de Elecciones, enviará una comunicación escrita y privada al partido, agrupación independiente, alianza o lista independiente, especificando las características de la infracción, las circunstancias, y el día que se cometió.

b) En el supuesto de persistir la infracción, y siempre a pedido de un personero acreditado ante el Jurado Nacional de Elecciones, éste sancionará al partido, agrupación independiente, alianza o lista independiente infractora con una amonestación pública y una multa, según la gravedad de la infracción, no menor a treinta ni mayor a cien unidades impositivas tributarias.

Para la procedencia de las sanciones previstas en la presente ley, se requiere la presentación de medio de prueba que acredite en forma fehaciente e indubitable las infracciones.

Artículo 3°.- Dentro de los 60 días posteriores a la proclamación oficial electoral, los partidos, agrupaciones independientes, alianzas y listas independientes, presentarán al Jurado Nacional de Elecciones, con carácter de declaración jurada, la relación de gastos destinados a la campaña electoral correspondiente, quedando el Jurado Nacional de Elecciones facultado para efectuar las indagaciones para establecer la exacta situación del movimiento económico.

Artículo 4°.- El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Director General de la Polícia Nacional remitirán al Jurado Nacional de Elecciones 90 días antes de las elecciones políticas, municipales y regionales, y cada vez que lo solicite el Jurado Nacional de Elecciones, las relaciones de su personal en servicio activo, bajo responsabilidad, a fin de que el Registro Electoral proceda a su depuración en el padrón correspondiente.

DISPOSICIONES FINALES

1. Los recursos personales y materiales destinados a dar seguridad y en general protección a los candidatos son asumidos por el Estado. En ningún caso se exigirá a los candidatos compensación económica por tal materia.

2. El Banco de la Nación dará en uso y sin pago alguno al Jurado Nacional de Elecciones hasta el 31 de diciembre de 1995 el local que viene ocupando dicho Jurado.

3. Además de los personeros a que se refiere el Artículo 99° de la Ley Orgánica Electoral podrán acreditarse ante el Jurado Nacional de Elecciones, otros dos personeros técnicos en informática a efecto de realizar, previos al inicio del cómputo electoral, las comprobaciones de la veracidad y transparencia del sistema.

4. Los personeros acreditados ante el Jurado Nacional de Elecciones por partidos políticos, agrupaciones independientes o alianzas, están alternativamente facultados para efectuar la inscripción de los candidatos a congresistas que patrocinen.

5. A efecto de asegurar la mayor transparencia del proceso electoral y orientar debidamente a quienes son analfábetos, la cédula electoral deberá contener además del símbolo respectivo, la fotografía del candidato a la Presidencia de la República. El aspa o cruz colocada o repetida sobre la fotografía del candidato es un voto válido a favor del candidato respectivo.

6. Ningún candidato, partido político ni agrupación independiente, pueden hacer uso de las instalaciones de los Colegios Profesionales ni de entidades similares, con la finalidad de hacer proselitísmo político.

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los cinco días del mes de enero de mil novecientos noventa y cinco.

JAIME YOSHIYAMA
Presidente del Congreso Constituyente
Democrático

CARLOS TORRES Y TORRES LARA

Primer Vicepresidente del Congreso Constituyente
Democrático

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

Mando se publíque y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de enero de mil novecientos noventa y cinco.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, Presidente Constitucional de la República.
EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER, Presidente del Consejo de Ministros.

LEY QUE PRECISA LA DECIMO PRIMERA DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Y LAS LEYES ORGANICAS DE ELECCIONES Y ORGANICA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

LEY N° 26954

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente.

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

Articulo 1.- Precisión de la Décimo Primera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Modifícase el primer párrafo de la Décimo Primera Disposición Transitoria de la Ley No. 26435 -Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, incorporada por la Ley No. 26801, en los terminos siguientes:

«**Décimo Primera.-** Mientras se cubran los cargos vacantes del Tribunal Constitucional, el quórum para las acciones a que se refieren los incisos 2) y 3) del Artículo 202 de la Constitución Política del Perú, así como para cumplir con lo dispuesto por el Artículo 5º de la presente Ley Orgánica y resolver asuntos administrativos, será de cuatro de sus miembros. Siempre será necesario que haya quórum para que se emita una resolución."

Articulo 2.- Precision a las Leyes Orgánica de Elecciones y Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones

Precísase que la denegatoría de inscripción, impugnaciones y tachas a que hace referencia la Ley Nº 26859 - Ley Orgánica de Elecciones y la Ley Nº 26486-Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones-serán resueltas por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto favorable de por los menos el número de miembros que constituyen su quórum. De no alcanzarse la mayoría calificada prevista, la denegatoría de inscripción, las impugnaciones o las tachas serán declaradas infundadas. En ningún caso el Jurado puede dejar de resolver.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintiun días del mes mayo de mil novecientos noventa y ocho.

CARLOS TORRES Y TORRES LARA
Presidente del Congreso de la República

EDITH MELLADO CESPEDES
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO: Mando se publíque y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, Presidente Constitucional de la República
ALBERTO PANDOLFI ARBULU, Presidente del Concejo de Ministro.
ALFREDO QUISPE CORREA, Ministro de Justicia.

CONSTITUYEN COMISIÓN PARA ADECUAR LA CONFORMACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LO DISPUESTO EN EL ART. 52° DE LA LEY ORGÁNICA DE ELECCIONES

RESOLUCION JEFATURAL Nº 016-99-J/ONPE

Lima, 4 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 51° de la Ley Nº. 26859, Orgánica de Elecciones, las mesas de sufragio tienen como finalidad recibir los votos que emiten los electores en los procesos electorales, de referéndum y otras consultas populares, así como el escrutínio, el cómputo y la elaboración de las actas electorales;

Que, el Artículo 52° de la citada Ley, dispone que las mesas de sufragio se constituyen en grupos de votación de 200 (doscientos) ciudadanos hábiles pare votar como mínimo y 300 (trescientos) ciudadanos como máximo; siendo potestad de ONPE determinar el número de ciudadanos por mesa;

Que, en la actualidad, existen 81,042 mesas de sufragio, que se encuentran constituidas hasta por un máximo de 200 (doscientos) ciudadanos hábiles para votar por mesa, por lo que es necesario aumentar el número de ciudadanos que constituyen un grupo de votación, lo que va a permitir la disminución del número de mesas en forma significativa, representando un ahorro importante de recursos, una simplificación de la administración del proceso y facilitando la fiscalización de los personeros de las organizaciones políticas y de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones;

Que, para efectos de determinar el número de ciudadanos que van a constituir las mesas de sufragio, dentro de los parámetros que señala el Artículo 52° de la Ley Orgánica de Elecciones, es necesario constituir una comisión integrada por funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales;

Que, a su vez, se hace necesario que la labor de esta comisión sea supervisada por representantes de las organizaciones politicas, agrupaciones independientes inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones, pues son los actores principales en los procesos electorales y fiscalizadores de las acciones de los órganos conformantes del Sistema Electoral;

De conformidad con el Artículo 182° de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 26487, Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y la Ley N° 26859, Orgánica de Elecciones;

SE RESUELVE:

1°.- Constitúyase una comisión encargada de adecuar la conformación de las mesas de sufragio a lo dispuesto en el Articulo 52° de la Ley Nº 26859, Orgánica de Elecciones, la misma que queda constituida de la siguiente manera:

Sr. José Cavassa Roncalla, Gerente de Gestión Electoral, quien la Presidirá;
Sr. Rodolfo Vásquez Neyra, Gerente de Informática, Sr. Luis Marín Pérez, Subgerente de Planeamiento y Organización e ing. Jaime Brossard Castillo, Subgerente de Diseño y Programación.

2°. Las organizaciones políticas inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones, podrán asignar un personero para que verifique la adecuación y constitución de las mesas de sufragio de conformidad con el Artículo 52° de la Ley N° 26859, Orgánica de Elecciones, quien asistirá a las sesiones de la comisión, para exponer sus puntos de vista y tener acceso a la información correspondiente.

3°.- Solicitar al Jurado Nacional de Elecciones, la designación de un fiscalizador electoral para las funciones a que se contrae la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE PORTILLO CAMPBELL
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

RESOLUCIÓN N° 207-99-JNE

Lima, 9 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 004-99-PCM, se ha convocado a elecciones municipales complementarias para el día 4 de julio del presente año, autorizando al Jurado Nacional de Elecciones señalar las provincias y distritos en los que se realizará los citados comicios;

El Jurado Nacional de Elecciones en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4° y 36° de la Ley N° 26864 de Elecciones Municipales, y en uso de sus atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Las Elecciones Municipales Complementarias del 4 de jullio de 1999, se llevarán a cabo en las siguientes circunscripciones electorales:

DEPARTAMENTO DE ANCASH

Provincia de Santa

Para el concejo distrital de Nuevo Chimbote

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Provincia de la Unión

Para el Concejo Distrital de Puyca

Provincia de Caravelí

Para el Concejo distrital de Acarí

Provincia de Castilla

Para el Concejo Provincial de Castilla y los Concejos Distritales de Viraco y Pampacolca.

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Provincia de Huamanga
Para los Concejos Distritales de Santiago de Pischa y Vinchos

Provincia de La Mar
Para los Concejos Distritales de Santa Rosa, Anco, Ayna y Tambo

Provincia de Lucanas
Para los Concejos Distritales de Aucara y Santa Ana de Huaycahuacho

Provincia de Vilcashuamán
Para el Concejo Distrital de Carhuanca

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Provincia de Cajabamba
Para el Concejo Provincial de Cajabamba

Provincia de Chota
Para los Concejos Distritales de Lajas y Pión

Provincia de Cutervo
Para el Concejo Distrital de Querocotillo

DEPARTAMENTO DE CUSCO

Provincia de Paucartambo
Para el Concejo Distrital de Caicay

Provincia de Paruro
Para el Concejo Distrital de Omacha

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Provincia de Castrovirreyna
Para el Concejo Distrital de Santa Ana

Provincia de Tayacaja
Para el Concejo Distrital de Colcabamba

DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Provincia de Ambo
Para el Concejo Distrital de San Rafael

Provincia de Dos de Mayo
Para el Concejo Distrital de Yanas

Provincia de Lauricocha
Para el Concejo Provincial de Lauricocha y los Concejos Distritales de San Francisco de Asis, Queropalca, San Miguel de Cauri, Rondos y Jivia.

Provincia de Pachitea
Para el Concejo Distrital de Molino.

DEPARTAMENTO DE ICA

Provincia de Ica
Para el Concejo Distrital de Subtanjalla.

Provincia de Pisco
Para el Concejo Provincial de Pisco.

DEPARTAMENTO DE JUNIN

Provincia de Concepción
Para el Concejo Provincial de Concepción.

Provincia de Yauli
Para el Concejo Provincial de Yauli-La Oroya

Provincia de Satipo
Para el Concejo Distrital de Río Tambo

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Provincia de Ascope
Para el Concejo Distrital de Casa Grande.

Provincia de Pataz
Para el Concejo Distrital de Ongón.

Provincia de Sánchez Carrión
Para el Concejo Distrital de Sarín

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Provincia de Chiclayo
Para los Concejos Distritales de Cayalti, Patapo, Pomalca, Pucalá y Tumán

DEPARTAMENTO DE LIMA

Provincia de Lima
Para el Concejo Distrital de Miraflores.

Provincia de Yauyos
Para el Concejo Distrital de Cochas.

DEPARTAMENTO DE LORETO

Provincia de Requena
Para el Concejo Provincial de Requena y los Concejos Distritales de Emilio San Martin, Tapiche, Soplin, Capelo, Cuinahua, Maquia y Alto Tapiche.

Provincia de Loreto
Para el Concejo Distrital de Urarinas.

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Provincia de General Sánchez Cerro
Para el concejo provincial de General Sánchez Cerro

Provincia de Mariscal Nieto
Para el Concejo Distrital de Samegua.

DEPARTAMENTO DE PASCO

Provincia de Daniel A. Carrion

Para el Concejo Provincial de Daniel A. Carrión y el Concejo Distrital de Vilcabamba.

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Provincia de Moyobamba

Para el Concejo Provincial de Moyobamba y los Concejos Distritales de Soritor, Habana, Calzada, Jepelacio y Yantaló.

DEPARTAMENTO DE TACNA

Provincia de Tacna

Para los Concejos Distritales de Calana y Palca

DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Provincia de Atalaya

Para el Concejo Distrital de Tahuanía

Provincia de Padre Abad

Para el Concejo Distrital de Yrazola.

Articulo Segundo.- Las Elecciones Municipales Complementarias de 1999 serán conducidas, respectivamente, por los magistrados que integrarón los Jurados Electorales Especiales en las elecciones municipales de 1,998 en las provincias siguientes: Ambo, Ascope, Atalaya Cajabamba, Caravelí, Castilla Castrovirreyna, Chiclayo, Chota, Concepción, Cutervo, Daniel A. Carrión, Dos de Mayo, General Sánchez Cerro, Huamanga, Ica, La Mar, La Unión, Lauricocha Lima, Loreto, Lucanas, Mariscal Nieto Moyabamba, Pachitea, Padre Abad, Paruro, Pataz, Paucartambo Pisco, Requena, Sánchez Carrión, Santa, Satipo Tacna Tayacaja, Vilcashuamán, Yauli y Yauyos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.LUIS SERPA SEGURA; BRINGAS VILLAR;HERNANDEZ CANELO; DE VALDIVIA CANO;TRUJILLANO, Secretario General

DESIGNAN REPRESENTANTES ONPE ANTE EL COMITÉ DE COORDINACIÓN ELECTORAL A QUE SE REFIERE EL ART. 76° DE LA LEY ORGÁNICA DE ELECCIONES

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 021-99-J/ONPE

Lima, 10 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-PCM, se ha, convocado a Elecciones Municipales Complementarias de Alcaldes y Regidores, para el día 4 de julio del año en curso;

Que, a tenor de lo prescrito en el Artículo 76° de la Ley N° 26859, Orgánica de Elecciones, el Comité de Coordinación Electoral es designado inmediatamente después de la convocatoria de cada elección y esta conformado por personal técnico altamente calificado, designado por Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y los Jefes; de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y de Registro de Identificación y Estado Civil;

Que, en tal virtud, es necesario designar al personal titular y alterno que participará en el referido Comité de Coordinación Electoral, en representación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y,

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley Nº 26487, Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al personal que representará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales ante el Comité de Coordinación Electoral a que se refiere el Artículo 76º de la Ley Nº 26859, Orgánica de Elecciones.

Delegados Titulares:

Dr. Godofredo Dávila Orihuela, Gerente de Asesoría Jurídica
Sr. José Cavassa Roncalla, Gerente de Gestión Electoral.
Sr. Jorge Recavarren Eguren, Gerente de Información y Educación Electoral.
Sr. Rodolfo Vásquez Neyra, Gerente de Informática

Delegado Alterno:

Dr. Luis Siabala Valer, Asesor Principal.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el contenido de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GODOFREDO DAVILA ORIHUELA
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (e)

DECLARAN NULAS ELECCIONES MUNICIPALES REALIZADAS EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 1998 EN EL DISTRITO DE SANAGORÁN, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN Y LO INCLUYEN DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA RESOLUCIÓN N° 207-99-JNE

RESOLUCION Nº 356-99-JNE

Lima, 25 de marzo de 1999

VISTOS, El reporte oficial de cómputo de los comicios municipales realizados el día 11 de octubre de 1998 en el distrito de Sanagorán, recibido via fax el 15 de marzo del año en curso, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; asimismo, las solicitudes recibidas el 26 de febrero del año en curso, remitidas por don Wilfredo Lavado Cruz, personero del Partido Aprista Peruano en la provincia de Sánchez Carrión; don Raúl Donett Lavado, personero del movimiento independiente Vamos Vecino en la provincia de Sánchez Carrión; y por algunos ciudadanos del distrito Sanagorán, referente a las Elecciones Municipales realizadas para el Concejo Distrital de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión;

CONSIDERANDO:

Que, del compendio de normas legales publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales con motivo de las Elecciones Municipales de 1998, se indica que en el distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, debían sufragar 5,037 ciudadanos;

Que, de autos aparece copia del reporte oficial de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Sánchez Carrión remitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el cual consta que en el distrito de Sanagorán sufragaron 2,378 electores;

Que, los 2,378 sufragantes que concurrieron a emitir su voto el dia 11 de octubre de 1998 en la circunscripción electoral de Sanagorán solo representan el 47.21% de electores hábiles inscritos para votar en dichos comicios en el distrito en mención; que en consecuencia, se da la causal de nulidad contenida en el Artículo 36º de la Ley de Elecciones Municipales N° 26864;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar NULOS los comicios municipales realizados el día 11 de octubre de 1998, en el distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, debiendo elegirse sus autoridades ediles en elecciones complementarias; continuando en la administración municipal las autoridades que se encontraban en funciones en el periodo 1996-1998.

Artículo Segundo.- Declarar nulos los resultados, la proclamación y la entrega de credenciales de alcalde y regidores del Concejo Distrital de Sanagorán emitidos por el Jurado Electoral Especial de Sánchez Carrión.

Artículo Tercero.- Incluir al distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, en la relación de circunscripciones electorales donde se llevarán a cabo elecciones municipales complementarias el día 4 de julio del año en curso;

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. BRINGAS VILLAR; MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO; DE VALDIVIA CANO; Secretario General, TRUJILLANO.

EXCLUYEN A DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD DE LOS ALCANCES DE LA RESOLUCIÓN N°207-99-JNE, QUE SEÑALA CIRCUNSCRIPCIONES DONDE HABRA ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS

RESOLUCION Nº 477-99-JNE

Lima, 8 de abril de 1999

VISTOS:

Los escritos recibidos con fechas 8 y 9 de febrero de1999, remitidos por don Benjamin Caballero Lagomarcino, candidato a la alcaldía de la provincia de Padre Abad por la agrupación independiente"Movimiento Independiente Vamos Vecino" quien reitera el recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 06-98-JEE/PA, expedida por el Jurado Electoral Especial de la provincia de Padre Abad con fecha 23 octubre de 1998, y revisión de las Resoluciones Nos. 1113-98-JNE y 1266-98-JNE, de fechas 24 de noviembre y 10 de diciembre de 1998, respectivamente; así mismo solicita la reposición en el cargo de Alcalde del Concejo Provincial de Padre Abad y se le expida copias certificadas del expediente formado por motivo de nulidad parcial de la votación realizada en 17 mesas de sufragio que funcionaron en los distritos de Curimaná e Irazola, adjuntando 12 actas electorales a fin de que sean confrontadas con las actas de este órgano electoral. Alegando que se ha quebrantado la voluntad popular de la citada provincia, toda vez que los comicios municipales 1998 se han desarrollado con los requerimientos de ley, resultando ganador en la provincia, en los distritos de Curimaná e Irazola la agrupación independiente "Movimiento Independiente Vamos Vecino", según lo acredita el Acta de Proclamación y entrega de Credenciales de fecha 21 de octubre de 1998, del Jurado Electoral Especial de Padre Abad;

El escrito recibido el 16 de marzo del año en curso, remitido por don José Estanislao Muñoz Mora, personero legal del "Partido Político Acción Popular" en el distrito de Curimaná, quien solicita se otorgue el triunfo electoral a don Augurio Sevillano López, candidato a alcalde por el "Partido Político Acción Popular" del Concejo Distrital de Curimaná; asimismo, adjunto copia simple de una denuncia realizada por los candidatos de las listas: Paz y Desarrollo, MIPP, LEON, Somos Perú, Armonía y Trabajo, Acción Popular, respecto a presuntas irregularidades ocurridas durante el proceso electoral del 11 de octubre de 1998, y un memorial suscrito por los pobladores residentes de Curimaná avalando su pedido;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 21 de octubre de 1998, el Jurado Electoral Especial de la provincia de Padre Abad luego de haber realizado el cómputo de votos, conforme se aprecia de autos a fojas 365 y siguientes, proclamó a los ganadores de las elecciones municipales 1998 en la provincia de Padre Abad y en los distritos de Curimaná e Irazola, resultando ser la agrupación independiente "Movimiento Independiente Vamos Vecino", conforme consta de la copia certificada del Acta de Proclamación y entrega de credenciales a Alcaldes y Regidores electos, realizada por el Jurado Electoral Especial de Padre Abad, que obra; en autos a fojas 373;

Que, asimismo mediante Resolucidn N° 06-98 expedida por el Jurado Electoral Especial de la provincia de Padre Abad con fecha 23 de octubre de 1998, se declaró fundado el recurso de nulidad parcial, interpuesto por la lista Independiente «Legión Emergente de Organizaciones Notables», en consecuencia nula la votación efectuada en 17 mesas de sufragio que funcionaron en los distritos de Curimaná (202424, 207914, 208097) e Irazola (000865, 000866, 000867 000868, 000869, 000870, 000872, 000915, 000916, 000918, 000940, 00942, 207681 y 207306), al haberse incurrido en las causales previstas en el Articulo 363°, incisos b) y d) de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859;

Que, de lo expuesto se determina que el Jurado Electoral Especial de la provincia de Padre Abad, al expedir la Resolución N° 06-98, carecía de jurisdicción para resolver impugnaciones producto del acto electoral, por ser de fecha posterior a la proclamación y entrega de credenciales a las autoridades electas en la provincia y en los distritos en mención, en consecuencia dicha resolución deviene nula ipso jure de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 48° de la Ley Orgánica de Elecciones; además que el Jurado Electoral Especial de Padre Abad ya había resuelto las impugnaciones y observaciones de actas electorales de conformidad con lo establecido en el Articulo 304° de la Ley N° 26859 induciendo a error a este Supremo Tribunal Electoral al expedir las Resoluciones Nos. 1113 - 98 - JNE y 1260-98-JNE, de fechas 24 de noviembre y 10 de diciembre de 1998, respectivamente, por lo que es necesaria la revisión exhaustiva de los actuados y resolver en estricto cumplimiento de la Constitución y de la ley;

Que, del analisis y estudio de las pruebas documentarias que obra en autos se concluye que no se encuentran debidamente acreditadas las presuntas irregularidades de fraude, manipulación de actas, soborno e intimidación, que se habrían cometido el 11 de octubre de 1998, en los distritos de Curimaná e Irazola, por parte de la Marina de Guerra, representante de la ODPE de Padre Abad y por los candidatos a la Alcaldia de los referidos distritos, por el "Movimiento Independiente Vamos Vecino"; a fin de favorecer a dicha agrupación; máxime que en autos obra declaraciones juradas, memorial con voluminosas firmas, volantes, entre otros, las cuales no constituyen prueba idónea para declarar la nulidad de la votación, siendo del caso precisar, que ante la comisión de las acciones descritas, quienes la presenciaron debieron denunciar tales hechos ante la autoridad competente, resultando inverosímil que los personeros cuya razón de ser es presenciar y fiscalizar los actos en las respectivas mesas desde la instalación hasta el escrutinio, no hayan denunciado los presumibles hechos que ahora manifiestan, despues de la elección; y que además no se encuentran registrados en ninguna de las 17 actas precitadas, por lo que se ha procedido a confrontar nuestros ejemplares con las actas electorales de ONPE. y la ODPE, que en copia debidamente certificada han sido proporcionadas de los archivos que obran en la Oficina Naciona de Procesos Electorales, llegando a la conclusión que solo el Acta Electoral N° 000869 del distrito de Irazola, contiene vicio insalvable que es sancionado con nulidad, toda vez que la sección del acto de escrutinio se encuentra suscrita por un miembro de mesa, siendo por tanto válidas las demás actas electorales que funcionaron en los distritos de Curimaná e Irazola, no existiendo causal de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 36° de la Ley de Elecciones Municipales N° 26864 y el Artículo 363° de la Ley N° 26859;

Que, con relación a los hologramas de dispensa que fueron colocados en los documentos de identidad de los ciudadanos que sufragaron en la Mesa N° 202424 del distrito de Curimaná y la adulteración de actas por demora de material electoral para el respectivo proceso de cómputo de votos a nivel provincial y distrital, dichos actos quedan desvirtuados, toda vez que el Jefe de la ODPE de Padre Abad, mediante Oficios Nos. 044 y 045, del 15 de octubre de 1998, informa que a la mesa de sufragio en mención llegó hologramas de dispensa de la serie N° 908600 al 908799, los que fueron colocados en los documentos de identidad de cada elector como constancia de sufragio, y en todo caso dicho error y responsabilidad no puede merituarse como acción de la agrupación independien-

te "Movimiento Vamos Vecino" sino de la ONPE, lo cual no acarrea nulidad, motivo por el cual la ODPE envió como medida de solución los referidos hologramas, teniendo en cuenta que sin la tenencia de la constancia de sufragio se perjudica el derecho de los ciudadanos que cumplieron con la obligación de sufragar; y, respecto a la demora en el traslado del material electoral de los distritos de Curimaná e Irazola se debió a fallas mecánicas del medio de transporte de la Fuerza Armada, es decir a causas ajenas a la ODPE, según obra de autos a fojas 345 y 347, respectivamente, con lo cual se acredita que no hubo intención de fraude a fin de favorecer a determinada lista;

Que, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 176° y 178° de la Constitución Política del Estado, es fin supremo de este Tribunal Electoral garantizar que la votación ciudadana sea plenamente respetada, velando por que el proceso electoral traduzca la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que el escrutinio sea reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresadas en las urnas por votación directa; y, al no existir causal de nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio precitadas, los votos contenidos en ellas deben ser computados por lo que se ha procedido a realizar la adición correspondiente, teniéndose a la vista las actas remitidas a este órgano electoral conforme a ley, obteniéndose los resultados que a continuación se detallan, la misma que no ha conllevado a variación alguna del orden de ubicación obtenido en la votación provincial de Padre Abad, en consecuencia se mantiene valida la proclamación efectuada por el Jurado Electoral Especial de la citada provincia, de fecha 21 de octubre de 1998, para el Concejo Provincial y los Concejos Distritales de Curimaná e Irazola.

RESULTADOS DEL DISTRITO DE CURIMANA

AGRUPACION POLITICA o LISTA INDEPENDIENTE	VOTOS
ACCION POPULAR	150
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE VAMOS VECINO	199
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SOMOS PERU	65
LEGION EMERGENTE DE ORGANIZACIONES NOTABLES	67
MOVIMIENTO INDIGENA DE LA AMAZONIA PERUANA	03
PAZ Y DESARROLLO	138
ARMONIA Y TRABAJO	95
DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO	24
VOTOS VALIDOS	741
VOTOS EN BLANCO	38
VOTOS NULOS	30
VOTOS IMPUGNADOS	00
TOTAL VOTOS EMITIDOS	809

RESULTADOS DEL DISTRITO DE IRAZOLA

AGRUPACION POLITICA O LISTA INDEPENDIENTE	VOTOS
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE VAMOS VECINO	560
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SOMOS PERU	189
LEGION EMERGENTE DE ORGANIZACIONES NOTABLES	203
MOVIMIENTO INDIGENA DE LA AMAZONIA PERUANA	15
JUNTOS POR IRAZOLA	392

VECINOS DE IRAZOLA	522
VOTOS VALIDOS	1881
VOTOS EN BLANCO	93
VOTOS NULOS	183
VOTOS IMPUGNADOS	02
TOTAL VOTOS EMITIDOS	2,159

RESULTADOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD

AGRUPACION POLITICA O LISTA INDEPENDIENTE	VOTOS
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE VAMOS VECINO	1,936
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SOMOS PERU	720
LEGION EMERGENTE DE ORGANIZACIONES NOTABLES	1,635
MOVIMIENTO INDIGENA DE LA AMAZONIA PERUANA	545
DEMOCRATICO REGIONAL	590
VOTOS VALIDOS	5,426
VOTOS EN BLANCO	1,085
VOTOS NULOS	281
VOTOS IMPUGNADOS	12
TOTAL VOTOS EMITIDOS	6,804

El Jurado Nacional de Elecciones, apreciando los hechos con criterio de conciencia y administrando justicia en materia electoral;

RESUELVE POR MAYORIA, con el voto dirimente del señor doctor Carlos Bringas Villar, encargado de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones:

Artículo Primero.- Declarar nula la Resolución N° 06-98-JEE/PA, de fecha 23 de octubre de 1998, expedida por el Jurado Electoral Especial de Padre Abad, que declaró la nulidad de la votación de las mesas de sufragio que funcionaron en los distritos de Curimaná (202424, 207914, 208097) e Irazola (000865, 000866, 000867, 000868, 000869, 000870, 000872, 000915, 000916, 000918, 000940, 000942, 207681 y 207306), en consecuencia válidas las referidas actas, a excepción del Acta N° 000869 de Irazola que deviene en nula por contener vicio insalvable que es sancionado con nulidad, al estar suscrita sólo por un miembro de mesa la referida acta.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto las Resoluciones Nos. 1113 y 1266-98-JNE, expedidas por este órgano electoral con fechas 24 de noviembre y 10 de diciembre de 1998, respectivamente, por los considerandos expuestos en la presente resolución, en consecuencia nulas las credenciales otorgadas.

Artículo Tercero.- Confirmar el acta de proclamación y entrega de credenciales efectuada por el Jurado Electoral Especial de Padre Abad, con fecha 21 de octubre de 1998, la misma que declara como lista ganadora en la provincia y en los distritos Curimaná e Irazola, a la agrupación independiente "Movimiento Independiente, Vamos Vecinos," en consecuencia se repone en sus cargos a las autoridades electas en la citada provincia y distritos.

Artículo Cuarto.- Excluir al distrito de Irazola, provincia de Padre Abad, de la relación de circunscripciones electorales donde se llevará a cabo las elecciones municipales complementarias del 4 de julio del año en curso.

Artículo Quinto.- Poner en conocimiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- RENIEC el contenido de la presente resolución, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS. BRINGAS VILLAR, MUÑOZ ARCE; TRUJILLANO, Secretario General

VOTO EN MINORIA DE LOS DOCTORES HERNANDEZ CANELO Y DE VALDIVIA CANO, MIEMBROS TITULARES DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, mediante las Resoluciones Nos. 1113-98-JNE y 1266-98-JNE, expedidas por este supremo tribunal electoral los días 24 de noviembre y 10 de diciembre de 1998, respectivamente, se confirmó la Resolución N° 06-98-JEE/ de la provincia de Padre Abad, de fecha 23 de octubre de 1998, que declaró la nulidad parcial de la votación efectuada en 17 mesas de sufragio que funcionaron en los distritos de Curimaná (202424, 207914, 208097) e Irazola (000865 000866, 000867, 000868, 000869, 000870, 000872, 000915, 000916, 000918, 000940, 000942, 207681 y 207306), al haberse incurrido en graves irregularidades de fraude, soborno, intimidación y manipulación de actas, llevadas a cabo durante el proceso electoral de los referidos distritos, a fin de favorecer a la agrupación independiente "Movimiento Independiente Vamos Vecino", de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 363°, inciso b) de la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859;

Que, el Jurado Electoral Especial de Padre Abad si bien ya habia efectuado la proclamación y entrega de credenciales a autoridades en la provincia y distritos citados; dicho colegiado no podía dejar de administrar justicia, mas aún que surgiendo reclamos y denuncias sobre graves irregularidades ocurridas en las 17 mesas de sufragio en mención y que ha modificado el resultado de la votación, efectuadas por las diversas listas participantes tales como: Paz y Desarrollo, MIPP, LEON, Somos Perú, Armonía y Trabajo y Acción Popular, conforme consta en autos a fojas 83 y 84; de lo que se colige que dicho acto es válido, porque en la práctica el JEE de Padre Abad continuaba en funciones, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 332º de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859;

Que, se aprecia de autos, desde fojas 15 a 33 y 92, a 106 declaraciones juradas en proporción de ciudadanos, personeros de las diversas listas participantes, presidente y demás miembros de mesa, debidamente certificadas por el Juez de Paz Letrado de Irazola y el Gobernador del distrito de Curimaná quienes denuncian que el Coordinador de la ONPE señor Manuel Fasanando Escalante, realizó personalmente el conteo de votos así como el llenado de las 5 actas electorales que funcionaron en el distrito de Curimaná; además de haber sido sobornados los ciudadanos residentes en dichos distritos, a fin de que voten por la agrupación independiente "M.I. Vamos Vecino", y presionados los miembros de mesa por parte del Jefe de la ODPE de Padre Abad, señor Cesar Salcedo Diaz, a efectos de que no sean destruidas las cedulas escrutadas, conforme se aprecia a fojas 256, contraviniendo lo dispuesto por el Artículo 300° de la Ley N° 26859;

Que, asimismo, obra en autos a fojas 115, el acta suscrita por personeros y candidatos a la Alcaldía Distrital de Curimaná e Irazola, donde consta la demora en el traslado de las respectivas actas electorales, máxime que la ODPE de Padre Abad, mediante Oficio Nos. 044 y 045, de fecha 15 de octubre de 1998, respectivamente, alegando que la apertura de las ánforas el día domingo 11 de octubre de 1998, por la noche, sin la presencia de los personeros, se debió a que la ONPE pedía reporte urgente, y que la demora del traslado del material electoral desde los distritos en mención hasta la ciudad de Aguaytía, capital de la provincia de Padre Abad, se debió a desperfectos del helicóptero de la Fuerza Armada, realizándose por ello dicho traslado recien el dia 13 de octubre de 1998, lo cual resulta poco creible dicha justificación, toda vez que habiendo transcurrido mas de 48 horas aún no se daba inicio al cómputo de votos obtenidos en los citados distritos; hechos estos que además se encuentran corroborados con las denuncias efectuadas ante el Gobernador Distrital de Curimaná, por las listas participantes, de fecha 11 de octubre de 1998, que obra en autos a fojas 83

y por el personero legal de la lista independiente "Legión Emergente de Organizaciones Notables" LEON-y, don Oscar Orosco Castro, por ante la Fiscalía Provincial Mixta de Padre Abad, que obra a fojas 110, de fecha 13 de octubre de 1998;

Que, por lo expuesto y existiendo indicios evidentes que vician el resultado de la votación efectuada en las 17 mesas de sufragio en referencia, perjudicando a las demás listas participantes y a la voluntad ciudadana que ha visto quebrantada y violada el respeto a la libertad del derecho de sufragio, conforme lo establecen los Artículos 176°y 178° de la Constitución Política del Estado; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 36º de la Ley de Elecciones Municipales N° 26864 e inciso b) del Artículo 363° de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.-Declarar improcedente el recurso de reconsideración formulado por don Benjamín Caballero Lagomarcino, candidato a la alcaldia provincial de Padre Abad, por la agrupación independiente "Movimiento Independiente Vamos Vecino»; en consecuencia válidas las Resoluciones Nos. 1113-98-JNE y 1266-98-JNE, expedidas por este supremo tribunal electoral los días 24 de noviembre y 10 de diciembre de 1998, respectivamente; y, validas las credenciales otorgadas, en mérito a ellas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S. HERNANDEZ CANELO; DE VALDIVIA CANO; TRUJILLANO, Secretario General

AUTORIZAN USO DEL PADRÓN ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS DEL 4 DE JULIO DE 1999

RESOLUCION N° 585-99-JNE

Lima, 15 de abril de 1999

Visto el Oficio N° 107-99-JEF/RENIEC, recibido el 6 de abril del presente año, del Jefe Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ing. Celedonio Méndez Valdivia, acompañando el Padrón Electoral para las Elecciones Municipales Complementarias del 4 de julio próximo;

CONSIDERANDO:

Que, el Jurado Nacional de Elecciones tiene a su cargo la fiscalización de la legalidad de los procesos electorales y de la elaboración de los padrones electorales, luego de su actualización y depuración final previa a cada proceso electoral, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 178° inciso 1) de la Constitución Política del Perú, concordado con el Artículo 33° de la Ley Orgánica de Elecciones, N° 26859, y Artículo 5° incisos c y d) de su Ley Orgánica N° 26486;

Que, cumplida la labor de fiscalización corresponde a este Supremo Tribunal Electoral aprobar y autorizar para cada proceso electoral el uso del Padrón Electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, dentro de los diez (10) días siguientes a su remisión por parte del citado Registro, conforme lo establece el inciso v) del Artículo 5° de la Ley Orgánica N° 26486 concordante con el Artículo 201° de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859;

Que, el Jurado Nacional de Elecciones ha encontrado defectos que observa mediante la presente y que deben ser corregidos en forma inmediata mediante los procesos de actualización y depuración correspondiente, tanto por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales como del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil;

Que, el Padrón Electoral en mención debe ser remitido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en aplicación de lo dispuesto por el Artículo 202º de la Ley Orgánica de Elecciones ya glosada, concordado con el inciso K) del Artículo 5º de la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales Nº 26487;
De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Orgánicas Nos. 26486,26487 y 26859;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el uso del Padrón Electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para las Elecciones Municipales Complementarias del 4 de julio de 1999, convocada por Decreto Supremo Nº 004-99-PCM.

Artículo Segundo.- Remitir a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, un (1) CD y doce (12) diskettes que contienen la información a que se refiere el documento reseñado en el artículo anterior, así como el diskette conteniendo las observaciones que formula el Jurado Nacional de Elecciones, para que se proceda a la depuración y actualización del padrón electoral del proceso electoral en marcha, en forma inmediata por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.BRINGAS VILLAR; MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO; DE VALDIVIA CANO; Secretario General, TRUJILLANO

CONFORMACIÓN DE JURADOS ELECTORALES ESPECIALES QUE CONDUCIRÁN ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS CONVOCADAS MEDIANTE EL D. S. N° 004-99-PCM

RESOLUCION Nº 531-99-JNE

Lima, 15 de abril de 1999

Los Oficios N°s. 392-99-CSJA/P, 0623-99-PCSJHP, 1256-99-CSJI-P, 1267-99-P-CSJL, 0977-99-P-CSJL/PJ-WVM,611-99-Adm-PCSJ-SM,1166-99-CSDS P,446-99-SJTM-P, 348-99/P-CSJU, recibidos los días los días 29, 30, 31 de marzo, 5, 7,12 de abril de 1999, de las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia de Ayacucho, Huánuco, Pasco, Ica, Lambayeque, Loreto, San Martin, Santa, Tacna, Moquegua, Ucayali, y la Resolución Administrativa N.° 205-99-P-CSJL expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, comunicando la relación de ciudadanos que ejercerán las Presidencias de los Jurados Electorales Especiales en las jurisdicciones en las que se realizará Elecciones Municipales Complementarias el 4 de julio próximo;

Los Oficios N°s.0629 y 0641-99-PCSJHP del 8 y 13 de abril de 1999, respectivamente, de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, remitiendo un memorial presentado por diversas autoridades y ciudadanos, respecto a la conformación de los Jurados Electorales Especiales de Daniel Alcides Carrión y Lauricocha;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-99-PCM, el señor Presidente de la República ha convocado a Elecciones Municipales Complementarias de Alcaldes y Regidores para el día domingo 4 de julio del presente año; en los distritos y provincias en los que se haya declarado nulas las Elecciones Municipales realizadas el pasado 11 de octubre de 1998, y en las circunscripciones que por otras causas no se llegó a realizar los mencionados comicios;

Que, conforme lo dispone el Artículo 3º del Decreto Supremo referido, los Jurados Electorales Especiales que conducirán las elecciones complementarias en su jurisdicción, estarán conformados por las mismas personas que integraron dichos órganos temporales en las Elecciones Municipales 1998;

Que, las respectivas Cortes Superiores han designado a nuevos Presidentes para los Jurados Electorales Especiales de las provincias de La Mar, Lucanas, Loreto y Lima por impedimento de los ex Presidentes que presidieron dichos órganos temporales en las pasadas elecciones;

Que, corresponde a este supremo tribunal electoral resolver sobre la constitución y funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales;
El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar que los Jurados Electorales Especiales constituidos para las Elecciones Municipales Complementarias del próximo domingo 4 de julio de 1999, estarán conformados de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO DE ANCASH

1. PROVINCIA DE SANTA

Presidente:
MARIA GRACIELA KCOMT KCOMT
Miembros:
WILLIAM AJEJANDRO HIDALGO ESPINOZA
ANTERO FLORENCIO SILVA CALERO

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

2. PROVINCIA DE CARAVELI

Presidente:
MARLENE CACERES ZUÑIGA
Miembros:
MIRYAM ROSARIO M. PINTO VALDIVIESO
WILPREDO GASPAR ZEGARRA ROSAS

3. PROVINCIA DE CASTILLA

Presidente:
PEDRO ALVAREZ DUEÑAS
Miembros:
LILIAN FANNY AMABLE ANDIA
ZENON ALBERTO CORNEJO VERA

4. PROVINCIA DE LA UNION

Presidente:
RUFO MEJIA MARTINEZ
Miembro:
ALBINA MOGROVEJO POSTIGO
CECILIA ALEJANDRA BELLIDO ZEVALLOS

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

5. PROVINCIA DE HUAMANGA

Presidente:
ORLANDO HUGO GOMEZ OSCORIMA
Miembros:
ARMANDO SUAREZ CAMASCO
MARIBEL DOMITILA MURGADO ESCARCENA

6. PROVINCIA DE LA MAR

Presidente:
ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ
Miembros:
DIONICIO HUACRE ARCE
LUZ NELIDA RIVERO VILA

7. PROVINCIA DE LUCANAS

Presidente:
DR .ZOZIMO BAR ESPINOZA
Miembros:
MAXIMILIANA SOTELO LUQUE
MARIO CARRILLO MARCATINCO

8. PROVINCIA DE VILCASHUAMAN

Presidente:
JORGE IBAR OLARTE ALARCON
Miembros:
AQUILES GUTIERREZ MARTINEZ
FLORA GUTIERRES DE SULCA

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

9. PROVINCIA DE CAJABAMBA

Presidente:
MARTHA HERMINIA DIAZ MEREJILDO
Miembros:
HUMBERTO HELI DIAZ ABANTO
HELBER OSORIO FUENTES

10. PROVINCIA DE CHOTA

Presidente
OSCAR RAMIRO PEREZ SANCHEZ
Miembros:
VICTOR RAUL LOPEZ HUANCA
JANET MAGALI MESTANZA PEREZ

11. PROVINCIA DE CUTERVO

Presidente:
JOSE CUSTODIO CHAFLOQUE
Miembros:
RISSI ELIDE CASTRO SIANCAS
EDWIN CARLOMAN SALAZAR LLATAS

DEPARTAMENTO DE CUSCO

12. PROVINCIA DE PARURO

Presidente:
RUBEN CASAFRANCA CALVO
Miembros:
WILTON LAUREL MONRROY
MARIA FRIDA CORDOVA GRANILLA

13. PROVINCIA DE PAUCARTAMBO

Presidente:
ARTURO ORDOÑEZ CALDERON
Miembros:
EMMA GENOVEVA VILLASANTE DE HUARANCCA
ANA LUISA YABAR FARFAN

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

14. PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA

Presidente:
ANTONIO MARCELINO ARONES YUYALE
Miembros:
RAIDA ARTEAGA CHANCA
HECTOR ALFARO DEL PINO

15. PROVINCIA DE TAYACAJA

Presidente:
AUGUSTO BONILLA MANAYAY
Miembros:
RODOLFO RICARDO MARIÑO ALFARO
JULIAN ELIAS LAURO VIDALON

DEPARTAMENTO DE HUANUCO

16. PROVINCIA DE AMBO

Presidente:
LUIS PEET CHAVEZ
Miembros:
HUGO ALINDOR JIMENEZ HUAMAN
JUANA ADELA DOMINGUEZ CHEPE

17. PROVINCIA DE DOS DE MAYO

Presidente:
ARMANDO RETIS BEDOYA
Miembros:
MAGDE LIZ MORENO CORDOVA
GROVER MOYA PEÑA

18. PROVINCIA DE LAURICOCHA

Presidente:
CARLOS MERCADO TIRADO
Miembros:
LIDGARDO VARA ESTRADA
BLADOMIRO WALTER VILLARREAL BUSTILLOS

19. PROVINCIA DE PACHITEA

Presidente:
HECTOR VERGARA MALLQUI
Miembros:
YRMA PALACIOS ECHEVARRIA
CLIBEL MALLQUI CASTRO

DEPARTAMENTO DE ICA

20. PROVINCIA DE ICA

Presidente:
FIDEL ALBINO ZARATE ZUÑIGA
Miembros:
SILVIA MARGARITA VASQUEZ TAVERA
OSCAR PEÑA PEÑA

21.- PROVINCIA DE PISCO

Presidente:
ARICIA ELIZABETH GARCIA CORDOVA
Miembros:
LUIS FERNANDO PEÑA PORTILLA
MONICA YSABEL NAVARRETE FUENTES

DEPARTAMENTO DE JUNIN

22. PROVINCIA DE CONCEPCION

Presidente:
BENJAMIN TORRES VILLANUEVA
Miembros:
JUAN HIBERON CONTRERAS SEDANO
EDELINA SILVIA URCUCULLAY ROMERO

23. PROVINCIA DE SATIPO

Presidente:
RAUL VILLAGARAY HURTADO
Miembros:
LEONOR DEL PILAR CAMPUZANO DE ARROYO
ELVIRA IVONNE DLAZ FERNANDEZ

24. PROVINCIA DE YAULI

Presidente:
QUEVEDO M. ZENTENO FLORES
Miembros:
WILLIAM AMERICO ZEVALLOS LAVERIANO
DELIA ISABEL HERRERA JESUS

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

25. PROVINCIA DE ASCOPE

Presidente:
HUGO FRANCISCO ESCALANTE PERALTA
Miembros:
CARLOS ALBERTO LLERENA ARANA
LUCY FRANCISCA KANNO DE PALMER

26. PROVINCIA DE PATAZ

Presidente:
SEGUNDO HIPOLITO AGREDA CHAVEZ
Miembros:
ESTEBAN CORTEZ FLORES
JULIAN ALEJANDRO CACHAY MALO

27. PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION

Presidente:
NELSON ORESTES CARRIL DIAZ
Miembros:
GELASIO ASTO VILLANUEVA
MARIA KARINA VILLANUEVA DE SOTO

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

28. PROVINCIA DE CHICLAYO

Presidente:
LEOBANDO CORDOVA SANDOVAL
Miembros.
EMMA C. DEL ROSARIO DEL CASTILLO SOTO
EVERARDO HIPOLITO MARTINEZ MARCHENA

DEPARTAMENTO DE LIMA

29. PROVINCIA DE LIMA

Presidente:
ELADIO GONZALES RIOS
Miembros:
FRESIA FORTUNATA RODRIGUEZ ZEBALLOS
JUANA MARIA JAICO MARTINEZ

30. PROVINCIA DE YAUYOS

Presidente:
ENRIQUE RIVAS CASTRO
Miembros:
MILAGROS ROSARIO REYES SANTA CRUZ
OBED AMINADAB ROSALES MANUEL

DEPARTAMENTO DE LORETO

31. PROVINCIA DE LORETO

Presidente:
ZELMIRA NIEVES CALLE VASQUEZ
Miembros:
DAVID LINARES RIOS
TEOFILO HERNAN REATEGUI RIOS

32. PROVINCIA DE REQUENA

Presidente:
EDUARDO OLORTEGUI FLORES
Miembros:
MOISES VIDAL CHUQUIPIONDO PEZO
LLENY ALEGRIA ARANA

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

33. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO

Presidente:
LILY DUEÑAS CASTILLO
Miembros:
CHRISTL\N JHON CHAVEZ JUAREZ
JESUS ESTELA DIAZ DIAZ

34. PROVINCIA DE GRAL. SANCHEZ CERRO

Presidente:
EDGAR PANTOJA ORIHUELA
Miembros:
RUMUALDO PETER BALDARRAGO BERROA
MAURO HERMAN ROLDAN MANRIQUE

DEPARTAMENTO DE PASCO

35. PROVINCIA DE DANIEL A. CARRION

Presidente:
SERAPIO MONTOYA FERNANDEZ
Miembros:
CESAR CORNEJO ROJAS
FRANCISCO BERMUDEZ CHUQUILLANQUI

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

36. PROVINCIA DE MOYOBAMBA

Presidente:
JOSE FRANCISCO IZQUIERDO HEMERITH
Miembros:
MILAGROS DEL CARMEN SUAREZ CARO
MARIBEL VENTURA CELIZ

DEPARTAMENTO DE TACNA

37. PROVINCIA DE TACNA

Presidente:
LUIS ESCALANTE MEDINA
Miembros:
LOURDES JULVELI MAINZA GUTIERREZ
JUAN UBALDO JIMENEZ CASTILLA

DEPARTAMENTO DE UCAYALI

38. PROVINCIA DE ATALAYA

Presidente:
ARTURO HERRERA ARANIBAR
Miembros:
LADI ISABEL SANCHEZ GUERRA
MARLENY MADAI REY SANCHEZ SIERRA

Artículo Segundo.- Disponer que la instalación y funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales mencionados en el artículo precedente, se realice a partir del 1º de mayo del presente año.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS. BRINGAS VILLAR; MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO;DE VALDIVIA CANO; Secretario General, TRUJILLANO

DETERMINAN NÚMERO DE FIRMAS DE ADHERENTES REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DEL JNE

RESOLUCION N° 594-99-JNE

Lima, 15 de abril de 1999

VISTO:

El Oficio Nº 535 -99-J/ONPE, recibido el 13 de abril del presente año del Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, señor doctor José Portillo Campbell, respecto a la determinación del número de adherentes que se requiere para la inscripción de organizaciones políticas en el registro del Jurado Nacional de Elecciones.

CONSIDERANDO:

Que, el Jurado Nacional de Elecciones procede a inscribir a ,Partidos de los Políticos y Agrupaciones Independientes siempre que reunan ciertos requisitos legales; uno de los cuales es la presentación de una relación de adherentes no menor del 4% de los ciudadanos hábiles para votar a nivel nacional,según el número de electores inscritos en el padrón empleado en las últimas elecciones de carácter nacional,conforme lo estupula el inciso b) del artículo 88º de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 21º de la Ley Orgánica citada para las elecciones de Presidente, vicepresidente y Congresista, el territorio de la República constituye Distrito Electoral Unico,lo cual le da la calidad de elecciones de carácter nacional;

Que, de acuerdo a la información con la que cuenta este Organo Electoral, con relación al número de electores inscritos para las últimas elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, se aprecia que con fecha 6 de abril de 1995, mediante oficio Nº 176-95-DTREP, la Dirección técnica del entonces Registro electoral del Perú, informó de la existencia de 12´421,164 electores, es decir ciudadanos hábiles para votar a nivel nacional, constituyendo el 4% de esa cantidad, un total de 496,847 electores;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer que las organizaciones políticas que soliciten su inscripción en el registro del Jurado Nacional de Elecciones acompañen a su solicitud una relación de 496,847 firmas de adherentes, las que serán verificadas.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales la presente resolución para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. BRINGAS VILLAR, MUÑOZ ARCE;HERNANDEZ CANELO; DE VALDIVIA CANO; Secretano General, TRUJILLANO

APRUEBAN DISEÑO DE CÉDULA DE SUFRAGIO QUE SE USARÁ EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS DE 1999

RESOLUCION N° 043-99-J/ONPE

Lima, 7 de mayo de1999

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 004-99-PCM, el Señor Presidente de la República, ha convocado a Elecciones Municipales Complementarias de Alcaldes y Regidores para el día domingo 4 de julio del presente año, autorizando al Jurado Nacional de Elecciones a señalar los distritos y provincias en las que se llevarán a cabo los comicios señalados precedentemente;

Que, el Artículo 165° de la Ley N° 26859, señala que el diseño de la cédula de sufragio y el procedimiento de ubicación de las candidaturas o símbolos deben publicarse y presentarse ante los personeros de las organizaciones políticas y listas independientes dentro de los dos (2) días naturales después del cierre de las inscripciones;

Que, por acuerdo del 19 de mayo de 1998, el Jurado Nacional de Elecciones ha facultado que las Listas Independientes que no hayan presentado símbolo, se les asigne un número para que las identifique;

En uso de las atribuciones conferidas en la Carta Fundamental, la Ley N° 26859, Orgánica de Elecciones Municipales y Ley N° 26487, Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el diseño de la cédula de sufragio cuyo formato aparece en el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente resolución, el mismo que se usará en la Elecciones Municipales Complementarias de 1999, para elegir alcalde y regidores de los Concejos Provinciales y Distritales señalados por Resoluciones N°207-99-JNE, Nº 356-99-JNE y N° 477-99-JNE del Jurado Nacional de Elecciones.

Artículo 2º.- El Formato de cédula de sufragio, a que se refiere al artículo precedente, será impreso en papel de seguridad de 85 gramos, cuyo tamaño no será menor de la dimensión A5; su largo máximo, esta en función de la cantidad de listas que participan en cada jurisdicción electoral y tiene las siguientes características generales:

I ANVERSO

Fondo con tramado de seguridad, color plomo, con siglas continuas: ONPE JNE RENIEC

PARTE SUPERIOR IZQUIERDA

Notación.
Firma del Presidente de Mesa y firma de los Personeros que deseen hacerlo.
A continuación, impresión de líneas discontinuas horizontales paralelas e interlineadas a 2cm entre ellas. Debajo de la primera línea lleva impreso el texto: **Firma del Presidente;** las líneas restantes,llevan al pie el texto impreso: **Firma del Personero.**

PARTE SUPERIOR DERECHA

Texto impreso: SISTEMA ELECTORAL PERUANO
Seguidamente , impresión del escudo de la República del Perú
A continuación el texto: CEDULA DE SUFRAGIO

PARTE INFERIOR DERECHA

Texto impreso: ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 1999

II REVERSO

Consta de dos (2) secciones:

A.- SECCION IZQUIERDA

Destinada al voto para alcalde y regidores provinciales, con fondo de seguridad en tono de color verde que decolora en derecha a izquierda, con tramado de seguridad en letras continuas ONPE JNE RENIEC.

Consta de los siguientes elementos:

PRIMER CUARTO SUPERIOR IZQUIERDO
Impresión de logo de ONPE en colores característicos

PRIMER CUARTO SUPERIOR DERECHO
Texto impreso: VOTO PARA ALCALDE Y REGIDORES PROVINCIAL.

Seguidamente se imprimirá el nombre de la provincia para la cual se eligen miembros del Concejo respectivo.

PRIMER CUARTO CENTRAL
Texto impreso: ORGANIZACIONES POLITICAS Y LISTAS INDEPENDIENTES
Texto Impreso en recuadro: Para votar, marque una cruz (+) o un aspa (x) sobre el símbolo o número que identifica su preferencia.

SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO INTERMEDIOS
Espacios interlineados ad-hoc, en los que se ubican los nombres y símbolos o números que identifican a las Organizaciones Políticas y Listas Independientes inscritas,de acuerdo a la posición que les corresponda según sorteo.
Lado Izquierdo - Impresión de los nombres señalados procedentemente.
Lado derecho-Recuadro de 1,5 cms. por lado en fondo blanco, en el que se imprimirá el símbolo de cada organización política y lista independiente participante, alineado a su nombre, según corresponda.

B. SECCION DERECHA.

Destinada al voto para el Alcalde y Regidores distritales, con fondo de seguridad que decolora de derecha a izquierda, con tramado de seguridad en letras continuas ONPE-JNE-RENIEC.
Constará de los mismos elementos de la Sección Izquierda, excepto el fondo de seguridad que decolora de derecha a izquierda que será en tonos de color marrón y el PRIMER CUARTO SUPERIOR DERECHO, donde constará el texto siguiente:
VOTO PARA ALCALDE Y REGIDORES DISTRITAL

Artículo 3°. En la cédula de sufragio, las Organizaciones Políticas y listas Independientes se ubican de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Las organizaciones políticas se ubicarán en la parte superior de la cédula. A cada Organización política participante se asigna un bolo en el cual se colocará su denominación . Se efectúa el sorteo, Y, a la Organización política que le corresponda el primer bolo sorteado ocupará el primer lugar en la cédula de sufragio, a la que le corresponda el segundo bolo sorteado le corresponderá el segundo lugar en la cédula, y asi, en forma sucesiva hasta completar el sorteo de todas las organizaciones políticas participantes.

b) a continuación se ubican en la cédula de sufragio, las listas independientes inscritas que hayan reunido los requisitos para postular candidatos para concejo provincial que además puedan postular candidatos para concejos distritales, cuyo sorteo se establece de la siguiente manera:

b.1. El sorteo de ubicación de las Listas Independientes constará de 29 bolos, en los que se consignarán las 29 letras del abecedario. Se extraen los bolos, uno por uno, anotándose la letra asignada.

b.2. La Lista Independiente cuya denominación comience con la letra correspondiente al primer bolo sorteado, ocupará el primer lugar que corresponde a la ubicación de las Listas Independientes; la Lista Independiente cuyo nombre comience con la letra correspondiente al segundo bolo sorteado, ocupará el segundo lugar y así sucesivamente, hasta completar el total de listas que resulten inscritas en la jurisdicción.

b.3. En caso que en alguna provincia no exista Lista Independiente cuya denominación comience con la letra correspondiente al bolo sorteado en primer termino, el lugar será ocupado

por la Lista cuya denominación comience con la letra correspondiente al bolo que le siga en el orden del sorteo, siempre y cuando exista Lista Independiente con denominación que comience con esa letra.

b.4. Si en una misma jurisdicción electoral existiese más de una Lista Independiente cuya denominación comience con la misma letra, se comparará la segunda letra de su denominación, tomando como referencia el orden del abecedario. Si la coincidencia continua, se comparará la tercera, cuarta o quinta letras etc., hasta determinar el orden.

c) Después de las Listas Independientes que postulan candidatos a Concejo Provincial, que también, pueden postular candidatos a los Concejos Distritales de su jurisdicción, figurarán en la cédula, de sufragio, las Listas Independientes que postulan candidatos solamente a Concejos Distitales, y se ubicarán de acuerdo al sorteo realizado, utilizando los mismos criterios adoptados para las listas que presentan candidatos provinciales.

Para la aplicación de la presente resolución, no se tomará como parte del nombre la denominación "Lista Independiente", así mismo, en los casos de existencia de números en la composición del nombre de Organizaciones Políticas o Listas Independientes, solo se tomará la parte alfabética nombre.

Artículo 4°- La asignación de Numeros a las listas Independientes que no hayan presentado símbolos, se realizará de la siguiente manera:

a) A la primera Lista Independiente que postula candidatos a nivel provincial, que no haya presentado símbolo según el orden del sorteo, se le asignará el número 3; a la segunda lista independiente se le asignará el número 5; a la tercera el número 7 y así, sucesivamente, se emplearán los siguientes números impares hasta completar la asignación de números a todas las Listas Independientes provinciales que no hayan presentado símbolo en la circunscripción electoral correspondiente.

b) Las candidaturas distritales de la Listas Independientes que postulan candidatos a concejos provinciales que no hayan presentado símbolo, se identificarán con los mismos números asignados a éstas.

c) A las Listas Independientes, que postulan solamente candidatos a concejos distritales, se les asignará el número impar siguiente al último asignado a las Listas Independientes a nivel provincial, respectivamente, de acuerdo al orden de ubicación.

Artículo 5°.- Consentida la presente Resolución o resueltas las apelaciones por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales citará a través del Diario Oficial "El Peruano" y los medios de difusión de mayor circulación, a los personeros de las Organizaciones Políticas y personeros y/o representantes de las Listas Independientes, al sorteo que se efectuará en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 6°. La presente resolución será comunicada al Jurado Nacional de Elecciones a efectos de la fiscalización del sorteo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE PORTILLO CAMPBELL
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

ACTA DEL SORTEO PARA LA UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y LISTAS INDEPENDIENTES EN LA CÉDULA DE SUFRAGIO A UTILIZARSE EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 1999

En Jesus María , siendo las quince horas con treinta minutos del día 17 de mayo de 1999, me constituí en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ubicada en el Jr. Nazca N° 598 Jesus María, Lima, con el objeto de certificar el sorteo para la ubicación de las organizaciones políticas y listas independientes en las cédulas de sufragio, a ser utilizadas en las elecciones municipales complementarias del próximo 4 de julio de 1999.

Estuvieron presentes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el gerente de asesoría jurídica Dr. Godofredo Dávila Orihuela, encargado de la Jefatura Nacional; el gerente de gestión electoral, Sr. José Cavassa Roncalla; y el gerente de Informática, Sr. Rodolfo Vásquez Neyra, y por el Jurado Nacional de Elecciones, el Sr. Miguel López Santander, como fiscalizador.

En el local de la institución se encontraban reunidos, los personeros de las diferentes agrupaciones políticas y listas independientes , asi como periodistas de los diferentes medios de comunicación y público en general. Los personeros presentes son :

Gastón Cajina Barrera	L. E. 08747002	Lucho en Miraflores
Walter Rivera Vilchez	L. E. 10477797	Lucho en Miraflores
Henry Bouverie Alor	L. E. 07876245	Somos Perú
Francisco Cuellar Medina	L. E. 08243577	Unión por el Perú
Hernan de la Fuente Rondón	L. E 07556260	Miraflores Unido
Aurelio Pastor Valdiviezo		Partido Aprista

Se procedió a dar lectura a la Resolución N° 043-99-J/ONPE, publicada en el diario oficial "El Peruano", el sabado 8 de mayo de 1999.

Colocados los bolos numerados del 1 al 6 en el ánfora correspondiente, se inició el sorteo para ubicar el orden de las organizaciones políticas, con el siguiente resultado:

Acción Popular	(6)
Movimiento Independiente Somos Perú	(2)
Movimiento Independiente Vamos vecino	(5)
Partido Aprista Peruano	(4)
Partido Perú Posible	(1)
Unión por el Perú	(3)

A continuación se colocaron en el ánfora veintinueve (29) bolos que representan el orden de ubicación que tendrán las listas independientes en la cédula de sufragio. Una vez mezclados fueron extraidos uno por uno asignandole un orden a cada letra del abecedario, las que representan a la vez las letras iniciales de las listas independientes que participarán en las elecciones municipales complementarias. Luego de ser sorteados quedó el siguiente resultado:

A	(19)
B	(14)
C	(16)
CH	(26)
D	(10)
E	(27)
F	(28)
G	(6)
H	(7)
I	(18)
J	(12)
K	(3)
L	(23)
LL	(22)
M	(24)
N	(4)
Ñ	(9)
O	(1)
P	(29)
Q	(13)
R	(15)
S	(5)
T	(17)
U	(8)
V	(25)
W	(20)
X	(21)
Y	(11)
Z	(2)

Se procedió a realizar la verificación en la pantalla instalada para el sorteo encontrando conforme tanto la numeración de las ubicaciones de las agrupaciones políticas, como de las listas independientes, en algunos distritos, que a pedido del público se procesarón a fin de ser visualizados.

A continuación, el gerente de asesoría jurídica encargado de la Jefatura Nacional informó que se procederá a publicar los resultados del sorteo para la ubicación de las agrupaciones políticas y listas independientes en las cédulas de sufragio.

Siendo las quince horas con cuarentaicinco minutos se dió por concluido el sorteo.

Dr. Aurelio Diaz Rodriguez	Notario Público de Lima
Dr. Godofredo Dávila Orihuela	Jefe Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (e)
Sr. José Cavassa Roncalla	Gerente de Gestión Electoral
Sr. Rodolfo Vásquez Neyra	Gerente de informática
Sr. Miguel López Santánder	Fiscalizador del JNE

DESIGNAN JEFES DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS DE PROCESOS ELECTORALES DE CIRCUNSCRIPCIONES EN LAS QUE SE REALIZARÁN ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 1999

RESOLUCION JEFATURAL Nº 048-99-J/ONPE

Lima, 17 de mayo de 1999

VISTO;

El Informe de la Comisión encargada de la selección y designación de Jefes de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, designada por Resolución Jefatural Nº 031-99-J/ONPE;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 004-PCM de fecha 2 de marzo de 1999, se ha convocado a Elecciones Municipales Complementarias de Alcaldes y Regidores, para el domingo 4 de julio del presente año, y por Resoluciones Nos. 207, 356 y 477-99-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones ha determinado las circunscripciones electorales, en las cuales se llevará a cabo las Elecciones Municipales Complementarias 1999;

Que, de conformidad con el Artículo 24° de la Ley Nº 26487 Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, se conforman para cada proceso electoral de acuerdo a las circunscripciones electorales y tipo de distrito electoral que regirá en el proceso electoral en curso;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 039-99-/ONPE de fecha 28 de abril de 1999, se publicó la relación de candidatos aptos para jefes de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, a efectos de sujetarse al procedimiento de tachas establecido en la Directiva Nº 001-99-CSD/ONPE;

Que, habiendo transcurrido el plazo para la presentación de tachas, señalado en la precitada directiva, no se ha consignado impedimento alguno para que los referidos postulantes ejerzan el cargo de jefe ODPE;

Que, de los postulantes hábiles, el señor Javier Pacheco Jorge ha presentado carta de renuncia de fecha 15 de mayo último, por lo que es necesario incorporar del cuadro de calificaciones al postulante que lo reemplace;

Que, en el marco de la citada convocatoria, y con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las funciones previstas en el Artículo 182º de la Constitución Política del Perú, es necesario designar en los cargos temporales de jefes de las referidas Oficinas Descentralizadas, al personal seleccionado para este fin;

De conformidad con lo prescrito en la Ley Nº 26864, de Elecciones Municipales, Ley Nº 27013, de Presupuesto del Sector Publico para 1999, y, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 26487, Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar en los cargos de jefes de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, con efectividad a partir del 15 de mayo del presente año, al personal que a continuación se detalla, pare las circunscripciones electorales correspondientes:

Nº	Apellidos y Nombres	Oficina Descentralizada
01	RODRIGO OUISPE, JOSE ANTONIO	AMBO
02	NORONHA MELGAREJO, JOSE ANTONIO	ASCOPE
03	APAZA RUBIO, JUAN CARLOS	ATALAYA
04	LARA NEGRON, LUIS ENRIQUE	CAJABAMBA
05	NARCISO MENDOZA, CARLOS OSCAR	CARAVELI
06	CALDERON DIAZ, RUBEN OSWALDO	CASTILLA
07	MENDOZA FLORES, VICTOR ALEJANDRO	CASTROVIRREYNA
08	CASTAÑEDA VIENA, RAMON CESAR	CHICLAYO
09	MORALES GORDILLO, CARMEN MARINA	CHOTA
10	TORRE REYES, MARIA DEL ROSARIO	CONCEPCION
11	VILLAVICENCIO PEIRANO, URSULA MARCELA	CUTERVO
12	ESCAJADILLO GROSSO, RAFAEL JESUS	DANIEL ALCIDES C.
13	CASTILLO LEON, FRANCISCO PAVEL	DOS DE MAYO
14	ARAUJO MARIN, CESAR AUGUSTO	GENERAL SÁNCHEZ C.
15	JARA VILLANUEVA, TANIA NANCY	HUAMANGA
16	VILLAVICENCIO BECERRA, JUAN PEDRO	ICA
17	GALVEZ VARGAS, AUGUSTO ARISTIDES	LA MAR
18	BARRIOS SANCHEZ, ALDO EMILIANO	LA UNION
19	VILLAVICENCIO SANCHEZ, LUIS ALBERTO	LAURICOCHA
20	LIZARZABURU PALMA, GUILLERMO CARLOS	LORETO
21	COLLAZOS ESCUDERO, MARCO ANTONIO	LUCANAS
22	NUÑEZ SALGADO, ALICIA MILAGRITOS	MARISCAL NIETO
23	OBREGON SOTELO, ENMA ISABEL	MOYOBAMBA
24	ZUMAETA GIUDICHI, MARTIN	PACHITEA
25	TOCASCA PEREZ, LEONCIO	PARURO
26	RIVERA LUIS, CHRISTIAM GROVER	PATAZ
27	BENITES AGURTO, OSCAR ORLANDO	PAUCARTAMBO
28	CASAPIA SOTO, GERMAN JOSE	PISCO
29	SUELDO CACERES, CESAR GIOVANNI	REQUENA
30	CHUMPITAZ CAMACHO, JULIO ALBERTO	SÁNCHEZ CARRION
31	CORAL POMA, ENA ELICIA	SANTA
32	NARAGIO VASQUEZ, JUAN SIMON	SATIPO
33	ALARCO MOLFINO, NANCY AIDA	TACNA
34	CHIRA PAREDES, LUIS ENRIQUE	TAYACAJA
35	RUIZ TORRE, ROSA ROSARIO	VILCASHUAMAN
36	DAVILA PENAS, MANUEL ALVARO	YAULI
37	ARCE COLOMA, ATILIO AMERICO	YAUYOS

Artículo Segundo- A partir de la fecha de publicación de la presente resolución, compréndase a la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Moyobamba, dentro de los alcances de la Directiva N° 001-99-CSD/ONPE aprobado por Resolución Jefatural Nº 039-99 - J/ONPE , de fecha 28 de abril de 1999.

Artículo Tercero.- Los jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, señalados en el Artículo Primero de la presente resolución, en sus respectivas circunscripciones electorales, publicarán por medio de carteles la relación del personal a su cargo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva N° 001-99-CSD/ONPE.

Artículo Cuarto.- La asignación de funciones a que se contrae la presente resolución, tiene carácter temporal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GODOFREDO DAVILA ORIHUELA
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (e)

DISPOSICION REFERIDA AL LLENADO DE DATOS Y FIRMA DE PLANILLONES DE ADHERENTES PARA LA INSCRIPCION DE ORGANIZACIONES POLITICAS

RESOLUCION No 745-99-JNE

Lima 20 de mayo de 1999

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 595-99-JNE del 15 de abril del año que corre, con arreglo al acuerdo de Sesión Privada de fecha 30 de marzo último, el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el nuevo formato de planillón para recabar firmas de adherentes para inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas el mismo que es de color celeste y posee las demás características que se señala en la mencionada Resolución y en el oficio Nº 491-99-J/ONPE de fecha 29 de Marzo de 1999;

Que, es necesario dictar algunas pautas adicionales relacionadas con el uso del nuevo planillón, por cuanto se han venido presentando diversas consultas en torno al correcto llenado de sobre todo en lo concerniente a la consignación del día, mes y año de nacimiento del responsable del planillón y del adherente; la impresión de la huella digital y a la obligatoriedad de responsable del planillón llene o no el mismo;

Que, en cuanto a la fecha de nacimiento el registro correspondiente, mantiene dicha información, tanto de responsable del planillón como de la persona adherente, por lo que debe ser optativa la consignación de dicha fecha;

Que, es el Perú un País que reconoce el ejercicio de los ciudadanos, por igual a las personas letradas como a las analfabetas y en tal virtud resulta indispensable establecer que la adhesión a alguna organización política puede efectuarse en su caso, con la impresión dactilar del ciudadano, en cuanto no le sea posible consignar firma;

Que, es conveniente determinar, asímismo, que llenado de datos en cada planillón lo puede efectuar tanto el adherente mismo como el responsable de planillón; solo en casos en que el ciudadano sea analfabeto, el responsable del planillón está obligado a efectuar dicho llenado;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones;

RESUELVE:

Artículo primero. Disponer que es opcional las consignación de la fecha del nacimiento del responsable de página y del adherente en el planillón aprobado por Resolución Nº 595-99-JNE. Los ciudadanos que no saben firmar, estamparán su huella digital en el recuadro correspondiente.

Artículo segundo. El responsable de página podrá efectuar el llenado de los datos de los ciudadanos adherentes.

Artículo tercero. Dejár sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente Resolución, con conocimiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SERPA SEGURA; BRINGAS VILLAR;
MUÑOZ ARCE; HERNÁNDEZ CANELO;
DE VALDIVIA CANO:
TRUJILLANO Secretario General

APRUEBAN REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

DECRETO SUPREMO N° 015-98-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil;
Que, la Ley Nº 26497 Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil establece en su Cuarta Disposición Final que el Reglamento de las Inscripciones en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil deberá ser aprobado por el poder ejecutivo;
En uso de las atribuciones que le confieren el inciso 8) del Artículo 118° de la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo N° 560 «Ley del Poder Ejecutivo»;

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el Reglamento de Inscripciones en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, cuyo texto forma parte integrante del presente Decreto Supremo y que consta de 7 capítulos, tres disposiciones transitorias y 11 disposiciones finales.

Artículo 2°. El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros

ALFREDO QUISPE CORREA
Ministro de Justicia.

REGLAMENTO DE LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

INDICE

CAPITULO I : DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO II : DEL SISTEMA REGISTRAL

Sección Primera : De los órganos que conforman el Sistema Registral
Sección Segunda : De los Registradores

CAPITULO III : HECHOS INSCRIBIBLES

Sección Primera : De los Nacimientos
Sección Segunda : De ciertos actos que modifican el estado personal
Sección Tercera : De los Matrimonios
Sección Cuarta : De las Defunciones
Sección Quinta : De las Naturalizaciones

CAPITULO IV : DE LOS INSTRUMENTOS REGISTRALES

Sección Primera : De las actas y Archivo Personal
Sección Segunda : De las Copias Certificadas y Extractos

CAPITULO V : DE LOS PROCEDIMIENTOS REGISTRALES Y MEDIOS IMPUGNATORIOS

Sección Primera : Normas Generales
Sección Segunda : De las Rectificaciones
Sección Tercera : De las Cancelaciones
Sección Cuarta : De los Medios impugnatorios

CAPITULO VI : DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

CAPITULO VII : DE LOS COSTOS REGISTRALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES FINALES

REGLAMENTO DE LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. El presente Reglamento regula la inscripción de los hechos relativos al estado civil de las personas naturales, determinados en el mismo.

Artículo 2°. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá como:

Ley: La Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley No. 26497).

Reglamento: El presente Reglamento de las Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Registro: El Registro Nacional de Identificación y Estdado Civil, el que podrá usar la sigla IDENTIDAD.

Sistema Registral: El conjunto de órganos y personas del Registro que tienen a su cargo la ejecución de los procedimientos administrativos de inscripción a que hacen referencia la Ley y el presente Reglamento, así como los órganos de apoyo, asesoramiento y control del Registro.

Oficinas Registrales: Todas las dependencias encargadas de la ejecución de los procedimientos administrativos de inscripción a que hacen referencia la Ley y el presente Regla

Archivo Unico Centralizado: Oficina encargada de recopilar, centralizar, ordenar y custodiar los Títulos Archivados, así como de proporcionar la información necesaria a los diversos órganos del sistema registrar.

Registrador: Persona encargada de conocer, calificar y resolver los procedimientos registrales señalados en la Ley y en el presente Reglamento.

Archivo Personal: Archivo que contiene la información sumaria de los hechos inscritos relativos a cada persona natural.

Título Archivado: Documentos que posee el Registro, los cuales sustentan los hechos inscritos.

Acto Registral: Acto administrativo que en ejercicio de sus funciones realizan los Registradores, respecto de la inscripción de todo hecho relativo a la identidad y estado civil de las personas.

DNI: Documento Nacional de Identidad.

CUI: Código Unico de Identificación.

Nombre: El de los prenombres y los apellidos de la persona.

Articulo 3º.- La inscripción en el Registro es obligatoria. El derecho a solicitar que se inscriban los hechos relativos a la identidad y estado civil de las personas es imprescriptible e irrenunciable.
Son hechos inscribibles, los siguientes:

a. Los nacimientos.
b. Los matrimonios.
c. Las defunciones.
d. El nombramiento de curador interino a que se refiere el Artículo 47° del Código Civil.
e. La declaración de ausencia de las personas por resolución judicial firme.
f. La designación de administrador judicial de los bienes del ausente por resolución judicial firme
g. La imposición de interdicción civil por resolución judicial firme.
h. La imposición de suspensión, extinción y restitución de la patria potestad por resolución judicial firme.
i. La imposición de incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela por resolución judicial firme, de conformidad con el inciso 5) del Artículo 36° del Código Penal.
j. La determinación de la patria potestad por resolución judicial firme, de conformidad con el Artículo 421° del Código Civil.
k. La imposición de la pérdida de la administración y del usufructo de los bienes de los hijos así como su restitución por resolución judicial firme.
l. La declaración de tenencia del menor y su variación, por resolución judicial firme.
m. Los actos de discernimiento de los cargos de tutores, guardadores o curadores, con enumeración de los inmuebles inventariados notarial o judicialmente y la relación de las garantías prestadas, así como cuando la tutela, guarda o curatela acaba, o cesa en el cargo el tutor, guardador o curador.
n. La rehabilitación de los interdictos en el ejercicio de sus derechos civiles por resolución judicial firme.
o . Las declaraciones judiciales de quiebra.
p . Las naturalizaciones, así como la pérdida y recuperación de la nacionalidad.
q. Las resoluciones que declaran la nulidad de matrimonio, el divorcio, la separación de cuerpos y la reconciliación.
r. El acuerdo de separación de patrimonio y su sustitución, la separación de patrimonio no convencional, las medidas de seguridad correspondientes y su cesación.
s. Las sentencias de filiación.
t. El reconocimiento de hijos.
u. Las adopciones.
v. Los cambios o adiciones de nombre.
w. Las anotaciones preventivas sobre restricciones de facultades del titular de la inscripción y/o de las resoluciones que a criterio del juez deban ser inscritas preventivamente.
x. Los demás actos que la ley señale.

Artículo 4°. Cualquier persona puede solicitar certificaciones de las inscripciones efectuadas, de los títulos archivados que las sustentan, así como de los Archivos Personales, las que serán expedidas de acuerdo a lo establecido en la Sección Segunda del Capítulo IV de este Reglamento.
La información reservada que contienen dichos documentos sólo se entregará al titular o a su representante con poder especial, al representante legal en el caso de menores de edad o incapaces, o a aquellas personas autorizadas por resolución judicial firme.
Al respecto llámese información reservada a la siguiente:

a) A la señalada en los incisos b), c), d) y e) del Artículo 22° del presente Reglamento, así como la referente a la filiación de la persona.
b) Causales de invalidez del matrimonio, de divorcio y de separación de cuerpos.

c) Causales de interdicción de las personas.
d) Causales de inhabilitación de las personas.
e) Causas de la declaratoria de quiebra.
f) Cualquier referencia al domicilio de las personas, salvo disposición legal en contrario.

Artículo 5° Los jueces que resuelvan y los notarios que tramiten hechos inscribibles en el Registro remitirán de oficio, para su inscripción, los partes correspondientes, a cualquier Oficina Registral ubicada dentro del ambito territorial de su jurisdicción, en un plazo no mayor de 15 días, bajo responsabilidad.

Artículo 6°. La inscripción de hechos, por mandato de resoluciones judiciales firmes, deberá contener:

a. Juzgado que emitió la resolución.
b. Nombre del juez.
c. Nombre del secretario.
d. Lugar y fecha de la resolución.
e. Nombre de las partes.
f. Materia o pretensión.
g. Número del expediente.
h. Transcripción de la resolución firme.

Artículo 7°. La inscripción de hechos provenientes de instrumentos públicos notariales deberá contener:

a. Nombre del notario.
b. Lugar, fecha y número del instrumento notarial.
c. Nombre de los intervinientes.
d. Materia del instrumento.
e. Hecho materia de inscripción.

Artículo 8°. Cuando proceda la declaración de testigos, estos deberán ser personas con plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles. Los testigos presentarán su documento de identidad respectivo, y en el caso de ser extranjeros deberán presenter algún documento de identidad reconocido por el Estado peruano.

Articulo 9°. Cuando el Registro exija copia de cualquier documento, ésta deberá presentarse autenticada por fedatario designado por el Registro, por notario o por el juez de paz de la localidad.

Artículo 10º.- Cuando proceda la presentación de poderes,éstos deberán precisar el acto para el cual se otorgan, detallando toda la información necesaria para llevar a cabo dicho acto registral.
El poder podrá ser autenticado por fedatario designado por el Registro, por notario o por el juez de paz de la localidad.
Para tales efectos, los fedatarios designados por el Registro quedan facultados exclusivamente para autenticar los poderes otorgados para los trámites administrativos contemplados en el presente Reglamento.

CAPITULO II
DEL SISTEMA REGISTRAL

Sección Primera

De los Organos que conforman el Sistema Registral

Articulo 11°. El Sistema Registral esta integrado por:

a) Alta Dirección;
b) Organos de Línea;
c) Organos de Asesoramiento;
d) Organos de Apoyo;
e) Organos de Control.
f) Archivo Unico Centralizado.

Para los efectos vinculados con los procedimientos derivados del presente Reglamento, la Alta Dirección está conformada por la Jefatura Nacional y la Gerencia General.
Los órganos de línea son la Gerencia de Operaciones, las Oficinas Regionales del Registro, las Oficinas Registrales Consulares y las Oficinas Registrales.
La Gerencia de Operaciones será la encargada de la organización y funcionamiento de las Oficinas Registrales. Dependerá de la Gerencia General y actuará en cuanto corresponda, en permanente relación con los demás órganos del Registro.
Como órganos dependientes de la Gerencia de Operaciones funcionarán Oficinas Regionales del Registro, en cuya jurisdicción existirán y operarán las Oficinas Registrales que la Alta Dirección estime necesarias. Cada Oficina Registral estará dotada de las unidades de recepción de títulos, de calificación de títulos, de procesamiento registral y/o de emisión de certificaciones que la Alta Dirección estime igualmente necesarias, de acuerdo con las exigencies derivadas del volumen poblacional con los costos de funcionamiento del servicio y con las facilidades técnicas con que se cuente. Si se estima conveniente podrá encargarse de la gestión de una misma unidad o de varias a una sola persona. Asimismo, podrá decidirse sobre la ubicación, en diversos lugares de las unidades correspondientes a la misma Oficina Registral.
Tanto las Oficinas Registrales como sus unidades, podrán ser itinerantes o móviles, por decisión de la Gerencia de Operaciones, a propuesta de la Oficina Regional del Registro correspondiente, atendiendo a las circunstancias, densidad de población, o localidades donde no exista Oficina Registral o que no tengan fácil acceso con la existente.
Las Oficinas Registrales Consulares, que dependen administrativa y económicamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, estarán a cargo de los respectivos Cónsules. En lo que concierne a su actividad registral, éstos dependerán y tendrán las funciones que se señalen por la Gerencia de Operaciones.
El Archivo Unico Centralizado es el órgano encargado de conservar, consolidar y mantener actualizada la información de los actos registrales a que se refieren la Ley y el presente Reglamento.
Para el funcionamiento de las Oficinas Registrales, la Jefatura Nacional podrá, a través de la Gerencia General, que actuará por intermedio de la Gerencia de Operaciones, autorizar a las Oficinas Regionales del Registro a suscribir convenios o contratos de encargo con entes públicos o privados que se comprometan a prestar servicios de recepción de títulos, de procesamiento registral y otros. Dichos contratos o convenios deberán concertarse y celebrarse con sujeción a lo dispuesto en las

leyes respectivas, cuidando que se garantice el cumplimiento de los fines del Registro y la legitimidad de los actos procesales.
El ámbito territorial, extensión, jurisdicción y límites de cada Oficina Regional del Registro será definido y aprobado, así como modificado por la Alta Dirección.

Artículo 12°. Las Oficinas Regionales del Registro están a cargo de un Gerente Regional designado por la Gerencia General, a propuesta de la Gerencia de Operaciones. Los Gerentes Regionales tendrán las siguientes funciones:

a) Dictar las disposiciones necesarias pare el funcionamiento de las Oficinas Registrales que se encuentren en su jurisdicción y supervisar dicho funcionamiento.
b) Supervisar las actividades y el cumplimiento de las funciones de las Oficinas Registrales de su respectiva jurisdicción.
c) Nombrar, evaluar y supervisar a los fedatarios de su jurisdicción.
d) Otras que se les asigne.

Articulo 13°. La Jefatura Nacional aprobará la creación y supresión de las Oficinas Registrales que fueren necesarias.
Procederá a efectuar las designaciones de personal pertinentes y las modificaciones de estructura, denominación, funcionamiento y demás que se requieran.

Seccion Segunda

De los Registradores

Artículo 14°. Para ser Registrador se requiere:
a) Ser peruano de nacimiento o por naturalización.
b) Tener título de abogado o de asistente social o grado de bachiller en derecho u otras profesiones.
En aquellos lugares donde no sea posible contar con personas que tengan las calificaciones antes indicadas, bastará tener estudios secundarios.
c) No tener antecedentes penales por delito doloso.
d) Aprobar el concurso de méritos que determine la Gerencia General.

Artículo 15°. Los Registradores pertenecerán a las unidades de calificación de títulos y tendrán las siguientes funciones y atribuciones:
a) Calificar los títulos sustentatorios que se presenten para inscripción.
b) Procesar las inscripciones que sean pertinentes por el mérito de los títulos presentados.
c) Requerir los documentos e información escrita adicional a los títulos presentados, que se considere indispensable para su mejor comprensión, interpretación o calificación.
d) En el caso de inscripciones dispuestas por mandato judicial el Registrador podrá solicitar al juez de la causa las aclaraciones o información complementaria que considere necesaria.
e) Denegar las inscripciones solicitadas cuyos títulos no aporten mérito para inscripción.

Articulo 16°. Los Registradores son nombrados por la Gerencia General a propuesta de la Gerencia de Operaciones. Se podrá designar a uno o más Registradores para cada Oficina Registral, nombrando igualmente al jefe de la misma.

Artículo 17°. En caso de ausencia del Registrador por un plazo mayor de 5 días, la Oficina Regional del Registro nombrará temporalmente al reemplazante. Si la ausencia se prolongara por mas de 60 días el reemplazo deberá ser ratificado o sustituido por la Gerencia General, a propuesta de la Gerencia de Operaciones.

Artículo 18°. Cuando alguna Oficina Registral cuente con un sólo Registrador, éste se desempeñará como jefe de la misma debiendo cumplir con las funciones señaladas, según lo dispuesto en el Artículo 15° del presente Reglamento.

Artículo 19°. Los Registradores deben guardar reserva respecto de los actos y hechos que conozcan por razón de su cargo, salvo por mandato judicial, siendo responsables por el incumplimiento de esta disposición.

Artículo 20°. Ningún Registrador podrá valerse de su cargo en beneficio propio o de terceros, bajo responsabilidad.

Artículo 21°. Los Registradores no podrán inscribir, conocer procedimientos registrales, ni expedir copias certificadas sobre hechos relativos a su persona, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; salvo en aquellos lugares donde no haya otra persona que pueda suplirlos en sus funciones.

CAPITULO III
HECHOS INSCRIBIBLES

Seccion Primera
De los Nacimientos

Articulo 22°. En el acta de nacimiento se inscriben:

a) El nacimiento.
b) El reconocimiento de hijos.
c) La paternidad o maternidad declarada por resolución Judicial firme.
d) La declaración de paternidad o maternidad por resolucidn judicial firme de la acción contestatoria a que se refieren los Articulos 364° y 371° del Código Civil.
e) Las adopciones, asi como su renuncia regulada por el Articulo 385° del Código Civil.
f) Las rectificaciones judiciales dispuestas de conformidad con el Articulo 826° del Código Procesal Civil, así como las notariales y las previstas en el presente Reglamento.

Articulo 23°. Las inscripciones de los nacimientos producidos en los hospitales del Ministerio de Salud y del Instituto Peruano de Seguridad Social se realizarán obligatoriamente dentro del tercer día de producido el nacimiento, en las oficinas de registros civiles instaladas en dichas dependencias. De igual forma , se inscribirán dentro del plazo de tres días los nacimientos ocurridos en hospitales y demás Centros de Salud públicos o privados que cuenten con Oficinas Registrales.
Los Directores de dichos Centros, bajo responsabilidad, adoptarán las medidas necesarias para que la orden de alta de las pacientes que hubieran dado a luz se produzca luego de constatar el cumplimiento de la inscripción a que se refiere este artículo.

Articulo 24° Los nacimientos no ocurridos en los Centros de Salud mencionados en el Artículo 23° del presente Reglamento, deberán ser inscritos dentro de los 30 días siguientes de ocurridos. La inscripción de éstos deberá realizarse preferentemente en la Oficina Registral dentro de cuya jurisdicción se produjo el nacimiento o en la correspondiente al domicilio del menor.

Articulo 25°. Es deber y derecho del padre y la madre inscribir de manera individual o conjunta a sus hijos recién nacidos, dentro de los plazos establecidos en los Artículos 23º y 24º de este Reglamento, para lo cual acompañarán cualquiera de los siguientes documentos:

a) Certificado de nacimiento expedido por profesional competente o constancia otorgada por persona autorizada por el Ministerio de Salud, de haber atendido o constatado el parto.
b) Declaración Jurada de la autoridad política, judicial o religiosa confirmando el nacimiento, dentro del plazo de 30 días de ocurrido el mismo, siempre que en la localidad donde se produjo el nacimiento no exista profesional u otra persona competente que pueda atender o constatar el parto.
Se entiende por profesional competente al médico, obstetra o enfermero con título reconocido por el Estado.

Artículo 26°. Los menores que no hubieran sido inscritos dentro de los plazos establecidos en los Artículos 23° y 24°de este Reglamento, podrán serlo a solicitud de:

a) Cualquiera de sus padres, de sus hermanos mayores o de quienes ejerzan su tenencia.
b) Sus tutores o guardadores.
c) Las personas mencionadas en el Artículo 48º de la Ley en caso de orfandad del menor, de que se desconozca quienes son sus padres, de ausencia de familiares o de abandono; a saber:

Los ascendientes del menor.
Los hermanos mayores de edad del menor.
Los hermanos mayores de edad del padre o la madre del menor.
Los directores de centros de protección.
Los directores de centros educativos.
El representante del Ministerio Público.
El representante de la Defensoria del Niño.
El juez especializado.

Las personas mencionadas en los incisos a), b) y c) precedentes deberán acreditar su parentesco o relación con el menor ante el Registrador.
La inscripción de los menores a que se refiere este artículo se efectuará únicamente en la Oficina Registral cuya jurisdicción corresponda al lugar donde se produjo el nacimiento o al lugar en el que domicilia el menor.
Quienes la soliciten, deberán adjuntar a la solicitud cualquiera de los documentos mencionados en el Artículo 25° del presente Reglamento o uno de los siguientes:

Partida de bautismo.
Certificado de matrícula escolar, con mención de los grados cursados.
Certificado de antecedentes policiales u homologación de huella dactilar, efectuada por la Policía Nacional del Perú.
Declaración jurada suscrita por dos personas en presencia del Registrador.

Artículo 27°. Los mayores de 18 años no inscritos que tengan plena capacidad de ejercicio podrán solicitar directamente la inscripción de su nacimiento, observando lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 26º del presente Reglamento.
Cualquiera de los padres o ambos, de los mayores de 18 años, no inscritos, que tengan plena capacidad de ejercicio, podrán también solicitar la inscripción del nacimiento de sus hijos, para lo cual éstos deberán expresar su consentimiento en documento suscrito en presencia del Registrador. Para este trámite deberán sujetarse a lo dispuesto en el precitado párrafo tercero del Artículo 26° de este Reglamento.
Los mayores de 18 años no inscritos, sujetos a interdicción por incapacidad absoluta o relativa, podrán ser inscritos a solicitud de sus representantes legales, con sujeción a lo establecido en el tercer párrafo del referido Artículo 26° del presente Reglamento.

Artículo 28°. Excepcionalmente, en los lugares de difícil acceso en que no existan Oficinas Registrales la inscripción de nacimientos se efectuará por las guarniciones militares de frontera o por misioneros debidamente autorizados por el Registro. En estos casos se podrá solicitar la inscripción de conformidad con lo establecido en el Artículo 26º del presente Reglamento.
El misionero o jefe de la guarnición deberá remitir bajo responsabilidad personal, dentro de los 30 días siguientes de producida la inscripción, copia del acta de inscripción a la Gerencia de Operaciones, conservando el original en el archivo que debe existir para tal fin.

Artículo 29°. En caso de imposibilidad comprobada, muerte o desconocimiento de los padres, podrán solicitar la inscripción, presentando el certificado de nacimiento o constancia, referidos en el inciso a) del Artículo 25º del presente Reglamento, cualquiera de las siguientes personas:

a) Los abuelos
b) Los hermanos mayores de edad
c) Los tíos consanguíneos
d) Cualquier persona o entidad que tenga bajo su tenencia al menor.

Las inscripciones reguladas por el presente artículo así como las establecidas en los Artículos 26º 27º y 28º del presente Reglamento, no constituirán prueba de filiación, salvo que se hayan cumplido las exigencias dispuestas por el Código Civil sobre la materia.

Artículo 30º.- La inscripción de nacimiento en el extranjero de hijos menores de edad de padre o madre peruanos, podrá ser hecha ante cualquier Oficina Registral Consular del país donde ocurrió el nacimiento.
La inscripción se efectuará dentro de los 30 días de ocurrido el nacimiento,acompañando el certificado emitido por profesional competente o persona calificada por las autoridades de salud del país donde se produjo el nacimiento, que atienda el parto.
Vencido éste plazo, la inscripción se efectuará según lo establecido en el Artículo 68º del presente Reglamento.

Artículo 31º.- La inscripción del nacimiento se efectuará aun cuando la persona fallezca en el acto de su alumbramiento.

Artículo 32º.- En la inscripción del nacimiento se detallará la siguiente información:

a) La hora, fecha y lugar de nacimiento.
b) El sexo.
c) El nombre del inscrito.
d) El nombre, edad, nacionalidad y el número de CUI o de la libreta electoral o de cualquier otro documento que permita fehacientemente la identificación del padre y la madre, así como el domicilio de ésta última.
e) Lugar y fecha de la inscripción.
f) Nombre y firma de los declarantes.
g) Nombre y firma del Registrador.

Artículo 33º.- La persona no podrá tener más de dos prenombres. No podrán ponerse prenombres que por sí mismos o en combinación con los apellidos resulten extravagantes, rídiculos, irreverentes, contrarios a la dignidad o al honor de la persona, así como al orden público o a las buenas costumbres, que expresen o signifiquen tendencias ideológicas, políticas o filosóficas, que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se pretende poner, o apellido como prenombres.
El Registrador es la persona autorizada para denegar las inscripciones que se soliciten en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior de este artículo.

Artículo 34º.- No pudiendo acreditarse la filiación, el Registrador consignará para el nacido prenombres y apellidos a efectos de identificar a la persona, bajo responsabilidad. Para dar cumplimiento a esta disposición el Registrador deberá consultar a la institución nacional encargada de velar por los derechos de los menores o en defecto de ésta, a la autoridad educativa o religiosa de la localidad.

Artículo 35º.- La inscripción del nacimiento hecha por uno o ambos padres, con la presentación del certificado de matrimonio de éstos, prueba la filiación del inscrito, Queda a salvo el derecho de impugnación establecido en el Código Civil.

Artículo 36º.- El reconocimiento de hijos extramatrimoniales podrá hacerse al momento de inscribir su nacimiento o en declaración posterior mediante acta firmada por quien la practica o por su representante en el caso de incapaces, en presencia del Registrador.
El reconocimiento también puede realizarse mediante escritura pública o testamento.

Artículo 37º.- Cuando el reconocimiento del hijo extramatrimonial lo hiciera el padre o la madre por separado, no podrá revelar el nombre de la persona con quien hubiera tenido el hijo.
El Registrador queda impedido de inscribir cualquier indicación al respecto, bajo responsabilidad.
De incumplirse esta disposición, la información consignada se tendrá por no puesta y será suprimida a pedido de parte.

Artículo 38º.- En caso que la inscripción del nacimiento del hijo matrimonial la efectúe la madre, el Registrador quedará obligado a inscribir la paternidad del cónyugue, con la presentación del acta de matrimonio de los padres. Tendrá igual obligación, si el hijo hubiera nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del vínculo matrimonial.

Artículo 39º.- La inscripción de la adopción notarial o judicial generará una nueva partida en sustitución de la original, en la que deberá consignarse el mandato de adopción.
La partida original conserva su vigencia para los efectos de ley.

Artículo 40º.- El cese de la incapacidad descrita en el Artículo 46ºdel Código Civil deberá ser inscrita de oficio por el Registrador al momento de inscribir el matrimonio del menor; o a petición del interesado, con la presentación de copia certificada del título oficial que le autorice a ejercer una profesión u oficio.

Artículo 41°. En los casos de pérdida o recuperación de la nacionalidad, la autoridad competente remitirá de oficio a la Oficina Registral competente copia certificada del expediente y de la resolución administrativa que declare dicha pérdida o recuperación.

Sección Segunda

De ciertos actos que modifican el estado personal

Articulo 42°. Como modificaciones del estado personal se inscribirán los siguientes actos:

a) El nombramiento de curador interino a que se refiere el Artículo 47º del Código Civil.
b) La declaración de ausencia de las personas por resolución judicial firme.
c) La designación de administrador judicial de los bienes del ausente por resolución judicial firme.
d) La imposición de interdicción civil por resolución judicial firme.
e) La imposición de suspensión, extinción y restitución de la patria potestad por resolución judicial firme.
f) La imposición de incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela por resolución judicial firme, de conformidad con el inciso 5) del Articulo 36º del Código Penal.
g) La determinación de la patria potestad por resolución judicial firme, de conformidad con el Articulo 421º del Código Civil.
h) La imposición de la pérdida de la administración y del usufructo de los bienes de los hijos así como su restitución por resolución judicial firme.
i) La declaración de tenencia del menor y su variación, por resolución judicial firme.
j) Los actos de discernimiento de los cargos de tutores, guardadores o curadores, con enumeración de los inmuebles inventariados notarial o judicialmente y la relación de las garantías prestadas, así como cuando la tutela, guarda o curatela acaba, o cesa en el cargo el tutor, guardador o curador.
k) La rehabilitación de los interdictos en el ejercicio de sus derechos civiles por resolución judicial firme.

l) Las declaraciones judiciales de quiebra.
m) La pérdida y recuperación de la nacionalidad.
n) Los demás actos que la ley señale.

Sección Tercera

De los Matrimonios

Artículo 43°. En el acta de matrimonio se inscriben los matrimonios.
En la misma acta y como observaciones se inscribirán:

a) La declaración de nulidad por resolución judicial firme que determine la invalidez del matrimonio, el divorcio, la separación de cuerpos y la reconciliación.
b) Los acuerdos de separación de patrimonios y su sustitución, la separación de patrimonios no convencional, las medidas de seguridad correspondientes y su cesación.

Artículo 44°.- La autoridad que celebre un matrimonio, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, deberá remitir bajo responsabilidad, dentro de los 15 días posteriores a su celebración copia del acta a la Oficina Registral más cercana a su localidad.
En caso que no se hubiera dado cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, cualquiera de los contrayentes o ambos, podrán solicitar la inscripción de su matrimonio en el Registro, para lo cual deberán presentar copia certificada del acta respectiva, la que deberá ser emitida por el celebrante, bajo responsabilidad.
De conformidad con el Articulo 269º del Código Civil los matrimonios celebrados con posterioridad a la instalación, en las jurisdicciones correspondientes, de Oficina Registral competente, surtirán efecto desde el momento de su celebración, pero como consecuencia de la inscripción en el Registro y en mérito del carácter obligatorio y el derecho imprescriptible e irrenunciable de solicitar la inscripción de los actos modificatorios del estado civil de las personas, con arreglo al Artículo 41°de la Ley.

Artículo 45°. La inscripción de un matrimonio de conformidad con lo establecido en el Articulo 271º del Código Civil, se efectuará por el mérito de la copia certificada de la sentencia que presente la persona que acredite con arreglo al Artículo VI del Titulo Preliminar del Código Civil, tener légitimo interés económico o moral.

Artículo 46°. La inscripción del matrimonio se efectuará en el acta correspondiente, debiendo constar la siguiente información:

a) Nombre, edad, nacionalidad, domicilio, estado civil, firma y número de CUI o de la libreta electoral o de cualquier otro documento que permita fehacientemente la identificación de cada contrayente.
b) En el caso de matrimonio de menores, nombre, nacionalidad, domicilio, parentesco, de ser pertinente, y número de CUI o de la libreta electoral o de cualquier otro documento que permita fehacientemente la identificación de las personas que prestan su consentimiento.
c) lugar y fecha de celebración del matrimonio.
d) Nombre, firma y número de CUI o de la libreta electoral o de cualquier otro documento que permita fehacientemente la identificación de los testigos.
e) Nombre y firma del Registrador.
f) Nombre de la autoridad que celebró el matrimonio.

Artículo 47°. El peruano que contrajera matrimonio en el extranjero puede solicitar la inscripción en cualquiera de las Oficinas Registrales Consulares del país donde se realizó dicho acto. A este efecto presentará copia certificada del acta matrimonial, traducida en caso de estar en idioma extranjero. En la inscripción se consigna la información establecida en el artículo anterior, expresándose además la autoridad y el lugar donde se celebró el matrimonio.

Artículo 48°. Cuando el peruano casado ante autoridad de país extranjero que no inscribió su matrimonio en el consulado respectivo, fije posteriormente su domicilio en el Perú debe inscribirlo dentro de los 90 días siguientes de su ingreso definitivo al país en la Oficina Registral competente.

Sección Cuarta

De las Defunciones

Artículo 49°. En el acta de defunción se inscriben:

a) Las defunciones.
b) La muerte presunta declarada por resolución judicial firme.
c) El reconocimiento de existencia de la persona, declarada por resolución judicial firme.

Artículo 50°. Para la inscripción se presentará el certificado de defunción emitido por médico con título reconocido por el Estado.
De no haber en la localidad un médico que acredite la defunción, se requerirá para realizar la inscripción la declaración jurada de la autoridad política, judicial o religiosa confirmando el deceso.
En caso de muerte violenta, se requerirá la autorización correspondiente del médico legista, para proceder a la inscripción de la defunción.
En el caso del Artículo 55° de este Reglamento bastará el mérito del acta para efectuar la cremación o inhumación del cadáver, que se llevarán a cabo siempre después de 24 horas de producido el fallecimiento.

Artículo 51°. No se dará sepultura sin haberse inscrito previamente el deceso. Para proceder a la cremación o inhumación deberá haber transcurrido por lo menos 24 horas desde el fallecimiento. Estas disposiciones serán materia de excepción en los casos en que así lo dispongan las autoridades del Ministerio de Salud, por razones graves que comprometan la salubridad pública.

Articulo 52°.- En la inscripción de la defunción se detalla la siguiente información:

a) Nombre, edad, sexo, domicilio y nacionalidad del difunto
b) Lugar, hora y fecha del fallecimiento.
c) Nombre del conyuge en caso de haber sido casado el difunto.
d) Nombre de los padres del difunto.
e) Nombre y firma del declarante.
f) Nombre y firma del Registrador.
g) Número de CUI o de la libreta electoral o de cualquier otro documento que permita fehacientemente la identificación del difunto.

Artículo 53°. Cualquier persona puede solicitar la inscripción de la defunción ante cualquier Oficina Registral, con las excepciones previstas en el Artículo 55° del presente Reglamento.
Si el deceso ocurriera en el extranjero, la inscripción de la defunción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes, en cualquier Oficina Registral Consular del país donde se produjo el fallecimiento.

Artículo 54°. Los directores, jefes o encargados de conventos, monasterios, cuarteles, cárceles, orfelinatos, clínicas, hospitales, centros de salud públicos o privados y demás centros que cumplan fines semejantes a estos, deberán solicitar la inscripción de las defunciones ocurridas dentro de dichos establecimientos, a la Oficina Registral competente, adjuntando el certificado de defunción respectiva.

Artículo 55°. Si el fallecimiento ocurriera en un lugar o población donde no exista Unidad de Oficina Registral con capacidad para registrar defunciones o cuyo acceso sea dificil, se redactará un documento en donde conste la defunción respectiva, a fin de remitirla a la Oficina Registral más cercana para proceder a su inscripción.
Las personas autorizadas para la redacción, suscripción y el envío del documento son:

a) La autoridad politica.
b) La autoridad religiosa.

En caso de muerte a bordo de una nave o aeronave nacional se extenderá por duplicado un acta que firmarán el capitán y un miembro de la tripulación, así como el contador y el médico si hubieran éstos.
En los documentos a que se hace referencia en el presente artículo edemás de la causa del fallecimiento, se consignará, en la medida de lo posible, la información establecida en el Artículo 52° del presente Reglamento.

Sección Quinta
De las Naturalizaciones

Artículo 56°. La adquisición de la nacionalidad se inscribirá en el acta de naturalización, para lo cual la autoridad competente remitirá de oficio a la Oficina Registral que se encuentre dentro de su jurisdicción, en el plazo de 15 días copia certificada de la resolución administrativa que establece tal hecho y copia autenticada del expediente que originó la naturalización.

Artículo 57°. En el acta de naturalización se inscriben:

a) Nombre, edad, sexo, estado civil, fecha y lugar de nacimiento del naturalizado.
b) Nombre, nacionalidad del padre y la madre del naturalizado.
c) Número y fecha de promulgación y publicación de la resolución correspondiente que otorga la nacionalidad peruana.
d) Nombre y firma del Registrador.
e) Número de CUI asignado.

CAPITULO IV
DE LOS INSTRUMENTOS REGISTRALES

Sección Primera
De las Actas y Archivos Personales

Artículo 58°. Las inscripciones de los nacimientos, matrimonios, defunciones y naturalizaciones se llevará a cabo en actas.
Una copia de las actas será remitida por las Oficinas Registrales a la Oficina Regional del Registro de la que dependan, la que a su vez las enviará períodicamente al Archivo Unico Centralizado, según lo determine la Gerencia de Operaciones del Registro.

Artículo 59°. Las inscripciones de los actos, mencionados en los incisos a) a n) del Articulo 42° de este Reglamento se efectuarán en partidas correspondientes a cada hecho. En el primer asiento de cada partida se insertará la resolución consentida del juez, que ordene la inscripción; las resoluciones que pudieran darse posteriormente, modificatorias o revocatorias, así como las cancelaciones se inscribirán en asientos posteriores.
Para efectos de un mejor orden de las inscripciones mencionadas en el párrafo anterior, se llevará un indice alfabético con los nombres de todas las personas que aparezcan afectadas por las resoluciones referidas en el Artículo 42° de este Reglamento. Deberá cuidarse que la información a que se refiere este artículo se conserve y maneje independientemente de la que tratan los Artículos 22°, 43° y 49° del presente Reglamento.

Artículo 60°. Con la información enviada por las Oficinas Regionales del Registro y las Oficinas Registrales Consulares, la Gerencia de Operaciones dispondrá lo conveniente para la organización, en el Archivo Unico Centralizado, de una sección que contenga el Archivo Personal, destinado principalmente a proveer la información para la expedición del DNI.

Artículo 61°. Toda inscripción se efectúa previa calificación de la solicitud por el Registrador. La calificación se realiza teniendo en consideración las inscripciones preexistentes, si existieran, así como las disposicionesy formas legales previstas.

Sección Segunda

De las Copias Certificadas y Extractos

Artículo 62°. Corresponde a las Oficinas Registrales emitir las copias certificadas y extractos de las inscripciones que se les soliciten, observando lo dispuesto en el Artículo 4° del presente Reglamento.
Se entiende por copia certificada la copia literal de la información consignada en las actas de inscripción, en el título archivado y en el Archivo Personal.
La copia certificada debe estar debidamente autenticada con la firma y sello del funcionario que la expide. En toda copia certificada se indica la fecha y el lugar de expedición.
Las Oficinas Registrales que no cuenten con medios de reproducción fotostática o similar podrán expedir copias certificadas en forma manuscrita, mecanográfica u otro medio semejante.

Artículo 63°. El extracto del Acta contendrá lo siguiente:

a) Hecho inscrito.
b) Lugar y fecha de ocurrencia del mismo.
c) Lugar y fecha de inscripción.

d) Nombre del titular o, en el caso de matrimonio, de los contrayentes .

Artículo 64°. Las copias certificadas y extractos de inscripción emitidos son documentos públicos y prueban fehacientemente los hechos a que se refieren, salvo que se declare judicialmente la invalidez de dichos documentos, o se rectifique o cancele la información inscrita.

CAPITULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS REGISTRALES Y MEDIOS IMPUGNATORIOS

Sección Primera
Normas Generales

Artículo 65°. El procedimiento registral materia de este Reglamento será de aplicación a:

a) Las inscripciones referidas en los Capítulos III y IV del presente Reglamento.
b) Las rectificaciones de dichas inscripciones.
c) Las cancelaciones de dichas inscripciones.

Artículo 66°. Todo procedimiento registral se inicia con la presentación de la correspondiente solicitud en el Formulario Unico de Procedimiento Registral, acompañada de los correspondientes recaudos.

Articulo 67°. Las solicitudes de inscripción de nacimientos y defunciones presentadas dentro de los plazos establecidos por los Artículos 23° y 24º, así como 30° y 53º del presente Reglamento, deberán ser calificadas originando inscripción o denegatoria, en un plazo no mayor de 2 días contados a partir de su ingreso a la unidad de calificación de títulos. En caso de denegatoria el solicitante deberá ser notificado a más tardar dentro del plazo de 10 días, a partir de la expedición de la resolución correspondiente, mediante cédula que deberá contener su texto integro. El Registrador que resuelva denegar una solicitud, deberá informar de este hecho a su superior dentro del plazo de 2 días, sustentando las razones de la denegatoria.

Artículo 68°. Todas las demás solicitudes de inscripción rectificación o cancelación, no referidas en el artículo precedente deberán ser calificadas dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su ingreso a la Unidad de Calificación de Titulos. La calificación deberá efectuarse con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 61° y 69° del presente Reglamento, así como a lo indicado en las directivas que pudiera emitir la Jefatura del Registro u otro órgano designado por éste.
Los actos materia de las solicitudes referidas en el párrafo anterior, se inscribirán dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que las mismas hubieran sido calificadas positivamente.

Artículo 69° La calificación de los títulos que sustentan la solicitud de inscripción tiene por objeto establecer que el derecho del titular está constituido con absoluta conformidad a la ley, su estudio consiste en el examen de las declaraciones contenidas en los instrumentos validamente emitidos.

La calificación de los títulos presentados por los solicitantes deberá determinar en primer lugar el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud y luego, de ser el caso, la idoneidad de los mismos para la sustentación del derecho invocado.
Aquellas solicitudes calificadas positivamente generarán inscripción del acto solicitado. En caso contrario, se denegará el pedido mediante resolución motivada, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

Cuando se presenten títulos expedidos o evaluados por dependencia distinta a la Unidad de Calificación de Títulos que conoce la solicitud de inscripción, éstos deberán ser materia de nueva calificación a fin de determinar su idoneidad como sustento del derecho invocado.

Artículo 70°.- La notificación por la que se comunique la inscripción, rectificación, inscripción extemporánea o cancelación solicitadas según el Artículo 68° de este Reglamento se efectuará por nota, colocada en la Unidad de Recepción de Títulos en que se hubiera presentado la solicitud, al día siguiente de la recepción por ésta de la comunicación por la que se da cuenta del acto administrativo efectuado.
En caso de denegatoria de las inscripciones solicitadas con arreglo al Artículo 68° del presente Reglamento, el solicitante deberá ser notificado a más tardar dentro del plazo de 10 días, a partir de la expedición de la resolución correspondiente, mediante cédula que deberá contener su texto integro, siempre que el solicitante hubiera señalado en la solicitud domicilio dentro del radio de notificaciones de la Unidad de Recepción de Títulos en la que se hubiera presentado la misma. En caso contrario se le notificará por nota, colocada en dicha Unidad de Recepción de Títulos dentro de los 10 días siguientes de resuelta la denegatoria. La nota deberá permanecer colocada por 15 días teniéndose por notificado al solicitante vencido este plazo.
El Registrador que resuelva denegar una solicitud, deberá informar de este hecho a su superior dentro del plazo de 48 horas, sustentando las razones de la denegatoria.

Sección Segunda
De las Rectificaciones

Articulo 71°. Procede rectificación administrativa de las inscripciones:

a) Cuando se determine algún error en la inscripción.
b) Cuando se haya omitido alguna información relativa a la inscripción.

Artículo 72°. Pueden solicitar rectificaciones administrativas de las inscripciones:

a) El titular o su mandatario. Si el titular hubiese fallecido podrá hacerlo cualquiera de sus familiares, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, sus herederos, legatarios o albacea si lo hubiese.
b) El representante legal del incapaz o sus familiares ubicados dentro de los grados mencionados en el inciso precedente.
c) El Ministerio Público, si el fallecido no tuviera parientes, herederos ni legatarios.

Artículo 73°. Admitida a trámite una solicitud de rectificación, se publicará un aviso dando cuenta de ella, en el Diario Oficial El Peruano si se trata de una rectificación solicitada en la capital de la república o, en la publicación judicial local, si se trata de otra localidad.
El aviso se realizará por una sola vez, pagado por el solicitante y contendrá la siguiente información:

a) La Oficina Registral ante la cual se hubiera presentado.
b) Nombre del Registrador.
c) Nombre del solicitante.
d) Dato cuya rectificación se solicita.
e) Fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 74°. Quienes consideren que puedan resultar perjudicados por la rectificación solicitada, podrán formular oposición dentro de los 15 días siguientes a la fecha de publicación. Para ello deberán presenter, necesariamente, prueba instrumental; de no hacerlo la oposición planteada deberá ser rechazada de plano.

De no formularse oposición dentro del plazo señalado en el párrafo anterior o si ésta fuera rechazada de plano, se rectificará a la inscripción dentro del plazo de 5 díes establecido en el Artículo 68° del presente Reglamento.

Artículo 75°. Admitida a trámite la oposición a la rectificación, se correrá traslado de la misma al solicitante de la rectificación para que en el plazo de 10 días formule sus descargos. Vencido este plazo el Registrador expedirá resolución que ponga fin al procedimiento, en primera instancia administrativa.

Artículo 76°. Las personas cuyos prenombres o apellidos figuren con errores de ortografía, de referencia de sexo o a datos similares, que resultan manifiestos de la revisión de las propias actas o de la confrontación de éstas con la solicitud de inscripción podrán solicitar rectificación sin tener que efectuar la publicación a que se refiere el Artículo 73° del presente Reglamento ni los procedimientos derivados de ella.
En caso de tratarse de personas incapaces la solicitud podrán formularla sus representantes.

Sección Tercera
De las cancelaciones

Articulo 77°. Procede la cancelación de las inscripciones:

a) Cuando se ordene mediante resolución judicial firme.
b) Cuando la justificación de la cancelación resulte clara y manifiesta de los documentos que se presentan al solicitarla, mediante resolución debidamente motivada del Registrador.
c) De oficio, por disposición de la Oficina Regional del Registro, cuando existan razones indubitables para proceder a la cancelación.

También de oficio, por la Gerencia de Operaciones, cuando se trate de una inscripción procedente de una Oficina Registral Consular, y existan razones indubitables para proceder a la cancelación.

Artículo 78°. Podrán solicitar cancelaciones de las inscripciones las personas señaladas en el Artículo 72° del presente Reglamento, siguiendo el procedimiento establecido para la rectificación de inscripciones en cuanto le fuera aplicable.

Artículo 79°. En caso de duplicidad de inscripciones la oficina competente notificará a los interesados para que realicen las aclaraciones respectivas dentro del plazo de 15 días contados desde su notificación. Vencido el plazo esta oficina resolverá si procede o no la cancelación.

Sección Cuarta
De los Medios Impugnatorios

Articulo 80°. Los medios impugnatorios que pueden interponerse contra las resoluciones que se expidan en los procedimientos a que se refiere el presente Reglamento son:

a) Reconsideración.
b) Apelación.
c) Revisión

Artículo 81°. Procede recurso de reconsideración contra las resoluciones emitidas por las Oficinas Registrales y las Oficinas Registrales Consulares, dentro de los 15 días posteriores a su notificación, siempre que se sustente en nueva prueba instrumental.

Este recurso se presentará ante la misma dependencia que expidió la resolución, debiendo resolverse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su presentación; transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado dicho recurso a efectos de interponer el recurso de apelación, o esperar el pronunciamiento expreso correspondiente.
El recurso de reconsideración es opcional y su no interpretación no impide el ejercicio del recurso de apelación.

Artículo 82°. Procede recurso de apelación contra la resolución de primera instancia o contra la resolución que denegó el recurso de reconsideración, dentro de los 15 días posteriores a su notificación, debiendo presentarse ante la Oficina Registral u Oficina Registral Consular que expidió la resolución impugnada para que eleve lo actuado a su superior jerárquico, dentro de los 15 días siguientes de recibido el recurso.
Las Oficinas Regionales del Registro conocerán las apelaciones interpuestas contra resoluciones expedidas por las oficinas Registrales de su jurisdicción.
Las apelaciones interpuestas contra resoluciones emitidas por Oficinas Registrales Consulares serán resueltas por la Gerencia de Operaciones.
El recurso de apelación deberá resolverse dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de su recepción por el superior jerárquico; transcurrido este plazo sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado dicho recurso para interponer, de ser el caso, el recurso de revisión, o esperar el pronunciamiento expreso correspondiente.

Articulo 83°. Procede recurso de revisión contra la resolución de segunda instancia si proviene de autoridad que carece de competencia nacional, debiendo interponerse ante la Oficina Regional del Registro que expidió la resolución impugnada para que eleve lo actuado a la Jefatura Nacional del Registro, dentro de los 15 días de recibido el recurso.
El recurso de revisión deberá resolverse por dicha Jefatura Nacional, previo informe de la Gerencia de Asesoría Jurídica, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de su recepción.

CAPITULO VI
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

Artículo 84°. El Documento Nacional de Identidad (DNI) debe utilizarse para:

a) Los casos en que la persona requiera acreditar su identidad
b) Sufragar en elecciones políticas.
c) Solicitar la inscripción de cualquier acto relativo al estado civil u obtener certificaciones de los mismos.
d) Intervenir en procesos judiciales o administrativos.
e) Realizar cualquier acto notarial.
f) Celebrar cualquier tipo de contrato.
g) Ser nombrado funcionario público.
h) Obtener pasaporte.
i) Inscribirse en cualquier sistema de seguridad o previsión social.
J) Obtener o renovar la licencia de conductor de vehículo.
k) Los casos en que por disposición legal deba ser mostrado por su titular.

Artículo 85°. El DNI será otorgado a todos los peruanos nacidos dentro o fuera del territorio de la República desde lafecha de la inscripción de su nacimiento y a los extranjeros que se naturalicen desde la fecha de su inscripción.

Artículo 86°. El DNI de quienes nazcan después de la entrada en uso de dichos documentos les será expedido en cualquier oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, lo mismo deberá producirse con quienes inscriban su naturalización.

Artículo 87°. A cada DNI le corresponderá un CUI, que será el mismo que aparece como número del Archivo Personal del titular. El CUI se mantendrá invariable hasta el fallecimiento de la persona.

Artículo 88°. El DNI constituirá el único documento que permita ejercer el derecho de sufragio a su titular.

Artículo 89°. Para poder realizar los actos señalados en el Artículo 84º el DNI deberá contener o ester acompañado de la constancia de sufragio en las últimas elecciones en las que se encuentre obligada a votar la persona o, en su defecto, la correspondiente dispensa de no haber sufragado. Las personas no obligadas a votar se encuentran exceptuadas de presenter la constancia o dispensa de sufragio respectiva.

Artículo 90°. El DNI deberá contener como mínimo:

a) La denominación de Documento Nacional de Identidad o DNI
b) El Código Unico de Identificación (CUI) asignado por el Registro a la persona.
c) Los prenombres del titular.
d) Los apellidos del titular.
e) El sexo del titular.
f) El lugar y fecha de nacimiento del titular.
g) El estado civil del titular.
h) Las huellas digitales del titular.
i) En el caso de las personas mayores de edad, capaces de ejercicio, la declaración del titular de ceder o no sus órganos y tejidos, para fines de transplante o injerto, después de su muerte.
j) La fotografía de frente, del titular, con la cabeza descubierta.
k) En el DNI que se otorgue a las personas mayores de 18 años, así como a quienes adquieran capacidad plena de ejercicio antes de esa edad, deberá aparecer la firma del titular. No se exigirá la firma en los casos de personas impedidas de hacerlo o analfabetos.
l) La firma del funcionario de registro autorizado.
ll) La fecha de emisión del documento.
m) La fecha de caducidad del documento.

En el caso del primer ejemplar de los DNI correspondiente a los recién nacidos cuya madre sea identificada, además de lo indicado en los incisos precedentes en lo que corresponda, impresión dactilar de la madre, conforme a lo indicado en el inciso h), así como su firma. En defecto de ella, deberá aparecer la huella digital y firma del tutor, guardadores o quienes ejerzan la tenencia del recién nacido.
En el primer ejemplar del DNI, correspondiente a los recién nacidos, se incorporará su identificación pelmatoscópica.

Artículo 91º. Cada DNI expedido a partir de la fecha en que el titular cumpla 6 años de edad, tendrá una vigencia de 6 años, salvo que ocurran los siguientes hechos:

a) El titular contraiga matrimonio, se divorcie, enviude o se declare judicialmente la invalidez de su matrimonio.
b) Se realice una modificación al nombre del titular.
c) Se altere el rostro del titular por cualquier motivo, en virtud de lo cual pierda la fotografía valor identificatorio.
d) Cuando el titular cambie de domicilio.
e) Cambio en la decisión del titular de ceder sus órganos y tejidos para fines de trasplante o injerto, después de su muerte.

En estos supuestos, que el titular deberá poner en conocimiento del Registro, se expedirá un nuevo DNI al titular en reemplazo del anterior consignándose la nueva información. El nuevoDNI no modificará el período de vigencia del DNI original.

Artículo 92°. En el caso del recién nacido, el DNI tendrá una vigencia de 3 años, debiendo renovarse obligatoriamente cuando cumpla 3 y 6 años de edad.

Artículo 93°. El DNI que se otorgue a las personas mayores de 60 años de edad tendrá validez indefinida. Por tanto, la renovación del mismo a partir de dicha edad es facultativa, salvo en los casos de modificación contemplados en el Artículo 91 del presente Reglamento, en los cuales debe renovarse obligatoriamente.

Artículo 94°. La renovación del DNI deberá solicitarla el titular o su representante, si aquél fuera incapaz, preferentemente ante la Oficina Registral del lugar donde se expidió o del domicilio del titular.
La solicitud de renovación deberá efectuarse dentro del período que comprenda los 60 días previos a la fecha de caducidad del DNI.

Artículo 95°. El DNI que no sea renovado dentro del plazo establecido en el Artículo 92° precedente perderá vigencia.
En tal caso y hasta no obtener su DNI renovado el titular no podrá realizar ninguno de los actos señalados en el Artículo 84° del presente Reglamento.

Artículo 96°. En los casos de pérdida, robo, destrucción o deterioro del DNI, la solicitud para obtener dicho duplicado será presentada por el titular o su representante, si aquél fuera incapaz, en cualquier Oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En estos casos, el DNI que se expida contendrá los mismos datos y características que el DNI original, así como una indicación en el sentido que el documento es duplicado.

CAPITULO VII

COSTOS REGISTRALES

Artículo 97°. Las tasas que se cobren por los actos registrales deberán ser fijadas en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Registro.

Artículo 98°. Son gratuitos:

a) La inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones, así como la expedición de su primera copia certificada.
b) Las rectificaciones y cancelaciones de las inscripciones producto de errores u omisiones del propio Registro.
c) Los demás servicios que determine la Jefatura Nacional del Registro.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera Disposición Transitoria. La primera inscripción en el Registro generará un Archivo Personal entregándose al titular su Documento Nacional de Identidad donde constará el Código Unico de Identificación respectivo.

Segunda Disposición Transitoria. Los organismos públicos desconcentrados de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos que correspondan, continuarán inscribiendo los actos a que se refieren los incisos d), e), f), g), h), i), j) y k) del Artículo 44° de la Ley N° 26497, hasta que se complete el acceso al Archivo Unico por las dependencias del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil a nivel nacional.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos establecerán de manera conjunta los mecanismos de coordinación que permitan implementar oportunamente la transferencia tanto de la función registral como de la respectiva documentación.

Tercera Disposición Transitoria. Sin perjuicio de la plena validez de los actos inscritos en el Registro de Estado Civil, así como de las certificaciones y constancias a que se refiere el Artículo 58° de la Ley N° 26497, en tanto el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil no haya completado el proceso de acceso a su Archivo Unico de todas sus oficinas registrales, el contenido de la documentación mencionada en el Artículo 64° del presente Reglamento no será oponible a la información contenida en los Registros que integran el Sistema Nacional de los Registros Públicos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera Disposición Final. Derógase el Reglamento para la Organización y Funciones de los Registros del Estado Civil aprobado por la Corte Suprema de Justicia con fecha 15 de julio de 1937, así como sus normas complementarias.

Segunda Disposición Final. Para la realización de cualquier trámite o procedimiento registral se requerirá presentar el documento de identidad correspondiente que identifique al solicitante, con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones o de dispensa correspondiente.

Tercera Disposición Final. La obligación de utilizar el DNI como medio idóneo de identificación, será exigible, a partir de la edición de dicho medio de identificación.

Cuarta Disposición Final . Los Jefes o encargados de las Oficinas Registrales en coordinación con los Directores o responsables de hospitales, clínicas, consultorios particulares y centros de salud públicos o privados, prepararán y mantendrán actualizado un registro con los nombres y firmas de los profesionales de salud que certifiquen nacimientos y defunciones, dentro de su localidad, el mismo que deberá ponerlo en conocimiento de Registro.

Quinta Disposición Final. La Gerencia de Operaciones del Registro, previa conformidad de la Gerencia de Asesoría Jurídica del Registro, aprobará los formularios, formatos y actas que serán utilizados por los usuarios y por los funcionarios del Sistema Registral para las siguientes actuaciones e instrumentos procedimentales:

a) Declaración jurada suscrita por dos personas a que se refiere el Artículo 26° de este Reglamento.
b) Consentimiento del mayor de 18 años para su inscripción, consignado en el Artículo 27° del presente Reglamento.
c) Certificado que debe utilizar el profesional competente o la persona autorizada que atiende el parto y que sirve para inscribir el nacimiento.
d) Actas para las inscripciones de nacimientos, matrimonios, defunciones y naturalizaciones, señaladas en el Artículo 58° del Reglamento.
e) Actas para las inscripciones de los actos mencionados en los incisos a) a n) del Artículo 42° del presente Reglamento.
f) Archivo personal consignado en el Artículo 60° de este Reglamento.
g) Formulario Unico de Procedimiento Registral, al que se refiere el Artículo 66° del Reglamento.
h) Otros que se determine.

Sexta Disposición Final . La Jefatura Nacional del Registro dictará las directivas necesarias para la debida interpretación y aplicación del presente Reglamento.

Sétima Disposición Final. En todo lo no previsto por este Reglamento, será de aplicación lo establecido en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.

Octava Disposición Final. La Jefatura Nacional del Registro queda autorizada para adoptar las disposiciones conducentes al cumplimiento de lo establecido en la Primera Disposición Complementaria de la Ley, en lo que respecta al acervo documentario a recibirse. El incumplimiento de la entrega de dicho acervo, por las personas obligadas, constituirá infracción civil, administrativa y penal pasible de sanción.

Novena Disposición Final. La Jefatura Nacional del Registro queda autorizada para adoptar las medidas conducentes a la aplicación gradual de todas las normas del presente Reglamento, en cuanto que las facilidades tecnológicas, logísticas y financieras lo permitan, así como para disponer que se siga utilizando forma o tecnología anteriores, si ello fuera determinado por las circunstancias.

Décima Disposición Final. La Jefatura del Registro podrá aprobar las modificaciones que resulten necesarias en relación de datos del Archivo Personal, del DNI y de cualquier otro documento a ser emitido o conservado por el registro.

Décimo Primera Disposición Final. Quedan sin efecto las las disposiciones que se opongan al presente Reglamento.

DEJAN SIN EFECTO INCISO DEL ARTICULO 4° DEL REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL RENIEC Y APRUEBAN NORMAS SOBRE REGISTRO Y CERTIFICACION DOMICILIARIA

DECRETO SUPREMO
N° 022-99-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es función del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, velar por el irrestricto respeto del derecho a la intimidad e identidad de la persona y los demas derechos inherentes a ella derivados de su inscripción en el registro, tal como lo establece el inciso j) del Articulo 7° de la Ley N° 26497;

Que, el inciso f del Articulo 4° del Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 015-98-PCM, considera información reservada cualquier referencia al domicilio de las personas; disposición que no debe ser de aplicación para la consignación en los documentos que expide el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en el ambito de su competencia; y,

En uso de las atribuciones que confiere el inciso 8) del Articulo 118° de la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo Nº 560 "Ley del Poder Ejecutivo"

DECRETA

Artículo 1°.- Dejar sin efecto el inciso f) del Articulo 4° del Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 015-98-PCM, en merito de lo expuesto en la parte considerativa del presente Decreto Supremo.

Artículo 2°.- Las personas estan en la obligación de registrar su dirección domiciliaria así como los cambios de éste en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil mediante declaración jurada en la que aparezca su firma y huella dactilar. Este hecho quedará registrado en su nuevo documento de identidad.

En el caso de analfabetos o incapacitados, unicamente se exigirá la huella digital y constancia del fedatario.

Entiendase modificado la parte pertinente del TUPA del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo 3°.- La certificación del domicilio de las personas, expedida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, surte pleno efecto jurídico, salvo lo previsto en el Articulo 40° del Código Civil.

Artículo 4°.- Se considera bien notificados a los deudores demandados judicialmente cuando las notificaciones se entreguen en la dirección que figura en el certificado que, para estos efectos, expida el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y no podrá solicitarse la nulidad de esas notificaciones por cambio de dirección domiciliaria que no se haya registrado conforme al procedimiento mencionado en el Articulo 2° de este Decreto. En caso de no encontrarse a la persona a quien se va a notificar, debe seguirse el procedimiento indicado en el Articulo 161° del Código Procesal Civil.

Articulo 5°.- Para los efectos indicados en el párrafo anterior, se podrá adjuntar a la demanda un certificado expedido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que no tenga una antiguedad mayor de seis meses.

Articulo 6°.- Por cada certificado de dirección domiciliaria, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil cobrará una tasa igual al 0.5% de la UIT.

Articulo 7°.- El Artículo 4° del presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir de los 30 días de su publicación.

Artículo 8°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Justicia.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez dias del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE BUSTAMANTE ROMERO
Ministro de Justicia

EL METODO DE LA CIFRA REPARTIDORA

INTRODUCCIÓN

La repartición proporcional de las vacantes o escaños en las consultas populares, se ha considerado en los últimos tiempos como la expresión de la democracia que permite distribuir las representaciones en disputa, en forma justa.

El tratadista argentino Segundo Linares Quintana, en su obra "Ciencia del Derecho Constitucional", define a la representación proporcional como: **"El sistema que otorga a cada partido o grupo político un número de representantes que guarda relación con los votos que ha conseguido".**

La base de este sistema es muy simple y consiste en dividir el número total de votos entre la cantidad de vacantes por distribuir. El cuociente resultante es la solución, pues basta establecer cuantas veces contiene el número de votos dicho cuociente para saber cuantas representaciones le toca a cada lista o partido, aunque, en la práctica, este nuevo número deviene en entero con fracción, es decir, que tiene residuo.

Dentro de este sistema del cuociente, se han establecido varias ideas para hacerlo más perfecto y poder distribuir los residuos. Mencionaremos algunos:

La Cifra Repartidora.- Método creado por el matemático belga Víctor D'Hont que consiste en dividir el total de votos logrados entre una constante o cifra repartidora y obtener la cantidad de vacantes proporcional a los votos obtenidos. Los especialistas lo sindican como el método más justo y seguro. Se utiliza en el Perú desde 1963. Sin embargo hay que aclarar que el método empleado en nuestro país tiene algunas particularidades que le da la ley para hacer frente a determinadas circunstancias, las mismas que desarrollaremos a continuación.

DEFINICIÓN

La Cifra Repartidora es un método matemático que permite repartir las representaciones o regidurías en forma proporcional a la votación obtenida cuando en una justa electoral participan dos o más listas de candidatos.

BASE LEGAL

El método de la Cifra Repartidora está normado por los siguientes dispositivos legales: Art. 29º de la ley Nº 26859, Orgánica de Elecciones.
Art. 25º y 26º de la ley 26864 de las Elecciones Municipales.

FINALIDAD

1. **Del Método:**

   Permitir la participación de las minorías, es decir que otorga representaciones o regidurías en forma proporcional al número de votos válidos obtenidos por las listas de candidatos participantes.

2. **De la ley :**

   En las elecciones municipales, permitir que la lista ganadora que **no** obtiene mayoría absoluta de votos válidos, cuente con mayoría de regidurías durante su gestión, facilitando así el gobierno y el cumplimiento de su programa electoral.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. **Representación .-** Cargo de congresista del parlamento nacional que debe repartirse proporcionalmente al número de votos obtenidos entre las listas participantes.

2. **Regiduría .-** Cargo de regidor en un concejo distrital o provincial sujeto a repartición proporcional en igual forma que los congresistas.

3. **Candidato .-** Refiérese al postulante al cargo de congresista o regidor.

4. **Lista de candidatos .-** Cargos de congresistas o regidores debidamente ordenados que se presentan a una elección. Identifica a una organización política (partido, alianza de partidos, frentes, movimientos, etc.) o a una lista independiente. En las elecciones municipales está compuesta por el candidato a alcalde y los candidatos a regidores. La cifra repartidora se aplica solo a los regidores, es decir, a partir del número dos de la lista.

MÉTODO GENERAL

1. Se determina el número de votos válidos obtenidos por cada lista de candidatos.

2. El total de votos válidos obtenidos por cada lista, se divide, sucesivamente, entre 1, entre 2, entre 3, etc. según sea el número de vacantes que corresponda elegir.

3. Los cuocientes parciales son colocados en orden sucesivo de mayor a menor hasta tener un número de cocientes igual al número de vacantes por repartir. El cociente que ocupe el último lugar constituye la Cifra Repartidora. Si dos o más cuocientes resultasen iguales, se considerarán separadamente como si fueran diferentes.

4. El total de votos válidos de cada lista se divide entre la cifra repartidora para establecer el número de cargos o vacantes que corresponde a cada lista.

5. El número de vacantes de cada lista está definido por la parte entera del cociente obtenido a que se refiere el inciso anterior. En caso de no alcanzarse el número total de cargos previstos, se adiciona uno a la lista que tenga mayor parte decimal.

6. En caso de empate, se resuelve por sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación.

CASOS QUE PUEDEN PRESENTARSE

1. En Elecciones Parlamentarias:

a. Se aplica el método general a todas las listas participantes(°).

b. Si a una lista le corresponde igual número de congresistas que el de candidatos que figuran en ella, serán proclamados todos los integrantes de la lista.

c. Si el número de candidatos que figuran en una lista es menor que el de representaciones que le haya correspondido, todos los candidatos de la lista serán proclamados y las vacantes que queden se repartirán entre las demás listas aplicándose el método de la cifra repartidora.

(°) Cuando existan votos preferenciales, estos modificaran el orden establecido de la lista de candidatos presentada por la organización política, en el sentido siguiente:

- Los candidatos a congresistas que hayan obtenido votos preferenciales, ocuparán los primeros lugares de su lista en orden decreciente con relación al número de votos válidos obtenido.
- En caso de empate entre los integrantes de una lista, se resolverá por sorteo.
- Los candidatos que no hayan obtenido votos preferenciales, se anotarán a continuación de los anteriores, manteniendo el orden original de la lista de candidatos presentada por la organización política a la que pertenecen.
- El nuevo orden, obtenido por cada lista, será tomado en cuenta en la asignación de vacantes para congresistas en dicha lista, sin que ninguno pueda invocar derechos preferenciales ni de ningún orden, frente a candidatos de otras listas.

d. Si el número de candidatos que figuran en una lista es menor que el de representaciones que le haya correspondido, todos los candidatos de la lista serán proclamados y las vacantes que queden se repartirán entre las demás listas aplicándose el método de la cifra repartidora.

e. Si una vacante corresponde con igual derecho a dos o más listas, esta se asignará a la lista que obtuvo el mayor número de votos.

f. En caso de empate entre dos listas que **no** hayan obtenido la votación más alta, se realizará un sorteo público para determinar a cual de las dos se le asignará la representación que rompa el empate.

2. En Elecciones Municipales

a. Cuando una de las listas obtiene Mayoría Absoluta, esto es, más de la mitad de los votos válidamente emitidos (sin contar los votos en blanco ni nulos), se aplicará el método de la cifra repartidora a todas las listas que participan.

b. Cuando ninguna de las listas haya obtenido la Mayoría Absoluta de votos válidos, es decir, que ninguna tiene mas de la mitad, se asignará a la lista que obtuvo mayor cantidad de dichos votos, la mitad mas uno de los cargos de regidor, **redondeando al entero superior**. La cifra repartidora se aplica para asignar los cargos restantes de regidores entre las demás listas, **siempre y cuando estas hayan obtenido mas del 5% de votos válidos (°).**

c. Si a una lista le corresponde igual número de regidores que el de candidatos que figuran en ella, serán proclamados todos los integrantes de la lista.

d. Si el número de candidatos que figuran en una lista es menor que el de regidurías o representaciones que le haya correspondido, todos los candidatos de la lista serán proclamados y las vacantes que queden se repartirán entre las demás listas aplicándose el método de la cifra repartidora, en forma similar al segundo caso.

e. Si una vacante corresponde con igual derecho a dos o más listas, esta se asignará a la lista que obtuvo el mayor número de votos.

f. En caso de empate entre dos listas que hayan obtenido la votación más alta, se realizará un sorteo público para determinar la lista ganadora, asignándose a esta la mitad mas uno de las vacantes, repartiendo con el método de la cifra repartidora las demás entre las otras listas en forma similar al segundo caso.

g. En caso de empate entre dos listas que **no** hayan obtenido la votación más alta, se procederá al sorteo público para determinar a cual de las dos se le asignará la regiduría o representación que rompa el empate.

(°) Esta barrera la impone la ley. La cifra repartidora no contiene este tipo de condiciones. La legislación electoral del Perú considera otorgar mayoría en la conformación del concejo provincial o distrital a la lista ganadora y con ello permitirle al alcalde ganador, un gobierno sin mayores obstáculos. La barrera legal del 5% es importante por cuanto considera un mínimo de votación para tomar en cuenta su participación en la cifra repartidora.

EJEMPLOS PRACTICOS DE APLICACIÓN DE LA CIFRA REPARTIDORA

En Elecciones Parlamentarias

En unas supuestas elecciones generales, los electores convocados fueron 13'000,000, habiendo acudido a votar 7'000,000, debido a un ausentismo aproximado al 46%. Participaron en los comícios las listas A, B, C, D, E, F y G, computándose 5'985,000 votos válidos y 1'015,000 votos blancos y nulos, de acuerdo al siguiente detalle:

· Lista	"A"	51%	3'052,350	votos válidos
·	"B"	24%	1'915,200	votos válidos
·	"C"	14%	598,500	votos válidos
·	"D"	8%	179,550	votos válidos
·	"E"	5%	119,700	votos válidos
·	"F"	3%	89,775	votos válidos
·	"G"	0.5%	29,925	votos válidos

Aplicando el método general de la cifra repartidora a los resultados obtenidos tenemos que dividir cada uno de estos resultados alcanzados entre 1, 2, 3, etc., **hasta el número 120, debido a que ese es el número de vacantes por repartir.**

Luego, ordenamos los 120 cocientes más altos **del mayor al menor.** Tomamos este número por ser esta la cantidad máxima de escaños que puede obtener una lista. **El último de estos constituye la Cifra Repartidora.** En el presente ejemplo el cociente número 120 es 48,450. Este es la Cifra Repartidora.

Recordemos que la cantidad de vacantes que le corresponde a cada lista se obtiene dividiendo el total de votos obtenidos por cada una de ellas entre el cociente determinado como Cifra Repartidora.

El resultado de esta división puede ser un número entero o fraccionario o con decimales. Recordemos que sólo se tomará la parte entera de este.

Los demás casos determinados para el reparto de vacantes para congresistas son similares a los que se presentan para determinar el número de regidurías en caso de las elecciones municipales.

A CONTINUACION PRESENTAREMOS UNA SERIE DE EJERCICIOS PARA CADA UNO DE LOS CASOS QUE PUEDEN PRESENTARSE EN EL PROCESO ELECCIONARIO DEL PRÓXIMO 4 DE JUNIO.

CASO N° 01: Cuando una de las listas obtiene mayoría absoluta de votos válidos.

Para este primer caso consideremos que se trata de una elección municipal en el distrito "Alfa" al que le corresponde un Alcalde y cinco Regidores. Se han presentado cuatro listas, las mismas que nominaremos como A, B, C y D. En el caso de los gobiernos locales se nomina al candidato a Alcalde de la lista ganadora y la Cifra Repartidora se aplicará a los candidatos a Regidores.
Al término del conteo de votos el resultado fue el siguiente:

- **Lista A : 500 votos**
- Lista B : 250 votos
- Lista C : 180 votos
- Lista D : 50 votos

El candidato a Alcalde de la lista A será el nuevo Alcalde de Alfa por ser su lista la que obtuvo el mayor número de votos. Para determinar quienes son los regidores que lo acompañarán durante su gobierno, aplicaremos la Cifra Repartidora entre todas las listas aptas que intervinieron.

El total de votos válidos fue de 980:

El 50% es 490, lo que indica que la **lista A ha obtenido Mayoría Absoluta (500>490).**

El paso siguiente es obtener la Cifra Repartidora para lo cual ordenaremos las listas de la siguiente manera:

LISTAS	A	B	C	D
VOTOS	**500**	**250**	**180**	**50**
Entre 1	500	250	180	50
Entre 2	250	125	90	25
Entre 3	166.6	83.3	60	16.66
Entre 4	125	62.5	45	12.5
Entre 5	100	50	36	10

Podemos advertir que el número de votos válidos obtenidos por cada lista ha sido dividido sucesivamente entre 1, 2, 3, 4 y 5 porque la cantidad de regidores del distrito Alfa es de cinco.

Ordenaremos las cinco cantidades mayores en orden decreciente.

1. 500
2. 250
3. 250
4. 180
5. 166. (Esta última es la Cifra Repartidora)

Veamos ahora cuantas veces está contenida la Cifra Repartidora (166) en el total de votos válidos obtenidos por cada lista. El resultado será el número de regidores logrado cada una de ellas, y así tenemos que:

- Lista A : 500 / 166 = 3
- Lista B : 250 / 166 = 1
- Lista C : 180 / 166 = 1
- Lista D : 50 / 166 = 0

El resultado de las elecciones del distrito Alfa es el siguiente:
- Lista A : 01 Alcalde y 03 Regidores
- Lista B : 01 Regidor
- Lista C : 01 Regidor
- Lista D : No obtuvo ningún Regidor.

CASO N° 02: Cuando ninguna de las listas obtiene mayoría absoluta de votos válidos.

Trataremos ahora el caso de la Provincia Beta a quien para este ejercicio le corresponde 1 Alcalde y 9 Regidores. Se han presentado cinco listas las mismas que obtuvieron el resultado siguiente :

Lista A : 12,351 votos
Lista B : 8,412 votos
Lista C : 7,232 votos
Lista D : 6.054 votos
Lista E : 2,005 votos

El total de votos válidos fue de 36,054

El 50% es 18,027, cantidad que no fue alcanzada por ninguna de las listas. El 5% es 1,802, lo que significa que todas las listas pueden participar.

Se proclamará como alcalde al candidato para este puesto de la lista A, por haber obtenido el mayor número de votos válidos, **además se le asignará el 50% mas uno de los regidores de su lista**, redondeando al entero superior, es decir 6 regidores (9 / 2 = 4.5 = 5 + 1 = 6). A partir de este momento a la lista A no se considera para ningún cálculo.

La cifra repartidora se aplicará a las otras listas para determinar cuántos candidatos de estas acompañarán al alcalde elegido de la lista A. Las vacantes a repartir en este caso son sólo 3, pues seis de ellas ya se le asignó a la lista ganadora.

Para repartir las tres vacantes aplicaremos el método general de la siguiente manera:

LISTAS	A	B	C	D	E
VOTOS	**12,351**	**8,412**	**7,232**	**6,054**	**2,005**
Entre 1		8,412	7,232	6,054	2,005
Entre 2		4,206	3,316	3,027	1,003
Entre 3		2,804	2,411	2,018	668

En este caso sólo hemos dividido las cantidades entre tres por ser éste el número de regidurías vacantes por cubrir.

A continuación ordenamos los tres mayores cocientes así obtenidos para determinar la Cifra Repartidora.

1. 8,412
2. 7,232
3. 6,054 (Esta es la Cifra Repartidora)

Obtenida la Cifra Repartidora, veamos cuantas veces se encuentra incluida ésta en cada lista participante para determinar cuántos regidores de cada lista participaran en el gobierno local de Beta; así tenemos:

Lista B: 8,412 / 6,054 = 1 regidores
Lista C: 7,232 / 6,054 = 1 regidor
Lista D: 6,054 / 6,054 = 1 regidor
Lista E: 2.005 / 6,054 = ningún regidor.

Entonces el Gobierno local de Beta estará integrado de la siguiente manera:

Lista A: 01 Alcalde y 06 regidores
Lista B: 01 Regidor
Lista C: 01 Regidor
Lista D: 01 Regidor
Lista E: Ningún regidor.

Nota :
La mayoría de los distritos electorales del Perú tienen sólo 5 regidores, en estos casos, el 50% + 1 de las vacantes para estos cargos, es el siguiente:

5 x 50% = 2.5 = 3 (redondeo) + 1 = 4

Podemos expresar que si aplicamos el método tal como está diseñado, para la mayor parte de los distritos electorales el 50%+1 de 5 es 4 (80%).
Deducimos entonces que si una lista gana con mayoría absoluta, es decir, con mas del 50% (de 51% a 79%) de votos, en muchos casos, podría obtener sólo 3 vacantes (60%), en cambio si gana con menos de 50% (de 20% a 50%) obtendría 4 vacantes (80%).

CASO N° 03: Cuando una lista obtiene igual número de vacantes que el de candidatos presentados.

Tenemos ahora 3 listas (A, B y C) que compiten por cinco vacantes y han obtenido el resultado siguiente:

Lista A: 63,298
Lista B: 8,303
Lista C: 3,800

El total de votos válidos es de 75,400, el 50% es 37.700, esto indica que la lista "A" tiene mayoría absoluta y por lo tanto aplicaremos la cifra repartidora a todos.
Aplicamos el método general:

LISTAS	A	B	C
VOTOS	**63,298**	**8,302**	**3,800**
Entre 1	63,298	8,302	3,800
Entre 2	31,649	4,151	1,900
Entre 3	21,099	2,767	1,266
Entre 4	15,824	2,075	950
Entre 5	12,659	1,660	760

Los resultados se han dividido sucesivamente hasta entre 5 por ser éstas las vacantes por cubrir. Al ordenar decrecientemente los cinco cocientes mayores, tenemos:

1. 63,298
2. 31,649
3. 21,099
4. 15,824
5. 12,659 (Cifra Repartidora)

Al determinar cuántas veces está contenida la Cifra Repartidora en cada lista tenemos:

Lista A : 63,298 / 12,659 = 5 vacantes
Lista B : 8,302 / 12,659 = 0 vacantes
Lista C : 3,800 / 12,659 = 0 vacantes

El resultado es que las cinco vacantes han sido ganadas por la lista A y no les corresponde ninguna a las listas B y C.

CASO N° 04: Cuando el número de candidatos es menor que el de vacantes ganadas.

Compiten para cinco vacantes las listas A, B, C y D. Cada lista ha presentado el máximo de candidatos, es decir 5 por lista excepto la lista A que llega a las elecciones con sólo 2 candidatos por una tacha fundada, una renuncia y un fallecido en un accidente durante la campaña vísperas de los comicios. El resultado fue el siguiente:

Lista A	**34,000**
Lista B	21,000
Lista C	9,000
Lista D	7,000

No existe mayoría absoluta y todas las listas están aptas.

A la lista A, ganadora, se le asigna por derecho el 50% mas uno de las vacantes que en este caso es 4 (5 / 2 = 2.5 = 3 + 1 = 4), pero esta lista sólo ha presentado 2 candidatos, entonces se nombra a estos dos únicos candidatos y se reparten los 3 excedentes entre las otras listas (B, C y D).
Aplicando el método general tenemos :

LISTA	B	C	D
VOTOS	**21,000**	**9,000**	**7,000**
Entre 1	21,000	9,000	7,000
Entre 2	10,500	4,500	3,500
Entre 3	7,000	3,000	2,333

La cantidad de votos de las listas B, C, y D han sido divididas entre 1, entre 2 y entre 3 por que son tres las vacantes que quedan por repartir. Los tres cocientes mayores son:

21,000
10,500, y,
9,000 (Cifra Repartidora)

Aplicando la Cifra Repartidora, tenemos:

Lista B: 21,000 / 9,000 = 02 vacantes
Lista C: 9,000 / 9,000 = 01 vacante
Lista D: 7,000 / 9,000 = 00 vacantes

En este caso, el resultado de este proceso electoral es el siguiente:

Lista A : 02 vacantes
Lista B: 02 vacantes
Lista C: 01 vacante
Lista D: 00 vacantes

CASO N° 05: Cuando una vacante le corresponde con igual derecho a dos más listas.

En este ejemplo se presentan tres listas compitiendo para 5 vacantes y el resultado de la votación fue el siguiente:

Lista A : 8,000
Lista B: 3,000
Lista C: 2.000

El total es 13,000 y el 50%, 6,500. Existe mayoría absoluta.
Aplicando el método general:

LISTAS	A	B	C
VOTOS	**8,000**	**3,000**	**2,000**
Entre 1	8,000	3,000	2,000
Entre 2	4,000	1,500	1,000
Entre 3	2,666	1,000	666
Entre 4	2,000	750	500
Entre 51,600	600	400	

Ordenamos los cinco cocientes mayores:
1. 8,000
2. 4,000
3. 3,000
4. 2,666
5. 2,000 (Cifra Repartidora)

Veamos cuantas vacantes le corresponde a cada lista:

Lista A : 8,000 / 2,000 = 04 vacantes
Lista B: 3,000 / 2,000 = 01 vacante
Lista C: 2,000 / 2,000 = 01 vacante

La lista A ha obtenido cuatro vacantes quedando sólo una por repartir, pero a las listas B y C le corresponde por igual una vacante a cada una. En este caso se le asigna esa vacante a la lista B por haber obtenido mayor votación (o mayor parte decimal) que la lista C (3,000 > 2,000).

CASO N° 06: En caso de empate de dos listas con mayor votación

En este ejemplo participan las listas A, B, C y D por 9 vacantes y el resultado fue el siguiente:

Lista A:	**16,000**
Lista B:	16,000
Lista C:	12,000
Lista D:	10,000

El total de votos válidos fue de 54,000, el 50%, 27,000 y el 5%, 2,700. Consecuentemente, en el presente caso, **ninguna lista participante obtuvo mayoría absoluta y todas están aptas.**

En este caso se procedió al sorteo entre las listas A y B ganando la lista B, entonces a esta le corresponde el 50% mas uno de las vacantes, es decir 5 (9 / 2 = 4.5 = 5 + 1 = 6) quedando 3 vacantes por repartir entre las otras listas.
Aplicaremos el método general con las listas A, C y D:

LISTAS	A	B	C	D
VOTOS	**16,000**	**16,000**	**12,000**	**10,000**
Entre 1	16,000		12,000	10,000
Entre 2	8,000		6,000	5,000
Entre 3	5,333		4,000	3,333

Los tres cocientes mayores, producto de la división realizada son:

1. 16,000
2. 12,000
3. 10,000 (Cifra Repartidora)

Para determinar las vacantes aplicamos la Cifra Repartidora a la votación de cada lista participante:

Lista A : 16,000 / 10,000 = 01 regiduría
Lista C: 12,000 / 10,000 = 01 regiduría
Lista D: 10,000 / 10,000 = 01 regiduría
El resultado de las elecciones es :

Lista A : 01 vacantes
Lista B: 06 vacantes
Lista C: 01 vacante
Lista D: 01 vacante

CASO N° 07: En caso de empate de dos listas que no han obtenido la mayor votación.

Las listas A, B, C y D compiten por 9 vacantes habiendo obtenido el resultado siguiente:

Lista A : 36,000 votos
Lista B: 4,500 votos
Lista C: 4,500 votos
Lista D: 4,000 votos

Como puede observarse, las listas B y C no han obtenido la mayor votación válida y han empatado entre sí.
El total de votos válidos es 49,000 y el 50% es 24,500. Consecuentemente, en este caso **la lista A, ha conseguido mayoría absoluta.**
Aplicando el método general tenemos:

LISTAS	A	B	C	D
VOTOS	**36,000**	**4,500**	**4,500**	**4,000**
Entre 1	36,000	4,500	4,500	4,000
Entre 2	18,000	2,250	2,250	2,000
Entre 3	12,000	1,500	1,500	1,333
Entre 4	9,000	1,125	1,125	1,000
Entre 5	7,200	900	900	800
Entre 6	6,000	750	750	666
Entre 7	5,142	642	642	571
Entre 8	4,500	562	562	500
Entre 9	4,000	500	500	444

Ordenando los 9 cocientes mayores tendremos:

1. 36,000
2. 18,000
3. 12,000
4. 9,000
5. 7,200
6. 6,000
7. 5,142
8. 4,500
9. 4,500 (Cifra Repartidora).

Veamos cuantas veces esta contenida la Cifra Repartidora en la votación por listas:

Lista A : 36,000 / 4,500 = 08 regidurías
Lista B : 4,500 / 4,500 = 01 regiduría
Lista C : 4,500 / 4,500 = 01 regiduría
Lista D : 4,000 / 4,500 = 00 regidurías

Tenemos que la Lista A ha obtenido 08 vacantes quedando sólo una para las demás listas, sin embargo a **las listas B y C que han empatado les corresponde también por igual una vacante a cada una, en consecuencia se procedió al sorteo público** habiendo ganado la lista C. El resultado es el siguiente:

Lista A : 08 regidurías
Lista B : 00 regidurías
Lista C : 01 regiduría
Lista D : 00 regidurías

CONTIENDA DE COMPETENCIA ONPE-RENIEC

DECLARAN QUE LA FUNCIÓN DE INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS FORMALES NECESARIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANOS, LE CORRESPONDE A LA ONPE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Exp N° 001-97-CC/TC

Caso: REGISTRO- ONPE

En Lima, a los diecinueve días del mes de junio de mil novecientos noventa y siete, el Tribunal Constitucional, reunido en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:

Acosta Sánchez,	Vicepresidente encargado
Nugent;	de la Presidencia;
Díaz Valverde;	
García Marcelo;	

actuando como secretaria la doctora María Luz Vásquez pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO:

Demanda sobre Conflicto de Competencia interpuesta por el Jefe Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (REGISTRO) contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a los efectos de que se determine y defina la competencia y atribuciones constitucionales que tienen ambas entidades con respecto a la información y verificación de los requisitos formales necesarios para ejercer los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

ANTECEDENTES:

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por intermedio de su Jefe Nacional interpone Demanda sobre Conflicto de Competencia con fecha doce de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Alega el demandante que de conformidad con el Artículo 177º de la Constitución Política del Estado, el sistema electoral, se conforma por tres entes autónomos que mantienen relaciones de coordinación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (REGISTRO). El JNE fiscaliza los procesos electorales, mantiene y custodia el Registro de Organizaciones Políticas, administra justicia electoral y proclama los candidatos elegidos, siendo sus resoluciones en materia electoral, de referéndum o de otro tipo de consultas populares definitivas y no revisables; la ONPE organiza los procesos electorales, los de referéndum y los de otros tipos de consulta popular, incluido su presupuesto, elabora y diseña la cédula de sufragio, entrega actas y material para los escrutinios, difunde resultados e informa sobre los cómputos; y el REGISTRO tiene a su cargo los registros civiles y personales, emite las constancias correspondientes, emite el padrón para cada proceso electoral conforme al Registro Unico de Identificación y Estado Civil, proporciona al JNE y la ONPE información para el cumplimiento de sus funciones y emite documentos que acreditan la identidad.

Agrega que las respectivas atribuciones, se reflejan en las leyes orgánicas de cada ente, teniéndose como puntos en común: a). Que el JNE fiscaliza los procesos que ejecuta la ONPE y la elaboración de los padrones electorales del REGISTRO así como el uso de los mismos; b). Que la ONPE organiza los procesos que fiscaliza el JNE y coordina con el REGISTRO la elaboración de los padrones a cargo de este último, c). Que el REGISTRO prepara el padrón para cada proceso desde el Registro Unico de Identificación y Estado Civil en coordinación con la ONPE y bajo fiscalización del JNE. En consecuencia, si nos atenemos a la norma constitucional y las leyes orgánicas respectivas no puede existir duda en las competencias respecto de la verificación de firmas en las listas de adherentes, pues éstas pertenecen al REGISTRO al haber asumido las funciones del Registro Electoral del Perú contempladas en la ley vigente y entre las cuales se encuentra precisamente la señalada.

Puntualiza además que dentro de las atribuciones establecidas por los Artículos 176º, y 183º de la Constitución se encuentra la de mantener, custodiar y organizar el Registro Unico de Identificación de las personas y el archivo centralizado del Registro Unico de Identificación y Estado Civil. Que al haberse aprobado la Ley Nº 26300 que regula el ejercicio de los derechos de Participación y Control Ciudadanos, dentro de los cuales se encuentra la Revocatoria, se ha dejado establecido que las solicitudes de procedimiento para iniciativas de participación o control se acompañan con las listas de adherentes que las respalden, los que por otra parte deberán estar identificados para que la autoridad electoral que inicia el procedimiento verifique el cumplimiento del número mínimo de adherentes válidos. La misma ley además señala que a los promotores del procedimiento les asiste el derecho de designar personeros ante cada órgano electoral, lo que supone que el procedimiento no es exclusivo de alguno de ellos. Y en el caso del REGISTRO la función se inicia con el procedimiento de entrega de formatos firmados y la identificación de los adherentes mediante el Cotejo de Registro de Archivo Centralizado del Registro Unico de Identificación y Estado Civil. De esta forma las certificaciones del REGISTRO se anexarán a las listas de adherentes a fin de que la ONPE verifique el cumplimiento por parte de los solicitantes del número mínimo exigido por ley.

Que dentro de este panorama la ONPE, ha pretendido que se le remita información en medios magnéticos y digitalizados de las inscripciones electorales, firmas y huellas digitales, copias de boletas de inscripción y demás información interna, a fin de "verificar" la autenticidad de las firmas de adherentes a una iniciativa de revocatoria, sin embargo pretenden ignorar que el REGISTRO no puede entregarle la referida información debido a que el actual archivo central que contiene la inscripción en el ex Registro Electoral, no está aún depurado ni computarizado, requiriéndose por otra parte, de una aprobación del Ejecutivo a fin de contar con los recursos necesarios destinados a la digitalización de las boletas de inscripción y dichos recursos no se los han entregado.

Por último, de conformidad con el inciso e) del Artículo 7º de la Ley Orgánica del Registro (Ley Nº 26497) tiene éste por función proporcionar al JNE y a la ONPE la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, de manera que la función es exclusiva y excluyente del REGISTRO.

Con fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y siete el Tribunal Constitucional resuelve admitir la demanda, disponiendo el traslado de la misma a la ONPE.

Contestada la demanda, con fecha cinco de mayo de mil novecientos noventa y siete, por el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es negada esta en todos sus extremos, principalmente por considerar que el sistema electoral está compuesto por tres entes autónomos que mantienen relaciones de coordinación, dentro de las cuales la ONPE se ocupa, entre otras cosas, de verificar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos, lo que evidencia que en éste como en otros aspectos las funciones están perfectamente delimitadas, no obstante la cual el RENIEC pretende confundir al Tribunal señalando que a dicho organismo le corresponde la verificación de los requisitos formales para ejercer los derechos de participación y control ciudadanos, y entre ellos la verificación de firmas en las listas de adherentes.

Especifica que de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de la ONPE Nº 26487, corresponde a esta la verificación de todos los requisitos formales para la inscripción de candidatos y opciones en procesos electorales, de referéndum y demás que tenga a su cargo, e incluso la Ley Nº 26591 -que precisa a la Ley Orgánica de la ONPE- advierte que la función de la Oficina Nacional de Procesos Electorales comprende el diseño, impresión y expedición de los formatos requeridos para la inscripción de candidatos independientes a elecciones y opciones en procesos de referéndum u otras consultas populares, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos formales exigidos por ella y la remisión al Jurado Nacional de Elecciones de la inforrmación respectiva.

Que por consiguiente queda claro que el REGISTRO pretender asumir funciones que no le corresponden y que son propias de la ONPE ya que en ninguna ley consta que le corresponda al citado organismo la verificación de firmas de las listas de adherentes.

El doce de mayo de mil novecientos noventa y siete y llevada a efecto la Audiencia Oral con la presencia de los abogados de las partes la causa se dejó al voto, variando sin embargo y con fecha posterior la conformación del Tribunal por lo que a petición del REGISTRO y la ONPE, se dispuso dejar sin efecto la referida vista señalandose nueva fecha para el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete.

Llevada a cabo nueva Audiencia Oral y producido el informe de los abogados de las partes se dejó la causa al voto llegando el momento de sentenciar.

FUNDAMENTOS:

1). Que conforme lo dispone el Artículo 177º de la Constitución Política del Estado "El Sistema Electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil», quienes "Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación".

2). Que la interpretación más razonable que se puede otorgar al enunciado dispositivo supone que el Sistema Electoral por el que ha optado nuestro constituyente, no significa la adopción de tres entes aislados el uno del otro sino la presencia de tres dependencias que no obstante ser autónomas, se encuentran estrictamente vinculadas la una de la otra por las atribuciones que poseen y cuya finalidad -la de cada atribución- sólo puede ser coherente a la luz de la cláusula general contenida en el Artículo 176º de la misma Norma Fundamental, que busca "asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa".

3). Que siendo esto así, es evidente que ningún ente conformante del Sistema Electoral puede alegar funciones o responsabilidades excluyentes a tal grado, que las mismas en lugar de canalizar los objetivos del Sistema, terminen obstaculizándolo o entorpeciéndolo, ya que como se ha visto, la finalidad del sistema, antes que administrativa, es electoral. Incluso no está demas recordar que si conforme al inciso 5) del Artículo 203º de la Constitución "Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad" "Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones" quiere ello decir, que no existe, por mandato expreso de la Norma Fundamental, el supuesto monopolio de atribuciones que se invoca en la demanda.

4). Que en virtud de estas premisas el presente conflicto entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, debe necesariamente resolverse en dirección a la operatividad o funcionalidad del Sistema, lo que supone que si la responsabilidad de verificación de los requisitos formales para ejercer los derechos de participación y control ciudadanos, y entre ellos, la verificación de firmas, permite que el primero de los citados entes, vía la remisión en medios magnéticos y digitalizados de los datos relativos a las inscripciones electorales, firmas y huellas digitales y boletas de inscripción así como la información interna de aquellas, contribuya a la responsabilidad que atañe al segundo de los entes, no puede ello entenderse como una invasión o distorsión de competencias sino como una de las manifestaciones que asumen las relaciones de coordinación existentes entre ellos.

5). Que por otra parte, tampoco puede invocarse la Ley Orgánica Nº 26497, en este caso por parte del Registro, como solución al problema planteado, desde que la Constitución no ha definido explícita e inobjetablemente que la atribución disputada le pertenezca a la demandante, existiendo en todo caso un vacío sobre tal extremo, que como ya se ha dicho no puede ser cubierto en contra de la operatividad del Sistema sino en su favor.

6). Que por ultimo, no está demás señalar que la disputada atribución guarda mayor coherencia o razonabilidad con la responsabilidad que cumple la Oficina Nacional de Proceso Electorales y no así con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil bastando una lectura de los Artículos 182º y 183º de la Constitución para corroborarlo.

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución, su Ley Orgánica N 26435 y su Ley modificatoria Nº 26801.

FALLA:

Declarando que la función de Información y Verificación de los requisitos formales necesarios para ejercer los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, y entre ellos la verificación de firmas, le corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, debiendo en consecuencia el Registro Nacional de Identificación Civil, proporcionar a la entidad legitimada la información en medios magnéticos y digitalizados de las inscripciones electorales, firmas y huellas digitales, más copias de las boletas de inscripción incluida la información contenida en éstas. Dispone así mismo la publicación de la presente en el Diario Oficial El Peruano.

SS. ACOSTA SANCHEZ, NUGENT; DIAZ VALVERDE; y GARCIA MARCELO

Abstencionismo Electoral : Aparece con el propio sufragio, es la no participación en el acto de votar de quienes tienen derecho a ello. La abstención electoral, se enmarca en el fenómeno más amplio de la apatía participativa, es un indicador de la participación; muestra el porcentaje de los no votantes sobre el total de los que tienen derecho de voto.

Administración Electoral : El término puede ser entendido en varios sentidos y con diferentes alcances. En efecto, se puede utilizar la expresión para hacer referencias a una estructura orgánica e institucional, a un conjunto de actividades, o a ambas cosas a la vez. La administración electoral entendida como estructura se refiere al conjunto de órganos (de nível superior, intermedio o local,denominados: tribunal, junta, consejo electoral,etc., así como a su organización interna) encargados de dirigir antes, durante y después la celebración de las elecciones en todas sus fases incluyendo la de impartición de justicia electoral. Por otra parte se puede hablar de administración electoral para referirse únicamente a las actividades o funciones que despliega esa estructura o conjunto de órganos, específicamente aquéllas relacionadas con la formación y actualización permanente del registro o censo de electores, realización de las tareas necesarias para llevar a cabo las votaciones, el escrutinio, el conteo electoral, la determinación de los candidatos elegidos y su proclamación, como un proceso gerencial. Es decir, no solamente como una estructura o un conjunto de actividades sino como ambas cosas a la vez, como un todo integrado, como un sistema. Las elecciones tienen que ser administradas ya que para llevarlas a cabo se requiere del concurso de un conjunto de personas que deben desplegar actividades para la consecución de determinados objetivos cuya materialización requiere de recursos.

Alianzas Electorales : Son pactos de partidos políticos con fines electorales. Las alianzas se vinculan con muchos temas. Por lo tanto, las precisiones siguientes se refiere sólo a aspectos de la sistemática electoral. Un primer aspecto a considerar al efecto de las alianzas en los cambios de expectativas de los partidos políticos. Dado que, en primer lugar, en la mayoría de los países la competencia partidaria no se reduce a dos partidos , y en segundo lugar, que el Sistema Electoral determina en ciertas medidas las condiciones de éxito para poder ganar las elecciones. Las alianzas que para fines electorales formen entre sí los partidos, o las Agrupaciones Independientes, o aquéllas y éstas, inscritas de acuerdo con las disposiciones, los cuales solicitarán su inscripición ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Acta : Relación escrita de lo sucedido tratado o acordado de una junta. Certificación, testimonio, asiento o constancia oficial de un hecho.

Acta Electoral : Documento electoral donde se registra todos los hechos del acto electoral desde su instalación, el sufragio y el escrutinio,las mismas que serán llenadas por los miembros de mesa y personeros que deseen hacerlo.

Anfora Electoral : Recipiente sellado previamente a la elección y de interior visible, que se destina al depósito de los votos, al momento de ejercer el derecho al sufragio. Al iniciarse la votación, generalmente es precintada. El ánfora electoral contribuye a concretar una elección ordenada y el secreto del voto. Trata de impedir que éste se emita varias veces por el mismo individuo. El voto es depositado en el ánfora después de que el votante ha recibido la cédula y marcado su preferencia en la cámara secreta. Su interior debe ser parcialmente visible, para garantizar que el voto que se introduce en ella cae en el interior y se mantiene allí.

Autonomía Electoral : Ejercicio privativo de autoridad con plenas facultades administrativas y jurisdiccionales, que sin sujeción jerárquica, establecen la constitución y las leyes de un Estado, para sus organismos electorales. En interés de que se cumplan dichas atribuciones, los organismos electorales regularmente son dotados de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros, que los capaciten para dirigir, resolver y llevar a cabo un proceso electoral, en el cual se garantiza y protege que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos.

Campañas Electorales : Se denomina campaña electoral al período destinado a la realización de la propaganda electoral. Se entiende como el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los partidos, alianzas de partidos y agrupaciones independientes y electores con el propósito de hacer conocer y explicar sus principios ideológicos y programas de gobierno asi como promover los candidatos que han postulado a los distintos cargos electivos con la finalidad de captar las preferencias de los electores. La campaña electoral es una fase del proceso electoral. Se lleva a cabo en el lapso que transcurre entre la convocatoria a elecciones y días antes de las elecciones. Generalmente se dispone de 48 horas antes de la votación para intercalar una "jornada de reflexión" que permita a cada elector, en un ambiente "desintoxicado" de mensajes contradictorios, tomar con tranquilidad la decisión que expresará en la urna.

Candidatos : Ciudadanos sujetos de los derechos electorales activos y pasivos y que son postulados a los cargos de elección popular. Desde el punto de vista del derecho y del Sistema Electoral, los candidatos son presentados a la elección en un marco dado por las formas de candidaturas: candidaturas personal y de lista, con variaciones múltiple dentro de ellas. Los candidatos se ven limitados por tres tipos de instituciones jurídico - políticas como pueden ser las incapacidades, donde no pueden ser candidatos quienes no cumplan con requisitos establecidos en la ley, especialmente en la constitución, por ejemplo se requiere ser peruano de nacimiento. Las incompatibilidades, son impedimentos para ejercer cargo de elección popular causado por el ejercicio de otra función o actividad, por ejemplo si un candidato postula a dos o más listas. Las de inhabilidades, son situaciones sobre requisitos que la ley establece para la candidatura y que no se refieren a las incapacidades o incompatibilidades. Debe declararla el órgano competente, por ejemplo en el caso de que el candidato no es presentado por el número de firmas que la ley establece para los candidatos independientes.

Candidatura : No hay elección sin candidaturas. La candidatura posibilita al elector a optar, elegir. Es condición para que se materialice la elección. La candidatura electoral es la oferta política sobre el cual se pronuncian los electores.

Capacitación Electoral : Programas de educación electoral que permiten crear conciencia cívica en la ciudadanía, durante un proceso electoral convocado, dichos programas son dirigidos a los ciudadanos designados miembros de mesa, para el conocimiento de los procedimientos electorales que señala la ley.

Cedula de votación : Es el documento preponderante, pués con ella el ciudadano escoge, entre las diversas opciones, a los candidatos de su preferencia.

Cifra Repartidora : Método de cálculo para convertir votos en escaños. En sentido estricto la cifra repartidora equivale a un cociente electoral (o cantidad mínima de votos para obtener un escaño), que se obtiene mediante división, en la que el dividendo es igual al total de los votos válidos y el divisor cambia según la fórmula aplicada. Del mismo modo el método que es utilizado en Elecciones Municipales para determinar los cargos de regiones entre la lista ganadora y las demás listas que obtengan una votación no menor de los votos válidos.

Circunscripción Electoral : Zona geográfica determinado en distritos electorales, que en elecciones municipales en el país, es dividido por el JNE en provincias.

Ciudadanía : Condición de ciudadano, sea de titular de la plenitud de derechos públicos subjetivos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, otorgados por el Sistema Jurídico.

Cociente Electoral : Es el número de votos necesarios para obtener uno de los puestos sometidos a elección mediante sistemas de Representación proporcional.

Código de Barras : Es un conjunto de líneas paralelas de distinto grosor que identifica algo (gráfico de barras).

Criptograma : Es un símbolo, documento u objeto cifrado, entendiendo por cifrar escribir secretamente. El criptograma nos sirve en el ámbito informático las dos aplicaciones más importantes son el enviar mensajes y como escritura secreta. Se genera utilizando métodos matemáticos para cifrar el mensaje que puede estar representado visualmente por letras, números o cualquier símbolo geométrico, órbitas, animales, etc. Dentro los cuáles se incluye la información cifrada expresada por otros elementos.

Educación Electoral : El proceso electoral democrático presenta usualmente una serie de complejos aspectos, antes los cuales se hace necesario que los electores tengan, al menos , un conocimiento básico, para que la emisión del voto cumpla los fines que persiguen los sistemas electorales y sean realidad los principios jurídicos que tratan de garantizar esos fines. Desde la información eficiente , en cuanto a las opiniones políticas que ofrecen los diversos partidos y las candidaturas personales , pasando por los objetivos de la propaganda eleccionaria, todos los heterogéneos aspectos del acto electoral, exigen que el votante disponga de un conocimiento lo más claro posible sobre ellos. Esta acción educativa tiene carácter informal, como actividad docente, porque está dirigida a vastos sectores de la sociedad; y no sólo se puede llevar a cabo directamente, frente a grupos más o menos reducidos, sino que a través de los medios de comunicación de masas se la pueda desarrollar ante auditorios muy numerosos.

Elecciones : como muchos otros conceptos claves de la política , la acepción "elección" está marcada por un dualismo de contenido. Por una parte puede tener un sentido neutro o "técnico", y por la otra, un sentido sesgado u "ontológico". Si no se hiciera esta diferenciación no podría entenderse el por qué en sociedades y sistemas políticos tan diversos en su estructura y orientación, las elecciones son parte de lo cotidiano de la política. El significado neutro de "elecciones" puede ser definido como "una técnica de designación sobre los fundamentos en los que se basan los sistemas electorales, las normas que regulan su verificación y las modalidades que tiene su materialización.

Elector : etimológicamente proviene del latín **elector (de eligiere, escoger, elegir).** Según Guillermo Cabanellas, la persona que reúne las condiciones exigidas por la constitución o las leyes, para ejercitar el derecho de sufragio y que, por lo tanto, tiene facultades para influir con su voto en la elección de concejales, congresistas, jueces e incluso al jefe de Estado.

Emisión del voto : Es el acto de votar, el ejercicio del derecho de sufragio. En la generalidad de los países, la emisión del voto es considerado como un derecho. Algunas constituciones o leyes expresan que "**el voto es un derecho y un deber del ciudadano**" sin perjuicio de la obligatoriedad del voto, la emisión del voto representa el momento clave de todo proceso electoral y debe estar, por lo tanto, revestido de todas las solemnidades y reglamentaciones jurídicas necesarias.

Encuestas Electorales : Constituyen un tipo de sondeo de opinión que pretende obtener información sobre como actuarán los ciudadanos en el momento de emitir su voto en una elección política de cualquier tipo.

Escaños : Lugar o asiento que tiene un parlamentario o representante elegido, y por extensión, el cargo mismo de parlamentario o representante.

Escrutinios : Es un término ambiguo que obliga, desde un principio, a concretar su significado. En efecto, la doctrina habla, en algunas ocasiones, de escrutinio como sistema de reparto de escaños, habría, en consecuencia, un escrutinio mayoritario y un escrutinio proporcional, es decir, según esta acepción, el escrutinio vendría a asimilarse con el concepto de sistema de representación electoral. Ahora bien, en un sentido amplio el escrutinio es el conjunto de actos electorales que coincide con la establecida por el Diccionario de la real Academia Española de la Lengua, según el cual el escrutinio es "**el reconocimiento y regulación de los votos en las elecciones o en otro acto análogo**".

Fiscalización de Elecciones : En un sentido general la palabra fiscalizar significa controlar, vigilar , supervisar. Aplicada al proceso electoral, la fiscalización consiste en el ejercicio de todos aquellos medios establecidos y aceptados por la ley con el objeto de asegurar que los comicios se adelanten conforme a la legislación electoral y traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos. Los mecanismos de fiscalización electoral son la expresión más concreta de garantía de los derechos constitucionales y políticos, a los intereses legítimos de partidos políticos, candidatos y ciudadanos y, en suma, a la legitimidad del proceso democrático representativo.

Informática Electoral : Se ha venido definiendo la Informática como la ciencia de la información automatizada, por lo cual la Informática Electoral, sería la disciplina que recopila, procesa, organiza y transfiere, con instrumentos mecánicos automatizados, la información sobre las elecciones en un determinado ámbito. En otras palabras, es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que se refieren a la recolección, el tratamiento y la transferencia de información electoral, mediante los mecanismos modernos de recopilación y procesamiento.

Instalación Electoral : Expresión referida a los locales, muebles y materiales destinados a la celebración del acto eleccionario. No se incluyen , por lo tanto los edificios que permanentemente ocupan los órganos electorales.

Jornada Electoral : Es el número total de horas que permanecen abiertos los colegios o locales de votación para recoger el voto de los electores.

Lista de Electores : Estas contienen la relación de ciudadanos hábiles para una determinada mesa de sufragio. La Lista de Electores contiene datos como: nombres y apellidos, el número de su Libreta Electoral y el grado de instrucción, además de su firma y huella digital. Las listas de electores están identificadas cada una de ellas con un código de barras y están elaboradas con un papel de seguridad.

Padrón Electoral : Es la lista de todos los ciudadanos que con derecho al voto hicieron su inscripción al padrón electoral, y cumplieron con todos los requisitos exigidos por la Constitución y leyes, para ser un elector legítimo y debidamente registrado. El Padrón Electoral contiene el N° de la Mesa, la Relación de Electores, la Lista de Electores, Corrección a la Lista de Electores, Hoja de trabajo y Actas Electorales.

Referéndum : (Del latín referéndum, de referre: referir). Institución Política mediante el cual el pueblo opina sobre, aprueba o rechaza una decisión de sus representantes elegidos. Es una manifestación de la democracia constitucional en la cual mediante la ampliación del sufragio y el libre acceso a los cargos públicos, la totalidad del pueblo organizado en cuerpo electoral participa en el proceso de poder lo que hace indirectamente al elegir a sus representantes y directamente por medio del referéndum y el plebiscito.

Sufragio : Voz derivada de la palabra latina "**suffragium**", es decir, ayuda o auxilio, los ciudadanos coadyuvan, en cuanto miembros del Estado-aparato y, en consecuencia, a la integración funcional de toda sociedad política. Por medio del sufragio, los ciudadanos ejercen el derecho reconocido en la norma constitucional a participar en la determinación de la orientación política general mediante la designación de sus representantes o mediante la votación de aquellas propuestas que les sean sometidas.

Voto : Acto de sufragio mediante el cuál un ciudadano ejerce su derecho de elección. En las asambleas ó en los comicios, es el parecer que se manifiesta de palabra, por medio de papeletas, bolas o actitudes (**alzando o levantando el brazo**) para aprobar una propuesta o rechazarla, para elegir a una persona o a varios para determinados cargos, para emitir su opinión, parecer o dictámen.

Diccionario Electoral-CAPEL

CUADRO DESCRIPTIVO DE LOS DELITOS CONTRA LA VOLUNTAD POPULAR
CONTRA EL DERECHO DE SUFRAGIO

DELITO	NORMATIVIDAD	CONDUCTA TIPICA	SUJETO ACTIVO	SUJETO PASIVO	BIEN JURIDICO PROTEGIDO	PENALIDAD
1.- Perturbación del proceso electoral	Art. 354° Código Penal Art. N° 36° Incisos 1)2)3)4) y 8) Código Penal Art. 384° Incisos b) y d) Ley N° 26859	Impedir con violencia o amenaza la realización del Proceso Electoral.	Cualquier persona, grupo de personas funcionarios ó Empleados Públicos	El electorado	Derecho al Sufragio	A) 03 a 10 a años B) Inhabilitaciones C) 02 a 05 a años
2.- Coacción al elector	Art. 355° Código penal Art. 382° Inciso b) Ley N° 26859	Impedir al elector ejercer el libre ejercicio del derecho de sufragio.	Cualquier persona	El electorado	Derecho al Sufragio	A) 01 a 04 años B) 01 meses a 01 año
3.- Corrupción al elector	Art. 356° Código Penal	Inducir al elector mediante alguna ventaja a sufragar en un sentido determinado	Cualquier persona	El electorado	Derecho al Sufragio	01 a 04 años
4.- Sufragio ilícito y Suplantación de identidad	Art. 357° Código Penal Art. 386° Ley N° 26859	Ejercer acción fraudulenta contra el acto de sufragio	Cualquier persona	El electorado	Derecho al Sufragio	A) 01 a 04 años B) 06 meses a 01 año
5.- Declarar el voto en el acto Electoral	Art. 358° Código Penal	Quebrantar el secreto del voto en el momento del acto de sufragio	Cualquier persona	El Electorado	Derecho al Sufragio	Hasta 01 año
6.- Falsificación o destrucción del Padrón Electoral (lista de electores documentos de identidad o actas de escrutinio)	Art. 359° Inciso 2) y 5) del Código penal Art. 383° Inciso e) Ley. N° 26859	Distorsionar el resultado de un Proceso Electoral	Cualquier persona	El Electorado y el Sistema Electoral	Derecho al Sufragio	02 a 08 años.
7.- sustracción, destrucción o sustitución de material electoral ánforas y cédula de sufragio	Art. 359° Incisos 3) y 4) Código Penal	Atentar contra el material electoral	Cualquier persona o grupo de personas	El electorado y el sistema electoral	Derecho al Sufragio	02 a 08 años.
8.- Fraude en el ejercicio del sufragio	Art. 359° Inciso 6) C.P. Art. 383° Inciso c) de la Ley N°26859	Permitir mediante fraude el ejercicio del voto a ciudadano que no le corresponde	Miembros de mesa de sufragio	El electorado.	Derecho al Sufragio	a) 02 a 08 años b) 06 meses a 03 años
9.- Despojar a un ciudadano de su documento nacional de identidad.	Art. 359° Inciso 7) Código Penal Art. 384° Inciso c) de la Ley N°26859	Privar ilegalmente a un ciudadano de su documento de identidad	Caulquier personal funcionario, empleado público ó miembro de las F.F.A.A. ó P.N.P.	El electorado	Derecho al Sufragio	a) 02 a 08 años b) 01 a 03 años
10 Ejercicio ilícito del acto de sufragio y participación de miembro de las F.F.A.A. y P.N.P. (vistiendo uniforme) en actos públicos de carácter político	Art. 382° Inciso a) Ley N° 26859	Inducción al fraude en un proceso electoral	Miembros activos y en situación de retiro de las F.F.A.A. ó P.N.P.	El electorado	Derecho al Sufragio	01 mes a 01 año
11.- Portar armas de cualquier tipo durante los actos electorales oficiales	Art. 382° Inciso c) de la Ley N° 26859	Atentar contra la garantía del proceso electoral	Cualquier persona	El electorado	Derecho al Sufragio	01 mes a 01 año
12.- Incumplimiento de Remisión de ánforas y actas electorales	Art. 384 Inciso a) Ley. N° 26859	Atentar contra la organización y ejecución de proceso electoral	Presidente de miembros de mesa de sufragio coordinadores de local etc.	El sistema electoral y el electorado	Derecho al Sufragio	01 año a 03 años
13.- Efectuar reuniones, manifestaciones políticas o propaganda electoral y en las zonas y horas prohibidas	Art. 388° y Art. 389° Ley N° 26859 Art. 36° Inciso 1)2)3) 4) Y 8) Código Penal.	Quebrantar el orden electoral infrigiendo las prohibiciones establecidas	Cualquier persona o grupo de personas	El electorado	Derecho al Sufragio	a) 03 meses a 02 años b) No menor de 02 años c) Inhabilitaciones
14.- Hacer funcionar establecimientos que expenden bebidas alcohólicas u organización de reuniones o espectáculos durante el periodo electoral	Art. 390° Inciso a) Ley. N° 26859 Art. 36° Inciso 1)2)3)4) y 8) del Código Penal.	Transgredir los plazos electorales instituidos	Cualquier persona o grupo de personas	El electorado	Derecho al Sufragio	a) No mayor de 06 meses. b) Inhabilitaciones.

12 DE 15

LISTA DE ELECTORES
ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 1999

ONPE

MESA DE SUFRAGIO N°: 200159

LOCAL DE VOTACIÓN: C.N. SAN JUAN

200159I

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

PROVINCIA: CAJANARCA

DISTRITO: SAN JUAN

111	40311276 K	CARRANZA AQUINO ANA MARIA	1er SUPLENTE
112	40316707 C	LULICHAC VASQUEZ NORMA	
113	40340909 B	CHAVEZ MINCHAN TEODELINDA	
114	40341697 C	VEGA OCAS MARIA BEATRIZ	
115	40341698 K	AQUINO ARCE JOVITA	
116	40344282 B	LEIVA BADA JOSE OVIDIO	
117	40353002 J	JULCAMORO SANGAY DANIEL	
118	40357699 I	LEON BAZAN MANUEL	
119	40366028 C	INTOR VEGA MANUELA ROSALI\	
120	40366838 C	CARRANZA INTOR SAULO	

NO DESGLOSAR LISTA DE ELECTORES

OBSERVACIONES:

Depositar en sobre Rojo (ONPE)

IMPRESO EN AMBOS LADOS (ver al dorso)

366

ACTA ELECTORAL

ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 1999

ONPE

MESA DE SUFRAGIO N°	LOCAL DE VOTACIÓN:	
200159	C.N. SAN JUAN	200159I

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO:
CAJAMARCA	CAJANARCA	SAN JUAN

ACTA DE INSTALACIÓN

A las_____ horas del 04 de julio de 1999 se instaló la Mesa, procediéndose luego a la revisión del material recibido.

Cantidad de cédulas de sufragio recibidas _____

Observaciones: _____

_____

_____

PEGAR HOLOGRAMA DEL ACTA EN ESTE RECUADRO

Firma Presidente de Mesa	Firma Secretario	Firma 3er Miembro de Mesa
Nombre y Apellido:	Nombre y Apellido:	Nombre y Apellido:
Doc.Identidad:	Doc.Identidad:	Doc.Identidad:

Firma Personero 1	Firma Personero 2	Firma Personero 3
Nombre y Apellido:	Nombre y Apellido:	Nombre y Apellido:
Doc.Identidad:	Doc.Identidad:	Doc.Identidad:

ACTA DE SUFRAGIO

Total de electores hábiles: 147

Siendo las_____ horas se da por concluido el sufragio

Número de ciudadanos que votaron: _____ (en letras) _____ (en cifras)

Número de cédulas no utilizadas: _____ (en letras) _____ (en cifras)

Observaciones: _____

_____

Firma Presidente de Mesa	Firma Secretario	Firma 3er Miembro de Mesa
Nombre y Apellido:	Nombre y Apellido:	Nombre y Apellido:
Doc.Identidad:	Doc.Identidad:	Doc.Identidad:

Firma Personero 1	Firma Personero 2	Firma Personero 3
Nombre y Apellido:	Nombre y Apellido:	Nombre y Apellido:
Doc.Identidad:	Doc.Identidad:	Doc.Identidad:

ONPE

ACTA DE ESCRUTINIO
ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 1999

MESA DE SUFRAGIO Nº: 200159

LOCAL DE VOTACION: C. N. SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

PROVINCIA: CAJAMARCA

DISTRITO: SAN JUAN

Total de electores hábiles: 147

Total de ciudadanos que sufragaron:_____

Siendo las_____ **horas se da por iniciado el Acto de Escrutinio**

2001591

ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y LISTAS INDEPENDIENTES		Total de Votos Distrital
PARTIDO APOYAME		
LISTA INDEPENDIENTE VOTA POR MI		
LISTA INDEPENDIENTE SOY EL MEJOR		
MESA NUMERO 200159 — Votos blancos		
Votos nulos (viciados)		
Votos Impugnados		
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS		

Siendo las_____**horas se da por concluido el Acto de Escrutinio.**

Observaciones al escrutinio

Firma Personero
Nom. y ap:
Doc. de iden:
Agrupación:
Impresión Dactilar

Firma Personero
Nom. y ap:
Doc. de iden:
Agrupación:
Impresión Dactilar

Firma Personero
Nom. y ap:
Doc. de iden:
Agrupación:
Impresión Dactilar

Firma los miembros de mesa
Nom. y ap:
Doc. de iden:
Agrupación:
Impresión Dactilar

Firma Secretario
Nom. y ap:
Doc. de iden:
Agrupación:
Impresión Dactilar

Firma Presidente de Mesa
Nom. y ap:
Doc. de iden:
Agrupación:
Impresión Dactilar

SISTEMA ELECTORAL
(JNE-ONPE-RENIEC)

Firma del Presidente de la Mesa y firmas de los Personeros que deseen firmar

FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA DEL PERSONERO | FIRMA DEL PERSONERO

FIRMA DEL PERSONERO | FIRMA DEL PERSONERO

FIRMA DEL PERSONERO | FIRMA DEL PERSONERO

FIRMA DEL PERSONERO | FIRMA DEL PERSONERO

CÉDULA DE SUFRAGIO

ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 1999

ONPE

VOTO PARA ALCALDE Y REGIDORES

PROVINCIAL

NOTA: Para votar, marque una cruz (+) o un aspa (x) sobre el símbolo o número que identifica su preferencia

ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y LISTAS INDEPENDIENTES	
CAMINO AL FUTURO	
AL MUNICIPIO	
COMUNIDAD 3000	
POR MI MUNICIPIO	
MOVIMIENTO ECOLOGISTA	

ONPE

VOTO PARA ALCALDE Y REGIDORES

DISTRITAL

NOTA: Para votar, marque una cruz (+) o un aspa (x) sobre el símbolo o número que identifica su preferencia

ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y LISTAS INDEPENDIENTES	
CAMINO AL FUTURO	
AL MUNICIPIO	
COMUNIDAD 3000	
POR MI MUNICIPIO	
MOVIMIENTO ECOLOGISTA	
EDIFIQUEMOS EL DISTRITO	
CONSENSO DISTRITAL	
POR UN FUTURO MEJOR	

RESOLUCIONES ONPE QUE APRUEBAN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LISTAS DE ADHERENTES

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL SISTEMA DE LISTA DE ADHERENTES

RESOLUCION JEFATURAL N° 031-96-J/ONPE

Lima, 6 de mayo de 1996

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 019-96-PCM de fecha 11 de abril del presente año, se ha Convocado a Elecciones Municipales Parciales de Alcaldes y Regidores, para el día domingo 10 de noviembre del año en curso.

Que, el Jurado Nacional de Elecciones por Resolución Nº 125-96-JNE, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 16 de abril del corriente, ha señalado las provincias y distritos donde se realizarán los citados comicios, de conformidad con el Artículo 2º del Decreto Supremo de Convocatoria;

Que, en estricta aplicación del Artículo 2º de la Ley Nº 26591;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el "SISTEMA DE LISTA DE ADHERENTES" que contienen: CERTIFICACION DE LA PRESENTACION DE LISTAS DE ELECTORES ADHERENTES (Forma LA 002), CERTIFICACION DE DIGITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LISTA DE ELECTORES ADHERENTES (Forma LA 003) GUÍA DE INSTRUCCIONES (Forma LA 004), el DISEÑO DEL FORMATO DE LA LISTA DE ADHERENTES (Forma LA 005) y un disquete tres y medio (3 1/2) pulgadas de alta densidad que contiene PROGRAMAS DE DIGITACIÓN, VERIFICACION Y CONSISTENCIA; los que se usarán para el registro de las firmas y datos de los adherentes, como requisito formal para la solicitud de inscripción de listas de candidatos independientes a elecciones.

Artículo Segundo.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en recabar las firmas y datos de los adherentes deberán presentar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la SOLICITUD DE ADQUISICION DE FORMATOS PARA LISTAS DE ADHERENTES (Forma LA 001); formato que se entrega gratuitamente en la citada Oficina Nacional y cuyo modelo forma parte de la presente Resolución Jefatural. La Oficina Nacional de Procesos Electorales se ubica en el jirón Nazca Nº 598 distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima; excepcionalmente, ésta podrá designar otros lugares donde puedan recogerse y presentarse la citada solicitud y las listas de adherentes.

Artículo Tercero.- La Gerencia de Informática de la Oficina Nacional de Procesos Electorales queda encargada de la programación del referido "SISTEMA DE LISTA DE ADHERENTES". La Gerencia de Administración y Finanzas de esta Oficina Nacional, a través de su Jefatura de Tesorería, queda encargada de la venta del mismo por el precio de CIENTO DIEZ Y 00/ 100 NUEVOS SOLES (S/ 110.00), a nivel nacional. La Gerencia de Información y Educación Electoral de este organismo electoral queda encargada de su distribución.

Artículo Cuarto.- Constituyen disposiciones complementarias y reglamentarias de la presente Resolución Jefatural, las contenidas en la GUIA DE INSTRUCCIONES (Forma LA 004).

Artículo Quinto.- Los Jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales recepcionarán las solicitudes de inscripción de candidatos independientes, informarán sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos formales exigidos para su inscripción y remitirán la información respectiva al Jurado Electoral Especial de su jurisdicción.

Regístrese y comuníquese.

SS. JOSE PORTILLO CAMPBELL,
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

APRUEBAN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACION DE FIRMAS DE ADHERENTES

RESOLUCION JEFATURAL Nº 067-97-J/ONPE

Lima, 16 de setiembre de 1997

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2º de la Ley Nº 26591 que precisa funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales señaladas en su Ley Orgánica Nº 26487 en el Artículo 5º inciso m), dispone que es ésta entidad electoral la encargada de la verificación de las firmas de adherentes para la inscripción de candidatos independientes a elecciones y de opciones en procesos de referéndum u otras consultas populares a su cargo;

Que, dicho dispositivo legal dispone que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, proporciona a requerimiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la información contenida en las boletas de inscripción electoral para la verificación del cumplimiento de los requisitos formales;

Que, la Oficina Nacional de Procesos Electorales por Resoluciones Jefaturales Nº 031 y 036-96-J/ ONPE, de fecha 6 y 8 de mayo de 1996, respectivamente, aprobó el Sistema de Lista de Adherentes a la que se debían ceñir todos los ciudadanos para recabar firmas que apoyen su petición en los casos descritos en el considerando precedente;

Que, conforme a las atribuciones señaladas en la Ley Orgánica Electoral, es necesario dictar pautas a las que debe ceñirse la verificación de firmas de adherentes;

En conformidad con el Artículo 182º de la Constitución Política y a la Ley Nº 26487 "Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales" y Ley Nº 26591;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Manual de Procedimientos de Verificación de firmas de adherentes.

Artículo Segundo.- El referido Manual forma parte integrante de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE PORTILLO CAMPBELL,
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACION DE FIRMAS DE ADHERENTES APROBADO POR RESOLUCION Nº 067-97-J/ONPE

I.- FINALIDAD.

Establecer las normas a las que se sujetará el proceso de verificación de firmas adherentes.

II.-OBJETIVO.

Garantizar que la voluntad del ciudadano de adherirse a una de las formas de participación política, previstas en la Constitución del Estado, no se vea frustrada o impedida por errores materiales al consignarse el Nº de la Libreta Electoral o los nombres y apellidos. Para tal efecto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha desarrollado un Sistema Inteligente, que permite la identificación del adherente, en el Padrón Electoral, no obstante la existencia de un porcentaje razonable de errores en la información proporcionada por éste; y en lo que se refiere a la verificación de firmas éste se llevaría a cabo a través de un muestreo considerando, para tal efecto, un porcentaje razonable.

III.- BASE LEGAL.

Constitución Política, Artículos 31º, 32º, 176º,177º y 182º.
- Ley de Elecciones
- Ley Nº 26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadano.
- Ley Nº 26487 "LEY ORGANICA DE ONPE"
- Ley Nº 25691

IV.-PROCEDIMIENTOS.

PRIMERO: Sólo se admitirá al proceso de verificación de firmas a quienes hayan adquirido el Sistema de Listas de Adherentes proporcionado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y, a quienes hayan acreditado a sus personeros.

SEGUNDO: La verificación de firmas, los nombres y número de Libreta Electoral, se realizará con la información proporcionada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

TERCERO: El candidato o el promotor, concluido el recojo de firmas, presentará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales todos los originales que contienen las firmas recabadas, bajo el formato LA 005 y cuyo código coincida con el asignado para tal efecto.

CUARTO: La producción de los disquetes, que contiene el Sistema de Lista de Adherentes que deben ser presentados a ONPE, será realizado con el subsistema "Lista de Adherentes".
El candidato o promotor deberá presentar tres juegos de disquetes, que serán distribuidos de la siguiente manera: la primera copia para la Gerencia de Gestión Electoral; la segunda copia como constancia de la Oficina de Relaciones Institucionales; y, la tercera copia, para la Gerencia de Informática.

QUINTO: Es obligatorio que el personero presente el listado que produce el programa de verificación del contenido del disquete o disquetes, el mismo que debe coincidir con el realizado producido por la ONPE. Si no se presenta este listado, la solicitud será rechazada.
Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tomará una muestra para verificar que los planillones coincidan con el contenido de los disquetes.

SEXTO: La verificación de firmas constará de dos etapas:

a) Verificación electrónica del disquete presentado por los promotores y que contiene el registro de los electores.

b) Verificación manual o electrónica de las firmas de los adherentes.

SEPTIMO: La verificación electrónica del número de libreta electoral y de apellidos y nombre, se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes patrones:

FASE 1. Búsqueda del número de libreta electoral del adherente en el padrón electoral.
En caso de hallarse éste; se procede así:

PASO 1.1. Se compara el apellido paterno del adherente con el del padrón electoral; ésta tiene las siguientes características:

1.1.1. Porcentual, es decir, se determina la coincidencia del apellido paterno del adherente en lista, con el apellido paterno en el padrón electoral. Esta no será menor del setenta por ciento (70%).
1.1.2. Inteligente, prevé errores humanos, tales como: inversión, reémplazo, supresión o inserción de caracteres, inversión de apellidos y uso de segundos nombres.

PASO 1.2. En caso de no identificarse al adherente, conforme a la fase anterior, se comparan los apellidos paterno y materno, y los nombres del adherente con el registro del padrón electoral; tal comparación tiene las siguientes características:

1.2.1. Porcentual, es decir, se determina la coincidencia de los apellidos y nombres del adherente con los apellidos y nombres del padrón electoral. Esta no será menor del setenta por ciento (70%) para los apellidos y no menor que el sesenta y cinco por ciento (65%) para los nombres.

1.2.2. Inteligente, prevé errores humanos, tales como: inversión, reemplazo, supresión e inserción de caracteres, inversión de apellidos y uso de los segundos nombres.

FASE 2. En caso de no identificarse al adherente, conforme a la fase anterior; se procede así:

PASO 2.1. Se ejecuta una búsqueda exacta, por ambos apellidos en el padrón electoral. En caso de hallarse uno o más registros:

2.1.1. Se comparan la Libreta Electoral y nombres de los adherentes con cada registro en el padrón electoral, ésta tiene las siguientes características:
2.1.1.1. Porcentual. Esta no será menor del setenta y cinco por ciento (75%) para el número de la libreta electoral y no menor que el sesenta y cinco por ciento (65%) para los nombres.
2.1.1.2. Inteligente, prevé errores humanos tales como: inversión reemplazo, supresión e inserción de caracteres ó números, y, según sea el caso, uso de segundos nombres.
2.1.1.3. Se asigna como registro coincidente el que tenga el mayor porcentaje de coincidencia en la comparación del número de la Libreta Electoral del ciudadano en la lista de adherentes con la del padrón electoral.

PASO 2.2. En caso de no identificar al adherente, conforme al paso anterior, se ejecuta una búsqueda exacta por apellido paterno y nombre en el padrón electoral. En caso de hallarse uno o más registros:

2.2.1. Se realiza una comparación de la Libreta electoral y apellido materno de los adherentes con cada registro en el padrón electoral, esta comparación, tiene las siguientes características:
2.2.1.1. Porcentual. Esta será no menor del setenta y cinco por ciento (75%) para la libreta electoral y no menor del setenta por ciento 70% para el apellido materno.
2.2.1.2. Inteligente, prevé errores humanos, tales como: inversión, reemplazo, supresión e inserción de caracteres o números y según sea el caso, uso de apellido de soltera o de casada.
2.2.1.3. Se asigna como registro coincidente, el que tenga el mayor porcentaje de coincidencia en la comparación del número de la Libreta Electoral del ciudadano en la lista de adherentes con la de padrón electoral.

PASO 2.3. En caso de no identificarse al adherente, conforme al paso anterior, se ejecuta una búsqueda exacta, por ambos apellidos y los nombres en el padrón electoral. En caso de hallarse uno o más registros:

2.3.1. Se compara el número de la Libreta Electoral, teniendo las siguientes características:

2.3.1.1. Porcentual.
2.3.1.2. Inteligente, prevé errores humanos, tales como: inversión, reemplazo, supresión e inserción de caracteres o números, y, según sea el caso, uso del apellido de soltera o de casada.
2.3.1.3. Se le asigna como registro coincidente, siempre que no exista homonimia.

FASE 3. Luego de identificar al adherente, se procede a verificar que:

3.1. Pertenezca a la ubicación geográfica donde se realiza la elección.

3.2. Sea hábil la inscripción.

3.3. No haya sido presentado por otra lista en contienda, con la verificada actualmente.

3.4. No haya sido presentado en un registro anterior por la misma lista en verificación.

OCTAVO: La verificación manual o electrónica de las firmas de adherentes, se realizará en aquellos registros que resulten hábiles en el proceso de verificación electrónica. La verificación de las firmas se llevará a cabo de la siguiente manera:

a) . Se definirá un tamaño de muestra representativa de los adherentes presentados que será de:

25% cuando el total de registros hábiles sea mayor a 1,000;
250 cuando el total de registros hábiles sea menor a 1,000, y,
100% cuando los registros hábiles sean iguales o menores a 250.

b) Para seleccionar qué adherentes formarán parte de la muestra, la computadora tomará electrónica y aleatoriamente la muestra de aquellos ciudadanos que votaron en las últimas elecciones.

c) La muestra se comparará con las firmas contenidas en las listas de electores utilizados en las Elecciones Municipales Generales últimas y/o en las boletas de inscripción electoral y su resultado debe proyectarse al universo de los adherentes.

d) En caso que el elector sea analfabeto, se comparará la huella digital del ciudadano.

NOVENO: Finalizada la depuración de la relación de adherentes, y si la lista no ha alcanzado el número de adherentes válidos requerido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales oficiará a los promotores o a los candidatos, según sea el caso, para que dentro del término de ley, cumplan con completar el número de firmas de adherentes requerido.

DECIMO: Si en la presentación original de la lista de adherentes, o en la presentación adicional mencionada en el punto anterior, se llega a alcanzar el número de adherentes válidos requeridos por la ley, se comunicará al Jurado Nacional de Elecciones, adjuntando toda la documentación del proceso de verificación de firmas. Igual procedimiento se efectuará en caso que no se logre cumplir con los requisitos solicitados.

UNDECIMO: Los personeros designados por los promotores podrán presenciar y fiscalizar todas las etapas de las que consta el presente procedimiento de verificación de datos y firmas, y los resultados les serán entregados con sus respectivos reportes sustentatorios.

DUODECIMO: El reporte sustentatorio a que se refiere el artículo anterior contiene la siguiente información:

Relación de adherentes válidos.
Relación de adherentes rechazados, con el detalle de la razón del rechazo (apellidos errados número de libreta inexistente, falla en circunscripción electoral, etc.) en forma de comparación entre dato en la lista y el dato correcto.
Resumen del total de adherentes válidos y rechazados (por categorías: duplicados, nombre apellido incorrecto, libreta no existente, etc.)

ADECUAN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE FIRMAS DE ADHERENTES A LOS ALCANCES DE LA LEY ORGANICA DE ELECCIONES

RESOLUCION JEFATURAL Nº 082-97-J/ONPE

Lima, 06 de octubre de 1997

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 067-97-J/ONPE, de fecha 16 de setiembre de 1997, se aprobó el Manual de Procedimientos de Verificación de firmas de adherentes, el mismo que en concordancia con el Artículo 2º de la Ley Nº 26591, estableció las normas a las que se sujetará la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en relación al proceso de verificación de firmas de adherentes para la inscripción de candidatos independientes a elecciones y de opciones en procesos de referéndum u otras consultas populares;

Que, con fecha 29 de setiembre de 1997, el Congreso de la República ha promulgado la Ley Nº 26859 " Ley Orgánica de Elecciones", que en su Artículo 86º precisa que la Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene la responsabilidad de recibir y remitir al Jurado Nacional de Elecciones la solicitud de inscripción de candidatos u opciones en proceso de ámbito nacional, informando respecto del cumplimiento de los requisitos formales exigidos que incluye la verificación de las respectivas firmas de los ciudadanos adherentes;

Que, el Artículo 91º de la " Ley Orgánica de Elecciones", concordante con el Art. 88º inciso b), de la referida Ley, señala que el Jurado Nacional de Elecciones solicitará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que compruebe la autenticidad de las firmas y la numeración de los Documentos Nacionales de Identificación, correspondientes a los adherentes a las agrupaciones políticas obligadas a presentar una cantidad no menor al 4% de los ciudadanos hábiles para votar a nivel nacional, según el número de electores inscritos en el Padrón empleado en las últimas elecciones de carácter nacional;

Que, a efectos de adecuar el referido Manual de Procedimiento de Verificación de firmas, a las disposiciones normativas previstas en la Ley Orgánica de Elecciones, se requiere expedir la norma legal pertinente;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 182º de la Constitución Política y las atribuciones de la Ley Nº 26487 " Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales";

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Adécuese el Manual de Procedimientos de verificación de firmas de adherentes, aprobado por Resolución Jefatural Nº 067-97-J/ONPE, a los alcances de la Ley Nº 26859 "Ley Orgánica de Elecciones comprendiendo a la inscripción de Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE PORTILLO CAMPBELL,
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

APRUEBAN REGLAMENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EXAMEN DE FIRMAS MANUSCRITAS DE ADHERENTES EN LA INSCRIPCIÓN DE AGRUPACIONES POLÍTICAS

RESOLUCION JEFATURAL Nº 101-97-J/ONPE

Lima, 17 de noviembre de 1997

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en las Leyes Nos. 26487, 26591 y 26859, corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, informar respecto del cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la inscripción de Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas, de candidatos u opciones en procesos de ámbito nacional, que incluye la verificación de las respectivas firmas de los ciudadanos adherentes;

Que, mediante Resoluciones Jefaturales Nos. 067 y 082-97J/ONPE, esta Oficina Nacional ha aprobado el Manual de Procedimientos de Verificación de Firmas, que contiene la normatividad operativa y pautas para la verificación electrónica de la información contenida en las Listas de Adherentes;

Que, es necesario complementar dicho Manual, con normas y procedimientos para el examen de firmas manuscritas; así como para el caso de inscripciones de Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas, determinar el porcentaje de la muestra para la realización de dicho examen;

Que, para la correcta aplicación del Artículo 90º de la Ley Nº 26859, se hace necesario considerar un número adicional de firmas al total de firmas válidas, para corregir la desviación producida por aplicación de técnicas de muestreo;

De conformidad con el Artículo 182º de la Constitución Política y la Ley 26487-Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Reglamento de Normas y Procedimientos para el examen de firmas manuscritas de los respectivos ciudadanos adherentes para la Inscripción de Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas; así como de candidatos u opciones en proceso de ámbito nacional; el mismo que consta de siete (7) artículos y forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Establecer en doce y medio por ciento (12.5%), el porcentaje de la muestra que se tomará para el examen de firmas de ciudadanos adherentes para la inscripción de Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas.

Artículo 3.- Agregar para los efectos a que se refiere el Artículo 90º de la Ley Nº 26859, un número adicional de firmas al total de firmas válidas obtenido por la organización recurrente, para corregir la desviación producida al realizar el cotejo con los registros hábiles de las organizaciones políticas cuyas solicitudes de inscripción se presentaron en primer término.

Artículo 4.- El número adicional de firmas se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

$$Na = D \times (1 - p1) \times p2$$

D = Número de adherentes depurados por duplicidad resultado del cotejo con la organización política que solicitó su inscripción en primer término.

P1 = Porcentaje de firmas válidas entre los registros hábiles de la organización política inscrita en primer término (En tanto por uno).

P2 = Porcentaje de firmas válidas entre los registros hábiles de la organización política cuyas firmas se verifica. (En tanto por uno).

Artículo 5º.- En los casos de adherentes duplicados, se determinará el número adicional de firmas por cada organización política objeto del cotejo, aplicando la fórmula establecida en el artículo anterior.

Artículo 6º.- Hacer de conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones, la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE PORTILLO CAMPBELL
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

REGLAMENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE FIRMAS MANUSCRITAS APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 101-97-J/ONPE

I. FINALIDAD

Establecer las normas y el procedimiento a los que se sujetará el exámen para la comprobación de la autenticidad de firmas manuscritas de adherentes, para la inscripción de Partidos Políticos, Alianzas y Listas Independientes; así como la de candidatos independientes a elecciones y de opciones en procesos de referéndum u otras consultas populares a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

II. OBJETIVO

Suministrar a los examinadores de firmas, las principales técnicas de análisis gráfico - documental y los procedimientos para su aplicación en el proceso comparativo en la verificación de firmas, teniendo en cuenta los presupuestos de la identificación gráfica documental y el índice de diferenciación signatural, para garantizar la defensa y respeto de la voluntad del ciudadano que se adhiere a una de las formas de participación previstas en la Constitución Política del Perú.

III. BASE LEGAL

1.- Constitución Política
2.- Ley Nº 26487 Ley Orgánica de ONPE
3.- Ley Nº 26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadano.
4.- Ley Nº 26591.
5.- Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859.
6.- Ley Nº 26864 Ley de Elecciones Municipales
7.- Resoluciones Jefaturales Nºs 067 y 082-97-J/ONPE

IV. NORMAS LEGALES

Primera.- La firma es la combinación de trazos, puntos y espacios que realiza una persona en forma espontánea, especializada y estable, convirtiendose en una representante gráfica convencional o distintivo propio de quien la usa como titular.
El examinador de firmas, debe tener en consideración aspectos básicos sobre la autenticidad, falsedad y alteración de signaturas, utilizando, de ser el caso, los instrumentos ópticos y afines, para una prudente determinación de la validez de la información examinada.

Segunda.- El examinador de firmas deberá tener en cuenta los principales mecanismos psicomotrices de la firma:

2.1. Mecanismos de inscripción, a través de la búsqueda de los puntos de ataque de los diferentes caracteres gráficos.

2.2. Mecanismos de coordinación, a través de la sucesión recíproca de caracteres gráficos y de la asociación armónica de espacios gráficos.

2.3. Mecanismo de ubicación, a través de la localización de la firma en el campo gráfico y la relación de la firma con la línea de pauta.

Tercera.- Constituyen elementos principales de la firma: la grafía capital, la caja signatural y la rúbrica. Con ellos, se determina la estructura de su trazado, se localiza los trazos, perfiles o magistrales y los trazos dextrógiros y sinistrógiros, así como la verificación de las pasantes superiores e inferiores.

Cuarta.- El esquema de las siete zonas gráficas de la firma, son: inicial, lineal, superior, inferior, final, progresiva y regresiva, en las que se ubicará los siguientes elementos:

4.1. En la zona inicial o de ajustamiento, se encontrará los rasgos o puntos de ataque, así como la configuración de la grafía capital.

4.2. En la zona lineal, la distribución y disposición de la caja signatural, la que esta constituida por letras o grafías cortas, legibles e ilegibles.

4.3. En la zona superior, se hallará los trazos ascendentes o pasantes superiores, así como los puntos y trazos complementarios.

4.4. En la zona inferior, aparecerán los trazos descendentes o pasantes inferiores y comúnmente la rúbrica.

4.5. En la zona final, se evidencian los rasgos o puntos de remate, así como el desenvolvimiento gráfico de la rúbrica.

4.6. En la zona progresiva se ubican los trazos dextrógiros, que representan la mayoría de puños escribientes.

4.7. En la zona regresiva se registra los trazos sinistrógiros.

Quinta.- para la determinación de las características relevantes de las firmas se aplicará las técnicas de sucesión, yuxtaposición y superposición; empleándose instrumentos afines, para el exámen signatural.

Sexta.- en el proceso de examen de firmas manuscritas, se pondrá énfasis en la búsqueda de las siguientes características:

6.1. Espontaneidad o velocidad de la firma.
6.2. Variaciones gráficas de la signatura.
6.3. Signos de poca notoriedad.
6.4. Sombreado gráfico.
6.5. Reciprocidad de caracteres gráficos.
6.6. Espacios gráficos.
6.7. Indice de intersección signatural.
6.8. Perfil de la caja signatural
6.9. Ornamentación signatural.
6.10. Apreciación y Verificación de todo el conjunto de la firma.

Séptima.- La metodología a emplearse para la comprobación de la autenticidad de firmas manuscritas es la siguiente.

7.1 Observación: Es la captación, inspección o estudio técnico de los caracteres gráficos, que permitan evidenciar su real estructura extrínseca e intrínseca. Esta debe ser metódica, exhaustiva, sistemática y valorativa.

7.2 Descripción: Es la señalización de los detalles particulares, llamados también idiotismo gráficos, actos reflejos, caracteres relevantes, características sobresalientes, contraseñas, o signos diferenciales, constantes gráficas o rasgos delatores. La descripción debe ser objetiva y contrastable.

7.3. Cotejo o Comparación: Es la confrontación o contrastación de los caracteres relevantes, a fin de establecer correspondencia o divergencias entre dos o más de los signos delatores descritos.

7.4 Juicio Valorativo Signatural: Es la determinación de la autenticidad o no de la firma examinada.

Octava.- Los procedimientos de verificación electrónica de registros y el examen de firmas, en este orden, son preclusivos; por lo que, en consecuencia, antes de iniciar el segundo de los señalados, debe entregarse al personero de la agrupación política correspondiente, una copia de los resultados del primero, que contendrá la información sobre los registros hábiles y sobre los rechazados con indicación de la causa de su rechazo; y, el tamaño de la muestra y la relación de adherentes que integren ésta.

V.- PROCEDIMIENTO

Primero.- Revisión a observación de conjunto, es la comprobación del aspecto extrínseco de los planillones de adherentes. para tal efecto, se examinará las firmas con características similares, que hagan presumir que provienen de un mismo puño gráfico. Deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

A. Similitud de la grafía capital, con las que anteceden y preceden.

B. Similitud de rúbricas con las que anteceden y preceden.

C. Existencia de firmas legibles que evidencian apellidos que siguen un orden alfabético constante.

D. Que las firmas presenten residuos de tinta de tampón, que evidencien el estampado del sello o facsímil de autógrafa.

E. Otras señales de relevancia.

Segundo.- Exámen intrínseco de las firmas. Se efectuará el exámen comparado entre éstas y las registradas en la documentación electoral, aplicando la metodología señalada en el punto séptimo de la Sección IV de las Normas Generales del presente reglamento.

A. Si las firmas examinadas presentan características relevantes, similares con las cotejadas, aquellas se considerarán auténticas; en caso contrario, serán sometidas al siguiente paso.

B. Se examinará sus tres elementos principales; de ser similares sus características gráficas en un 70% con las de cotejo, se considerará que las firmas son auténticas.

VI. DETERMINACIÓN DE VALIDEZ DE LA FIRMA

Primero.- Se concluirá el exámen de las firmas y, por tanto, el proceso de verificación de firmas, determinando si la firma es auténtica o no.
La Gerencia de Gestión Electoral, elaborará el informe final de cada lote de firmas; el mismo que será elevado a la Jefatura Nacional, para su ulterior remisión al Jurado Nacional de Elecciones, copia de dicho informe, se pondrá en conocimiento del respectivo personero.

Segundo.- En el caso de ciudadanos analfabetos, que se hayan adherido con su impresión dactilar, y estén comprendidos dentro de la muestra, esta se cotejará visualmente con la impresora en el padrón Electoral. De no ser posible ello, éstos no se tomarán en cuenta para la determinación.

VII. DE LOS PERSONEROS

Primero: Las organizaciones políticas, candidatos independientes y promotores de solicitudes de referéndum y otras consultas populares, en su oportunidad, podrán acreditar, por escrito, tantos personeros auxiliares como examinadores se designe para realizar la verificación de firmas manuscritas, correspondientes a la organización o solicitud que representan.

Segundo.- Los personeros observarán y mantendrán el debido orden y disciplina durante el lapso que dure el examen de firmas.

.....

ESTABLECEN PROCEDIMIENTO PARA AGREGAR NÚMERO ADICIONAL DE FIRMAS VALIDAS AL OBTENIDO POR ORGANIZACIONES POLITICAS QUE SOLICITEN INSCRIPCION.

RESOLUCION JEFATURAL Nº 109-97-J/ONPE

Lima, 31 de diciembre de 1997

Visto el informe presentado por la Gerencia de Gestión Electoral, sobre aspectos relacionados con el proceso de verificación de firmas de adherentes;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciones Jefaturales Nº 067 y 082-97-J/ONPE, se aprobó el Manual de Procedimientos de Firmas, que contiene la normatividad operativa y pautas de la verificación electrónica de la información contenida en las listas de adherentes, para la inscripción de Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas;

Que, por Resolución Jefatural Nº 101-97-J/ONPE, y como fase ulterior a la verificación precedentemente señalada, se aprobó el Reglamento de Normas y Procedimientos para el examen de firmas manuscritas contenidas en la acotada información;

Que, en la fase de comprobación de los nombres, apellidos y números de libreta electoral de los ciudadanos adherentes, se depuran electrónicamente, entre otros, registros duplicados que aparecen dentro de las mismas listas presentadas por la organización recurrente;

Que, entre estos registros depurados electrónicamente por duplicidad, existe la posibilidad que alguno de ellos, contenga firma válida; mientras, el registro hábil seleccionado en primer lugar, al pasar a la examinación de la firma manuscrita, ésta podría resultar inválida; por lo que, de darse este caso se perjudicaría a la organización política recurrente;

Que, en tal virtud, técnicamente, resulta asimismo justificado agregar, un número adicional de firmas (Na_1) que corregiría la situación descrita en los considerandos precedentes; y,

De conformidad con el Artículo 182° de la Constitución Política del Perú, Ley N° 26487- Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la Ley N° 26859- Ley Orgánica de Elecciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Agregar un número adicional de firmas validas (Na_1) al obtenido por la organización política cuya inscripción solicitada, con el fin de corregir la situación descrita en el tercer y cuarto considerando de la presente resolución.

Artículo 2º.- El Número Adicional de Firmas (Na_1) se determinará de la siguiente manera:

A) Se toma una muestra aleatoria del cinco por ciento (5 %) del número de adherentes duplicado en la misma lista.

B) Se verifica la firma del adherente duplicado en ambos registros (Registro eliminado RE y Registro hábil RH)

C) Esta verificación, dará lugar a los siguientes resultados posibles:

- Que la firma sea válida en el Registro eliminado y también válida en el Registro hábil (FV RE, FV RH)
- Que la firma sea válida en el Registro eliminado y no válida en el Registro hábil (FV RE, FNV RH)
- Que la firma sea no válida en el Registro eliminado y válida en el Registro hábil (FNV RE, FV RH); y
- Que la firma sea no válida en el Registro eliminado como también en el Registro hábil (FNV RE, FNV RH)

D) Durante el proceso de verificación, se asignará un valor (v) a cada uno de los resultados previstos, asignando el valor de (1), cuando la firma sea válida en el Registro eliminado y no válida en el Registro hábil (FV RE, FV RH); y, de cero (0), en los demás resultados.

E) Se suman los valores asignados a los resultados obtenidos y se divide entre el número de registros verificados de la muestra; obteniéndose, de esta manera, el porcentaje de la muestra que tuvo como resultado firma válida en los Registros eliminados y firma no válida en los Registros hábiles.

F) El porcentaje de la muestra obtenido, se proyecta al universo de los Registros duplicados, cuyo número resultante se adicionará al total de firmas válidas obtenidas por la organización recurrente.

G) Este procedimiento, se resume en la siguiente fórmula:

$$Na_1 = \frac{EV_1}{M} * D$$

Na1 = Número adicional de firmas.
Eu1 = Sumatoria de los valores asignados a los resultados obtenidos.
M = Cantidad de registros verificados de la muestra
D = Cantidad de registros duplicados.

Artículo 3º.- El número adicional (Na_1) a que se refiere la presente resolución, se aplicará a los nuevos lotes de lista de firmas de adherentes de las organizaciones políticas cuyas solicitudes de inscripción se encuentran en trámite y a los presentados para subsanación.

Artículo 4º.- Poner en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones, la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE PORTILLO CAMPBELL
Jefe Oficina Nacional de Procesos Electorales.

RESTITUYEN A ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN TRAMITE NUMERO DE ADHERENTES CON FIRMAS VÁLIDAS QUE SE LES HA DEPURADO

RESOLUCION JEFATURAL N° 008-98-J/ONPE

Lima; 30 de enero de 1998

VISTO:

El informe presentado por la Gerencia de Gestión Electoral, sobre aspectos relacionados con el proceso de verificación de firmas de adherentes;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciones Jefaturales Nºs. 067 y 082-97-J/ONPE, se aprobó el Manual de Procedimientos de Verificación de Firmas, que contiene la normatividad operativa y pautas de la verificación electrónica de la información contenida en las listas de adherentes, para la inscripción de Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas;

Que, por Resolución Jefatural N° 101-97-J/ONPE, y como fase ulterior a la verificación precedentemente señalada, se aprobó el Reglamento de Normas y Procedimientos para el examen de firmas manuscritas contenidas en la acotada información;

Que, en aplicación del Articulo 90° de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha procedido a depurar, de los planillones de adherentes de las organizaciones políticas, aquellos que ya habían adherido con anterioridad, en forma valida, a otra organización política;

Que, por Resolución N° 001-98-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones ha dejado sin efecto las Resoluciones Nºs. 540 y 1030-97-JNE de fechas 5 de junio y 26 de noviembre de 1997 respectivamente, y oficio, de 16 de diciembre del mismo año, que ordenaron la comprobación de firmas de los lotes de planillones presentados por el Partido Aprista Peruano y que fueran remitidos al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, respectivamente, al haberse dispuesto en aquella Resolución la inscripción del referido partido político;

Que, al haberse dejado sin efecto la verificación de firmas practicada en la Lista de Adherentes del Partido Aprista Peruano, es procedente restituir a las Organizaciones Políticas él numero de adherentes con firmas validas que se les ha depurado por haber estos adherido con anterioridad en forma válida al señalado partido político;

Estando al Informe N° 017-98-GGE/ONPE, de 26 de enero de 1998 y de conformidad con el Artículo 182° de la Constitución Política del Perú, Ley N° 26487-Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la Ley N" 26859 Ley Orgánica de Elecciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Restituir a las organizaciones políticas en trámite los adherentes que se les haya depurado por haber éstos adherido con anterioridad en forma válida al Partido Aprista Peruano, adicionándoles el Número de Recuperación de Firmas (Nr).

Artículo 2.- El Número de Recuperación de Firmas (Nr), se determinará de la siguiente manera:

$$Nr = D \times p1 \times p2$$

D = Número de adherentes duplicados obtenido del cotejo con el Partido Aprista Peruano por una organización política cuyos adherentes se restituye.

p1 = Porcentaje de firmas válidas de los electores hábiles del Partido Aprista Peruano. (En tanto por uno)

p2 = Porcentaje de firmas validas de los electores hábiles de la organización política cuyas adherentes se restituye. (En tanto por uno)

Artículo 3°. Para cada lote de adherentes de una organización política, con la cual se haya depurado los adherentes duplicados con el Partido Aprista Peruano, se encontrará un Número de Recuperación de Firma (Nr).

Artículo 4°.- Hacer de conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones, la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE PORTILLO CAMPBELL
Jefe Oficina Nacional de Procesos Electorales

APRUEBAN LA NUEVA VERSIÓN DEL KIT DEL SISTEMA DE LISTA DE ADHERENTES

RESOLUCION JEFATURAL N° 027-98/ONPE

Lima, 16 de marzo de 1998

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2° de la Ley N° 26591, precisa que corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales el diseño, impresión y expedición de los formatos requeridos para la inscripción de candidatos independientes a elecciones y de opciones en procesos de referéndum u otras consultas populares a su cargo, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos formales exigidos para ella y la remisión al Jurado Nacional de Elecciones de la información respectiva;

Que, la Ley N° 26864, en su Artículo 3°, establece que las elecciones municipales se llevarán a cabo el segundo domingo del mes de octubre del año en que finaliza el mandato legal de las autoridades municipales, es decir el 11 de octubre del presente año;

Que, el Jurado Nacional de Elecciones, por Resolución N° 066-98-JNE de 05.02.98, determina por circunscripción electoral, el número de adherentes para efecto de la inscripción de listas independientes de candidatos a alcaldes y regidores;

En uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 182° de la Constitución Política del Perú y Artículo 5° de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la nueva Versión, del kit del Sistema de Lista de Adherentes, el mismo que contiene: el Software de Lista de Adherentes, la Guía del Usuario del Sistema de Lista de Adherentes, el Manual de Instrucciones del Software del Sistema de Lista de Adherentes y la Descripción del Reporte que resulta de Procesar la Información de la "Lista de Adherentes".

Artículo Segundo.- Las personas naturales o jurídicas, interesadas en recabar las firmas y datos de los adherentes, deberán presentar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la Solicitud de Adquisición de formatos para Lista de Adherentes (Formulario 020); formato que se entrega gratuitamente en ONPE, sito en Jr. Nazca 598 Jesús María, provincia y departamento de Lima, excepcionalmente, ésta podrá designar otros lugares donde pueda recabarse y presentarse la citada solicitud y la lista de adherentes.

Artículo Tercero.- Fijar en la suma de CIENTO CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 140.00), el precio de venta del Kit del Sistema de Lista de Adherentes a que se refiere el Artículo 1° de la presente Resolución; y autorízase su venta a partir del día lunes 23 de marzo del año en curso.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE PORTILLO CAMPBELL
Jefe Oficina Nacional deProcesos Electorales.

RESOLUCION N° 043-98-J/ONPE

Lima, 21 de abril de 1998

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 012-98-PCM, el señor Presidente de la República ha convocado a elecciones de alcaldes y regidores de los Concejos Municipales Provinciales y Distritales de toda la República para el domingo 11 de octubre de 1998.

Que, corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de acuerdo a lo dispuesto en las Leyes N°s. 26487, 26591, 26859 y 26864, informar respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos para la inscripción de las listas independientes en las elecciones municipales.

Que, por Resoluciones N°s. 067-97-J/ONPE y 101-97-J/ONPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha aprobado el Manual de Procedimiento de Verificación de Firmas, que contiene la normatividad operativa y pautas para la verificación electrónica de la información contenida en las listas de adherentes y el Reglamento de Normas y Procedimientos para examen de firmas manuscritas de adherentes en la inscripción de las agrupaciones políticas.

Que, es necesario complementar el Manual y el Reglamento citados en el párrafo precedente, con normas y procedimientos para la verificación de firmas manuscritas, en el caso de inscripción de candidatos de listas independientes en las Elecciones Municipales de 1998; determinar el porcentaje de muestra para dicha verificación y corregir desviaciones producidas por aplicación de técnicas de muestreo.

De conformidad con el Artículo 182º de Constitución Política y la Ley N° 26487- Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

RESUELVE:

Artículo 1°.- Son de aplicación en el proceso de verificación de firmas de los ciudadanos adherentes a las listas independientes en las Elecciones Municipales 1998: el Manual de Procedimientos de Verificación de Firmas y el Reglamento de Normas y Procedimientos para el examen de firmas manuscritas de adherentes en la inscripción de agrupaciones políticas, aprobados por Resoluciones N°s.067-97-J/ONPE y 101-97-J/ONPE.

Artículo 2°.- Modifíquese el punto sétimo del numeral IV del Manual de Procedimientos para la Verificación de Firmas de Adherentes aprobado por Resolución Jefatural Nº 067-97-J/ONPE, el cual queda redactado de la siguiente manera:

" **Sétimo.-** La verificación electrónica del número de Libreta Electoral y de apellidos y nombre se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes patrones:

Fase 1. Búsqueda del número de la Libreta Electoral del adherente en el padrón electoral.

Paso 1.1. Se busca en forma exacta el número de Libreta Electoral, en caso de hallarse, se procede así:

1.1.1. Se compara en forma exacta el apellido paterno del adherente con el del padrón electoral, de encontrarse se asigna como registro coincidente.

1.1.2. De no identificarse al adherente conforme, se compara los apellidos paterno y materno, así como los nombres del adherente con el registro del padrón electoral; tal comparación tiene las siguientes características:

1.1.2.1. Porcentual: La coincidencia no debe ser menor a setenta por ciento (70%) en los apellidos paterno y materno, y sesenta y cinco por ciento (65%) en el nombre.

1.1.2.2. Inteligente:Prevé errores humanos, tales como:inversión, reemplazo, supresión o inserción de caracteres o números y, según sea el caso, uso de apellidos de soltera, casada o de segundos nombres.

Paso 1.2. En caso de no identificarse al adherente,conforme al paso anterior, se analiza todos los registros del padrón electoral que figuren con el número de Libreta Electoral y con una diferencia de un dígito respecto al número de la Libreta Electoral que se indica en la lista de adherentes. De encontrarse uno o más registros, se procede así:

1.2.1. Se compara los apellidos paterno, materno y nombres con las siguientes características:

1.2.1.1. Porcentual: Identificando aquellos cuya coincidencia en los apellidos paterno y materno sea no menor al setenta por ciento (70%) y el nombre no menor al sesenta y cinco por ciento (65%).

1.2.1.2. Inteligente: Prevé errores humanos, tales como: inversión, reemplazo, supresión o inserción de caracteres o números y según sea el caso, uso de apellidos de soltera o de casada o de segundos nombres.

1.2.1.3. Se asigna como registro coincidente aquel cuya suma de porcentajes coincidentes sea mayor.

Paso 1.3. En caso de no identificarse al adherente, se analizan todos los registros que figuren en el padrón electoral con el número de Libreta Electoral y con 2 dígitos permutados respecto al número de Libreta Electoral que aparece en la lista de adherentes. De encontrarse uno o más registros en el padrón electoral se procede de la siguiente manera:

1.3.1. Porcentual: Identificando aquellos cuya coincidencia en los apellidos paterno y materno sea no menor al setenta por ciento (70%) y en el nombre no menor al sesenta y cinco por ciento (65%). Se asigna como registro coincidente aquel cuya suma de porcentajes coincidentes sea mayor.

1.3.2. Inteligente: Prevé errores humanos, tales como:inversión.

1.3.3. De haber más de un registro que cumpla con los porcentajes de coincidencia, se asigna como registro coincidente, aquel cuya suma de porcentajes sea mayor.

Fase 2.- En caso de no identificarse al adherente conforme a la fase 1, se procede así:

Paso 2.1. Se ejecuta una búsqueda por la coincidencia en el sonido de los apellidos paterno, materno y nombres, en caso de hallarse uno o más registros:

2.1.1. Se comparan la Libreta Electoral, los apellidos paterno y materno y los nombres de cada registro, esta comparación tiene las siguientes características:

2.1.1.1. Porcentual: la coincidencia no debe ser menor a setenta y cinco por ciento (75%) en caso de la Libreta Electoral, setenta por ciento (70%) en apellidos y sesenta y cinco por ciento (65%) en el nombre.

2.1.1.2. Inteligente: prevé errores humanos, tales como: inversión, reemplazo, supresión de caracteres o números.

2.1.1.3. Se asigna como registro coincidente, aquél cuya suma de porcentajes sea mayor.

Paso 2.2. En caso de no identificarse al adherente conforme al paso anterior, se ejecuta una búsqueda exacta por ambos apellidos y los nombres en el padrón electoral.

2.2.1. Si se encuentra sólo un registro, se asigna como registro coincidente.

2.2.2. Si existe homonimia, no se asigna ningún registro.

Fase 3.- En caso de no identificarse al adherente en las fases uno y dos, se identifica al registro del padrón electoral con mayor coincidencia con el adherente de la lista y si los porcentajes de coincidencia son no menor de setenta y cinco por ciento (75%) en la Libreta Electoral, setenta por ciento (70%) en los apellidos paterno y materno y sesenta y cinco (65%) en nombres, se le toma como registro coincidente.

Fase 4.- Luego de identificar al adherente, se procede a verificar que:

4.1 Pertenezca a la ubicación geográfica donde se realiza la elección.
4.2 Sea hábil la inscripción.
4.3 No haya sido presentado por otra lista en contienda.
4.4 No haya sido presentado en un registro anterior por la misma lista en verificación.

Artículo 3º.- Establecer el porcentaje de la muestra que se tomará para el examen de firmas manuscritas de los ciudadanos adherentes para la inscripción de candidatos de las listas independientes, el mismo que queda determinado de la siguiente forma:

Nº de adherentes hábiles obtenidos por el lote			Porcentaje de muestra
hasta 50			100%
de 51	a	100	90%
de 101	a	300	80%
de 301	a	600	50%
de 601	a	1500	35%
de 1501	a	3000	17%
de 3001	a	6000	10%
de 6001	más		5%

Artículo 4º.- Es de aplicación para la determinación del número de firmas válidas, obtenidas por las listas que solicitan inscripción, el Número Adicional de Firmas Na, lo establecido en el Artículo 4º de la Resolución Nº 101-97-J/ONPE.

Artículo 5º.- En la verificación de firmas para el proceso de Elecciones Municipales de 1998, el Número Adicional de Firmas Válidas Na1, establecida para corregir la situación descrita en el tercer y cuarto párrafo del considerando de la Resolución Nº 109-97-J/ONPE se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

$$Na_1 = 0.5 \times D \times p \times (1 - p)$$

Na_1 = Número de Adicional de Firmas
D = Número de registros duplicados, hasta un máximo de 15% del número de adherentes presentados.
P = Proporción de firmas válidas de la muestra en la lista cuyas firmas se verifica.

Artículo 6º.- Transcríbase la presente Resolución al Jurado Nacional de Elecciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE PORTILLO CAMPBELL
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

APRUEBAN PROGRAMA DE INGRESO DE DATOS DE CANDIDATOS QUE PARTICIPARÁN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1998 Y SU INCLUSION EN EL KIT DEL SISTEMA DE LISTA DE ADHERENTES

RESOLUCION JEFATURAL Nº 055-98- J/ONPE

Lima, 03 de junio de 1998

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 027-98-J/ONPE, del 16.3.98, se aprobó la nueva versión del KIT del Sistema de listas de Adherentes, el mismo que contiene el Software de Lista de Adherentes, la Guía del Usuario del Sistema de Lista de Adherentes, el Manual de Instrucciones del Software del Sistema de Lista de Adherentes y la Descripción del Reporte que resulta de procesar la Información de la Lista de Adherentes;

Que, por Resolución Nº 043-98-J/ONPE, del 21.4.98, se resolvió aplicar al proceso de verificación de firmas de los ciudadanos adherentes a las listas independientes en las Elecciones Municipales 1998; el Manual de Procedimientos de Verificación de Firmas y de Reglamento de Normas y Procedimientos para el examen de firmas manuscritas de adherentes en la inscripción de agrupaciones políticas, aprobados por Resoluciones Nºs 067-97-J/ONPE y 101-97-J/ONPE;

Que, en los diversos procedimientos de aplicación en el Proceso Elecciones Municipales 1998, no se ha considerado en el Kit del Sistema de Lista de Adherentes, un Programa que electrónicamente permita comprobar la calidad de ciudadanos hábiles para votar, respecto a los candidatos que participarán en las Elecciones Municipales del 11 de octubre del año en curso (apellidos, nombres, sexo y número de documento de identidad),

Que, si bien dicha comprobación es distinta a la verificación de firmas de adherentes, resulta concurrente y accesorio al mismo, por lo que es necesario aprobar su inclusión en el referido Kit;
De conformidad, con el Artículo 182° de la Constitución Política y la Ley N° 26487 "Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales",
SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aprobar el programa de ingreso de datos (apellido, nombres, sexo y número de documento de identidad) de los integrantes de listas de candidatos, que presentan solicitudes de inscripción para participar en las Elecciones Municipales 1998, a fin de determinar su condición de ciudadanos hábiles para votar, el mismo que, en anexo, forma parte integrante de la presente resolución; y su inclusión, en el Kit del Sistema de Lista de Adherentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GODOFREDO DAVILA ORIHUELA
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (e).

PRECISAN PORCENTAJE DE MUESTRA EN EL EXAMEN DE FIRMAS EN SOLICITUDES DE REFERENDUM

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 058-98-J/ONPE

Lima, 16 de junio de 1998

CONSIDERANDO :

Que, por Resolución Jefatural N° 101-97-J/ONPE, de fecha 17 de noviembre de 1997, se aprobó el Reglamento de Normas y Procedimientos para el examen de firmas manuscritas de los ciudadanos adherentes, estableciéndose en doce y medio por ciento (12.5%), el porcentaje de la muestra que se tomará para dicho examen, en las inscripciones de Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas;

Que, es necesario establecer similar procedimiento y el mismo tamaño de la muestra, a que se refiere el considerando anterior, para la verificación de las firmas manuscritas de los adherentes hábiles, en las solicitudes de referéndum de ámbito nacional;

De conformidad con el Art. 182° de la Constitución Política, Ley N° 26591 Art. 2° y Ley 26487 art. 5° inciso m);

SE RESUELVE :

ARTICULO PRIMERO.- Compréndase en el Art. 2° de la Resolución Jefatural N° 101-97- J/ ONPE de fecha 17 de noviembre de 1997, a las solicitudes de referéndum de ámbito nacional; estableciéndose en consecuencia en 12.5% (doce y medio por ciento) el porcentaje de muestra para el examen de firmas de ciudadanos adherentes;

ARTICULO SEGUNDO.- Es de aplicación para la verificación de firmas de adherentes a las solicitudes de referéndum lo dispuesto en la Resolución N° 109-97-J/ONPE;

ARTICULO TERCERO.- Hacer de conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones la presente Resolución;

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ PORTILLO CAMPBELL
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

ESTABLECEN PROCEDIMIENTO AL QUE SE SUJETARA VERIFICACIÓN DE DATOS Y FIRMA DE CIUDADANOS ADHERENTES A SOLICITUDES DE REFERÉNDUM

RESOLUCION JEFATURAL N° 074-98-J/ONPE

Lima, 14 de julio de 1998

CONSIDERANDO:

Que, corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, de acuerdo a lo dispuesto en las.Leyes Nos. 26487, 26591 y 26859, informar respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos para la inscripción de candidatos y de opciones en proceso de referéndum u otras consultas populares;

Que, por Resolución Jefatural N° 058-98-J/ONPE, se estableció en 12.5% el porcentaje de la muestra para el examen de firmas de ciudadanos adherentes a las solicitudes de referéndum, así como se dispuso la aplicación de la Resolución N° 109-97-JNE expedida por el Jurado Nacional de Elecciones, al proceso de verificación de dichas firmas;

Que, es necesario aprobar el procedimiento complementario, al que se sujetará la verificación de firmas de adherentes en los procesos de referéndum de ámbito nacional, con el fin de garantizar la transparencia, observación y fiscalización de dicha verificación; y,

De conformidad con lo prescrito en el Artículo 182° de la Constitución Política y en las Leyes Nº. 26591 y 26487;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Establecer el procedimiento al que se sujetara la verificación de los nombres y apellidos, número de libreta electoral y firma de los ciudadanos adherentes a las solicitudes de referéndum a nivel nacional; el mismo que es como sigue:

a) Presentada la respectiva solicitud, la Oficina Nacional de Procesos Electorales procederá a verificar que la información contenida en los disquetes y planillones presentados, contengan la misma información. En caso de encontrarse diferencias entre ambas informaciones, se levantará el acta respectiva de constatación.

b) Culminada la etapa precedente, se entregará a los promotores o a sus representantes, en medios magnéticos el Programa Electrónico de Verificación a que se refiere la Resolución Jefatural N° 043-98-J/ONPE, así como el Programa de Determinación de la Muestra.

c) Los promotores, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, podrán formular observaciones a los programas entregados, las mismas que se atenderán, siempre que éstas contravengan las normas electorales y las resoluciones jefaturales expedidas por ONPE sobre la materia;

d) Absueltas las observaciones o vencido el plazo sin que aquellas se hubieren formulado, ONPE citará a los respectivos promotores para la fiscalización del proceso de aplicación de los citados programas, quienes, para tal efecto, acreditarán dos personeros, uno de los cuales deberá cumplir con el requisito establecido en el Artículo 137° de la Ley Nº 26859;

e) ONPE entregará a los citados promotores, el listado de todos los adherentes hábiles y no hábiles, con indicación del motivo de su declaración como tal.

f) Dichos promotores, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, podrán formular las observaciones que estimen pertinentes sobre la información contenida en los mencionados listados.

g) Absueltas las observaciones o vencido el plazo sin que estas se hubieren formulado, ONPE citará a los promotores para extraer la muestra a verificarse; y, en el mismo acto, se entregará el listado correspondiente.

h) Entregado el listado de la muestra, ONPE, en coordinación con los promotores,fijara, en plazo no mayor de tres (3) días hábiles, la fecha de inicio de la verificación de firmas manuscritas.

Artículo 2°. La verificación de las firmas manuscritas se sujetará a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Normas de Procedimiento para el Examen de Firmas Manuscritas, aprobado por Resolución Jefatural N° 101-97-J/ONPE.

Artículo 3°. Los promotores podrán acreditar tantos personeros como examinadores de firmas se designen.

Artículo 4°. Concluída la verificación de firmas, ONPE informará al Jurado Nacional de Elecciones, sobre el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por Ley, en caso contrario, comunicará tal hecho a los promotores para que completen el número de adherentes requeridos, en el plazo establecido por el Artículo 10° de la Ley N° 26300.

Artículo 5°. Transcribir la presente resolución al Jurado Nacional de Elecciones; y publíquese ésta, en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese y cornuníquese.

JOSE PORTILLO CAMPBELL,
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

MODIFICAN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE FIRMAS APROBADO POR RESOLUCION Nº 043-98-J/ONPE

RESOLUCION JEFATURAL Nº 165-98-J/ONPE

Lima, 08 de diciembre de 1998

CONSIDERANDO:

Que, por Resoluciones N° 067-97-J/ONPE y N° 043-98-J/ONPE se aprobó el Manual de Procedimientos de Verificación de Firmas, que en su punto sétimo, norma la verificación electrónica del número de Libreta Electoral y de apellidos y nombres de los adherentes a las Organizaciones Políticas y Listas Independientes.

Que, en el proceso de verificación electrónica se considera como registro hábil aquellos registros de las Listas de adherentes que tienen coincidencia de 100% en el número de Libreta Electoral y apellido paterno con los registros del padrón electoral; sin embargo, se constata que, en algunos casos, vistos el apellido materno y nombres, se trata de diferente ciudadano.

Que, se ha observado que registros declarados no hábiles, por no cumplir con el requisito de coincidencia porcentual en el apellido paterno o en el materno o en los nombres, en algunas oportunidades, visto en su conjunto, se trata del mismo ciudadano.

Que, es necesario ajustar los procedimientos en la estimación del número de adherentes hábiles estipulados en el Reglamento de Procedimientos de Verificación de Firmas aprobados por Resoluciones N° 067-97-J/ONPE y N° 043-98-J/ONPE, tomando en cuenta los dos considerandos anteriores al presente párrafo.

De conformidad con el artículo 182° de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 26487, Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la Ley N° 26859, Orgánica de Elecciones.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifíquese la fase 3 del punto 7 del Manual de Procedimientos de Verificación de Firmas aprobado por Resolución Nº 043-98-J/ONPE; que queda redactada de la siguiente manera:

"**Fase 3.-** En caso de no identificarse al adherente en las fases uno y dos, se identifica el registro del padrón electoral con mayor coincidencia con el adherente de la lista, y si los porcentajes de coincidencia con la Libreta Electoral son mayores o igual al 75% y el promedio de coincidencia en los apellidos paterno, materno y nombres es no menor de 68%, se toma registro coincidente".

Articulo 2.- En los posteriores periodos de verificación de firmas, no regirá el paso 1.1.1 del punto 7 del Manual de Procedimientos de la Verificación de Firmas aprobado por Resolución N° 067-97-J/ONPE y Resolucion N°043-98-J/ONPE.

Articulo 3.- Si un adherente que aparece una vez en una Lista, figura con anterioridad como hábil en otra, se le contabilizará para la aplicación de la fórmula del Numero Adicional de Firmas (Na), aprobado por Resolución N° 101-97-J/ONPE. Si el mismo adherente presentado aparece nuevamente en la Lista, se le aplicará esta fórmula multiplicada previamente por 0.5.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE PORTILLO CAMPBELL
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

INDICE GENERAL

Pag.

1. **PRESENTACION** 03

2. **CONSTITUCION POLITICA DEL PERU** 09

3. **LEY Nº 26859,** Ley Orgánica de Elecciones 60

4. **LEY Nº 26864,** Ley de Elecciones Municipales 165

5. **LEY Nº 23853,** Ley Orgánica de Municipalidades 189

6. **LEY Nº 23854,** Ley Orgánica de Municipalidades, queda modificado a partir de su promulgación 226

7. **LEY Nº 26317,** Modifican artículos 21º, 22º y 132º de la Ley Nº 23853 226

8. **LEY Nº 26487,** Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE 228

9. **LEY Nº 26486,** Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones JNE 237

10. **LEY Nº 26497,** Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC 247

ANEXOS

11. **DECRETO SUPREMO Nº 004-99-PCM,** convoca a Elecciones Municipales Complementarias de Alcaldes y Regidores para el 04 de Julio del presente año 261

12. **LEY Nº 26533,** dictan normas presupuestales del Sistema Electoral y establecen casos en que el JNE resuelve en instancia final recursos contra resoluciones del ONPE y RENIEC. 262

13. **LEY Nº 26591,** precisan funciones del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 268

14. **LEY Nº 26430,** normas aplicables al ciudadano que ejerza la Presidencia de la República y que postule a la Presidencia 270

15. **LEY Nº 26954,** precisan la décimo primera disposición transitoria de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y las Leyes Orgánicas de Elecciones y Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones 273

16. **Resolución Jefatural Nº 016-99-J/ONPE,** constituyen comisión para adecuar la conformación de mesas de sufragio 275

17. **Resolución Nº 207-99-JNE,** provincias y distritos donde se realizarán Elecciones Municipales Complementarias 1999 277

18. **Resolución Nº 021-99-J/ONPE,** designan representante ONPE ante Comité de Coordinación Electoral 282

19. **Resolución Nº 356-99-JNE**, declaran nula elecciones en el distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión 284

20. **Resolución Nº 477-99-JNE**, excluyen al distrito de Curimaná, provincia de Padre Abad, de los alcances de la Resolución Nº 207-99-JNE y el voto en minoría de los miembros del pleno 286

21. **Resolución Nº 585-99-JNE**, autorizán uso del padrón electoral para las Elecciones Municipales Complementarias 293

22. **Resolución Nº 531-99-JNE**, conformación de Jurados Electorales Especiales que conducirán Elecciones Municipales Complementarias 295

23. **Resolución Nº 594-99-JNE**, determinan número de firmas adherentes 303

24. **Resolución Nº 043-99-J/ONPE**, aprueban diseño de la cédula de sufgragio que se usará en las Elecciones Municipales Complementarias 305

25. **Acta del sorteo para la ubicación de las organizaciones políticas y listas independientes en la cédula de sufrágio en las Elecciones Municipales Complementarias.** 309

26. **Resolución Jefatural Nº 048-99-J/ONPE**, designan jefes ODPE 311

27. **Resolución Nº 745-99-JNE**, dictan disposición referida al llenado de datos y firma de planillones de adherentes para la inscripcón de organizaciones políticas 314

28. **Decreto Supremo Nº 015-98-PCM** "Aprueban reglamento de Inscripción del RENIEC" 315

29. **Decreto Supremo Nº 022-99-PCM** 339

30. **El Método de la Cifra Repartidora** 341

31. **Fallo del Tribunal Constitucional en contienda de competencia RENIEC ONPE** 354

32. **Vocabulario Básico Electoral** 359

33. **Cuadro descriptivo de los delitos contra la voluntad popular contra derecho de sufragio** 365

34. **Formatos de material electoral a utilizarse en la Elecciones Municipales Complementarias: Lista de electores, acta electoral y cédula de sufragio** 366

RESOLUCIONES ONPE REFERIDAS A LA VERIFICACION DE LISTAS DE ADHERENTES

35. **Resolución Jefatural Nº 031-96-J/ONPE** 371

36. **Resolución Jefatural Nº 067-97-J/ONPE** 373

37. **Resolución Jefatural Nº 082-97-J/ONPE** 378

38. Resolución Jefatural Nº 101-97-J/ONPE 380

39. Resolución Jefatural Nº 109-97-J/ONPE 386

40. Resolución Jefatural Nº 008- 98-J/ONPE 389

41. Resolución Jefatural Nº 027-98-J/ONPE 391

42. Resolución Jefatural Nº 043-98-J/ONPE 392

43. Resolución Jefatural Nº 055-98-J/ONPE 396

44. Resolución Jefatural Nº 058-98-J/ONPE 397

45. Resolución Jefatural Nº 074-98-J/ONPE 398

46. Resolución Jefatural Nº 165-98-J/ONPE 400



ONPE

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Garantía de un Proceso Claro